# Los Anarquistas Españoles

Murray Bookchin

## Los años heroicos 1868-1936

Murray Bookchin es el primer anglosajón que ha escrito un estudio de conjunto del último y más grande de los movimientos obreros clásicos en la historia del socialismo obrero: una historia del anarquismo español.

Esta obra se inicia en 1868 con la visita a España del italiano Fanelli y sigue las distintas vicisitudes del movimiento que con desigual fortuna logra un firme desarrollo e implantación en los setenta años siguientes. Los retratos personales se yuxtaponen aquí vívidamente a la atractiva descripción de los acontecimientos: las revueltas campesinas, la inquietud de la clase obrera, la represión, los terroristas, la evolución de las formas organizativas…

Bookchin sigue sus huellas a través de toda España, deteniéndose en las sombras y sutilezas de las pequeñas secciones locales: desde los campesinos andaluces a los obreros de las industrias catalanas, el pueblo y su apasionante convicción, su tremenda lucha por la libertad y la autodeterminación siguen vivos. No se trata aquí sólo de una “historia”, sino también de un análisis en profundidad de un movimiento cuyas implicaciones quizás estén informando todavía los acontecimientos de la España actual. Los hechos relatados y el espíritu de libro —tan próximos a nosotros— se relacionan claramente, según Bookchin, en el resurgir del fervor libertario de los años sesenta y las alternativas políticas actuales.

Murray Bookchin

# Los anarquistas españoles

## (Los años heroicos 1868-1936)

**ePub r1.1**
**Titivillus** 01.09.17

Título original: *The Spanish Anarchists. The heroic years 1868-1936*
Murray Bookchin, 1977
Traducción: Ernesto Rubio
Diseño de cubierta: Recio

Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2

# Índice

Prólogo a la edición española
Introducción
1: La Idea y España
2: La topografía de la Revolución
3: El comienzo. La Internacional en España
4: Los primeros años
5: Los desheredados
6: Terroristas y santos
7: Anarcosindicalismo
8: La CNT
9: De la Dictadura a la República
10: El camino de la Revolución
11: Conclusiones finales
Ensayo Bibliográfico

*A la memoria de*
*Russell Blackwell,*
*amigo y compañero*

# Prólogo a la edición española

De los muchos acontecimientos que los españoles debieran tener siempre presentes, quizás el más importante sea la increíble revolución social de 1936. Durante el verano y el otoño de aquel año, en las zonas que no habían sido ocupadas por Francisco Franco y sus generales, los trabajadores de la mayoría de las ciudades industriales se hicieron con el control de las fábricas y establecieron diversos sistemas de autogestión, mientras los campesinos ocupaban grandes áreas de tierra y las colectivizaban, llevando a cabo así una revolución sin precedentes en la historia europea. En aquel momento pocos fuera de España conocían la magnitud de esta revolución, debido a un silencio calculado, o a lo que el reportero americano Burnett Bolloten llamó el "grand camouflage", con el que comunistas y liberales presentaron la contienda como un conflicto puramente político, "una guerra entre democracia y fascismo". El mundo anglosajón no sabría lo que realmente había sucedido durante la Revolución Española hasta varios años después, cuando aparecieron obras como *Homenaje a Cataluña*, de George Orwell.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en Nueva York, incluso aquellos de nosotros que estábamos concienciados políticamente ignorábamos que había tenido lugar una revolución en España en el verano de 1936. Pero al ver los noticiarios del cine y las fotografías de los periódicos, sospechamos que algo revolucionario estaba pasando: nos llamaron la atención los miles de manifestantes con los puños en alto y las banderas rojas o rojinegras (con el blanco y negro no era posible distinguir los colores). Los amigos que habían marchado a luchar a España como voluntarios (yo era demasiado joven por aquel entonces) nos contaban en

sus cartas que los españoles peleaban por algo más que la victoria frente a los generales fascistas y la restauración de la Segunda República.

Yo había sido miembro de las juventudes del Partido Comunista desde que cumplí los nueve años, en 1930. Cinco años después abandoné la *Young Communist League* porque no estaba de acuerdo con el "Frente Popular" de la Internacional Comunista, que me parecía colaboracionista. Pero cuando estalló la Guerra Civil española volví a unirme a los comunistas para poder tomar parte en los movimientos de solidaridad con España, lo que hice tan activamente como pude. Sin embargo, incapaz de aceptar las rígidas doctrinas comunistas, apoyé al POUM y entré en contacto con trotskistas americanos. Lógicamente, mi ruptura definitiva con los comunistas no tardó en llegar. Una vez liberado de la perspectiva estalinista, pude emprender con total libertad el estudio de los acontecimientos de 1936.

Hiciera lo que hiciera desde 1940 hasta los años 80, nunca olvidé lo que había aprendido de los logros revolucionarios del pueblo español. En los 60 comencé a escribir "Los Anarquistas Españoles. Los años heroicos" con el fin de conservar viva la memoria de aquello para las generaciones posteriores. Lo que me interesaba era el carácter extraordinariamente anárquico de las "formas de organización" creadas por los obreros y los campesinos, que habían tenido un papel tan crucial en 1936. La bibliografía era escasa, así que viajé a España para documentarme, y de allí a Francia e Inglaterra, donde me entrevisté con tantos refugiados de la CNT-FAI como pude.

Decidí que "Los anarquistas españoles" debía ser un libro popular, que llegara a tantos lectores como fuera posible. Con él he querido informar a las generaciones posteriores —y, con esta nueva traducción, a los jóvenes que han nacido en España mucho después de la Guerra Civil— de un acontecimiento revolucionario e inspirador, y sobre todo del formidable movimiento libertario que jugó un papel tan crucial en su estallido. No debemos permitir que el tiempo borre la memoria histórica, menos todavía en la tierra misma en la que ocurrió todo. Si este libro ayuda a mantener viva la memoria, quedaré satisfecho porque habrá cumplido su propósito.

Murray Bookchin, 5 de Noviembre de 2000

# Introducción

## El viaje de Fanelli

A finales de octubre de 1868, llegaba a Barcelona, después de un largo viaje en tren desde Ginebra, un hombre de unos cuarenta años, alto y barbudo: Giuseppe Fanelli. Era la primera vez que visitaba España. Había llegado a la ciudad sin ninguna complicación y la abandonaría, meses después, sin intromisión alguna por parte de las autoridades españolas. Nada en su aspecto lo diferenciaba de cualquier otro turista italiano, excepto quizá su elevada estatura y su apariencia agradable.

Sin embargo, Giuseppe Fanelli no era un visitante cualquiera. Su breve estancia en España iba a tener una importancia enorme, pues actuaría como catalizador de un movimiento obrero y campesino, que no sólo se convertiría en el más importante de España, sino también en el mayor de los movimientos anarquistas de la Europa moderna. Fanelli, seguidor del anarquista ruso Mijail Bakunin, era un consumado revolucionario y un propagandista de gran talento. Su viaje había sido organizado por Bakunin con el fin de conseguir apoyos en España para la Asociación Internacional de Trabajadores, la famosa Primera Internacional, fundada por los trabajadores europeos algunos años atrás.

El viaje de Fanelli podría haber sido un completo fracaso. Bakunin había conseguido reunir a duras penas el dinero suficiente para pagar el precio del pasaje; Fanelli, enfrentado a estos problemas de financiación, tuvo que viajar constantemente apremiado por el tiempo. Su conocimiento sobre España era, además, muy limitado, y apenas podía hilvanar algunas

frases en castellano. Al llegar a Barcelona, Fanelli se entrevistó con Élie Reclus, un distinguido antropólogo francés y ferviente bakuninista que se encontraba de visita en el puerto catalán. Fanelli no conocía a nadie más en la ciudad. Al parecer los dos hombres discutieron acerca de la actitud condescendiente que Reclus adoptaba frente a sus amigos españoles republicanos. Después de pedirle a Reclus dinero prestado para continuar su viaje, el italiano se dirigió a Madrid, donde se reunió con José Guisasola, propietario del periódico *La Igualdad*. Guisasola puso en contacto a Fanelli con un grupo de trabajadores "de ideas avanzadas", con los que concertó una reunión pequeña e íntima en casa de un tal Rubau Donadeu. Fanelli sólo podía dirigirse al grupo en italiano o en francés, la mayoría de los trabajadores sólo entendían castellano. A pesar de ello, una vez que el alto y enjuto italiano comenzó a hablar, el entendimiento con la audiencia fue tan absoluto que todas las barreras idiomáticas quedaron a un lado. Fanelli consiguió transmitir a quienes lo oían toda la generosidad de sus visiones libertarias y toda la amargura de su ira por la explotación humana y el sufrimiento. Los allí presentes, acostumbrados como estaban a las moderadas expresiones de los liberales, quedaron atónitos. Décadas más tarde, Anselmo Lorenzo describiría el encuentro de este modo: "Los ojos grandes, negros y expresivos, se encendían de pronto o tomaban una apariencia compasiva, dependiendo de los sentimientos que le dominaran. Su voz, que tenía un timbre metálico, pasaba rápidamente del tono de cólera y de amenaza contra explotadores y tiranos, al del sufrimiento y el consuelo cuando hablaba del dolor de los oprimidos y de los olvidados, y también cuando se refería a los que, sin sufrirlo directamente, comprendían todo ese dolor, y a los que pretendían un ideal nuevo y revolucionario de paz y de fraternidad. […] Lo raro del caso es que no sabía hablar español, y hablando francés, que entendíamos a medias algunos de los presentes, o italiano, que sólo comprendíamos un poco por su parecido con el castellano, no sólo nos identificábamos con sus pensamientos, sino que merced a su expresiva mímica llegamos todos a sentirnos poseídos del mayor entusiasmo".

El éxito de Fanelli fue rotundo. Todos los presente ingresaron en la Internacional. Fanelli prolongó su estancia en Madrid durante varias

semanas, instruyendo a sus nuevos amigos. El grupo volvió a reunirse para hacer tres o cuatro “sesiones de propaganda”, alternando estas reuniones con conversaciones en paseos o en cafés. Lorenzo recuerda que él gozó especialmente del favor de las confidencias de Fanelli. Si esto fue así, Fanelli demostró poseer un excelente criterio: Anselmo Lorenzo viviría muchos años más y consagraría su vida a la revolución, ganándose el sobrenombre de “el abuelo del anarquismo español”. La contribución de Anselmo Lorenzo al desarrollo de las ideas anarquistas en Barcelona y Andalucía fue enorme.

El 24 de enero de 1869, Fanelli se reunió con sus correligionarios madrileños por última vez. Aunque el grupo, integrado en su mayor parte por impresores, pintores y zapateros, era muy reducido —poco más de veinte personas—, fue declarado oficialmente la Sección madrileña de la Asociación Internacional de Trabajadores. Lorenzo trató de persuadir a Fanelli para que se quedara más tiempo en Madrid, pero éste no aceptó, porque quería “que los individuos y los grupos se desarrollaran por sus propios medios, con sus propios valores, y que la gran obra común contara con los caracteres individuales y locales que hacen que la variedad no perjudique a la unidad”. En estas pequeñas notas tomadas por Lorenzo, Fanelli alude a un principio básico en la organización y en la práctica del anarquismo: el orden alcanza su forma más armoniosa a través del desarrollo libre y espontáneo de la individualidad y la variedad. Al final, la vitalidad del movimiento anarquista español dependería del grado en que este tipo de principios se convirtieran en una fuerza vital en las actividades sociales y organizativas.

Antes de abandonar España, Fanelli pasó una vez más por Barcelona, provisto esta vez de una carta de presentación de José Rubau Donadeu, uno de sus discípulos en Madrid, para el pintor José Luis Pellicer, un demócrata radical con fuertes convicciones federalistas. Pellicer concertó una reunión en su estudio, a la que acudieron unos veinte republicanos, muchos de los cuales eran personas que disponían de una sólida base profesional. Esta audiencia más refinada, perteneciente a la clase media, se mostró más escéptica ante la apasionada oratoria de Fanelli. Apenas un puñado de jóvenes, casi todos ellos estudiantes, se sintieron comprometidos con las

ideas anarquistas del italiano (dentro de este grupo estaba Rafael Farga Pellicer, sobrino de José Luis, quien desempeñaría un importante papel al fundar la Internacional de Barcelona). A esas alturas Fanelli se encontraba casi sin fondos, así que tras una breve estancia en la ciudad catalana, partió para Marsella.

Giuseppe Fanelli jamás volvería a España. Falleció ocho más tarde, víctima de la tuberculosis, a la edad de 48 años. Como tantos jóvenes italianos de su época, Fanelli había sacrificado una prometedora carrera de arquitecto e ingeniero para dedicarse a las tareas revolucionarias, primero al servicio de Garibaldi y más tarde como emisario de Mazzini. Con la victoria de la causa nacional en 1861, se convirtió en diputado del parlamento italiano. Gracias a su posición pudo obtener un pase para viajar en tren por toda Italia; además el gobierno le otorgó una modesta pensión por la pérdida de su salud cuando fue prisionero político de los Borbones. Fanelli conoció a Bakunin en Ischia en el año 1866, dos años antes de su viaje a España, y quedó rendido ante la atractiva personalidad y el carisma del revolucionario ruso. Para Fanelli la revolución constituía un modo de vida, y no sólo un objetivo teórico y remoto. Sus últimos años los pasó viajando en tren por los pueblos de toda Italia, predicando la revolución social durante el día y durmiendo en los trenes y en las estaciones por las noches.

Es poco probable que Fanelli estuviera al corriente del alcance de sus logros en España. Ya en 1845 había habido tentativas de implantar las ideas anarquistas en la Península, cuando Ramón de la Sagra, discípulo de Proudhon, fundó el diario El Porvenir en La Coruña. Sin embargo este periódico libertario fue pronto clausurado por las autoridades, y Sagra murió en el exilio sin haber conseguido ejercer ninguna influencia en su país nativo.

Los resultados que obtuvo Fanelli fueron inigualables y proféticos. Es posible que su historia haya llegado hasta nosotros algo exagerada, pero aun cuando fuese así, esa exageración sería significativa, pues mostraría hasta qué punto la pasión y la imaginación impulsaban los anhelos españoles de libertad. Y, como veremos, España era particularmente susceptible a las perspectivas de libertad que promulgaba el anarquismo.

# 1: La Idea y España

## Antecedentes

¿En qué consistía “la Idea”, tal y como estaba destinada a llamarse, que Giuseppe Fanelli llevó a Madrid y Barcelona? ¿Por qué arraigó tan profunda y perdurablemente en España?

Pocas imágenes de una sociedad libre han sido tan groseramente tergiversadas como las del anarquismo. En sentido estricto, anarquía quiere decir ausencia de propiedad, de soberanía, y por tanto implica la formación de una sociedad sin Estado basada en la autogestión. La opinión popular relaciona el término con el desorden, el caos y los atentados terroristas. Esta apreciación es del todo incorrecta; el terror y la violencia no son rasgos intrínsecos del movimiento anarquista. Del mismo modo que algunos anarquistas han utilizado la acción terrorista, otros han hecho del rechazo al uso de la violencia una cuestión de principios.

A diferencia del marxismo —con sus fundadores, sus textos fundamentales y una ideología claramente definida—, los ideales anarquistas son difíciles de delimitar dentro de un credo determinado. El anarquismo es un movimiento intrínsecamente popular que tiene por objetivo derribar el represivo aparato creado por las sociedades jerarquizadas. Tiene su origen en la vieja exigencia de los oprimidos de postular el espíritu de libertad, de igualdad y de voluntariedad frente a los valores e instituciones que se apoyan en el principio de autoridad. Esto explica la antigüedad de las ideas anarquistas y su irreprimible y continuo resurgir dentro de la historia, en particular en momentos de cambio y de

revolución social. La multitud de doctrinas que surgen dentro de este movimiento son, en esencia, adaptaciones concretas a un determinado período histórico de sentimientos difusos y soterrados, y no la aplicación de una serie de doctrinas fijadas desde siempre. De la misma manera que con el paso del tiempo han ido cambiando las instituciones y los valores jerárquicos, han cambiado también las doctrinas anarquistas que intentaban desalojarlos.

En la Antigüedad estas creencias fueron enunciadas por un buen número de importantes filósofos, y sin embargo todas estas teorías no eran sino un pálido reflejo de los levantamientos populares que iban a comenzar con la quiebra de la economía rural y que culminarían con el milenarismo cristiano. Durante siglos los Padres de la Iglesia iban a ocuparse de aquellas herejías populares que reivindicaban la importancia de la libertad y de la igualdad y que, en algunas ocasiones, proclamaban un hedonismo feroz. Los esclavos y los pobres que se congregaban en torno al cristianismo esperaban la segunda venida de Cristo como un tiempo en que "un grano de trigo produciría diez mil espigas" y en que el hambre, la enfermedad, la coacción y la jerarquía serían desterradas por siempre de la Tierra.

Todas estas herejías, que nunca habían cesado de filtrarse en la sociedad medieval, se sucedían unas a otras en forma de grandes movimientos campesinos y en extáticas y violentas visiones de un mundo de libertad e igualdad. Algunas de las sectas anarquistas medievales eran asombrosamente modernas y promulgaban "una libertad tan temeraria e inclasificable", escribe Norman Cohn, "que equivalía a una negación total de cualquier tipo de limitación" (la herejía en particular a la que se refiere es la del Espíritu Libre, una secta hedonista que se extendió por todo el sur de Alemania durante el siglo XIV). "Estas gentes —señala Cohn— podrían ser consideradas como remotos precursores de Bakunin y Nietzsche, o incluso de esa *intelligentsia* de Bohemia que durante la primera mitad del siglo XX se dedicó a aplicar las ideas expresadas por Bakunin y Nietzsche en sus etapas más radicales". Más característicos fueron, sin embargo, los movimientos revolucionarios campesinos que en las postrimerías de la Edad Media reclamaban la autonomía local, la conservación del sistema de tierras comunales y, en algunos casos, abiertamente el comunismo. Aunque estos

movimientos tuvieron su apogeo durante la Reforma, nunca desaparecieron por completo; así, en pleno siglo XX, durante la guerra civil rusa, las milicias de campesinos ucranianos, lideradas por Nestor Makhno, combatían indistintamente contra tropas de la Guardia Blanca y contra los bolcheviques, en defensa de la histórica demanda anarquista de "Tierra y Libertad" inscrita en sus banderas negras.

Las teorías anarquistas se desarrollaban a medida que las pasiones revolucionarias emergían en los pueblos y en las ciudades. El término anarquista se usó mucho en los comienzos como un epíteto contra los *enragés*, los oradores callejeros de París durante la Revolución Francesa. Aunque las demandas de los *enragés* podrían ser vistas hoy como ligeras desviaciones de la democracia radical, el uso del epíteto no era del todo injustificado. La fiera naturaleza de su oratoria, su igualitarismo, sus llamadas a la acción directa y el implacable odio hacia las clases dirigentes constituían una amenaza para la nueva jerarquía de riqueza y privilegio auspiciada por la Revolución. Los *enragés* fueron aplastados por Robespierre poco antes de su caída; sin embargo, uno de los más capaces, Jean Varlet, quien se las ingenió para escapar de la guillotina, proporcionaría años más tarde la conclusión final de sus experiencias. "Para cualquier criatura razonable", escribió, "Gobierno y Revolución son incompatibles".

El movimiento anarquista de las clases urbanas dirigía sus energías contra las desigualdades en el reparto de la riqueza, pero al igual que el anarquismo campesino, sus perspectivas sociales eran vagas e imprecisas. Con la llegada del siglo XIX, estos sentimientos e ideas del pasado fueron fortalecidos por el nuevo espíritu del racionalismo científico que recorría toda Europa; por primera vez estudios centrados en las teorías anarquistas comenzaban a aparecer de forma sistemática.

Pierre Joseph Proudhon fue, quizás, el primer hombre en denominarse públicamente anarquista y en presentar sus ideas anarquistas de una forma metódica. Sus escritos llegarían a ejercer una gran influencia en los países latinos. El uso que Proudhon hace del término anarquista para designar sus puntos de vista ha de ser tomado con ciertas reservas. Proudhon era un hombre laborioso, de costumbres ordenadas y de una fuerte inclinación por

la tranquilidad y los placeres de la vida doméstica. Creció en una pequeña ciudad donde fue educado para ser editor. A pesar de sus largas estancias en París y otras grandes ciudades, las perspectivas de este paterfamilias estaban a menudo limitadas por los prejuicios sociales propios de un artesano de provincias.

Esta condición se pone claramente en evidencia en sus escritos y en su correspondencia. Proudhon vislumbraba una sociedad libre en la que pequeños artesanos, campesinos y empresarios de industrias colectivizadas negociarían y pactarían la mejor manera de satisfacer sus necesidades materiales. La explotación terminaría, y la gente simplemente exigiría la remuneración de su mano de obra, trabajando libremente e intercambiando su producción sin ninguna intención de competir o buscar beneficios. Aunque estos criterios implican una ruptura con el capitalismo, de ningún modo puede ser considerado comunista un conjunto de ideas que pone de relieve la importancia de la propiedad privada, y marca un objetivo en el que las necesidades humanas son satisfechas sin considerar la contribución del trabajo individual.

A pesar de la considerable influencia que los anarquistas españoles han atribuido a Proudhon, sus opiniones de cariz mutualista fueron el blanco de muchos ataques por parte del incipiente movimiento obrero español. El movimiento cooperativista, probablemente más proudhiano que anarquista, puso muchos obstáculos al desarrollo revolucionario del movimiento anarquista español. Como “cooperativistas”, los mutualistas pretendían un desgaste gradual y pacífico del capitalismo. Los anarquistas, por su parte, resaltaban la necesidad de la lucha militante, la huelga general y la insurrección.

Sin embargo, Proudhon, más que cualquier otro escritor de su tiempo, fue el responsable de la popularidad del federalismo en los movimientos socialistas y anarquistas del siglo XIX. En su sociedad federal, las diferentes municipalidades se organizan en federaciones locales y regionales que delegan poco o ningún poder en el gobierno central, tratando los problemas administrativos comunes e intentando solucionar sus diferencias de una forma amistosa. De hecho, Proudhon no ve la necesidad de una

administración centralizada, e incluso algunas veces parece estar reclamando la total abolición del Estado.

Aunque el estilo del discurso de Proudhon es vigoroso y a menudo estentóreo, su temperamento, sus métodos y el énfasis que pone en las relaciones contractuales difícilmente pueden ser considerados revolucionarios, y mucho menos anarquistas. Sin embargo, sus ideas iban a tener una enorme influencia en Francia y en la Península Ibérica.

El mutualismo y las ideas de Proudhon arraigaron firmemente en España a través de la labor de un joven catalán, Francisco Pi i Margall. En 1854 Pi publicaba *La Reacción y la Revolución*, una obra que ejercería una profunda influencia en el pensamiento radical español. Pi había trabajado como empleado de banca en Madrid, y en sus horas libres combinaba eventuales incursiones en el periodismo con la redacción de varios libros sobre arte. Aunque no era un anarquista, su libro contiene ataques contra la autoridad y el poder central que fácilmente podrían haber sido firmados por Bakunin. “Todo hombre que ejerce poder sobre otro hombre”, escribe el joven catalán, “es un tirano”. Y más aún: “Yo dividiría y subdividiría el poder hasta su destrucción”. La similitud entre estas afirmaciones y las de Proudhon ha llevado a algunos escritores a considerar a Pi como un discípulo del francés. En realidad fue Hegel quien ejerció inicialmente una influencia muy grande en las ideas de Pi i Margall, a principios de la década de 1850. La noción hegeliana del legítimo desarrollo social y de la unidad en la variedad fueron los conceptos que guiaron las primeras ideas federalistas de Pi i Margall. No fue hasta algún tiempo después cuando Pi se decantó por Proudhon, abandonando muchas de sus ideas hegelianas. Aun cuando compadecía la desgracia y la miseria que sufrían los más pobres, Pi i Margall rechazaba el uso de la violencia revolucionaria y sostenía que las condiciones de vida podrían ser mejoradas por medio de una serie de medidas reformistas aplicadas gradualmente.

El libro causó un gran revuelo entre la *intelligentsia* radical española. Para muchos, el federalismo era la solución idónea para superar los problemas sociales en España. Los hombres a quienes había conocido Fanelli en Madrid y en Barcelona eran federalistas, como lo eran, en general, la mayoría de los republicanos de estas dos ciudades. Las ideas

federalistas se extendieron en España de tal modo que sus partidarios fueron los que más contribuyeron al reclutamiento de intelectuales para el movimiento anarquista.

El mutualismo se convirtió en la filosofía social dominante tanto para los radicales republicanos españoles de la década de 1860, como para los integrantes de la Comuna de París de 1871. Pero fue gracias al trabajo de un famoso revolucionario en el exilio —"el Garibaldi del socialismo", como lo llamaba Gerald Brenan— que los elementos colectivistas y federalistas de las teorías proudhonianas recibieron un gran empuje revolucionario y fueron introducidos en España en forma de un apasionado ideario anarquista.

## Mijail Bakunin

El hombre que logró conjugar con más éxito los elementos populares del anarquismo español a través de un conjunto coherente de ideas no era español ni tampoco pertenecía a la clase popular; se trataba de un aristócrata ruso: Mijail Bakunin. Aunque ya se ha cumplido más de un siglo desde su desaparición, Bakunin sigue siendo una de las figuras más controvertidas, calumniadas y peor conocidas de la historia de los movimientos revolucionarios del siglo XIX. Su recuerdo no goza de los honores póstumos que se han acumulado en torno a figuras como la de Marx. Hasta la fecha, casi todos los trabajos acerca de su vida y sus ideas, escritos por autores no anarquistas, conservan rasgos de malicia y hostilidad. El nombre de Bakunin todavía evoca imágenes de rebelión incendiaria, de saqueo, de terrorismo y de violencia. En una época en que la adopción de viejos mitos revolucionarios se ha convertido en una práctica artística, Bakunin disfruta de la distinción exclusiva de ser el revolucionario más denigrado de su tiempo.

Que la mera apariencia física de Bakunin suscitaba una sensación de amenaza es algo que todas las descripciones de sus contemporáneos atestiguan. Todos lo retratan como un hombre inmensamente alto y robusto (Marx lo comparó con un buey), con una melena desgreñada, leonina, cejas

bien pobladas, frente ancha y una imponente barba que aún permitía entrever unas recias facciones eslavas. Toda esta inmensidad física venía acompañada de una personalidad tremendamente enérgica y entusiasta. El distinguido exiliado ruso Alexander Herzen nos ha dejado una valiosa descripción de la época en que Bakunin, próximo a los cincuenta años, vivió una temporada en su casa de Londres. “Bakunin”, nos dice Herzen,

> discutía, sermoneaba, daba órdenes, gritaba, decidía, disponía, amonestaba, organizaba, todo el día, toda la noche, las veinticuatro horas del día. En los pequeños espacios de tiempo que le quedaban libres, se dejaba caer sobre su escritorio, despejaba de ceniza algún rincón de la mesa y se ponía a escribir cinco, diez, quince cartas a Semipalatinsk y Arad, a Belgrado, Moldavia y Bielorrusia. A mitad de una carta dejaba la pluma a un lado para rebatir a algún reaccionario de Dalmacia; entonces, sin concluir con su arenga, volvía a coger la pluma y seguía escribiendo… Su actividad, su apetito, como todas sus demás características —incluso su gigantesco tamaño y su incesante transpiración— eran de proporciones sobrehumanas.

Este relato fue escrito después de que Herzen, cansado y desilusionado de la política, se hubiera separado del exuberante revolucionario. Sin embargo la descripción nos da una imagen de la fuerza pura, elemental, que emanaba de Bakunin, una fortaleza que iba a permitirle superar pruebas que habrían fácilmente abrumado a hombres comunes. Esta energía de Bakunin, esta arrogancia —al decir de Herzen— se suavizaba por su sencillez natural y por una ausencia de afectación y malicia cercana a una inocencia casi infantil. Como tantos otros exiliados rusos de la época, Bakunin sabía ser generoso e indulgente con los errores ajenos. No faltó quien sacara partido de sus particularidades en pos de dudosos fines, pero hubo también otros (entre ellos jóvenes revolucionarios italianos, españoles y rusos) que, fuertemente atraídos por su personalidad, encontraron en su figura una gran fuente de inspiración moral.

Bakunin nació en mayo de 1814 en Premukhina, un estado relativamente extenso situado a unos trescientos cincuenta kilómetros al noroeste de Moscú. Perteneciente a la nobleza (la familia de su madre era una de las más influyentes de Rusia) Bakunin abandonó una carrera militar que no era de su agrado y la perspectiva de una situación acomodada en una familia distinguida, por una vida errante consagrada a la acción revolucionaria en toda Europa. En 1848 viajó a París, después a Praga y finalmente a Dresde, persiguiendo, literalmente, cada una de las revueltas en busca de acción. Desde mayo de 1849 pasó por diversas prisiones —Sajonia, Austria, y Rusia— antes de escapar de Siberia y llegar a Londres en 1863.

Hasta la década de 1860 había sido, fundamentalmente, un activista revolucionario, vagamente adherido a las consignas de la democracia radical y nacionalista del momento. Fue en Londres, y en especial durante una larga estancia en Italia, cuando comenzó a formular sus ideas anarquistas. En los trece años que le quedaban de vida no dejó jamás de ser el combatiente de las barricadas de 1848 y se vio implicado en repetidas ocasiones en tramas y complots revolucionarios. Sería también en este período cuando algunos de sus planteamientos teóricos más elaborados adquirirían plena madurez.

El ideario anarquista de Bakunin converge en un solo punto: el de la libertad sin límites, y no tolera ninguna concesión con respecto a la consecución de este objetivo. Este propósito impregna todos los trabajos de su etapa de madurez. “Tomo en consideración la única libertad que es digna de ese nombre”, escribe,

> una libertad que consiste en el total desarrollo de todas las fuerzas materiales, intelectuales y morales latentes en cada hombre; una libertad que no reconoce otras restricciones que las que están trazadas por las leyes naturales, lo cual es equivalente a decir que no existe ningún tipo de restricciones, puesto que estas leyes no las ha impuesto ningún reputado legislador que esté por encima de nosotros o a nuestro lado. Estas leyes son inmanentes, inherentes a nosotros mismos; constituyen la verdadera base de nuestro ser

> material, intelectual y moral, y en lugar de encontrar en ellas un límite a nuestra libertad, debemos considerarlas como la causa misma de su origen.

Las leyes *inmanentes e inherentes* que conforman la base de la naturaleza humana no conducen, sin embargo, a un individualismo fanático que conciba la vida en sociedad como una limitación; Bakunin rechaza rotundamente que los individuos puedan vivir como egos asociales. La gente quiere ser libre para realizarse a sí misma —argumenta—, y para poder realizarse a sí misma debe vivir rodeada de otra gente, en comunidad. Si estas comunidades no son deformadas por la propiedad, la explotación y la autoridad, acabarán por convertirse, por el propio interés común, en un sistema armónico, cooperativo y humanístico.

La crítica que Bakunin hace al capitalismo se basa fundamentalmente en las ideas de Marx. Bakunin nunca dejó de elogiar las contribuciones de Marx a la teoría revolucionaria, ni tan siquiera durante los ásperos conflictos que tuvieron lugar en el seno de la Internacional. El desacuerdo fundamental entre Marx y Bakunin se centra en la función social del Estado y en los efectos que tiene el centralismo en la sociedad y en las organizaciones revolucionarias. Aunque Marx compartía la visión anarquista de una sociedad sin Estado —el objetivo último del comunismo marxista es, de hecho, una forma de anarquía—, consideraba el papel histórico del Estado como algo progresivo, y la centralización como un avance frente al localismo y al regionalismo. Bakunin está en profundo desacuerdo con este punto de vista de Marx. El Estado, admite, puede ser considerado *históricamente necesario* en la medida en que su desarrollo era inevitable durante el período en que la humanidad salía de la barbarie, pero se trata de “un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado como necesaria será su completa desaparición en un futuro más o menos cercano, tan necesario como necesarias fueron la bestialidad primitiva y la divagación teológica en el pasado”.

El punto fundamental de discrepancia entre las dos posturas se encuentra en la firmeza con que Bakunin critica los aspectos negativos del Estado:

> Incluso cuando el Estado ordena algo moralmente bueno, aquello que ordena se desvirtúa por el hecho de ser ordenado; cada orden es un insulto a la libertad; tan pronto como algo es ordenado, se transforma en algo maligno a los ojos de la verdadera moralidad (es decir, de la humana, no de la divina), de la dignidad del hombre, de la libertad.

Este análisis, profundamente moral, juega un importante papel en las ideas de Bakunin y, ciertamente, en las del anarquismo en general. Para Bakunin, los seres humanos no son *instrumentos* de una abstracción llamada historia; son un fin en sí mismos, para los que no puede existir ningún tipo de substituto abstracto. Si la gente comienza a tener una percepción de sí misma como *instrumentos* de cualquier clase, podrán ser convertidos fácilmente en un medio en lugar de un fin, y el curso de los acontecimientos se modificará de tal modo que ya no se alcanzará nunca jamás la libertad. Un juicio precipitado sobre sí mismos y sobre sus funciones podría llevarles a dejar pasar las oportunidades que les conducirían directamente hacia la liberación, o que podrían crear las condiciones sociales favorables para alcanzar la libertad en un futuro próximo.

Bakunin, al hacer hincapié en el carácter existencial de su doctrina, se aparta del marxismo, que continuamente resaltaba la necesidad de unas condiciones económicas previas para alcanzar la libertad, y que a menudo recurría a métodos e instituciones autoritarias como condiciones necesarias para el desarrollo económico. Bakunin no ignora el importante papel que la tecnología juega en la maduración de las condiciones necesarias para el logro de la libertad, pero percibe que no es posible predecir cuándo van a estar dispuestas tales condiciones. Por tanto, lo que debemos hacer es esforzarnos continuamente por la obtención de una libertad total, para no perder las oportunidades de alcanzarla o por lo menos preparar las condiciones para su logro.

Estas diferencias entre Marx y Bakunin, aunque de apariencia abstracta y teórica, llevan a conclusiones opuestas de naturaleza concreta y práctica. Para Marx, cuyo concepto de libertad está viciado por prerrequisitos y

abstracciones, el objetivo inmediato de la revolución es la toma del poder político y la sustitución del Estado burgués por una dictadura del proletariado fuertemente centralizada. El proletariado debe, por tanto, organizar un partido político de masas unificado y utilizar todos los medios, incluyendo los métodos parlamentarios y electorales, para extender su control sobre la sociedad. Para Bakunin, sin embargo, el objetivo inmediato de la revolución debe ser la ampliación del control de cada individuo sobre su propia vida; por consiguiente la revolución debe encaminarse no a la conquista del poder sino hacia su disolución. Un grupo revolucionario que se convierte en partido político, estructurándose en función de una línea jerárquica y con las vistas puestas en la participación electoral, abandonará con el tiempo —advierte Bakunin— sus objetivos revolucionarios. Éstos terminarán por desnaturalizarse a causa de las necesidades de la vida política y serán finalmente asimilados por el mismo sistema que trataban de derribar.

Desde el comienzo, la revolución debe destruir el aparato estatal: la policía, el ejército, la burocracia. Si la violencia fuera necesaria, debe ser ejercida por un ejército popular revolucionario, organizado en milicias populares. El movimiento revolucionario, por su parte, debe ser un reflejo de la sociedad que está tratando de crear. Si el movimiento quiere evitar convertirse en un fin en sí mismo, convertirse en otra forma de Estado, debe existir una total conformidad entre sus medios y sus fines, entre la forma y el contenido. En sus escritos acerca de la estructura de la Internacional, Bakunin insiste en que la forma de organización de ésta

> debe diferir substancialmente de la organización del Estado. En la misma medida en que el Estado es autoritario, artificial, violento y se caracteriza por ser ajeno y hostil al desarrollo natural de los intereses e instintos del pueblo, la organización de la Internacional debe ser libre y natural, acatando en todo momento estos intereses e instintos.

De acuerdo con esto, en los últimos años de la Internacional, Bakunin se opuso a los esfuerzos de Marx por centralizar el movimiento y otorgar los

poderes de mando a su Consejo General.[1]

Bakunin hace especial hincapié en la importancia del carácter espontáneo de la revolución y la actividad revolucionaria. Si la gente pretende alcanzar la libertad, si van a ser transformados por la revolución, deberán hacer la revolución por sí mismos y no bajo la tutela de un omnisciente partido político. Bakunin reconoce, por otra parte, que es necesario un movimiento de carácter revolucionario para catalizar las posibilidades revolucionarias y convertirlas en realidades, así como para fomentar el desarrollo revolucionario por medio de la propaganda, ideas y programas. Cree que el movimiento revolucionario debe organizarse en pequeños grupos de *hermanos* (la palabra se repite a menudo en discusiones organizativas) que se dediquen enteramente a la tarea de fomentar la revolución. La importancia que Bakunin da a lo reducido de los grupos se debe, por una parte, a la necesaria clandestinidad en la que habían de actuar en aquel tiempo en los países del sur de Europa, y por otra, al deseo de propiciar la intimidad dentro del movimiento revolucionario.

Para Bakunin, una organización revolucionaria es una comunidad de hermanos y hermanas personalmente comprometidos, no un aparato basado en la burocracia, la jerarquía y los acuerdos programáticos. Más que cualquier otro revolucionario de su tiempo, Bakunin promulgó la armonía entre la forma de vida y los objetivos del movimiento revolucionario. Su percepción de la revolución como una fiesta era completamente inaudita. Recordando sus experiencias en París, poco después de la revolución de 1848, escribe,

> Respiraba con todos mis sentidos, a través de todos de mis poros, la embriaguez de la atmósfera revolucionaria. Fue un fiesta sin principio ni fin; veía a un tiempo a todos y a nadie, ya que cada persona estaba perdida en la misma innumerable y delirante muchedumbre; hablaba con todos sin distinguir ni recordar mis propias palabras ni las de los otros; toda mi atención era absorbida por los nuevos acontecimientos, por los nuevos propósitos, por las noticias siempre nuevas e impredecibles.

El énfasis que Bakunin pone en la importancia de la conspiración y la clandestinidad ha de entenderse teniendo en cuenta el trasfondo social de Italia, España o Rusia; tres países europeos donde la conspiración y la clandestinidad eran cuestiones de pura supervivencia. A diferencia de Marx, que admiraba profundamente la firme disciplina y la cohesión que caracterizaban al proletariado alemán, Bakunin depositó sus mayores esperanzas revolucionarias en los países latinos. Presintió el peligro de aburguesamiento del proletariado industrial, y advirtió de sus consecuencias. Siguiendo su predisposición a desconfiar de las clases sociales institucionalizadas y complacientes, Bakunin dirigió cada vez más su discurso hacia las clases precapitalistas en descomposición, similares a las que existían en Rusia y en el sur de Europa: campesinos sin tierra, obreros sin trabajo y sin ningún peso en la sociedad, artesanos al borde de la ruina, intelectuales y estudiantes desclasados. Marx consideraba la formación de una sólida clase obrera industrial como una condición previa para la revolución social. Bakunin, sin embargo, veía en este proceso la destrucción de todas las esperanzas de la formación de un movimiento genuinamente revolucionario, y en este sentido resultó ser profético.

Bakunin no era comunista. Era consciente de que el desarrollo económico de su tiempo no admitía el precepto comunista “de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”. En todo caso, aceptaba que la satisfacción de las necesidades materiales de cada individuo debía estar en consonancia con el trabajo realizado. Bakunin siguió las tesis federalistas de Proudhon en el terreno de la organización social. Pero a diferencia del mutualista francés, consideraba a la colectividad, y no al artesano independiente, como la unidad social básica. Criticaba duramente a los mutualistas proudhianos,

> quienes concebían la sociedad como el resultado del libre contrato entre individuos absolutamente independientes unos de otros, y que entablaban relación sólo a causa de una convención redactada por ellos mismos. Como si estos hombres hubiesen caído del cielo trayendo consigo el lenguaje, la voluntad, el pensamiento

primigenio, y fueran luego ajenos a todo lo terreno, es decir, a todo lo que tenga carácter social.

Con el tiempo, estas opiniones tomarían el nombre de anarquismo colectivista para poder ser distinguidas tanto del mutualismo proudhiano como del posterior anarco-comunismo de Peter Kropotkin. Un mero bosquejo de las teorías de Bakunin es insuficiente para captar el sabor de sus escritos y la vivacidad que catapultó su personalidad al primer plano de la historia de los movimientos radicales del siglo XIX. A pesar de ser un hombre profundamente humanitario y cordial, Bakunin no rechazó el empleo de la violencia. Se enfrentó al problema con una ingenuidad conmovedora, sin eludir en ningún momento la cuestión del uso de la fuerza —la misma fuerza que ejercía a diario la clase dominante sobre los oprimidos— apoyándose en la hipócrita coartada del ultraje moral. "El impulso de destrucción" —escribió cuando era joven— "es también un impulso creativo". De sus escritos surge un sentimiento de violenta rebelión contra la autoridad, de cólera ilimitada contra la injusticia, de fiera militancia en defensa de los explotados y de los oprimidos. No cabe la menor duda de que Bakunin conservó firmemente este espíritu a lo largo de su vida, marcada por la valentía y el atrevimiento.

Por debajo de la superficie teorética de los escritos de Bakunin, subyace la rebelión de los principios comunales frente a los principios estatales, y de los principios sociales frente a los principios políticos. El bakuninismo, en este sentido, puede remontarse a aquellas corrientes subterráneas de la humanidad que han intentado, en todas las épocas, restablecer la colectividad como unidad estructural de la vida social. Bakunin admiraba profundamente los aspectos del colectivismo tradicional de las aldeas rusas, no porque tuviera una ilusión atávica del pasado, sino porque anhelaba la existencia de una sociedad industrial donde prevalecieran la solidaridad y la ayuda mutua. Como la mayoría de los intelectuales de su época, reconocía la importancia de la ciencia como el medio para promover la superación del ser humano, de ahí el furibundo ateísmo y anticlericalismo que preside toda su obra. Por esa misma razón, exigió que los recursos científicos y tecnológicos fuesen movilizados en beneficio de la cooperación social, la

libertad y la colectividad, en lugar de ser empleados para el lucro, la competitividad y la guerra. En este sentido, Mijail Bakunin no vivió de espaldas a su tiempo, sino que se le adelantó en más de un centenar de años.

Para los jóvenes revolucionarios españoles de la década de 1860, para los obreros militantes de Barcelona y los inquietos jornaleros de Andalucía, las ideas propuestas por Bakunin parecían materializar todos sus vagos sentimientos e ideas en una inspirada visión de la verdad. Bakunin les proporcionó un conjunto coherente de ideas que respondía admirablemente a sus necesidades: un vigoroso federalismo, revolucionario en sus métodos, y un colectivismo radical fundamentado en iniciativas locales y formas sociales descentralizadas. Incluso su ateísmo militante parecía satisfacer la fuerte corriente de anticlericalismo que se extendía por toda España. La perspectiva de participar en el trabajo de la Internacional conllevaba la promesa de vincular sus destinos a los de una causa mundial de dimensiones históricas. España estaba preparada para la llegada de las teorías de Bakunin, no sólo social sino intelectualmente. Si bien el anarquismo bakuninista era nuevo para el auditorio de Fanelli, algunos de sus elementos, como el federalismo, ya eran temas de discusión habituales tanto en Madrid como en Barcelona.

Tan importantes como las ideas federalistas de Bakunin fueron sus opiniones sobre el ateísmo y su anticlericalismo militante. Es necesario recordar que la Iglesia española era el único apoyo consistente del absolutismo y de la reacción de comienzos del siglo XIX, y que más tarde sería la aliada de los carlistas (los reaccionarios dirigidos por el pretendiente al trono de España) y de las tendencias más conservadoras de la vida política. La confabulación entre la jerarquía católica y la oligarquía española había “minado completamente el prestigio del clero entre las clases trabajadoras”, escribe Eléna de la Souchère, lo que dio lugar a una descristianización de las masas, hecho que constituye un fenómeno fundamental para entender la historia de la España de finales del siglo XIX y principios del XX. Los plebeyos, apartados socialmente del modelo que había impuesto la burguesía española, proyectaban sobre el clero el odio que profesaban hacia las instituciones y clases que conformaban el núcleo de esa sociedad.

Así, en 1835, la ira contra las atrocidades cometidas por los carlistas en el norte había derivado ya en la quema de iglesias en muchas de las grandes ciudades españolas. A los monjes se les despreciaba por su condición de parásitos, y los más altos cargos de la jerarquía eclesiástica eran equiparados a los ricos terratenientes y a la acaudalada clase burguesa. Algunos de los odios más profundos eran inspirados por la hipocresía con la que los clérigos conjugaban sus propias aspiraciones con los llamamientos a la humildad y a la virtud en la pobreza.

La importancia que Bakunin concede al colectivismo, mucho mayor que la que le había prestado Proudhon, gozó de una amplia aceptación entre las desvalidas clases rurales desheredadas. El colectivismo se ajustaba perfectamente a su noción de patria chica, la pequeña aldea independiente que ha conseguido preservar una forma de vida autónoma gracias a la ausencia de los miembros de las clases dirigentes, que viven en las grandes ciudades.

Así, esta mentalidad propia de Robin Hood que impregna de forma tan característica el pensamiento de Bakunin, y que se manifestó con tanta evidencia en algunos de los rasgos más característicos de su propia vida, provocó una fuerte atracción en zonas como Andalucía, donde el campesinado había llegado a venerar al bandolero como a un vengador de la injusticia. En esta región, donde el fenómeno de la *guerrilla permanente* se remonta más allá de la invasión musulmana, los grupos solitarios que actuaban en nombre de la libertad llegaron a ser especialmente queridos por los campesinos pobres, dando lugar a infinidad de mitos y leyendas locales.

Por último, el llamamiento de Bakunin a la acción directa se encontró con una tradición repleta de revueltas e insurrecciones. El pueblo español, carente ante la ley de cualquier tipo de protección, confiaba profundamente en su propia capacidad de acción para reparar la injusticia. Debemos tener en cuenta que el derecho al voto en España había perdido todo su significado después incluso de haber sido implantado el sufragio universal. En muchos pueblos españoles, los amos de la política local, los caciques (por lo general terratenientes, aunque a menudo abogados y sacerdotes) ejercían un control absoluto sobre la vida política. Aprovechando su poder económico y, cuando era necesario, su capacidad de coacción, los caciques

designaban a los funcionarios de su comarca y *aseguraban* el voto a los partidos políticos de su preferencia. Este escandaloso sistema de abierta corrupción política, acompañado de los repetidos golpes de Estado —los conocidos *pronunciamientos*— de los oficiales militares, propiciaba un clima de cinismo generalizado y de desconfianza hacia el sistema electoral. El pueblo español no precisaba de un aristócrata ruso para convencerse de que el Estado era una propiedad particular de las clases dirigentes; la toma de conciencia del pueblo sería consecuencia directa de la arrogancia de los grandes terratenientes y de la burguesía de su propia región.

Así, el hecho de que Giuseppe Fanelli obtuviera un éxito inmediato a su llegada a Madrid puede parecernos un hecho singular, pero de ningún modo nos debe sorprender. Las ideas que traía consigo no precisaban de grandes explicaciones abstractas; su auditorio sólo necesitó escuchar algunos fragmentos de las ideas de Bakunin para sentir una afinidad latente entre la problemática social en España y las apasionadas ideas del ruso exiliado en Ginebra.

# 2: La topografía de la Revolución

Trataremos de entender ahora de qué manera las ideas de Bakunin se adaptaron a las necesidades del movimiento revolucionario de los trabajadores y campesinos españoles.

Para el liberalismo del siglo XIX, los problemas de España podían definirse como los propios de un país subdesarrollado, básicamente agrícola y enfrentado a las tareas de la reforma agraria, el desarrollo industrial y la creación de un Estado democrático burgués. El paralelismo con la Francia inmediatamente anterior a la Revolución es inevitable: una burguesía liberal que reclama su espacio de poder en el Estado; una monarquía absolutista en avanzado estado de descomposición; una aristocracia estancada, perdida en oscuras evocaciones de un pasado de esplendor; una Iglesia reaccionaria, impregnada de medievalismo; una clase obrera salvajemente explotada y un campesinado empobrecido deseoso de tierras. La conciencia de este paralelismo era tan pronunciada que a menudo las facciones políticas españolas se organizaban en jacobinos, girondinos, realistas y bonapartistas.

No obstante existían muchas diferencias entre la España del siglo XIX y la Francia del XVIII. Algunas de ellas, como la aparición del moderno proletariado industrial, eran en parte debidas al paso del tiempo. Otras, sin embargo, se debían a particularidades propias de España, y tenían pocos precedentes históricos. Estas particularidades son las que explican la extraordinaria popularidad que alcanzó el anarquismo bakuniniano al sur de los Pirineos.

La característica más llamativa de la Península Ibérica es su sorprendente variedad. La atención del viajero queda a menudo atrapada por los repentinos cambios en la topografía, por la variedad de los paisajes

y de las formas de vida, de los rasgos culturales y sociales. En unas pocas horas se puede pasar de los verdes campos de cultivo, con tierras de regadíos y abundantes cosechas, a llanuras calcinadas, áridas, más propias del norte de África que del continente europeo. Hace un siglo un viajero inglés observaba que "aunque las provincias del noroeste son más lluviosas que la región de Devonshire, las planicies centrales resultan más secas que el desierto de Arabia, y el litoral sur o las costas orientales parecen enteramente argelinos".

Para España, esto suponía no sólo una gran variedad de tipos de arrendamientos, sino también diferentes formas de agitación agraria. En las escarpadas y lluviosas regiones del norte, la economía agraria se había constituido alrededor de pequeñas granjas bien explotadas, dedicadas a cultivos mixtos y a la producción lechera. Allí, las tradiciones democráticas de la España premusulmana estaban firmemente arraigadas, y las relaciones entre los campesinos independientes, los arrendatarios y los arrendadores estaban regidas por principios casi igualitarios. La persistente influencia del sistema comunal, de origen casi neolítico, había traído consigo un profundo sentimiento conservador cuyo centro espiritual era la Iglesia, para la que la aparición de la sociedad industrial, con sus valores poco sólidos, sus alarmantes resultados y sus injerencias en la autonomía de la aldea era la representación misma del Anticristo. Cada una de estas pequeñas y sombrías aldeas, guarecidas entre las cimas o en las laderas, seguían un orden de vida cotidiana fuertemente establecido, que sólo era perturbado por las supersticiones a menudo impregnadas del dogmatismo que promulgaban los fanáticos sacerdotes, y por unos códigos cuyo origen se remontaba más allá de los tiempos de los primeros mitos.

A lo largo del siglo XIX estas aldeas habían ido emergiendo del letargo y el aislamiento, para enfrentarse a un mundo en pleno cataclismo económico y social. Como respuesta a este proceso, las revueltas adoptaron el anacrónico método de la contrarrevolución permanente. Unidos por un catolicismo apasionado, por un batallador sentido de la independencia local y por profundas y hondas tradiciones comunales y patriarcales, el campesinado de las montañas del norte se convirtió en el más grande y singular receptáculo para la reacción política en España. En los años

subsiguientes, estas aldeas parroquiales generaron esporádicas oleadas de milicias campesinas —temibles hombres armados con guadañas y garrotes — acaudilladas por curas con una siniestra reputación de carniceros. El causante de la primera de estas revueltas fue Napoleón, quien personificaba no sólo al tradicional invasor francés, sino también la detestada Revolución Francesa. Posteriormente, en dos sangrientas guerras civiles, los campesinos se levantarían en armas para apoyar a los carlistas. Debemos señalar que a medida que el siglo XIX llegaba a su fin, nuevas fuerzas iban a diluir esta reserva de la reacción con ideas liberales e incluso socialistas; a pesar de ello, sería entre los pequeños terratenientes de las montañas de Navarra y alrededores, donde el general Franco iba reclutaría a las masas más entusiastas para la infantería nacional de 1936.

Si el norte puede ser señalado como el equivalente a la Vendée reaccionaria de la Revolución Francesa, la meseta podría ser considerada como su moderada Gironde. En esa enorme y desierta meseta barrida por los vientos del centro de la península, la reacción se resguardó en un cauteloso liberalismo. Desde los tiempos de la Reconquista, cuando los musulmanes fueron expulsados de la Península Ibérica, los castellanos de la meseta central se veían a sí mismos como la fuente de la cultura española y los herederos indiscutibles de la idea de España. Todo los demás habitantes de España eran considerados inferiores; pocas veces en la historia la “raza dominante” ha estado confinada a la región más inhóspita del país que tenía bajo su control. La meseta tiene un clima duro e impredecible. Su suelo, debido a la falta de obras de irrigación, es pobre y exigente. En la época de Fanelli, un viajero se habría encontrado con una situación de carácter casi inmutable, que reunía todas las condiciones para una rebelión agraria: grandes propiedades en manos de aristócratas que residían en las ciudades, y una burguesía de nuevos ricos, conviviendo junto a pequeñas y miserables fincas de labranza. La usura y la especulación del suelo gravaron la meseta de tal manera que muchos de los integrantes de la baja aristocracia vieron como sus propiedades y sus condiciones de vida se reducían a las de un campesino. Una gran parte de las familias arrendatarias trabajaba la tierra bajo precarios arrendamientos de períodos breves con los que a duras penas

conseguían ganarse la vida, con lo que las verdaderas necesidades del suelo quedaban totalmente descuidadas.

Sin embargo, todo este potencial para la revuelta agraria raramente desembocaba en una insurrección, grande o pequeña. Al contrario que en el norte, donde la Iglesia había desviado astutamente el descontento del campesinado a través de canales reaccionarios, en la meseta el chauvinismo resultaba más útil como instrumento político para el gobierno central de Madrid (y aquí termina toda comparación con el girondinismo francés) que como la base de una ideología reaccionaria coherente. Prácticamente todas las clases sociales, ricas y pobres, apoyaban la supremacía del gobierno central frente al carlismo y el regionalismo, pero más allá de esta capa de chauvinismo, las lealtades tendían a seguir las directrices económicas. La aristocracia terrateniente de la meseta, al igual que la del resto de España, seguía siendo católica y conservadora; la burguesía rural se inclinaba a apoyar un sistema político liberalista moderado siempre que la inquietud social no la arrastrara a sostener posiciones más reaccionarias. La gran masa de campesinos y arrendatarios permaneció inerte durante la mayor parte del siglo XIX, siendo objeto de manipulación por parte de los grandes terratenientes; sin embargo, con el tiempo se produjo el acercamiento a las burocráticas y bien organizadas asociaciones socialistas.

La analogía con la Revolución Francesa concluye en el momento en que se atraviesa hacia el sur Sierra Morena, una de las barreras montañosas más importantes de España. Al norte de Sierra Morena se sitúa la España clásica: austera y moralmente severa, obsesionada por el sentido de la responsabilidad y el deber. Al sur se sitúa Andalucía: serena, amante de los placeres y deliciosamente impulsiva. Esta extensa y populosa región había sido colonizada sucesivamente por fenicios, griegos, cartagineses, romanos, visigodos y musulmanes. Estos últimos permanecieron en Andalucía durante casi siete siglos, y dejaron tras de sí una tradición hedonista que sobrevivió a la Sagrada Inquisición, los autos de fe y las leyes de la tétrica burocracia castellana. Los romanos, que permanecieron en la región más tiempo aún que los moros, legaron el latifundio, un sistema de plantación que se apoyaba en las cuadrillas de trabajadores sometidos a brutales condiciones de explotación.

El latifundio podría muy bien ser definido como la úlcera del mundo mediterráneo, y en muchos aspectos es comparable a la economía de plantación del Sur norteamericano anterior a la guerra de Secesión. Enraizados históricamente en la práctica esclavista, los dos sistemas compartían una misma tradición en cuanto a gestión del trabajo y formas de arrendamientos se refiere. En las zonas algodoneras de los alrededores de Sevilla incluso las cosechas eran similares. En la mayoría de los latifundios de Andalucía se cultivaban el olivo, la vid y los cereales, que son los cultivos propios de la agricultura mediterránea. Los largos veranos sin lluvia propios de la región planteaban grandes problemas para la conservación de la humedad. A falta de maquinaria agrícola adecuada para el cultivo de secano, grandes extensiones de tierra habían de ser abandonadas, y sólo se cultivaban cada dos o tres años. Las fincas más grandes tendían a agruparse en torno al valle del Guadalquivir, la vasta y triangular cuenca del río que corre entre Sierra Morena y la cadena montañosa de la costa sur. Era allí, en las mejores tierras de las zonas más fértiles de Andalucía, donde se encontraban las posesiones más importantes, así como las grandes masas de campesinado; los grotescos contrastes económicos fueron los que otorgaron a la región su conocida reputación de tierra de miseria y revueltas agrarias.

Desde los tiempos de los romanos, Andalucía había vivido un enfrentamiento entre dos clases bien diferenciadas: los grandes terratenientes y la enorme población de trabajadores sin tierras. Si el terrateniente vivía en su hacienda, su presencia era temida por todos; si vivía en la ciudad —como a menudo era el caso— la tarea de dirigir su propiedad era encargada a administradores que explotaban despiadadamente, hasta el último aliento, a los trabajadores a su cargo. Entre ese puñado de terratenientes y la gran masa de gentes sin tierra existía un abismo que las instituciones de la España oficial no podían abarcar. La Iglesia había sido hasta ese momento capaz de hacerlo por sí sola, pero su influencia, debilitada desde la segunda mitad del siglo XIX, era cada vez más insuficiente y los últimos lazos acabaron por romperse. Aquí, en las inmensas fincas del sur, el movimiento anarquista español encontraría un enorme y fundamental apoyo popular.

Al oeste de la meseta se encuentra Extremadura, una región árida y rural que se extiende desde la meseta central hasta la frontera con Portugal. La mayoría de las tierras pertenecían a unos pocos propietarios que residían en la ciudad, y eran trabajadas por los yunteros, campesinos cuyas únicas propiedades eran un par de mulas. El trabajo era temporal, casi siempre incierto y se pagaba en especie. Más al norte, en Galicia, la más occidental de las provincias españolas, el nivel de producción agrícola era bajísimo. Si Andalucía era la tierra del latifundio, Galicia podría considerarse la tierra del minifundio, con parcelas tan pequeñas que difícilmente podían mantener a una familia. Al este de la meseta, a lo largo de la región costera mediterránea, en las regiones de Valencia y Murcia, abundaban las vegas: planicies de regadío parceladas en pequeños y prósperos plantíos de naranjos, y zonas del interior, más montañosas y a menudo castigadas por la pobreza. Los propietarios de las vegas vacilaban, políticamente hablando, entre el partido Liberal y el Conservador. De entre los campesinos del interior iban a surgir algunos de los más combativos militantes del movimiento anarquista español.

La uniformidad de estas grandes regiones agrícolas es, sin embargo, más aparente que real. Dentro de Andalucía, por ejemplo, la región montañosa estaba formada principalmente por pequeños propietarios con derecho a pastos comunales, y en las tierras bajas existían cortijos trabajados por campesinos propietarios y por arrendatarios. Más al norte, en Aragón, se practicaba un paupérrimo pastoreo en el Maestrazgo, donde muchos se aproximaron al carlismo, no porque compartieran la prosperidad de sus cofrades del norte y quisieran defenderla, sino porque no poseían nada. En las llanuras de Aragón, una pobreza inveterada, consecuencia de la combinación de grandes propiedades, usura y ansia de tierras, propició un clima hospitalario para el anarquismo.

España es una tierra sorprendente, no sólo por sus contrastes geográficos o agrarios, sino también por una diversidad cultural que en el caso de vascos y catalanes se aproxima a la definición de naciones diferentes. Los vascos ocupan la zona atlántica del norte contigua a Francia, país donde también vive una parte considerable de su población. El euskera es una lengua antigua que no guarda relación con ninguna otra lengua

europea. El pueblo vasco es profundamente devoto y austero, distendiéndose su sentido de la disciplina en animadas canciones y satíricas pantomimas. Los vascos han conseguido defender su independencia y su forma de vida durante siglos. Orientados económicamente hacia la Europa Atlántica, se las ingeniaron para resistirse a la latinización, y sólo nominalmente cayeron bajo el poder romano. Durante la Edad Media impidieron que visigodos, francos y musulmanes se adueñaran de sus tierras. Durante dos siglos (entre el X y el XIII), prácticamente todos los vascos de España se unieron al Reino de Navarra, el reino cristiano que tan importante papel jugó en la Reconquista de la Península Ibérica.

La creciente influencia del gobierno castellano en la Meseta fue suprimiendo gradualmente las libertades del pueblo vasco, encaminándolo a una serie de revueltas sin éxito y finalmente al campo carlista. Mientras tanto, la actividad portuaria crecía y el comercio con Europa se desarrollaba velozmente. Muy pronto Bilbao, gracias a su proximidad con las minas productoras de mineral de hierro y con los campos carboníferos de Asturias, se convirtió en el centro siderúrgico más importante de España. Los financieros vascos desempeñaron un papel capital en todas las áreas de la economía española, y los magnates navieros lograron acumular el mayor volumen de tonelaje mercante de España. La burguesía industrial y financiera, una de las más modernas y mejor administradas del país, pronto comenzó a respaldar un movimiento nacionalista moderado, devotamente católico en cuanto a creencias, liberal en cuanto a política económica, y reformista en su programa político-social. La clase trabajadora vasca, reclutada en gran parte entre el campesinado conservador de las montañas costeras, nunca se contagió del fervor revolucionario que emanaba de Barcelona. Aunque algunos obreros de la siderurgia se inclinaron por el anarcosindicalismo, la mayoría de los trabajadores dividieron sus posiciones entre los sindicatos católicos y los socialistas.

Tradicionalmente orientada hacia el norte, hacia más allá de los Pirineos, Cataluña no ha sido nunca una parte orgánica de España. Más bien había formado parte de la poderosa y avanzada civilización de *langue d'oc*, junto con el sur de Francia y el norte de Italia. La lengua catalana está emparentada con la provenzal, no con la castellana, aunque ambas son

lenguas latinas. La *cruzada* contra la herejía albigense en el siglo XIII hizo añicos este colorido mundo, pero dejó intactas muchas de sus raíces culturales. Como consecuencia de la conquista de Constantinopla por los turcos, el comercio catalán se vino abajo. Separados de Francia definitivamente, los catalanes se vieron obligados a mirar hacia la Península Ibérica. Nunca les gustó lo que vieron. El pueblo catalán, refinado, comerciante y con una cultura y un linaje propios, nunca dejó de albergar tendencias separatistas. En los comienzos del siglo XIX, las fuerzas centrífugas se vieron fortalecidas por el desarrollo industrial. En un momento histórico en que todas las instituciones del Estado castellano en Madrid se encontraban en un evidente proceso de descomposición, surgía, no en el centro de España sino en su periferia, una burguesía industrial y un proletariado en pleno desarrollo. El País Vasco y Cataluña presentaban opciones de tipo económico, político y cultural que amenazaban con socavar la estructura tradicional que había controlado España desde la Reconquista.

Más amenazante para el Estado central que el nacionalismo regional, era el intenso localismo presente en la sociedad española: la *patria chica*, una expresión prácticamente intraducible que se refiere al pueblo y a sus alrededores, es decir, al escenario en el que vive el español rural.

La palabra española para designar una aldea es *pueblo*. Pueblo en castellano también quiere decir “gente”, y esto no es de ningún modo accidental. J. A. Pitt-Rivers, que se consagró durante años al estudio de la vida en los pueblos de Andalucía, señala que “la palabra española *pueblo* es más próxima a la raíz griega polis que cualquier palabra inglesa. La palabra pueblo implica una integridad en el ámbito de las relaciones humanas que hace de este término el concepto fundamental de todo pensamiento social”. [2]

Para el pueblo tradicional, esta integridad entrañaba no sólo un hondo sentido de unidad moral, de propósitos comunes y de ayuda mutua, sino también un corpus de derecho y unos fueros que definían la autonomía de la comunidad en asuntos locales y la defendían de posibles intrusiones de la autoridad externa. Muchos fueros nacieron de las necesidades surgidas durante la Reconquista, cuando los reyes de España concedieron privilegios

locales para lograr apoyo militar contra los moros. Otros fueron concedidos por la monarquía para lograr apoyo municipal con el que hacer frente a nobles desmandados o a órdenes militares. Pero también existían fueros como los de los vascos, que no precisaron de ninguna concesión, puesto que datan de épocas muy lejanas, cuando los jefes, y más tarde los monarcas, eran elegidos democráticamente en asambleas populares. Eléna de la Souchère observa que la invasión musulmana, al destruir el Estado romano-germánico, propició indirectamente la resurrección de estas formas sociales primitivas. Los habitantes de las montañas del norte, que habían resistido con éxito la influencia romana, germánica y musulmana, estaban destinados no sólo a encabezar la Reconquista "sino a perfeccionar e incluso a devolver a las restantes regiones del país sus peculiares costumbres e instituciones".

Irónicamente, que los fueros conservaran su vitalidad después de la Reconquista se debió a la naturaleza de la monarquía española y a su influencia en la vida económica. Las inmensas riquezas que España había obtenido de su Imperio no habían llegado a las clases medias. Las arcas de la monarquía absolutista (tal vez la más antigua de su clase en los tiempos modernos) acumularon toda esta riqueza, que más tarde se perdería en la financiación de aventuras imperiales en Europa y América. La constante sangría de un capital que podría haberse invertido en el desarrollo industrial provocó la recesión del comercio nacional y la decadencia de la burguesía.

Marx, que entendió los problemas de España mejor que muchos de sus discípulos españoles, señala que a medida que decaía el comercio y la industria, y la burguesía comenzaba a estancarse, "el comercio interno era inusual, el intercambio entre diferentes provincias menos frecuente, y las grandes rutas comerciales abandonadas". La decadencia de esta vasta economía en el transcurso de los siglos XVI y XVII fortalecería en gran parte la vida local de los pueblos y las provincias. Aunque la monarquía conservaba la apariencia absolutista, su control sobre las regiones era a menudo nominal o sencillamente inexistente. Durante los períodos de paz, España podía ser definida con geográfica exactitud sobre un mapa, pero un invasor pronto descubriría, muy a su pesar, que en tiempos de guerra se convertía en una realidad bien diferente. Marx observa con agudeza cómo

Napoleón, que consideraba a España “un cuerpo inanimado”, quedó atónito al descubrir que “mientras el Estado español languidecía, la sociedad española permanecía llena de vida, y cada una de sus partes rebosaba fuerza para la resistencia”.

Los fueros, que promovieron este peculiar desarrollo, ayudaron a proveer al pueblo de una fuerza que ninguna estructura burocrática podría equiparar, y generaron también las fuerzas centrífugas que amenazaban permanentemente al poder central, o que al menos ponían en duda la validez de sus funciones. ¿Qué necesidad tenían los españoles de un Estado distante, burocrático y anónimo, cuando en sus pueblos, que eran más accesibles, cohesionados y solidarios, podían encontrar respuesta a la mayor parte de sus necesidades sociales y materiales? ¿Qué necesidad tenían de un remoto ente político, de unas leyes ambiguas e imprecisas, cuando los fueros proveían a los españoles de normas altamente democráticas para la gestión social? Los españoles concebían su lealtad de abajo hacia arriba, de pueblo a localidad, de localidad a región y de región a provincia, reservando la mínima adhesión, si algo quedaba todavía, para el Estado centralizado de Madrid. Esta intensa inclinación por la comunidad, por la autogestión, por la organización a pequeña escala, hacía de los españoles un pueblo sumamente susceptible a las ideas y métodos libertarios. Transportados a un ambiente urbano, estas tendencias localistas convertirían la ciudad en una suma de pueblos, el sindicato en *patria chica*, la fábrica en comunidad.

# 3: El comienzo

## La Internacional en España

Durante algún tiempo se tuvieron pocas noticias del núcleo que Fanelli había dejado tras de sí en su viaje de 1869.

Antes de abandonar Madrid, el italiano había entregado a su admirado grupo de trabajadores un pequeño y variado legado de material escrito: los estatutos de la Internacional, el programa y los reglamentos de la Alianza bakuninista de la Democracia Socialista, las normas de una asociación obrera suiza, y varios periódicos radicales que incluían artículos y discursos de Bakunin. Estos valiosos textos fueron cuidadosamente estudiados, discutidos y distribuidos (probablemente tras ser traducidos), hasta que los jóvenes anarquistas de Madrid comenzaron a sentir cierta seguridad y confianza en sus convicciones. Se denominaron a sí mismos *internacionalistas* y continuarían haciéndolo durante años, disfrutando del creciente prestigio de la gran Internacional de los Trabajadores celebrada más allá de los Pirineos.

Comenzaron también a escribir cartas al Consejo General de la Internacional en Londres, aunque raramente obtuvieron respuesta. Esto pudo deberse a que el Consejo General, dominado por el adversario de Bakunin, Karl Marx, desconfiara de la nueva Sección oficial de Madrid, o quizás fuera una simple negligencia; en cualquier caso, los internacionalistas madrileños mantuvieron estrecho contacto con Bakunin y con sus amigos de Ginebra, y comenzaron a buscar apoyos en su propia ciudad.

Esto les planteó un difícil interrogante: ¿qué podía esperar lograr en la capital de España un grupo revolucionario, orientado a la clase trabajadora? En Madrid, centro administrativo de la corona española, no existía un proletariado en el sentido moderno de la palabra. Felipe II la había convertido en capital a fin de dotar al país de un centro geográfico y político del que carecía. No fue hasta el siglo XVIII, bajo el reinado de los Borbones, cuando Madrid alcanzó unas proporciones adecuadas a su condición. En la época de la visita de Fanelli, la capital de España carecía de cualquier tipo de industria; su proletariado estaba formado por artesanos que trabajaban de forma tradicional en pequeños talleres, y su población estaba compuesta por pequeños funcionarios, cortesanos, soldados, una clase media emergente y un gran número de intelectuales atraídos por la Universidad de Madrid y por la floreciente vida cultural de la ciudad. El anarquismo en la capital española iba a reflejar estas circunstancias sociales. La organización de Madrid atraería, con el tiempo, a multitud de intelectuales, y se convertiría en uno de los principales núcleos teóricos del movimiento anarquista español.

Los primeros internacionalistas de la capital experimentaron cierta confusión cuando hubo que definir los objetivos y los métodos a utilizar. Un importante número de miembros del grupo original, aquellos que en realidad eran republicanos, masones o cooperativistas, se retiraron. Los restantes, después de poner en orden sus ideas y el material de lectura que había dejado Fanelli, comenzaron a organizar mítines públicos y a atraer la atención de la gente en el ámbito local. El primero de estos mítines se realizó en la calle Valencia, en un almacén —que más bien parecía una cuadra— cuyo portero era un simpatizante recientemente incorporado, de nombre Jalvo, que cedió el recinto para la celebración del acto. El gesto de Jalvo, típico del entusiasmo de los comienzos y de la audacia que caracterizaba al movimiento, podía haber puesto en peligro su trabajo e incluso haberle supuesto un arresto, ya que el local era un almacén municipal que se utilizaba como depósito de materiales y recinto para fiestas populares. Afortunadamente, las autoridades no tomaban aún muy en serio al movimiento y Jalvo no sufrió represalias.

La Sección madrileña de la Internacional se expandió con rapidez. Los primeros mítines atrajeron también a varios astutos oradores republicanos que buscaban apoyos en el movimiento obrero y pretendían hacerse cargo de la recién constituida Sección. Pero Fanelli había hecho un buen trabajo, y fueron rechazados con firmeza. Enfrentándose a estas primeras dificultades, Lorenzo y sus compañeros empezaron a encarar la difícil tarea de organizar el movimiento de una manera coherente. Lanzaron lejos sus redes, hasta el punto de atraer a masones (a los que Lorenzo afablemente describía como *auxiliares* de la Internacional), grupos culturales, sociedades mutualistas, e incluso a elementos de la corriente liberal. A comienzos de 1870, un año después de la partida de Fanelli, la Sección madrileña de la Internacional reunía a 2.000 miembros y había iniciado la publicación de un periódico local, *La Solidaridad*, destinado a la difusión de sus ideas. Es posible que la cifra declarada sobre el número de miembros estuviera hinchada por la inclusión de un buen número de personas y grupos poco comprometidos en realidad con la Sección y con los objetivos revolucionarios que ésta proclamaba. En cualquier caso, se puede afirmar que el movimiento anarquista estaba ya firmemente establecido en el Madrid de 1870.

Si tomamos como referencia el número de afiliados, el movimiento gozaba aún de mayor aceptación en Barcelona. A diferencia de Madrid, el gran puerto catalán era un importante centro textil, el más grande de España, y contaba con una considerable clase obrera industrial. Aunque Barcelona era famosa desde hacía siglos por sus productos textiles, el desarrollo industrial de la ciudad no comenzó hasta finales de la década de 1840, cuando las fábricas que utilizaban la máquina de vapor para la fabricación de algodón comenzaron a generalizarse. Los grabados de la década de 1850 nos muestran el viejo distrito del puerto coronado por las chimeneas de las factorías. La mayoría de estas empresas, que pertenecían a familias de la burguesía medianamente acomodadas, eran pequeñas y empleaban a entre diez y veinte obreros. Sin embargo, existían también grandes dinastías industriales como la de los Güell, la de los hermanos Muntada o la de los hermanos Serra, que daban trabajo a miles de obreros

poco cualificados y producían tejidos de baja calidad para pueblos y ciudades de España.

El operario medio de una fábrica en Barcelona trabajaba un número excesivo de horas, tenía un salario que apenas le permitía subsistir y vivía con su familia en una chabola que casi nunca alcanzaba las mínimas condiciones sanitarias. Este denigrante modo de vida, marcado por la fatiga y la pobreza, era continuamente amenazado por los despidos provocados por las crisis económicas y por los avances tecnológicos. Reducido a un trato denigrante, el proletariado de Barcelona se agitaba con una fuerza incontrolada que encontró una vía de escape en el *movimiento ludita*, que promulgaba la destrucción de la maquinaria y de los edificios de las fábricas. En 1836, durante un estallido de violencia provocado por el malestar social, una multitud de barceloneses destruyeron y pegaron fuego a la fábrica Bonaplata, una moderna empresa cuyas máquinas eran impulsadas con energía a vapor, que además de tejido producía maquinaria textil. La quema de fábricas y la destrucción de los sistemas de hilado automático inauguraron también la lucha obrera de 1854, pero en esta ocasión tuvo lugar una huelga general en Barcelona, y los obreros marcharon bajo la consigna *Asociación o Muerte*. El derecho a formar sindicatos, denegado por la ley en casi todos los regímenes de ese período, se había convertido ahora en la reivindicación más importante de la clase trabajadora catalana.

A pesar del fracaso de la huelga, el movimiento asociacionista era incontenible. A mediados de la década de 1860, bajo la administración algo más tolerante del gobierno liberal, organizaciones obreras clandestinas surgieron de pronto a la luz, editando dos periódicos de gran éxito y organizando, en 1865, un espectacular congreso. El movimiento fue erradicado un año después, tras la caída de los liberales, aunque continuó creciendo de forma clandestina, casi siempre a través de círculos culturales y sociedades educacionales. En la época de la última visita de Fanelli a Barcelona, los grupos de trabajadores más combatientes estaban organizados alrededor del Centro Federal de las Sociedades Obreras. En el campo político, el Centro Federal hizo causa común con los republicanos, secundando la demanda de un sistema basado en una república federal; en

el económico favoreció a las cooperativas financiadas con fondos privados. El Congreso obrero, con la representación de más de sesenta sociedades, se llevó a cabo en Barcelona entre los días 12 y 13 de diciembre de 1868; en él se declaró el apoyo a esta estrategia más moderada, y se evitó discretamente cualquier exigencia que pudiera importunar a los aliados republicanos.

Fue en el seno de este movimiento obrero, poco definido y comprometido en una alianza política, donde el núcleo barcelonés de la Internacional comenzó a trabajar. El espíritu impulsor de este núcleo fue, sin duda, Rafael Farga Pellicer, quien había quedado fuertemente impresionado por el discurso de Fanelli en el taller de su tío. El grupo de internacionalistas que se formó tras la marcha del italiano fue pronto reforzado por gente nueva y enormemente capacitada: el físico Gaspar Sentiñón, el estudiante malagueño de medicina José García Viñas, Trinidad Soriano, estudiante de peritaje, y Antonio González Meneses, un estudiante de ingeniería de Cádiz. Hacia mayo de 1869, el núcleo ya era lo suficientemente fuerte como para constituirse oficialmente como la Sección barcelonesa de la Asociación Internacional de Trabajadores. A la demanda del Congreso de Trabajadores de una *república federal democrática*, la nueva formación respondió con la exigencia del *socialismo*, manifestando firmemente su desacuerdo con las aspiraciones simplemente reformistas, que sólo significaban cambios dentro del Estado.

A pesar de esta fuerte manifestación de intransigencia, los internacionalistas procedieron con calma y prudencia. Farga Pellicer, impresor de oficio, asistió al Congreso obrero del mes de diciembre, dos meses antes del segundo viaje de Fanelli a Barcelona, y felicitó abiertamente a los delegados por su apoyo al proyecto de una república federal y por su plan para la creación de un periódico. Sus relaciones con el Centro Federal eran excelentes, y las páginas del periódico *La Federación*, recientemente fundado, estaban abiertas a la libre expresión de las ideas de los internacionalistas. En una carta dirigida a Bakunin, Farga describe las tres direcciones de la estrategia básica del núcleo barcelonés: defender el socialismo “de un modo prudente” en *La Federación*, llegar a acuerdos con el Centro Federal para tratar de aproximar sus posturas a las de la

Internacional, y consolidar la influencia del núcleo de la Sección en la organización de las sociedades obreras.

Al cabo de unos pocos meses, la estrategia dio sus primeros frutos. Los internacionalistas fueron elegidos presidentes de varias sociedades obreras, y *La Federación* se convirtió, en esencia, en un órgano internacionalista, el equivalente en Barcelona a *La Solidaridad* de Madrid. Alrededor de 1870, el Centro Federal —y, presumiblemente, la mayoría de sus afiliados— se manifestó partidario de la Internacional, incorporando a miles de obreros industriales dentro de un movimiento de influencia anarquista. Debe destacarse que esa influencia se ejercitó con sumo cuidado. La inmensa mayoría de los obreros y de sus líderes no eran anarquistas conscientes, al menos no en el sentido revolucionario de la palabra. De hecho, como veremos, la entrada del Centro Federal en la Internacional no significó una unificación orgánica, sino una alianza entre un pequeño grupo de militantes anarquistas y un aparato sindical numéricamente mucho mayor; se acercaba la época en que las ideas anarquistas iban a impregnar el movimiento obrero español y a producir una organización masiva, genuinamente revolucionaria, basada en el anarcosindicalismo.

Las ideas de la Internacional comenzaron a extenderse desde Madrid y Barcelona hacia todas las provincias españolas. Aparecieron periódicos y panfletos en Andalucía, Aragón, y Levante, así como en las zonas rurales de Cataluña, las dos Castillas y Galicia. Poco a poco, el movimiento fue encontrando apoyos fuera de las dos grandes ciudades. En febrero de 1870, *La Solidaridad* publicó la convocatoria de la celebración de un Congreso Nacional de todas las Secciones de la Internacional en España. Después de varias consultas con la Sección catalana sobre cuál sería el lugar más adecuado, se decidió celebrar el Congreso en Barcelona a finales de junio.

Durante los meses anteriores al Congreso, los anarquistas llegaron a un acuerdo para trazar un plan preparatorio común. Después de la partida definitiva de Fanelli de la ciudad de Barcelona, en el invierno de 1869, Farga y Sentiñón habían mantenido una animada correspondencia con Bakunin. Unos seis meses más tarde, en septiembre, los dos españoles asistieron al Congreso Mundial de la Internacional en Basilea, donde Bakunin obtuvo un efímero triunfo sobre Marx y sus partidarios. En esa

ocasión, Bakunin no sólo reafirmó su adhesión al anarquismo sino que introdujo también a los dos españoles en el seno de una sociedad secreta, denominada originariamente la “Fraternidad Internacional”, que el ruso había formado años atrás durante su larga estancia en la embriagadora atmósfera conspiradora de Italia. (Aunque la primera “Fraternité Internationale” había sido disuelta a comienzos de 1869, he conservado el nombre para designar a los pequeños grupos de leales que rodearon a Bakunin durante los últimos años de su vida).

En el desarrollo de la Internacional en España, las organizaciones bakuninistas —la “Fraternidad Internacional”, y su sucesora la Alianza de la Democracia Socialista— desempeñaron un papel clave que requiere un examen más detenido antes de proseguir con el relato acerca del Congreso de Barcelona.

La “Fraternidad Internacional” de Bakunin era una organización elitista y jerárquica que contradecía sus propios principios libertarios. La contradicción, desde mi punto de vista, era absoluta, pues Bakunin había intentado hacer de la “Fraternidad Internacional” una sociedad secreta de militantes anarquistas organizada bajo una férrea disciplina y dirigida por un grupo muy centralizado, que ejercía una función similar a la de un Estado Mayor revolucionario. El ruso nunca resolvió la contradicción existente entre sus prácticas organizativas y los ideales sociales libertarios. Bakunin se veía a sí mismo y a sus seguidores como individuos de una dedicación y de una moral superior, que podían cargar con los aspectos más sórdidos de la responsabilidad de la organización sin caer en el autoritarismo, protegiendo además a personas y a organizaciones menos comprometidas de las tentaciones del poder y de la autoridad. Los seguidores de Bakunin se rebelaron muchas veces contra esta evidente contradicción entre teoría y práctica, obligando al ruso a aceptar un tipo de organización más flexible y libertaria. El resultado fue que la “Fraternidad” y sus organizaciones herederas permanecieron siempre semiocultas, indefinidas, sin llegar a desarrollar ningún tipo de jerarquía; su número nunca excedió de unas pocas decenas de miembros.

La “Fraternidad” pretendía jugar el papel de guía de otra organización: la Alianza de la Democracia Socialista, organización que los compañeros de

Bakunin, desoyendo sus objeciones, habían formado en 1868, poco antes del viaje de Fanelli a España. De hecho, Farga Pellicer y Sentiñón habían contribuido a la formación de la Sección española de la Alianza meses antes de conocer la existencia de la "Fraternidad". La Alianza, a diferencia de la "Fraternidad", iba a ser un movimiento abierto, libre y con un programa marcadamente anarquista. La Alianza se declaraba a favor de la abolición de las clases sociales, la propiedad y el derecho de herencia; no reconocía "ninguna forma de Estado", y exigía que "la política y los Estados autoritarios del presente sean reducidos a simples funciones administrativas de los servicios públicos".

Marx, guía espiritual del Consejo General de la Internacional en Londres, se opuso con firmeza a esta postura de rechazo a las actividades electorales y políticas. Cuando la Alianza solicitó integrarse como miembro de la Internacional, a fines de 1869, su exclusión del Consejo General fue decidida casi de antemano. A fin de evitar que se cumpliera esa decisión, la Alianza fue disuelta oficialmente y se exhortó a sus diversos sectores a convertirse en Secciones de la Internacional. En realidad, estos sectores continuaron existiendo como un secreto núcleo bakuninista. En España, la Alianza se convirtió esencialmente en una pequeña organización clandestina dentro del ámbito más grande y libre de las Secciones de la Internacional. A comienzos del verano de 1870, entre 20.000 y 30.000 miembros formaban parte de estas Secciones, agrupados en las diferentes regiones del país.

En los sesenta años que siguieron a la visita de Fanelli, la suerte del anarquismo español estaba destinada a sufrir bruscas y dramáticas transformaciones. Durante los períodos de represión, el movimiento iba a reducirse a unos cuantos grupos aislados de militantes, para emerger después con fuerza y abarcar a grandes grupos de población. Poco a poco, los grupos anarquistas fueron arraigando en gran cantidad de pueblos andaluces, así como en las grandes ciudades y centros industriales. Se asentaron en las comunidades del interior de Murcia, en las ciudades de la cuenca del Ebro y en los remotos pueblos pesqueros de la costa gallega. Mucho tiempo después de la decadencia general del movimiento en el resto de Europa, el anarquismo iba a encontrar, al sur de los Pirineos, un terreno

extremadamente fértil, nutrido por la abnegación de miles de obreros y campesinos. Sólo la amenaza del fascismo podría sesgar el exuberante crecimiento del ardor revolucionario del que la Península Ibérica era testigo.

## El Congreso de 1870

En la mañana del domingo 18 de Junio de 1870, alrededor de un centenar de delegados, en representación de 150 asociaciones pertenecientes a 36 localidades españolas, se daban cita en el Teatro del Circo de Barcelona para celebrar el primer Congreso Obrero de la Sección Española de la Internacional. El Congreso, propuesto cinco meses atrás por *La Solidaridad*, órgano madrileño de la Internacional, se convertía ahora en realidad.

El teatro se quedó pequeño. Las primeras filas de asientos estaban reservadas para los delegados, pero los obreros, que habían llegado en grandes grupos para expresar su solidaridad, ocupaban todos los asientos e inundaban los pasillos y las entradas. Una tribuna ocupaba el centro del escenario. Al fondo había un gran número de banderas rojas y, sobre ellas, una gran pancarta roja de letras doradas que proclamaba: “¡No más derechos sin deberes, no más deberes sin derechos!”.[3] Se colocaron varias mesas a los extremos del escenario para los secretarios interinos del Congreso, y algunas herramientas y aperos como símbolo del trabajo, Rafael Farga Pellicer abrió la primera sesión; apareció de pronto en medio del escenario vacío, hizo sonar una campana y saludó de este modo:

> Compañeros delegados: a vosotros que venís aquí a afirmar la gran obra de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que cuenta entre sus objetivos con la emancipación completa del proletariado y la extirpación absoluta de todas las injusticias que han prevalecido y aún prevalecen sobre la faz de la tierra; a vosotros que habéis venido a fraternizar con millones de obreros, esclavos blancos y esclavos

> negros que bajo su rojo pendón se cobijan; queridos hermanos, en nombre de los trabajadores de Barcelona, ¡paz y salud![4]

El estilo exhortatorio y el uso de superlativos, la amplitud de perspectivas, el acentuado internacionalismo y el tono elevado, sincero y profundamente sentido, iba a ser el característico de los discursos del movimiento anarquista en España. Farga no trató en ningún momento de atenuar o de disimular sus radicales puntos de vista. “El Estado —declaró— es el guardián y el defensor de los privilegios que la Iglesia hace divinos. […] Nosotros deseamos liquidar el poder del capital, del Estado y de la Iglesia para construir sobre sus ruinas la anarquía: la libre federación de asociaciones libres de trabajadores”.

Según los testimonios, el orador era continuamente interrumpido por “formidables aplausos” y el público estaba “visiblemente conmovido”. Una atmósfera de felicidad y entusiasmo reinaba en el teatro, a la que los saludos de las Secciones suiza y belga añadieron un sentimiento de proyecto histórico y de confraternidad universal. Por la tarde, los delegados subieron uno a uno al estrado para informar acerca de las condiciones de trabajo en sus fábricas. Sus relatos nos dejan un amargo retrato de la miseria que impregnaba las vidas de los obreros españoles en 1870. Un informe muy representativo es el de Bové, un obrero textil de Barcelona. Los obreros, relata Bové, son explotados desde las cinco de la mañana hasta bien entrada la noche. Las mujeres trabajan entre diez y quince horas por ocho o diez miserables reales, y en algunas fábricas hasta dieciocho horas por el mismo jornal. Otros delegados informan que jornadas de once, dieciséis y dieciocho horas son habituales en empresas textiles de Barcelona y Tarragona. Farrés, un delegado de los trabajadores del vapor, habla de “un triste y lamentable grupo de hombres a quienes los capitalistas han declarado inútiles para el trabajo y los han sustituido por mujeres y niños; cuando en realidad los hombres son los más útiles para hacer un trabajo tan pesado. Los hombres no saben ahora qué hacer, porque ellos no nacieron para vivir del robo, sino del trabajo”.

Estas duras realidades contrastaban fuertemente con las encendidas esperanzas que abrieron y clausuraron el Congreso. Las sesiones

transcurrían con tranquilidad, a menudo en un ambiente de espontaneidad, e incluso de tumultuoso entusiasmo; no hubo ningún tipo de restricción a la controversia y a la libre expresión de las opiniones. Como hemos visto, los procedimientos habían sido cuidadosamente planeados y preparados por un grupo de anarquistas concienciados y bien organizados, que formaban parte de la bakuninista Alianza de la Democracia Socialista.

Fueron estos aliancistas —la facción secreta del anarquismo en España, sólo conocida por unos cientos de iniciados— los responsables de los métodos utilizados en el Teatro del Circo. Ellos prepararon el programa del Congreso y designaron a las personas claves para las comisiones y a los oradores más capacitados para las sesiones. No precisaron echar mano de la manipulación, puesto que disfrutaban de un enorme prestigio entre los delegados del Congreso. Los aliancistas fueron los verdaderos fundadores de la Internacional en España. Los vínculos entre la Internacional y la Alianza eran tan estrechos que los discípulos de Fanelli habían adoptado inicialmente el programa de la Alianza para las Secciones de Madrid y Barcelona. Las dos organizaciones no serían ideológicamente diferenciables hasta que en la primavera de 1870, la Alianza se estableció formalmente como un cuerpo independiente. En el Congreso de 1870, los aliancistas comenzaron a dotar a la Sección española de un programa más amplio, acorde con las necesidades de una federación más flexible de sindicatos de obreros y campesinos.

Este nuevo programa, sin embargo, no fue impuesto en el Congreso, sino que fue el resultado de las distintas controversias surgidas en las comisiones sobre cuestiones sociales y en los debates ocurridos al pie del escenario del Teatro del Circo. Además de los anarquistas, al menos otras tres tendencias surgieron en el Congreso: un heterogéneo e ineficaz grupo de asociacionistas, interesados en fomentar asociaciones cooperativas de productores y consumidores dentro del sistema social existente; un grupo político que se ocupaba de la movilización de los obreros en apoyo de los partidos republicanos; y finalmente, la tendencia más dura y más importante de todas, los sindicalistas, un grupo preocupado en su mayor parte por las luchas económicas inmediatas: condiciones de trabajo, jornales y horarios (grupo que, como veremos más adelante, restaría fuerzas a los

revolucionarios anarquistas). Todas estas tendencias utilizaban una expansiva retórica revolucionaria, apoyando de palabra a un lejano igualitarismo futuro, si bien se distanciaban luego de los anarquistas en la definición de los problemas reales que era necesario solucionar para alcanzar esa nueva sociedad.

Parece ser que las ideas de los asociacionistas despertaron poco interés en el Congreso. Un informe de una de las comisiones sobre la cuestión del cooperativismo, obviamente redactado por los anarquistas, desechó la importancia de las cooperativas de productores bajo el régimen capitalista: simplemente representarían una organización más en el seno de la estructura burguesa. El informe sí recalcaba, sin embargo, el papel que en la práctica podían tener las cooperativas de consumidores en la promoción de *hábitos cooperativos* y de un espíritu de *ayuda mutua* entre los trabajadores. Al considerar las cooperativas como un medio para educar a la gente más que como un objetivo social que pudiese ser alcanzado por una sociedad nueva dentro del capitalismo, el informe restaba importancia a todo el asunto, encasillando a los asociacionistas dentro de un caprichoso limbo reformista. Con respecto a este asunto, el Congreso de 1870 señaló un momento decisivo en la decadencia de la tradición proudhiana, que tan importante había sido en la historia del movimiento obrero español. En lo sucesivo, cualquier debate sobre cooperativas estaría vinculado a la cuestión de la revolución social y no a la de una reforma parcial del sistema.

Quizás el conflicto más agudo del Congreso fue el de la actitud de la Sección española con respecto a la participación política. Los aliancistas abogaban por la abstención política. Esta postura, como observa Casimiro Martí en su estudio sobre los orígenes del anarquismo catalán, “apuntaba claramente a las consecuencias inmediatas de la nueva orientación adoptada por el movimiento obrero. No se trataba ahora de una simple reivindicación, o de una protesta más o menos violenta contra unas determinadas injusticias, sino del rechazo a la participación en la actividad política, en virtud de una ruptura total e incondicional con la sociedad constituida”. La abstención política aumentaba el apoyo incondicional a la práctica de la “acción directa orientada hacia la supresión del Estado”.

Aunque las tendencias no-anarquistas en el Congreso estaban dispuestas a admitir algunas de las abstracciones de sus oponentes aliancistas, en esta ocasión promovieron una alianza en contra de una línea estrictamente comprometida con la abstención política y la acción directa. Después de un largo debate se llegó a un compromiso por el cual el Congreso, si bien se declaraba constitutivamente antiestatal y abstencionista, permitía a sus miembros la libertad de tomar sus propias decisiones en el campo político.

Esto constituyó un grave retroceso para los anarquistas. No se trataba de imponer a la Internacional un programa idéntico al de la Alianza, puesto que esto hubiera limitado a la Internacional exclusivamente a formas de acción revolucionaria. Al contrario, los aliancistas anhelaban que las dos organizaciones estuvieran claramente diferenciadas en muchos de los aspectos más importantes, tanto en lo referente al programa como a la estructura; pero sabían que cualquier compromiso en la cuestión de la abstención política amenazaba con crear una tendencia reformista en la Internacional, que la dirigiría hacia la mejora de la situación de abusos existente en el ámbito económico y político. El compromiso, de hecho, tendría serias implicaciones en el futuro, puesto que establecía un sistema que iba a facilitar que la Internacional y sus herederos aceptaran los principios abstencionistas, pero luego actuaran de una forma oportunista en la práctica. A pesar de que el Congreso terminó por aprobar el compromiso, éste fue recibido con muy poco entusiasmo: casi el cuarenta por ciento de los delegados, en su mayoría delegados de la clase obrera de Barcelona, votaron en contra o se abstuvieron.

El logro más importante del Congreso se produjo en el terreno de la organización. La Comisión encargada de la organización social de los trabajadores propuso una estructura que iba a ser el armazón de la Sección española durante muchos años, y que los aliancistas esperaban proponer como modelo para la Internacional en la próxima Conferencia de Londres en 1871. Algunas características de esta estructura merecen ser examinadas. En muchos aspectos anticipa la forma de organización sindicalista adoptada por el movimiento obrero francés en la década de 1890, un modelo que se extendería más tarde a otros países europeos, y que volvería a ponerse de nuevo en práctica en España.

La comisión propuso una doble estructura para la Sección Española de la Internacional (o como se llamaría a partir de entonces, la Federación Regional Española), que estaba formada por una organización por oficios y una organización por localidades. Por un lado, las Secciones de oficio agrupaban a todos los trabajadores de empresas y profesiones comunes en una gran federación ocupacional, las Uniones de Oficio, cuya función principal era la lucha contra las injusticias sociales y por la mejora de las condiciones de trabajo. La organización local "de oficios varios" (Secciones de Oficios Varios) agrupaba a todos los trabajadores de los sectores cuyo número de afiliados era demasiado pequeño para constituir organizaciones que fueran efectivas por separado. Por otro lado, en cada comunidad o región donde la Internacional estaba representada, las diferentes Secciones locales se agrupaban al margen de los oficios en las federaciones locales, y su función era reconocidamente revolucionaria: la administración de la vida social y económica según los principios libertarios.

Esta estructura dual constituye el fundamento de todas las organizaciones sindicalistas. En España, al igual que en otros países, la estructura se cohesionaba mediante una red de comités de trabajadores surgidos en pequeños talleres, fábricas y comunidades agrícolas. Reunidos en asambleas, los trabajadores elegían directamente a los comités que dirigían los asuntos de las Secciones de oficio y las federaciones locales; éstas estaban federadas en comités regionales o comarcales, que abarcaban casi toda el área geográfica peninsular. Los trabajadores elegían, además, a los delegados de los Congresos anuales de la Federación Regional Española, que a su vez designaba a los miembros del Consejo Federal.

Aunque todos los comités eran directamente responsables ante las asambleas que los habían elegido, la burocratización era un riesgo y una preocupación constante. El peligro de la burocracia, de la manipulación y del control centralizado existe en todo sistema de representación indirecta. No es muy difícil que una elaborada red de comités, formada por organismos regionales y nacionales, desvirtúe las decisiones de las asambleas de trabajadores de la base de la estructura. De hecho, esto fue lo que ocurrió en Francia cuando un grupo oportunista, formado por

sindicalistas, socialistas y comunistas, se hizo con el control de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La burocracia nunca se consolidó en la Federación Regional Española ni en sus organizaciones sindicalistas, al menos hasta la guerra civil de 1936. Para bien o para mal, las periódicas acciones represivas dirigidas por el gobierno y la patronal, que tenían por objeto quebrar las organizaciones sindicales españolas, convirtieron la posición de liderazgo en un puesto nada envidiable. Además, los anarquistas, a pesar de sus tendencias ocasionales a manipular las asociaciones bajo su control, suponían un firme contrapeso a la burocratización, obligando al movimiento obrero a mantenerse en un estado de continua agitación, y no dejando nunca de promover la descentralización del poder, el control organizado desde las bases y la acción directa. La influencia anarquista en el movimiento obrero español resultaría decisiva. En las décadas siguientes, esta influencia se traduciría en una pasión revolucionaria y una intensidad idealista que no serían igualadas por ningún otro movimiento obrero en el mundo.

Debemos reflexionar con atención sobre la actitud de estos hombres y mujeres, estos anarquistas españoles; debemos tratar de comprender su forma de vida, su dedicación y su fervor por “la Idea”. Aunque el grupo fundacional del movimiento anarquista español incluía a muchos estudiantes e intelectuales (figuras como Gaspar Sentiñón, Trinidad Soriano, Antonio González Meneses o Fermín Salvochea), la mayoría de las personas que se incorporaban a los grupos libertarios de las ciudades eran simples trabajadores. Incluso una buena parte de los periodistas, los teóricos y los historiadores del movimiento eran autodidactas que provenían de un ambiente proletario y que habían aprendido a leer y a escribir por sí mismos, asistiendo a escuelas libertarias donde recibían clases nocturnas después del trabajo y donde, gracias a su tenacidad, habían conseguido adquirir una buena educación. La mayoría de ellos había comenzado a trabajar a muy temprana edad en la fábrica, y poco después se habían tenido que enfrentar a las responsabilidades de la vida familiar, la educación de los hijos y la manutención del hogar. Estos anarquistas sentían un gran orgullo por las aptitudes que habían sido capaces de desarrollar, y gozaban del más profundo respeto de sus compañeros de trabajo. La mayoría eran personas

muy serias y capaces. Les caracterizaba su franqueza y su sinceridad, y como tantos españoles, eran apasionados defensores de la amistad y del compañerismo.

Estos hombres y mujeres estaban casi siempre dotados de una fuerte personalidad. Es revelador observar como los más abnegados, una vez que decidían abrazar “la Idea”, renunciaban a beber y a fumar, evitaban los burdeles y purgaban su lenguaje de “palabras sucias”. Sostenían que éstos eran rasgos viciosos, que resultaban humillantes para la libertad de las personas y que eran fomentados deliberadamente por las clases dirigentes para corromper y esclavizar espiritualmente a los trabajadores. Era el deber de todos los trabajadores, y en especial de los anarquistas, el vivir de acuerdo a sus principios; no bastaba sólo con proclamarlos. Con el ejemplo de la dignidad y honestidad de sus propias vidas, estos trabajadores ayudarían a superarse al resto de su clase. Sin la ayuda de esta regeneración moral del proletariado, la revolución habría estado contagiada por los vicios y la corrupción de la sociedad burguesa.

A lo que aspiraban en realidad los anarquistas españoles era a instaurar una “contrasociedad” que sustituyera a la vieja sociedad. Resultaba fácil confundir aquélla con una “sociedad alternativa”, una que pudiera coexistir con el capitalismo como un enclave de pureza y libertad. Los anarquistas españoles rechazaron expresamente el concepto de una “sociedad alternativa”, con sus ilusiones de una reconstrucción pacífica y su posición privilegiada en un mundo donde la miseria era moneda corriente; y consideraron la estrategia del movimiento cooperativista como una desviación de la tarea principal de derrocar al capitalismo y al Estado. Puesto que ni la libertad personal ni la social podían alcanzarse dentro del orden establecido, ellos veían la “contrasociedad” como un espacio en el que acabar de formarse como revolucionarios y alejar definitivamente sus intereses de los de la sociedad burguesa. Este concepto resultó muy controvertido, y finalmente los grupos anarquistas formularon sus propios códigos revolucionarios y sus propios conceptos de libertad, creando un entorno de estrecha camaradería que resultó casi inexpugnable para la represión.

Los anarquistas españoles más convencidos no sólo negaban las leyes, los valores y la moral de la sociedad existente, sino que convertían todos los preceptos en valores prácticos. No celebraban matrimonios legales. Se negaban a registrar el nacimiento de sus hijos o a bautizarlos. La burocracia, el Estado y la Iglesia eran los enemigos mortales de los anarquistas; cualquier relación con estas instituciones había de ser evitada. Los niños eran enviados a escuelas libertarias o a centros asociados a los sindicatos. Si no había suficiente espacio en estos centros, recurrían a instituciones no clericales o eran educados en casa. A menudo los padres ponían a sus hijos nombres como Libertaria o Emancipación, o incluso cambiaban sus propios nombres por los de los héroes y mártires del anarquismo. Desdeñaban la acumulación de capital, y si bien en años posteriores habría muchos atracos a bancos, el dinero se destinaba en su totalidad al movimiento, para financiar escuelas libertarias y publicaciones propagandísticas. No había dudas en cuanto a la necesidad del uso de las armas, tanto en la defensa de sus propios derechos como en actos de represalia contra la violencia oficial.

La cuestión de la violencia anarquista debe ser estudiada en su debido contexto. En lo que se refiere a esta cuestión, podría ser más apropiado prestar atención a la profunda humanidad que caracterizó los ideales del anarquismo español. La violencia oficial organizada, a la que el obrero español se enfrentaba casi diariamente, repugnaba a los más fervorosos anarquistas. Horrorizados, por ejemplo, por la brutalidad y la crueldad de las corridas de toros, emprendieron una persistente campaña para reducir la masiva asistencia a las plazas y trataron de inculcar entre los obreros y los campesinos el interés por los libros, la cultura y las discusiones ideológicas. De esta manera, dondequiera que la Federación Regional Española tuviera una apoyo considerable, se fundaban centros obreros que funcionaban no sólo como meras sedes sindicales, sino que cumplían también las funciones de un centro cultural. Si existían suficientes recursos económicos, se proveía al centro de libros, se impartían clases y se organizaban foros de debates. Esta institución ejerció una profunda influencia en la vida personal de los obreros que pertenecían a los sindicatos de influencia anarquista. Ricardo Mella, uno de los mejores teóricos y ensayistas de aquel período,

contaba que en la ciudad de Sevilla, “en su enorme centro obrero capaz de albergar a miles de personas, la moralidad en los hábitos de los trabajadores era asumida de tal manera que la embriaguez fue prohibida dentro del recinto. Los trabajadores no se atrevieron nunca a infringir esta norma, ni tampoco permitieron que nadie apareciera borracho en el gran edificio popular”.

Los sindicatos de influencia anarquista daban mayor prioridad al ocio y al tiempo libre para el desarrollo personal de cada trabajador que a las reivindicaciones para conseguir una subida de salarios. Donde mejor se manifiesta el profundo humanismo que caracterizaba a estos anarquistas es en las actividades de protesta que llevaron a cabo para combatir las persecuciones sufridas por revolucionarios en cualquier lugar del extranjero. Grandes manifestaciones públicas y violentas huelgas eran convocadas no sólo en defensa de sus propios compañeros del extranjero, como es el caso de los anarquistas de Chicago, en la década de 1880, o de Sacco y Vanzetti, años más tarde, sino también en apoyo de hombres totalmente opuestos al movimiento y a las ideas anarquistas, como Ernst Thälmann, el líder comunista alemán encarcelado por los nazis.

La generosidad impregnaba los detalles más íntimos y personales de la vida diaria: la fidelidad conyugal era preservada, y había siempre una voluntad de respetar la dignidad de la compañera, los hijos y los camaradas. La pasión fundamental era “la Idea”, puesto que “la Idea” era lo que confería un sentido y una finalidad a la vida de los militantes, al mismo tiempo que los alejaba de la monótona rutina, del egoísmo vulgar y de la banalidad.

El anarquismo había suscitado, además, un cambio profundo en la mentalidad de sus militantes. El anarquismo español se fundamenta en la noción de *hombre natural*, que, corrompido como estaba por el Estado y por una sociedad basada en la propiedad, debía ser regenerado por la revolución libertaria. Para muchos anarquistas, esta corrupción era omnipresente y no sólo se manifestaba en la degradación de los instintos y de la integridad moral, sino que también alcanzaba a las dietas alimentarias, gustos y comportamientos de cada persona. De ahí que los anarquistas experimentaran una amplia variedad de posibilidades, improvisando nuevas

dietas (muchas cercanas al vegetarianismo), flirteando con el naturismo, el estudio del esperanto y, en algunos casos, la práctica del nudismo. Debido a la exaltación que el anarquismo hacía de la espontaneidad en la vida cotidiana, se mostraron fascinados por los métodos educativos libertarios y las técnicas de trabajo que fomentaban las tendencias naturales de los jóvenes. Esta preocupación de los anarquistas por la libertad se convertiría en el mayor desafío que habían recibido hasta el momento las buenas costumbres y el fanatismo social de su época.

Muchos escritores liberales y marxistas han descrito el anarquismo español como un intento de dar marcha atrás en el curso de la historia; pero en realidad los anarquistas concedían gran importancia al conocimiento científico y a los avances tecnológicos; leían detenidamente los estudios científicos de la época a los que tenían acceso, y discutían continuamente temas tales como la evolución, las cosmologías racionalistas o el papel de la tecnología en la liberación del hombre. Se ha dicho en muchas ocasiones que el anarquismo español era refractario al espíritu de la Ilustración europea, pero eso no es cierto; se limitaban a desmenuzar sus componentes a través del prisma ibérico, para luego reorganizarlos en función de las distintas necesidades de España.

Los anarquistas españoles buscaban, por un lado, preservar el rico tejido preindustrial de las tradiciones comunales del país: el énfasis en la dignidad y en la individualidad, el espíritu solidario, el localismo, los conceptos de *patria chica* y de *pueblo*; pero también eran conscientes de la necesidad que España tenía de los recursos tecnológicos del avanzado mundo capitalista para formar la bases materiales de una sociedad sin clases, auténticamente libre.

El problema al que se enfrentaban los anarquistas españoles era crucial; cómo industrializar España sin destruir su patrimonio comunal, sin degradar a su clase trabajadora y sin socavar, como había sucedido en Inglaterra durante la Revolución Industrial, el espíritu del pueblo. La tentativa de abordar estas cuestiones responde, en parte, a la influencia que la moral puritana ejerció en el movimiento.[5] Es cierto que los anarquistas españoles estaban hasta cierto punto influidos por la tradicional atmósfera puritana de la España católica y agraria; pero calificar el movimiento de religioso y

considerarlo, como hace Gerald Brenan, una Reforma del siglo XIX, supone una exagerada y grosera simplificación. A finales de la segunda mitad del siglo XIX, España comenzó a experimentar su propia revolución industrial, acompañada de muchas de las desmoralizadoras consecuencias que el fenómeno había tenido en Inglaterra. Los cambios tecnológicos y el desgaste de las relaciones sociales tradicionales empezaron a debilitar la estructura familiar y el viejo sistema moral. La desmoralización de la población rural, que tenía que emigrar en masa a las ciudades huyendo del hambre y en busca de trabajo, era un rasgo distintivo de la situación social. El alcoholismo, la prostitución, las familias deshechas y la mendicidad habían alcanzado proporciones espantosas. No sólo la sociedad tradicional, sino también el proletariado experimentaba un claro proceso de decadencia.

Los anarquistas españoles estaban decididos a eliminar estos rasgos desalentadores de la vida de la clase trabajadora. Intentaron restaurar la fibra moral del proletariado, proporcionándole solidez interna y firmeza. En una sociedad de escasos recursos, donde una vida de lasitud y disipación estaba íntimamente relacionada con las situaciones de explotación y privilegio, resultaba inconcebible que una revolución pudiera tener lugar sin que se insistiera en la importancia del trabajo. La lucha de los anarquistas españoles contra el alcoholismo, la vida disoluta y la irresponsabilidad se convirtió en una lucha por la integridad de la clase trabajadora, una reivindicación de su capacidad moral para reorganizar una sociedad que se encontraba en medio de una gran escasez material, y para hacerla funcionar de acuerdo con los principios libertarios.

Fueron hombres con tales perspectivas morales y sociales los que compitieron con cooperativistas, oportunistas políticos, sindicalistas y socialistas por el control del Congreso de 1870. Y lo consiguieron, al menos hasta el del año siguiente. Francisco Tomás clausuró el Congreso con “sentidas y entusiastas frases”: se había elegido un Consejo Federal compuesto por cinco miembros: Tomás González Morago, Enrique Borrel, Francisco Mora, Anselmo Lorenzo y Ángel Mora. Todos estos hombres eran anarquistas de Madrid que habían conocido a Fanelli en 1869 y que eran ahora miembros de la Alianza de la Democracia Socialista de Bakunin. Los aliancistas ocuparon también posiciones claves en todas las Secciones

principales de la Federación, y jugaron un papel fundamental en el diseño de sus líneas políticas. El movimiento obrero español, que desde sus orígenes había tenido un marcado carácter libertario, se iba a ver pronto envuelto en una serie de turbulentas agitaciones.

## El fracaso liberal

La organización obrera revolucionaria no podía haber elegido un momento más favorable que el verano de 1870 para celebrar su gran asamblea. El Congreso fundacional de la Federación Española se organizó cuando llegaba a su fin el interregno. El país entero estaba sumergido en un estado de confusión e incertidumbre en el que las clases dirigentes actuaban de forma indecisa y vacilante. Durante casi dos años el trono español había permanecido vacante, mientras en Madrid los políticos ofrecían un triste espectáculo en la elección de un nuevo monarca. Este humillante período revelaba con sorprendente claridad hasta qué punto la sociedad española se encontraba inmersa en una crisis permanente. La apresurada salida del país de Isabel II en septiembre de 1868 marca el clímax de un conflicto histórico entre la monarquía absoluta y la clase media liberal, conflicto al que iba a suceder el enfrentamiento entre la Iglesia y el Ejército, siendo este último el representante, durante un tiempo, de todos los temores de un gobierno teocrático. Todos estos conflictos acabarían por debilitar la estructura del Estado español. La monarquía no había tenido éxito en el restablecimiento de la “vieja España” del Antiguo Régimen; la Iglesia había fracasado en su intento de convertir al país y transformarlo en una teocracia; la burguesía no había sido capaz de seguir los pasos de sus predecesores al norte de los Pirineos y de crear una base cultural, institucional y económica propia de un Estado constitucional y democrático. En medio de todo esto, las clases populares entraron con fuerza en el panorama político: el campesinado, la clase media radical y el creciente movimiento de la clase obrera.

Los detalles que explican esta sucesión de fracasos son demasiado complejos para ser examinados en el espacio de unas pocas páginas, pero el hecho mismo de esta complejidad se evidencia en el estado de crispación

nerviosa seguida de periódicos colapsos que caracteriza la vida política española desde el inicio del siglo XIX hasta el final del reinado de Isabel II.

La ocupación de Madrid por los ejércitos de Napoleón en 1808 terminó con los últimos vestigios de una época dorada en la que España aspiraba aún a la hegemonía de Europa y su imperio abarcaba vastos territorios en el Nuevo Mundo. Por primera vez desde la Reconquista, el pueblo español experimentó un profundo sentimiento de identidad nacional. Todas las regiones del país se levantaron en armas contra el invasor francés, y cada región y localidad actuó de forma independiente a la orden de sus propias juntas y comandancias. Según anotaba Charles Oman, el cronista inglés de la guerra peninsular, "el movimiento era espontáneo, abnegado y temerario; con su orgullo agraviado, la nación desafió a Napoleón sin pensar en las consecuencias, sin hacer un cálculo de sus propias fuerzas o las del enemigo". A pesar de las divisiones que provocaba la confrontación entre juntas, regiones y clases sociales, el largo conflicto con Napoleón podría haber significado el punto de partida de un proceso de renacimiento nacional y de regreso de España a la sociedad europea.

Este proceso no se desarrollaría, sin embargo, de este modo. Todas las esperanzas se desvanecieron con el regreso de Fernando VII del cautiverio al que había estado sometido en Francia. Fernando resultó implacable en su empeño de aplastar a los liberales. La Constitución de 1812 que las Cortes Extraordinarias habían promulgado en Cádiz en plena Guerra de la Independencia fue revocada. Sus disposiciones para establecer una monarquía constitucional basada en el sufragio universal y para promover las libertades civiles fueron reemplazadas por un sistema fuertemente absolutista. Durante casi sesenta años, el poder absolutista impuesto por Fernando VII cayó como una losa sobre el desarrollo de España. Aunque el país comenzó a recuperar impulso con el pronunciamiento de Riego y Quiroga en enero de 1820, el fantasma del absolutismo no fue relegado a su mausoleo histórico hasta la muerte de Fernando VII, en 1833. Con la defunción del poder absolutista, España se encontraba sin embargo frente a la amenaza de convertirse en una teocracia. El estallido de la primera guerra carlista, en octubre de 1833, señaló el primer paso en el intento de la Iglesia por involucrarse seriamente en la vida política española. Después de que

fracasara la violenta intentona de hacer rey a Carlos, el reaccionario hermano de Fernando VII, la Iglesia trató por otros medios de aumentar su poder en el Estado. A finales de la década de 1860, la Corte estaba atestada de sacerdotes, y las astucias clericales parecían estar a punto de conseguir aquello que, a pesar de los años de sangrientas luchas, siempre había permanecido fuera del alcance de las milicias campesinas insurgentes.

Sin embargo, ni la Iglesia, ni el Ejército ni la burguesía lograrían un control estable y duradero del Estado español. Los gabinetes se sucedían con una frecuencia asombrosa, víctimas de oscuras maniobras políticas, guerras civiles y pronunciamientos militares. El Ejército, que en un principio había defendido el liberalismo frente al absolutismo y la reacción clerical, comenzó a actuar por su cuenta como fuerza política decisiva. Incluso el término "liberalismo" comenzó a perder su significado. El grupo que asumía esta denominación se dividía en moderados, un grupo reaccionario que recibía apoyos de la burguesía terrateniente, y progresistas, un intrigante grupo de "europeizantes" con ideas anticlericales que buscaron apoyo en la clase media acomodada. De las profundidades de la desilusionada pequeña burguesía surgiría el movimiento republicano: un conglomerado formado por radicales y federalistas, seguidores estos últimos de la doctrina de Pi i Margall, que preconizaba la idea de un Estado cantonal semejante al de Suiza.

Había algo que todos estos clérigos, hacendados oligarcas, monárquicos, "liberales" y oficiales del ejército tenían en común: el miedo a las masas. Franz Borkenau observa que "en Gran Bretaña, en América y en Alemania, todo movimiento popular ha tenido su origen en las clases altas, y sólo después ha calado en las masas". En España, por el contrario,

> ningún movimiento originado en las clases altas ha logrado penetrar en las masas. España es el país donde la espontaneidad del pueblo como entidad bien diferenciada y opuesta a la aristocracia, la burguesía, la intelectualidad y, en las últimas décadas, al clero, es más evidente. El hecho de que exista una fractura social tan grande entre el pueblo y las clases dirigentes, que la iniciativa termine por surgir desde las clases más bajas de la sociedad, es siempre un

síntoma evidente del proceso de profunda decadencia y desintegración que sufre la vieja civilización.

Conscientes su propia debilidad y decadencia, las clases dirigentes respondieron al pueblo con una mezcla de arrogante desdén y de evidente pánico. Cuentan que después de una aterradora experiencia durante un motín, Carlos III nunca superó su temor al "populacho" madrileño; incluso el barullo callejero le espantaba. Aunque la tradición nacional reconocía el papel del pueblo en la expulsión del ejército napoleónico de España, un testimonio de aquella época recuerda el pánico que sobrecogió a las clases medias cuando la harapienta milicia del "Ejército Valenciano" entró en Madrid.

La tarea de ocuparse de las masas, de vigilarlas atentamente y de reprimirlas, fue encomendada a la Iglesia española. La separación histórica que había tenido lugar en el siglo XIX entre la Iglesia y el pueblo, fruto en parte de las políticas agrarias llevadas a cabo por los liberales, completó el aislamiento de las clases dominantes en España.

Hubo una época, sin embargo, en que el prestigio de la Iglesia fue enorme. Las campanas de las iglesias habían tocado a rebato durante la Reconquista, llamando a las armas al pueblo para luchar contra la invasión musulmana. Los clérigos no sólo bendecían a los ejércitos cristianos, sino que a menudo los dirigían en la batalla. Más tarde el clero fortaleció la conciencia social del país, levantando la voz en defensa de los oprimidos y de los campesinos, tanto de la península como de los indígenas de las colonias. Al denunciar los abusos de la usura, la avaricia y los privilegios, la Iglesia se enfrentaba por vez primera a las clases dominantes, saliendo en defensa de las instituciones comunales españolas y de la organización tribal del Nuevo Mundo.

Pese a su imponente organización jerárquica, la Iglesia española continuó siendo, probablemente, la institución más democrática en medio de una sociedad anclada en el absolutismo. Según el relato de un noble francés que visitó España en los primeros años del siglo XIX, la estructura del clero español era implícitamente republicana ("tout à fait republicaine"). Raymond Carr nos recuerda que "en el siglo XVIII, el hijo de un carbonero

podía llegar a primado, situación inconcebible en Francia", y que la mayoría de los obispos eran reclutados "de entre la oscura baja aristocracia de las provincias". Del mismo modo se evitaba cualquier tipo de ostentación y opulencia. Un obispo, añade Carr,

> debía destinar, una vez que sus sencillas necesidades fueran satisfechas, todas sus ganancias a la caridad. Por lo común, los párrocos eran pobres e iban a continuar siéndolo a lo largo de los siglos XIX y XX; ganaban menos que un obrero bien pagado, y dependían frecuentemente de la venta de huevos y de otras ocupaciones agrícolas menores.

A fin de que todos estos rasgos no resulten exagerados, es necesario señalar que con el paso del tiempo la Iglesia inició un proceso de enriquecimiento, semejante al que había experimentado la clase cortesana, cuyos antepasados, simples guerreros, habían contribuido a la expulsión de los musulmanes. Hacia finales del siglo XVIII, la Iglesia se había convertido en la institución más acaudalada y con mayor número de propiedades, vinculándose ya de una forma indisoluble a la monarquía y a la nobleza. La distancia entre lo que se suponía que los obispos debían hacer y lo que realmente hacían había crecido considerablemente; sin embargo, el prestigio del que la Iglesia gozaba entre las masas no había disminuido. La Iglesia, además de ser un lugar para la reunión y la oración, proveía de un importante sustento material a un inmenso número de mendigos, *los miserables*, que eran los que solían integrar los grupos que protagonizaban las revueltas e insurrecciones del "populacho" en las calles de las ciudades españolas. En Madrid, por ejemplo, los conventos asistían a los miserables con 30.000 tazones de sopa diarios. En Valladolid, de acuerdo a las estimaciones de Carr, una quinta parte de la población dependía directamente de la Iglesia, mientras que "las limosnas en formas de sopa y pan que concedían los palacios episcopales y los monasterios eran un elemento fundamental en el presupuesto de la gente que sufría la pobreza en las ciudades".

Sin embargo, vínculos de este tipo sólo podían subsistir si la Iglesia conservaba las raíces agrarias que caracterizaban al Estado feudal; raíces que eran a su vez nutridas por la concepción medieval de preceptos como la sumisión pública y la caridad hacia el más necesitado. Cuando Mendizábal, ministro del gobierno liberal, inició la expropiación a gran escala de las posesiones pertenecientes a la Iglesia, estos fundamentos se quebraron. Ostensiblemente, la desamortización fue emprendida con dos propósitos: financiar la guerra contra los carlistas y crear una clase media agraria que sirviera de soporte para los liberales. En realidad, la venta de las tierras de la Iglesia no alcanzó ni de lejos el resultado esperado. Las fincas confiscadas se convirtieron en el objeto de una grosera especulación burguesa, fomentando la creación de una nueva clase laica de terratenientes. El ansia de tierras del campesinado, que había sido satisfecho en Francia por la gran Revolución y por Napoleón, seguiría siendo un mal endémico de la sociedad española.

Al perder sus tierras y sus derechos sobre la producción agrícola, la Iglesia trasladó todos sus intereses a la especulación y a los negocios. El clero superior empezó a descuidar con negligencia sus deberes pastorales, a favor de intereses más lucrativos en el terreno de la industria, el comercio, las fincas urbanas y, según los rumores de la época, los prostíbulos. Como consecuencia de las nuevas inversiones, la Iglesia pasó de ser la mayor potencia terrateniente del país a convertirse en la mayor capitalista. Su ideología, la más medieval y atávica de la Europa meridional, se transformó, pasando de la conciencia social de clase dominante a ser la fuerza más reaccionaria de la vida social.

Tras la decadencia del prestigio popular de la Iglesia, solamente una institución podía funcionar políticamente sin necesidad de contar con una base popular; esta institución era el Ejército. El Ejército había sido un baluarte del liberalismo, y sus primeros pronunciamientos habían reforzado los intereses de la clase media en la política española. Sin embargo, medio siglo de intervencionismo y manipulación lo hicieron sospechoso incluso para los moderados. Habiéndose debilitado su alianza con los liberales, y al tiempo que se desarrollaban las campañas imperialistas en Marruecos, la casta los moderados. Habiéndose debilitado su alianza con los liberales, y al

tiempo que se desarrollaban las campañas imperialistas en Marruecos, la casta militar inició su lento y fatal rumbo hacia la derecha. Mientras los liberales, que aún confiaban en obtener apoyo popular, consideraban al Ejército como un apoyo incómodo y peligroso, los reaccionarios, en los años sucesivos, estarían especialmente dispuestos a servirse de él como medio para aumentar su poder social. La historia del Ejército después de 1870 consiste en un torpe proceso de distanciamiento de la sociedad que desembocaría en una creciente arrogancia frente a la "canaille" y en una paulatina obsesión por la paga, las promociones y los traslados.

La "canaille", por supuesto, estaba formada por masas de trabajadores —campesinos, jornaleros, artesanos, obreros de la industria… los "miserables"— que vivían en la pobreza más desesperada. Miles de pordioseros llenaban los arrabales de las ciudades o vagaban sin rumbo por los caminos del país. Para las clases dirigentes, el pueblo era una presencia anónima de seres sin rostro, amenazadores pero políticamente inertes; todas las facciones pertenecientes a lo más alto de la escala social se encontraban unidas por la necesidad de excluirles de los procesos de cambio institucional.

La palabra "masa" es entendida normalmente como un simple grupo de personas o cosas; en España este término iba a adquirir un significado bien distinto. Del seno del pueblo español había surgido una gente cuya dignidad, confianza en sí misma y sentido de la individualidad parecían cualidades innatas. La misma palabra "dignidad" contiene una fuerza en su significado en castellano que no tiene en ninguna otra lengua europea. Esta fuerza fue, indudablemente, la que los anarquistas iban a cultivar en todos los aspectos que regían sus formas de comportamiento y de acción. No fueron un caso aislado; Brenan nos recuerda que al norte de Sierra Morena la preocupación en torno a la dignidad está profundamente arraigada en la historia española: el campesino que trabaja la tierra con una espada colgando de la cintura, el zapatero y el albañil tratando con los nobles de igual a igual, o los mendigos exigiendo ser tratados de "vuesa merced" eran situaciones que se podían encontrar en la sociedad española desde hacía siglos.

Iba a ser este tipo de gente al que la clase dominante despojaría de toda posibilidad de relacionarse significativamente con las instituciones y entidades de la España oficial. Hacia finales de la década de 1860, las masas españolas se vieron apartadas a un vacío cultural, religioso, político y económico. La Iglesia había traicionado sus responsabilidades y los políticos sus promesas. No había ninguna forma de reconciliar los intereses de los trabajadores rurales, los obreros que trabajaban bajo la explotación y los campesinos sin tierra con los de las clases propietarias. Los caciques controlaban con mano dura la vida en los pueblos. La Guardia Civil patrullaba por los caminos, calles y estaciones ferroviarias. Los trabajadores, a los que se les negaba el derecho a organizarse, se enfrentaban a una sólida y bien organizada legión de voraces industriales. Los guardianes del Estado, ocupados en sus mezquinos intereses políticos, ignoraban con desprecio la frustración de las masas. Para la mayor parte del pueblo español, la vida ciudadana estaba tan vacía como el trono vacante de Madrid. En lo sucesivo, a partir de 1870, los destinados a llenar ese vacío serían los políticos republicanos de la pequeña burguesía, las doctrinas socialistas de la intelligentsia radical y los ideales anarquistas del proletariado y de la clase campesina.

# 4: Los primeros años

## El anarquismo proletario

La fundación de la Federación Regional Española inauguró un período completamente nuevo en la historia moderna de España. Después de que los respetables partidos liberales se distanciaran de las masas, las clases menos favorecidas trataron de constituir organizaciones por cuenta propia. La escisión política entre gobernantes y gobernados era semejante a la que hacía mucho tiempo se había desarrollado en el ámbito económico y cultural, pero a partir de entonces, y en los años siguientes, esa escisión conduciría a nuevos y cada vez mayores enfrentamientos.

Los primeros de estos enfrentamientos tuvieron un carácter bastante moderado. El Congreso fundacional había sufrido ataques por parte de la prensa de toda España, particularmente en Madrid, donde los liberales y los republicanos veían la posición antipolítica de la Federación como una amenaza para su cada vez más escasa influencia sobre la clase obrera. Por fortuna, los resultados más inmediatos del Congreso de Barcelona iban a facilitar a la Federación la creación de su propia prensa nacional. Sumándose a *La Federación* en Barcelona y a *La Solidaridad* en Madrid, los internacionalistas fundaron *El Obrero y Revolución*, en Palma, y *La Voz del Trabajador* en Bilbao, que en aquel momento era la principal ciudad industrial del país. La propaganda llevada a cabo por la Federación Española representa, probablemente, el logro más importante de sus primeros seis meses de existencia. Sus impresos alcanzaban los miles de ejemplares, provocando una respuesta adicional en el resto de la prensa, que

proporcionaba una importante y constante publicidad. De cara a la opinión pública, la Federación comenzó a adquirir una dimensión mayor de la que realmente poseía; esta imagen fue astutamente reforzada por el Consejo Federal en Madrid y las Secciones, que editaban y distribuían toda clase de panfletos y declaraciones y organizaban manifestaciones públicas.

Sin embargo, en otras áreas de acción los resultados obtenidos por la Federación eran menos satisfactorios. El enorme entusiasmo generado a partir del Congreso fundacional dio paso a un cierto desánimo. El intento del Consejo Federal por conseguir la unidad de acción entre las distintas Secciones del país se encontró con una desalentadora falta de respuesta. Las cartas enviadas a las regiones del interior de España difícilmente recibían contestación, y si lo hacían, ésta llegaba tras una larga demora. La persistente falta de fondos seguía dificultando el funcionamiento de la organización madrileña, de tal modo que se hizo necesario que muchos de los integrantes del Consejo Federal contribuyeran generosamente, aportando buena parte de su tiempo y de sus recursos. Esto produjo a su vez un empeoramiento de las relaciones entre algunos de los aliancistas que constituían el núcleo de la Federación, y condujo a serias fricciones personales y políticas.

Los problemas a los que se enfrentaba el movimiento eran aún más graves en Barcelona. Si bien era Cataluña el lugar con mayor afiliación obrera a la Federación Española, los internacionalistas constituían una proporción muy pequeña del proletariado barcelonés. Alrededor del nueve por ciento de la clase obrera de la ciudad estaba afiliada al movimiento. Esta pequeña cifra se redujo notablemente cuando una epidemia de fiebre amarilla asoló el puerto barcelonés, cobrándose un gran número de vidas y ahuyentando a mucha gente de vuelta al campo. De los 10.000 miembros que pertenecían al movimiento de Barcelona en julio de 1870, sólo quedaban 1.800 en enero de 1871, y escasamente poco más de 2.500 en agosto, justo cuando se cumplía un año de la fundación del Congreso. La idea comúnmente aceptada de que la Internacional experimentó un espectacular crecimiento durante el primer año de existencia no es más un mito, al menos en lo que concierne a Barcelona, que era en aquel momento el principal centro proletario del país.

En la teoría, la organización de Barcelona estaba controlada por los anarquistas. Sin embargo, el número de anarquistas en las Secciones era en realidad muy pequeño. De hecho, muchas de las figuras destacadas en el movimiento obrero de Barcelona eran sindicalistas cercanos al pragmatismo, cuyos ideales parecían, en el mejor de los casos, de muy poca profundidad. En el puerto catalán, la Internacional estaba fundamentada en una alianza entre un puñado de anarquistas y un grupo más numeroso de sindicalistas que, como respuesta a la intransigencia de los industriales textiles de Barcelona, habían asumido de forma oportunista una posición antipolítica y de acción directa. Estas dos tendencias del movimiento sindicalista catalán mantenían una relación incómoda que sufriría continuas rupturas y reconciliaciones en los años siguientes. El carácter que tomó esta alianza y las distintas maniobras que se llevaron a cabo en su seno inquietaban al noble y honesto Anselmo Lorenzo. Lorenzo, quien no había olvidado las palabras de Fanelli acerca de la organización libertaria, diría años más tarde: “¡Cuánto más beneficioso habría sido que, en lugar de obtener de improviso acuerdos y soluciones, la Alianza se hubiera propuesto organizar un trabajo educativo y de instrucción, encaminado a encontrar la forma de obtener acuerdos y soluciones que fueran el resultado de una suma consciente de voluntades!”. No sucedió de este modo; las tensiones originadas por el conflicto entre las demandas de los sindicalistas y los ideales de la revolución social acarrearían graves consecuencias a lo largo de la historia del movimiento obrero español.

Si los anarquistas catalanes hubiesen depositado su confianza únicamente en la alianza con la oportunista dirección sindical, con toda seguridad habrían perdido toda influencia sobre el movimiento obrero; éste se habría encaminado hacia un sindicalismo reformista de tipo francés, y ni siquiera la clase más consistente e irreconciliable de patronos podría haber alterado este proceso. Lo que realmente proporcionó al anarquismo catalán una base social de posibles partidarios fue la gente que provenía del medio rural: los campesinos sin tierra y los jornaleros que confluían en Barcelona en busca de trabajo. Cada año llegaban a millares: la gran mayoría provenía del propio medio rural catalán; le seguían los de Levante (Murcia, Valencia, Alicante, Castellón), y luego los aragoneses de Zaragoza, Huesca y Teruel.

Contrariamente a lo que se piensa, sólo una pequeña parte de esta inmigración provenía de Andalucía. Estos inmigrantes indigentes que provenían del hambriento Levante y traían consigo sus propias costumbres, fueron indiscriminada y despectivamente bautizados con el nombre de "murcianos".

Parias en un mundo extraño y hostil, los murcianos acamparon en miserables chozas que circundaban el gran puerto de mar y penetraban en los suburbios, abasteciendo a la burguesía catalana de una enorme reserva de trabajadores inexpertos y serviles. Despreciados por casi todas las facciones liberales y manipulados más tarde por radicales demagogos como Alejandro Lerroux, los murcianos fueron la principal reserva del inestable movimiento libertario en Cataluña. Sin este nuevo proletariado, el anarquismo habría perdido, en beneficio de una más amplia organización sindicalista de trabajadores, su base social propia y le habría sido imposible reorientar las tendencias reformistas de los obreros industriales de Barcelona, capacitados y con un trabajo estable, hacia el anarcosindicalismo.

El papel que los murcianos jugaron en el establecimiento del anarquismo proletario en la ciudad industrial más importante de España, y en la instauración de un clima de inminente insurrección, sugiere una serie de cuestiones muy interesantes. Según Marx, cuanto más evolucionase el proletariado desde su condición artesanal a la industrial, y cuanto más "disciplinada, unida y organizada estuviera esta clase por el propio proceso de producción capitalista" —es decir, por la fábrica— tanto más se convertiría en una fuerza revolucionaria. La teoría marxista consideraba al artesano como un proletario subdesarrollado y rudimentario, un miembro de una clase que, al igual que el campesinado, existía de una forma transitoria. Consecuentemente, es probable que hubiera considerado a los murcianos provenientes del medio rural, por no hablar de los miserables de las ciudades españolas en general, como un grupo de desclasados, un lumpenproletariado.

Esta actitud desdeñosa hacia las clases más decadentes y desoladas de la sociedad se observa con mayor claridad en sus comentarios sobre la guerra

franco-prusiana. “Los franceses necesitan un escarmiento”, escribía a Engels un día después del estallido de las hostilidades,

> Si ganan los prusianos, la centralización del poder estatal será útil para la centralización de la clase obrera alemana. Además, la hegemonía germana en Europa trasladaría el centro de gravedad del movimiento obrero en Europa occidental de Francia a Alemania, y sólo necesitamos comparar el movimiento en ambos países desde 1866 hasta nuestros días para comprobar que la clase obrera alemana es superior a la francesa en la teoría y en la organización. Su predominio sobre la francesa en el escenario mundial significaría a su vez el predominio de nuestra teoría sobre la de Proudhon.

Conforme al desarrollo de los acontecimientos, las apreciaciones de Marx eran erróneas, tanto prospectiva como retrospectivamente. Las clases que confirieron a las revoluciones de 1848 su carácter incisivo no fueron los obreros de las fábricas, sino los artesanos y trabajadores de pequeños talleres, precisamente aquellos estratos preindustriales en descomposición a los que Marx había juzgado con tanto desdén. Los obreros de las fábricas de Berlín, organizados en gran parte en torno a la industria locomotriz, jugaron un papel reaccionario frente a los movimientos insurreccionales de aquel período, incluso si son comparados con los demócratas de la pequeña burguesía. Un año más tarde de la carta de Marx a Engels, los *declassés* de Montmartre y los artesanos y los obreros de la pequeña industria (“los perfectos obreros de lujo”, como los llamaba desdeñosamente Marx) enarbolaron banderas rojas y murieron en las barricadas que defendían la Comuna de París de 1871. Sesenta años más tarde, no sería el refinado, bien organizado y disciplinado movimiento obrero alemán quien se levantaría en armas para luchar contra el fascismo, sino el campesinado y la clase obrera española, dos movimientos caracterizados por haber conservado los rasgos más preindustriales de toda la Europa Occidental.

Irónicamente, “el propio proceso de producción capitalista” que Marx recomendaba en *El Capital*, no sólo servía para unificar, disciplinar y organizar al proletariado, sino que también terminaba por pervertir sus

convicciones y su capacidad revolucionaria. Cuanto más condicionados estuviesen los trabajadores a aceptar la rutina de la fábrica y a inclinar la cabeza ante las exigencias de los capataces, tanto más se inclinarían a aceptar la jerarquía, la autoridad y la obediencia como un destino irrecusable. Y cuanto más adquiriera la clase obrera un estatus hereditario dentro de la sociedad y más alejada permaneciera de otras formas de vida fuera de la rutina industrial, menos revolucionarios serían sus continuadores. Fue precisamente el continuo flujo migratorio de murcianos dentro de la economía catalana, la acción catalizadora que provenía desde una sociedad preindustrial, lo que reavivó el fervor revolucionario del proletariado de Barcelona. Estas gentes campesinas, arrancadas de una cultura y un modo de vida precapitalista, inculcados en unos valores, códigos y gustos completamente opuestos a la frenética cultura urbana, estorbaban a los sectores más sólidos y escogidos de la clase trabajadora catalana en su consolidación dentro de las normas sociales establecidas. Los murcianos constituían un estrato social inmenso que no tenía casi nada que perder. Acostumbrados a la ilegalidad, entusiastas y revoltosos por naturaleza, imprimieron una energía a la atmósfera de Barcelona, que la convertiría en la ciudad más estimulante, indócil y revolucionaria de toda Europa.

Estas grandes masas de semiproletarios, sin embargo, no habían sido conquistadas todavía por el anarquismo en los primeros años de la década de 1870. Los primeros y más firmes partidarios de la Federación Española fueron los artesanos, no los desclasados ni los trabajadores no cualificados de las fábricas. Aún en 1872 más de la mitad de los delegados de la Federación que asistieron al Congreso de Córdoba eran tipógrafos, grabadores, maestros albañiles, zapateros o panaderos; en suma, artesanos cualificados que solían trabajar en pequeños talleres. Sólo uno de cada cinco delegados era operario de fábrica, y menor incluso era la proporción en lo que correspondía a los campesinos. Los indóciles “miserables” de Madrid, por ejemplo, no sentían ninguna simpatía por la Federación. El 2 de Mayo de 1871, el día en que España conmemoraba el aniversario de la primera sublevación popular contra los ejércitos napoleónicos, los internacionalistas organizaron un mitin público para contrarrestar el espíritu

chauvinista antifrancés engendrado por los festejos. El acto fue reventado por los indigentes del lugar. Una vociferante muchedumbre sitió a los internacionalistas en un café hasta bien entrada la noche.

En cualquier caso, poco tiempo después “la Idea” comenzó a implantarse entre los obreros y los desposeídos de las grandes ciudades. Unas cuantas huelgas en Barcelona, unidas a la creciente notoriedad de la Internacional dentro y fuera de España atrajeron a nuevos y fervientes simpatizantes al movimiento. Las perspectivas de un rápido crecimiento parecían esperanzadoras. En Barcelona, el número de miembros comenzó a crecer velozmente, en contraste con la escasa afiliación de enero de 1871; se proyectaron nuevas publicaciones y la agitación comenzó por fin a extenderse fuera de las ciudades, penetrando en el distante mundo rural.

Cuando en marzo de 1871 los trabajadores parisienses se sublevaron y establecieron la Comuna, la voz de alarma recorrió los palacios y las cancillerías de toda Europa. En Madrid esos temores se sumaron a la creciente inestabilidad del gobierno. En diciembre de 1870, Amadeo de Saboya había llegado desde Italia para ocupar el vacante trono español, pero en lugar de apaciguar a las distintas facciones políticas, su presencia reanudó las luchas e intrigas que habían conducido a Isabel al aislamiento y, posteriormente, a la fuga. El nuevo régimen, frágil y poco seguro de sí mismo, se volvió cada vez más receloso hacia las agitaciones iniciadas por los internacionalistas. Los ataques de la prensa fueron muy pronto seguidos por la represión policial. Un cuantioso número de internacionalistas fueron perseguidos y encarcelados, y el Consejo Federal, alarmado por el cariz que tomaban los acontecimientos, decidió emigrar a Portugal. En junio de 1871, el día del Corpus Christi, Lorenzo, Morago y Francisco Mora partieron para Lisboa con toda la documentación de la Federación Española, quedándose Borrel y Ángel Mora en el país para observar la marcha de los acontecimientos.

Probablemente, esta huida fue prematura. El gobierno todavía era demasiado débil y estaba demasiado dividido como para reprimir a la organización obrera. Después de tres meses los internacionalistas regresaron a Madrid. Durante este breve exilio atravesaron amargos momentos marcados por las privaciones materiales y las luchas internas,

pero su estancia en Lisboa no fue en absoluto un completo fracaso. Allí fue donde conocieron a dos jóvenes intelectuales, José Fontana y Antero do Quantal, quienes les ayudaron a implantar el primer grupo sólido de la Internacional (y de la Alianza bakuninista) en Portugal. Un año más tarde la nueva Federación Portuguesa contaba con 10.000 afiliados en Lisboa y varios miles más en distintas partes del país.

La Federación Española necesitaba con urgencia una renovación. El Consejo General había perdido a dos de sus miembros: Borrel se había retirado de la actividad política, y Francisco Mora se había quedado en Lisboa, alimentando una serie de resentimientos personales y políticos que lo llevarían a ingresar más tarde en el Partido Socialista Obrero Español, de inspiración marxista. La mayor parte del trabajo recaía sobre los hombros de Ángel Mora y del infatigable Anselmo Lorenzo. Aunque la afiliación seguía creciendo, y en Madrid una nueva publicación, *La Emancipación*, se unía a *La Solidaridad*, los lazos entre el Consejo Federal y las distintas Secciones de España eran más débiles que nunca. La misma existencia de la Federación como movimiento nacional parecía tambalearse.

Para hacer frente a la crisis, cincuenta y cuatro delegados de la Federación Española se reunieron en Valencia el 10 de septiembre de 1871 y durante una semana llevaron a cabo un intenso trabajo organizativo. La reunión se realizó en secreto debido al ambiente de represión que persistía aún desde la primavera. Con el propósito de fortalecer la organización, la Conferencia dividió a la Internacional en España en cinco grandes federaciones regionales (norte, sur, este, oeste y centro). Las Secciones de oficio, que funcionaban de una forma muy descentralizada, fueron federadas. Finalmente, las facultades de los comités superiores que enlazaban cada una de las uniones de oficio fueron ampliadas, otorgándoseles una considerable autoridad sobre las Secciones locales.

Con el tiempo, la nueva estructura llegó a ser tan elaborada que terminó por resultar inoperante. A fines de 1872, la Federación Regional Española se había convertido en una compleja organización difícil de manejar, formada por 500 Secciones de oficio y oficios varios, 236 federaciones locales y 10 uniones de oficio. Cada uno de estos cuerpos tenía un comité que se dividía a su vez en comisiones encargadas de la administración,

correspondencia, organización y propaganda. Anselmo Lorenzo calculó que para proveer de funcionarios a todos los comités y consejos locales se requerían cerca de 7.500 personas, con el peligro potencial de burocratización que ello implicaba, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de los trabajadores españoles eran analfabetos. De hecho, muchos de los comités no podían encontrar ni un solo trabajador que pudiese llevar el acta de las reuniones, y con frecuencia tenían que pedir ayuda a estudiantes o intelectuales que simpatizaran con la causa.

Si los miembros de las Secciones hubieran tomado en serio esta estructura y los requerimientos que ésta conllevaba (cosa que probablemente no hicieron), habría sido virtualmente imposible llevar a cabo cualquier acuerdo o acto de solidaridad que trascendiese el simple ámbito local. Si un grupo de huelguistas quería obtener ayuda de Secciones ajenas a su comunidad, o trataba de usar los fondos de la organización, estaba obligado a seguir un largo procedimiento en la presentación de instancias a la federación de oficio a la que perteneciese. Fácilmente podían pasar dos o más meses antes de que la federación respondiera con alguna acción decisiva. Si la huelga era estrictamente económica, lo más probable es que ya hubiera sido derrotada, y si se trataba del inicio de una revuelta, ésta ya habría sido malograda por la represión.

Cuando el Consejo Federal regresó de Lisboa, fue necesario tomar medidas heroicas para impedir que la Federación se disolviera a nivel nacional. Pero la estructura adoptada en Valencia iba mucho más allá de lo necesario en su esfuerzo por preservar la unidad de la organización obrera. ¿De dónde venía este desmesurado impulso por centralizar la Federación Regional Española? En realidad el Consejo Federal no estaba compuesto enteramente por anarquistas. De hecho, el Consejo incluía los mismos nombres que años más tarde fundarían el Partido Socialista Obrero Español: Francisco Mora, José Mesa y Pablo Iglesias. Durante los meses que siguieron a la reunión de Valencia, estos hombres —los autoritarios, como los llamaban los anarquistas— se enzarzaron en un enfurecido debate con los llamados “antiautoritarios”, del que ninguna de las partes saldría honrosamente.

Aunque obviamente el conflicto se venía gestando desde hacía algún tiempo, las circunstancias que provocaron el estado de guerra abierta eran consecuencia directa de los sucesos que tenían lugar en el extranjero. En el mismo mes que se celebró la Conferencia de Valencia, Anselmo Lorenzo había partido hacia Londres para asistir a una conferencia mundial de la Internacional. En aquella ocasión no sólo vio por primera vez a Marx, sino que presenció el áspero enfrentamiento que culminaría con la expulsión de Bakunin en el Congreso de La Haya un año más tarde. Después de las tormentosas discusiones que tuvieron lugar en Londres, quedó claro que la ruptura era inevitable. Dos meses más tarde, en diciembre de 1871, el yerno de Marx, Paul Lafargue, apareció en Madrid como refugiado de la represión desatada contra la Comuna de París. Lafargue se había criado en Cuba, por lo que hablaba castellano con fluidez. A través de Mesa y de Iglesias adquirió el control de *La Emancipación* y comenzó a publicar sus ataques contra los bakuninistas de Madrid.

El conflicto, que se prolongó hasta el verano de 1872, terminó de una forma vergonzosa. La Conferencia de Londres había prohibido la existencia dentro de la Internacional de organizaciones que tuviesen un carácter secreto. De acuerdo con esto, el principal empeño del ataque de Lafargue consistió en demostrar que la Alianza de la Democracia Socialista nunca había sido disuelta y que todavía desempeñaba un papel oculto en la dirección de los asuntos de la Federación Española. Lafargue, por supuesto, estaba en lo cierto. Los aliancistas, abrumados por las acusaciones, disolvieron la organización, al menos formalmente. La disputa, sin embargo, no se centró solamente en los asuntos relacionados con la organización. Lafargue había venido de París no sólo con el objetivo de recuperar la Federación Regional Española para Marx, sino también con la intención de reorientarla hacia la acción política. Lafargue propició el establecimiento de una alianza con los republicanos y la formación de un partido obrero. En Madrid, la discusión sobre estos asuntos se volvió particularmente áspera cuando en marzo de 1872 los editores marxistas de *La Emancipación* procedieron, por cuenta propia, a utilizar el periódico en nombre del Consejo Federal con la intención de propiciar un acercamiento

con los republicanos. Los editores fueron expulsados, y la Federación Madrileña se encontró ante la perspectiva de un grave conflicto abierto.

Un mes más tarde, en Zaragoza, la Federación Regional Española celebró su segundo Congreso Nacional. En este Congreso se llevó a cabo un gran esfuerzo por solucionar las diferencias entre las dos facciones. Finalmente, los editores de *La Emancipación* fueron readmitidos en la organización. El Congreso, muy prudentemente, votó a favor del Consejo Federal bakuninista, con Anselmo Lorenzo como secretario general, y trasladó la sede central de Madrid a Valencia. A pesar del compromiso, a las pocas semanas la batalla se reanudó con una furia desatada, y en esta ocasión fue emprendida por ambos bandos sin el menor escrúpulo. Se pusieron públicamente en duda las fuentes de financiación de Bakunin; por ejemplo, los editores de *La Emancipación* trataron de reavivar el rumor de que Bakunin era un espía de la policía. La campaña difamatoria tuvo lugar en septiembre, bastante después de que los editores fueran expulsados de la Federación Madrileña, pero permite vislumbrar el cariz tan turbio que había tomado la discusión. Los anarquistas del Consejo Federal, por su parte, no eran tampoco inmunes al uso de tácticas deshonestas. Como consecuencia de la desconfianza que despertaba la amistad personal que unía a Lorenzo y a Lafargue, se desató una campaña de intrigas y difamaciones en torno a Lorenzo que culminó con el espionaje de la correspondencia que a éste le llegaba procedente de Madrid. Tales prácticas, llevadas a cabo por sus propios compañeros, enfurecieron a Lorenzo hasta el punto de llevarle a dimitir del Consejo Federal y abandonar la ciudad de Valencia. No abandonó, en cambio, sus principios anarquistas, y muy pronto retornaría a la Federación.

Las graves discrepancias políticas entre los dos grupos fueron agravadas por una actividad política basada en conspiraciones, intrigas y acusaciones fundamentadas en la calumnia y la difamación. El conflicto llegó a su punto álgido el 3 de junio de 1872, cuando la Federación Madrileña decidió expulsar a los autoritarios. Un mes más tarde, éstos organizaron por su cuenta la Nueva Federación Madrileña, y en represalia por su expulsión publicaron en *La Emancipación* del 27 de julio una lista con los nombres de los aliancistas, exponiendo a sus antiguos compañeros a la represión

policial. Al final, el conflicto no reportó resultados de ningún tipo para Lafargue, Francisco Mora, Iglesias y Mesa; y una abrumadora mayoría de la Federación Madrileña, es decir, de la Federación Regional Española, apoyó a los aliancistas.

Pero las refriegas en Madrid presagiaban un conflicto histórico que tendría lugar en el ámbito internacional, y que iba a tener una gran importancia en el desarrollo del movimiento revolucionario de las décadas venideras. El 2 de septiembre de 1872, en el trascendental Congreso de La Haya, Mijail Bakunin y su joven compañero, James Guillaume, fueron expulsados de la Internacional por haber creado una sociedad secreta. Las pruebas que evidenciaban los cargos las aportó Paul Lafargue. Para asegurarse su victoria sobre Bakunin, Marx situó a sus partidarios en los puestos principales del Congreso, presentó delegados con dudosas credenciales, realizó pactos carentes de principios con hombres que más tarde se convertirían en enconados opositores, y participó personalmente en todos los procedimientos. Llegó a acusar a Bakunin de "estafador" por no devolver a un modesto editor el pago por adelantado de una inconclusa traducción al ruso de *El Capital*. "Este intento de arrebatarle al famoso rebelde su buen nombre, este acto de difamación ahora desaprobado, apologéticamente, por la mayoría de los historiadores marxistas, significó" —dice Max Nettlau— "poco menos que envenenar para siempre los sentimientos personales de los anarquistas hacia Marx". Después de aquello, Marx trasladó el Consejo General de Londres a Nueva York, un paso que, implícitamente, significaba el fin de la Internacional.

Dos semanas más tarde, los delegados anarquistas que habían acudido al congreso de La Haya, representantes de Suiza, Italia y España fundamentalmente, se reunieron en St. Imier, en el Jura suizo, y formaron su propia Internacional. Entre los delegados españoles se encontraban Farga Pellicer y González Morago. Después de reunirse con Bakunin, regresaron a España y organizaron planes para incluir a la Federación Española dentro de la nueva Internacional. Tras superar las restricciones que antes les habían impuesto los autoritarios de Madrid o las luchas internas que sufría la Internacional, los aliancistas se decidieron a actuar libremente. Convinieron la celebración de un nuevo Congreso, que se realizaría cuatro meses antes

de la fecha que había estipulado la conferencia llevada a cabo en Zaragoza en abril de 1872. El 25 de diciembre de 1872, 54 delegados, representantes de 20.000 trabajadores de 236 federaciones locales y 516 Secciones de oficio, se reunieron en el Teatro Moratín de Córdoba para celebrar el Tercer Congreso de la Federación Española. Ésta iba a ser la última asamblea pública nacional que la primitiva Internacional realizaría en España durante los siguientes nueve años. En muchos aspectos fue, además, la más importante.

El Congreso de Córdoba estipuló las que se consideran, por lo general (aunque es difícil hablar con precisión respecto al movimiento anarquista español) las formas "típicas" de la organización anarquista en España. El Congreso abandonó la incómoda estructura creada en la Conferencia de Valencia en años anteriores. El Consejo Federal fue relegado de su autoridad sobre las organizaciones locales y reducido a una mera "oficina de correspondencia y estadística". Las Secciones de oficio y las federaciones locales se convirtieron en organismos "soberanamente independientes", libres para determinar en cualquier momento su continuidad dentro de la organización nacional. Todos los impedimentos que existían a la hora de llevar a cabo acciones de solidaridad con las huelgas e insurrecciones locales fueron suprimidos. Del mismo modo, ninguna Sección de oficio ni federación local podía ser obligada a iniciar o apoyar ningún tipo de iniciativa. En lo sucesivo, la Federación Española sería una organización descentralizada y sus éxitos como movimiento dependerían en gran parte de las iniciativas generadas desde las bases.

Sin embargo, alguna forma de cohesión era necesaria. La responsabilidad de mantener la organización unida fue tomada por los anarquistas, quienes, a pesar de la disolución formal de la Alianza, continuaban manteniendo unos estrechos vínculos personales y organizativos como grupo. La Alianza, en realidad, continuaba existiendo, lo que significaba que la Federación Española tenía, *de facto*, una dirección, aunque ésta fuera una dirección libertaria. Con su honestidad característica, Anselmo Lorenzo se negó a suavizar este hecho. En los últimos años de su vida escribiría: "Cuando un burgués expresa su admiración por el hecho de que las organizaciones obreras no necesiten un presidente que asuma la

responsabilidad de la dirección, los internacionalistas [anarquistas] sonríen con gran orgullo, como si poseyeran un secreto que no puede ser aprehendido por la superficial mirada del interlocutor burgués". Esta pretensión irritaba al viejo anarquista, que añadía: "No existía tal secreto, ni era verdad que existiera una falta total de autoridad. Lo que sí teníamos era una asamblea que defraudó a los mismos trabajadores que luchamos por ella".

Con todo, tanto Anselmo Lorenzo como los anarquistas autoindulgentes a los que criticaba se equivocaban en una cuestión esencial. La mayor parte de los internacionalistas soportaban larguísimas jornadas de trabajo muy mal remunerado. Vivían agobiados por la dificultad de poder mantener con su sueldo a sus hambrientas familias. Por lo general, estos trabajadores disponían de poco tiempo y energías para dedicarse a la organización. Sólo los trabajadores más abnegados, realizando un enorme sacrificio personal, podían desempeñar un papel activo de una forma constante. En estas circunstancias algún tipo de orientación se hacía inevitable, y también necesaria; negar este hecho habría significado autoengañarse o caer en la hipocresía.

Sin duda los anarquistas españoles se engañaban a sí mismos bastante a menudo, y habría sido un milagro que no hubiera ningún hipócrita entre sus filas. Lo que merece ser destacado es que intentaron crear una organización en la cual se podían tomar decisiones sin temor a la imposición, y en la que los responsables, tal y como sucedía, podían ser destituidos cuando fuese necesario. Los anarquistas trataron asimismo de alentar la participación desde la base y de estimular el impulso revolucionario en las secciones y federaciones, así como en las fábricas y los pueblos. En este aspecto tuvieron muchísimo éxito; hasta el estallido de la Guerra Civil, el movimiento libertario español nunca desarrolló una burocracia. El movimiento también tuvo su porción de esa calaña autoritaria que está siempre dispuesta a congregarse en torno a cualquier movimiento de masas. Estas gentes plantearon continuos problemas a la primitiva Internacional y a sus herederos, pero su influencia se vio neutralizada por la flexibilidad estructural y organizativa, y por una atmósfera de libertad raramente igualada por ningún movimiento obrero de masas en la historia de nuestro

tiempo. La lección que Bakunin les había confiado había sido bien aprendida.

Gerald Brenan nos ha dejado un espléndido relato de la forma en que el movimiento se ajustaba favorablemente a las circunstancias españolas. El primer paso, escribía,

> consistía en ocuparse de los campesinos y obreros medio muertos de hambre e incultos, y estimularlos a tomar conciencia de sus propias reivindicaciones y de su propio poder. Por lo general, estos hombres no podían hacer frente al pago de una cuota regular y desconfiaban de cualquier influencia externa que pudiese dificultar sus relaciones con los patronos. Cualquier organización sindical al uso, con un secretariado pagado que actuara de acuerdo a órdenes establecidas desde Barcelona o Madrid y que llevara a sus afiliados a las urnas como cualquier partido burgués republicano, estaría condenada al fracaso. Sin embargo los líderes anarquistas nunca cobraron un sueldo; en 1936, cuando la CNT contaba con más de un millón de afiliados, tan sólo había un secretario que recibiera un sueldo por su labor. Viajando de un lugar a otro, a pie, en mula, montados en duros asientos de tercera clase, o incluso como vagabundos o toreros ambulantes, ocultos bajo las lonas de los vagones de mercancías, organizando nuevos grupos, haciendo nuevas campañas de propaganda, estos “apóstoles de la Idea”, como se les llamaba, vivían como frailes mendicantes, al amparo de la hospitalidad de los trabajadores menos miserables.

Su objetivo principal era simplemente reclutar grupos de trabajadores que vivieran en la pobreza, sin importar cuáles fuesen sus opiniones políticas y religiosas, para que éstos formaran grupos de defensa frente a los patronos; después trataban de organizar alguna pequeña huelga que, si tenía éxito, multiplicaría el número de afiliados de la Sección y provocaría otras pequeñas huelgas en las regiones vecinas. A continuación los líderes irían desarrollando gradualmente sus principios anarquistas, con su aversión a la Iglesia, su impetuoso idealismo, su disposición generosa y humanitaria, y

poco a poco la imaginación de los oyentes comenzaría a avivarse. Cuando ocurría esto, en las épocas de mayor entusiasmo el número de los trabajadores controlados por el anarquismo se duplicaba o triplicaba, hasta que con la llegada de la inevitable reacción volvía a reducirse a un pequeño núcleo de concienciados militantes. Esta maleabilidad permitía que el movimiento anarquista fuera capaz de sobrevivir a los períodos de mayor represión, para reaparecer después con más fuerza que nunca una vez éstos hubieran remitido.

La flexibilidad organizativa diseñada durante el Congreso de Córdoba sería muy pronto puesta a prueba. La creciente inestabilidad política que había conducido a Isabel al exilio y había colocado en el trono a Amadeo de Saboya, alcanzó entonces proporciones alarmantes. En aquellos momentos de crisis, la agitación y las huelgas dirigidas por la Federación Española no pasaron inadvertidas. Durante los últimos meses de 1871, la Federación, sus actividades y su afiliación a la "izquierdosa" Internacional de más allá de los Pirineos se convirtieron en temas de debate cada vez más frecuentes en las Cortes. En enero de 1872, la Federación fue disuelta a causa de sus vínculos con una "organización extranjera". El gobierno no era lo bastante fuerte para hacer cumplir su orden, y la Federación continuó funcionando públicamente, e incluso convocó grandes manifestaciones de protesta contra la prohibición. Sin embargo, los días de la organización como movimiento libre llegaban a su fin, pues a pesar de que en España se adivinaba un fuerte sentimiento de agitación revolucionaria, un pronunciamiento militar reaccionario que regiría el destino del país en las décadas siguientes estaba a punto de tener lugar.

## Rebelión y Represión

El 11 de febrero de 1873, Amadeo de Saboya abdicó del trono español y regresó a Italia. Durante sus dos años de reinado, el "rey caballero" —como lo llamaban los españoles— había hecho frente a tres elecciones generales y seis cambios ministeriales, sin que esto repercutiera favorablemente en la consecución de cierta estabilidad política para el país. Amadeo nunca llegó

a ser popular entre sus súbditos. La aristocracia lo trató con desdén, en las sesiones de teatro en Madrid, el público lo injuriaba abiertamente, y en los últimos meses de su reinado sufrió el aislamiento de las Cortes. Ante la disyuntiva de enfrentarse directamente a los cuerpos de oficiales, lo que hubiera provocado una rebelión republicana, o tratar de gobernar por decreto, este civilizado monarca optó por abandonar el trono, abriendo el camino a una pacífica victoria republicana.

La proclamación de la República encontró a sus partidarios tan divididos como lo estaban los monárquicos constitucionales. Los unitarios, el ala moderada dirigida por García Ruiz, se inclinaban por una república bien centralizada inspirada en el modelo francés. Este grupo obtuvo sus mayores apoyos entre la clase media radical del centro de España. En oposición a los republicanos centralistas estaban los federalistas, inspirados por las teorías de Pi i Margall, que postulaban una república descentralizada al estilo suizo, basada en la autonomía de las provincias. Lógicamente, la mayoría de sus partidarios eran pequeñoburgueses pertenecientes al partido radical, procedentes de los pueblos y las ciudades de las provincias.

Tendencias bien diferentes convivían dentro del movimiento federalista. Los partidarios más cercanos a Pi i Margall eran hombres prudentes que, haciéndose eco de la máxima “sólo es legítima la fuerza cuando el derecho fracasa”, confiaban en poder alcanzar la república por medios estrictamente legales. Junto con los unitarios, habían centrado sus esfuerzos en el parlamento y en los procesos electorales, extendiendo su apoyo en determinadas mociones contra los “reaccionarios” a los monárquicos constitucionales más cercanos al liberalismo. Esta “benevolencia” parlamentaria hacia los partidarios de una monarquía liberal les valió el despectivo apodo de “benévolos”. Hacia el final del reinado de Amadeo, las tácticas de los benévolos habían irritado profundamente a los elementos más militantes del bando federalista —los llamados “intransigentes”— que por entonces se desviaban hacia una política antiparlamentaria de acción revolucionaria desde la base.

Los federalistas no contaban con el respaldo de la mayoría del país, no obstante todo favorecía su éxito. Las fuerzas antifederalistas habían agotado todas las alternativas de su arsenal político, y después de un frustrado

intento de golpe de Estado en Madrid, se sumieron en un proceso de profunda desmoralización. Los ánimos de los obreros y de la gran masa campesina estaban en plena ebullición. Un programa con un contenido federalista que respondiera a sus necesidades podría haber encendido fácilmente su entusiasmo. Animados por la política de los federalistas contra el reclutamiento militar, los soldados rasos desertaron de sus regimientos, dejando los cuerpos de oficiales sin fuerzas suficientes para respaldar un pronunciamiento. La pequeña burguesía radical de los pueblos y las ciudades de las provincias se organizó formando grupos paramilitares. Sólo los carlistas estaban lo suficientemente armados y organizados como para servir de respaldo a los intereses de la reacción; pero a excepción de la amenaza que suponían para Cataluña, su radio de acción nunca rebasó la zona montañosa del norte de España.

Por un momento todo hacía pensar que los federalistas triunfarían. Las Cortes Constituyentes, elegidas pocas semanas después de la abdicación de Amadeo, les proporcionaron la mayoría suficiente y la legalidad necesaria para la implantación de una descentralizada república cantonal. Estanislao Figueras, un cauteloso federalista benévolo que ejerció las funciones de presidente desde febrero, fue sucedido por Pi i Margall, el padre de la doctrina federalista en España. El 24 de abril de 1873, Pi i Margall se hizo cargo de la presidencia de la nueva república. El gobierno y el destino del movimiento federalista que él había contribuido a crear recaían en sus manos. Reflexionando algunos años más tarde, recordaba: “Después del 23 de abril de 1873 ejercí un inmenso poder”. Este “inmenso poder” del que hablaba se iba a deshacer entre sus manos, como el hielo bajo un sol abrasador.

En 1873, Francisco Pi i Margall había cumplido 49 años. El joven y enérgico catalán que había amenazado con “dividir y subdividir el poder” hasta su destrucción, se encontraba atrapado dentro del propio sistema de poder que había prometido destruir. Habían pasado casi veinte años desde la publicación de *La Reacción y la Revolución*. La causa federalista había pasado de ser una secta herética a convertirse en un amplio movimiento que incluía a miles de entusiastas pequeñoburgueses. La severísima represión emprendida por Ramón Narváez después de 1856 había convulsionado a la

clase media-baja, alejándola de los partidos liberales. Desde ese momento el movimiento federalista había comenzado a crecer, y en 1869 Pi i Margall era elegido diputado y comenzaba a aprender las técnicas de la política parlamentaria.

Una vez alcanzó la presidencia, Pi i Margall comenzó las negociaciones con las diferentes facciones que había dentro de su propio movimiento. Apenas prestó atención a las reivindicaciones de los "intransigentes", de los que no podía soportar su "pueril impaciencia". Este fanático de la legalidad, a quien Friedrich Engels definió como "el único socialista en el campo republicano", no era capaz de ofrecer nada que no fueran meras abstracciones sociales. Aunque Pi i Margall era probablemente el político que tenía una visión más abierta y más clara dentro del movimiento federalista, su "socialismo", según ha observado Raymond Carr, "no va más allá del arbitraje salarial, de un mínimo de actuación estatal para la mejora de las condiciones laborales, y de una 'generalización de la propiedad', que desarrollaría la revolución agraria llevada a cabo por los liberales más allá del 'nuevo feudalismo'". De este modo, mientras todas las formalidades legales concernientes al establecimiento de una república federal incitaban a los intransigentes a la acción, el anémico programa federalista para la reforma social reducía a la pasividad a trabajadores y campesinos.

De ningún modo puede considerarse a Pi i Margall como un revolucionario. Su "socialismo" es una mezcla confusa de nociones sin desarrollar, más cercanas al cooperativismo que al socialismo marxista o al anarquismo. Aunque la presión ejercida por los intransigentes fue, en buena medida, lo que le permitió alcanzar el poder (hecho del que era consciente y del que se supo aprovechar), Pi i Margall prefirió apoyarse en los sectores centristas y derechistas del federalismo. Detestaba las huelgas laborales y estuvo dispuesto a hacer uso de las tropas para abortar cualquier insurrección por parte de los intransigentes. Su política "conciliadora" consistía, por lo general, en tratar de engatusar con halagos a los intransigentes mientras conseguía concesiones en las Cortes para el ala más moderada.[6]

El desenlace llegaría el 12 de julio, cuando "cantonalistas" (nombre que se les daba a los "intransigentes" y a sus aliados) armados tomaron posesión

del gobierno municipal de Cartagena y se declararon independientes. La revuelta de Cartagena sentenció a muerte a la legalista política "conciliadora" de Pi i Margall. El "padre del federalismo español" había perdido la confianza de todos los sectores del movimiento. Para la derecha, resultaba demasiado "socialista" y "conciliador"; los intransigentes lo consideraban un traidor carente de fervor revolucionario, aunque los diputados intransigentes en las Cortes estuvieron dispuestos a apoyarlo en contra de las demás tendencias. El centro federalista, con el que en un principio contaba como apoyo parlamentario, se dividió entre la derecha y los intransigentes, dejándolo a un lado. El 18 de julio, cuando aún no se habían cumplido tres meses desde el día en que había asumido la presidencia, Pi i Margall dimitió de su cargo y fue sustituido por Salmerón, que carecía de los escrúpulos de Pi i Margall y que, dispuesto a tirar por la borda el proyecto de una república federal, proyectaba la formación de un Estado más centralizado.

Con la dimisión de Pi i Margall, la sublevación cantonalista que había comenzado en Cartagena se extendió por todo el sur del país. En cuestión de días, entre el 19 y el 22 de julio, cantonalistas armados tomaron posesión de los gobiernos municipales de Sevilla, Cádiz, Valencia, Almansa, Torrevieja, Castellón, Granada, Málaga, Salamanca, Bailén, Andújar, Tarifa, Algeciras y de otras localidades más pequeñas. El apoyo más importante a la sublevación tuvo lugar en Andalucía y en el área de Levante. Madrid y Barcelona permanecieron en manos del gobierno. La insurrección cantonalista en el sur se vio favorecida por la revuelta carlista de los Pirineos y por los disturbios acaecidos en Madrid, lo que había obligado al gobierno a desplazar tropas hacia el norte, dejando las ciudades claves de Andalucía prácticamente desguarnecidas.

¿Qué función desempeñó la Federación Española en estos acontecimientos? En realidad, fue un papel secundario. *La Federación* había previsto que la crisis política española se agudizaría hasta llegar a un punto crucial, y había tomado medidas preparándose para cualquier contingencia. En la primavera de 1872, el Consejo Federal en Madrid encomendó a Francisco Mora y Anselmo Lorenzo la tarea de llevar a cabo una gira por las diferentes Secciones con el propósito de establecer una

organización clandestina. A Mora le correspondió visitar la región oriental, y a Lorenzo, Andalucía. Con la ayuda de militantes de confianza de cada sección, Lorenzo y Mora constituyeron un grupo secreto especial denominado “los Defensores de la Internacional”, cuya función era la de ser punta de lanza de cualquier insurrección o, en caso de represión, organizar la actividad clandestina. Estos “defensores” serían más adelante los precursores de muchas otras organizaciones que los anarquistas españoles fundarían en el futuro.

Estaba previsto que, en el caso de que una insurrección tuviera éxito, los “Defensores” crearían Juntas revolucionarias locales que excluyeran “a ser posible” (en palabras de Lorenzo) a los elementos burgueses. Los “elementos burgueses” abarcaban, naturalmente, tanto a los federalistas como a los liberales. Pero el tono evasivo de Lorenzo es significativo; manifiesta la ambigüedad que había comenzado a introducirse en la actitud de la Federación respecto al movimiento federalista. Resulta evidente que la Federación albergaba la esperanza de una victoria federalista en España y confiaba en que esa victoria crearía, dentro del movimiento obrero, un sentimiento más hospitalario con respecto a la política. Pero, puesto que los principios anarquistas exigían una posición claramente antipolítica y orientada hacia la lucha de clases, el dilema fue resuelto por medio de una premeditada política de “irresolución”. En vísperas de las elecciones a las Cortes Constituyentes, la Federación afirmaba su línea antipolítica al rechazar la presentación de candidatos, aunque dejaba a las Secciones, e individualmente a algunos internacionalistas, libertad para votar a los federalistas y cooperar con ellos si así lo deseaban.

En la práctica, a excepción de los levantamientos internacionalistas en Alcoi, Sanlúcar y unas pocas comunidades dispersas de Andalucía, la Federación no tenía la suficiente fuerza como para seguir una línea política propia. En Barcelona, el proletariado respondió a la convocatoria de una huelga general llevada a cabo por la Federación, pero se negó a conducirla por el sendero de la revolución social. Los intransigentes y los internacionalistas trabajaron conjuntamente estableciendo un Comité de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Barcelona. A la cabeza de la Junta Revolucionaria de Sevilla estaba el internacionalista Mignorance. La

Sección de Cartagena tuvo seguramente mucho que ver en la incorporación de los marineros a la sublevación cantonalista. En Valencia y Granada, los internacionalistas cooperaron con los intransigentes. En su mayor parte, sin embargo, los levantamientos cantonalistas fueron acompañados de duras acusaciones entre anarquistas y federalistas de todas las facciones.

Los cantonalistas, aunque gozaban de un mayor poder de convocatoria que los internacionalistas, no eran lo suficientemente fuertes para resistir a una ofensiva militar seria trazada desde Madrid. Con una tropa de alrededor de tres mil soldados, el general Pavía tomó Sevilla después de dos días de duros combates, y rápidamente redujo la rebelión en muchas ciudades de Andalucía. Valencia resistió durante casi tres semanas a las fuerzas del general Martínez Campos, y Cartagena, con sus flancos protegidos por poderosos baluartes, y la base naval en manos cantonalistas, resistió prolongadamente al asedio; pero después de la rendición del resto del país, la causa de la ciudad estaba perdida. Tras cuatro meses de resistencia, cayó debido a la traición de los oficiales de una de las plazas fuertes.

Por lo general, los cantonalistas dominaron la contienda. Sin embargo en Alcoi —una comunidad de treinta mil personas, al sur de Valencia— la Federación Española logró dejar su propia marca en los sucesos de 1873. Esta antigua ciudad industrial, importante centro papelero durante siglos, contaba con una fuerte presencia de los internacionalistas. El Congreso de Córdoba había decidido situar a la Comisión Federal en Alcoi, ya que cinco de sus miembros procedían de esa ciudad. Por consiguiente, esta comunidad industrial relativamente pequeña se convirtió, en vísperas de la rebelión a escala nacional, en el centro de la Federación Española.

La lucha en las calles de Alcoi precedió en algunos días a la sublevación cantonalista de Cartagena y se puede considerar como un antecedente directo de las inminentes insurrecciones. Sin embargo, la causa del estallido de la insurrección no fueron los antagonismos políticos o regionales, sino el conflicto económico entre los trabajadores del papel y sus patronos.

Durante algún tiempo la demanda de la jornada laboral de ocho horas produjo una fuerte agitación en las fábricas de Alcoi. La agitación, dirigida por los internacionalistas de la ciudad, alcanzó su clímax el 7 de julio, cuando una asamblea de trabajadores decidió ir a la huelga general para

hacer cumplir sus demandas. Al día siguiente, una delegación de los empleados de las fábricas compareció en el Ayuntamiento, exigiendo el emplazamiento de los patronos para que conocieran, con la mediación del alcalde, los requerimientos de los obreros. Agustín Albors, el displicente alcalde federalista, decidió ganar tiempo asegurando a la comisión delegada su completa neutralidad en la huelga; mientras tanto, traicionando a su palabra, exhortó a los patronos a mantenerse firmes y a permanecer en sus domicilios hasta que se pudiera contar con ayuda militar. Tras remitir una solicitud que requería la intervención del ejército, abandonó su supuesta neutralidad y denunció públicamente a los huelguistas.

Es poco probable que los internacionalistas desearan realmente provocar una insurrección en Alcoi. Seguramente eran conscientes de la vulnerabilidad de una sublevación en un pueblo aislado e indefenso, y por tanto trataron de resolver el conflicto de pacíficamente enviando a sus delegados a negociar con el gobierno municipal. Al día siguiente, el 9 de julio, en vista de que no se encontraban soluciones para el conflicto, una segunda delegación se presentó en el Ayuntamiento para exigir al alcalde y a su consejo la neutralidad o la dimisión, a fin de evitar un conflicto mayor. Mientras la delegación se retiraba de la casa consistorial, la policía abrió fuego contra la gente desarmada que se encontraba en la plaza de la República. Esa estúpida provocación, y no la actitud de ningún internacionalista “izquierdista”, fue el motivo de la sublevación. Esa absurda descarga contra la gente fue lo que enfureció a los trabajadores, lo que provocó que rápidamente se armaran y sitiaran el Ayuntamiento. La policía (que contaba con menos de treinta efectivos) se rindió tras veinte horas de asedio. Se habían quedado sin munición. Albors, testarudo y extremadamente estúpido, fue herido de muerte después de haber disparado con su propio revólver contra los trabajadores que iban a arrestarlo.

El levantamiento de Alcoi tuvo lugar el 9 de julio, y las posibilidades de que se mantuviera eran mucho más reducidas que en el caso de las recientes insurrecciones cantonalistas de otras ciudades. Los internacionalistas crearon un Comité de Salud Pública para dirigir la ciudad, pero más inmediata era la negociación de las condiciones de la rendición con el general Velarde, que se acercaba desde Alicante con sus tropas.

Afortunadamente, el Comité recibió una promesa de amnistía total gracias a los buenos oficios del diputado federalista Cervera, y el día 13 de julio Velarde entraba en Alcoi sin encontrar oposición armada.

Muchos estudiosos han considerado la sublevación de Alcoi como un episodio insignificante inmerso en el contexto de las insurrecciones cantonalistas. Teniendo en cuenta su extensión, están en lo cierto. Los sucesos de Alcoi duraron en total algo más de cinco días. En comparación con acontecimientos históricos como el de la Comuna de París, por ejemplo, Alcoi parece una escaramuza. Que el hecho se prolongara se debió más a la tardanza del ejército de Alicante que al fervor revolucionario de los trabajadores alcoyanos. Sin embargo, este breve episodio creó un estado de opinión en el resto del país. Casi todos los distintos grupos sociales, incluidos los federalistas, coincidieron en condenarlo. Sin duda la clase acomodada española estaba obsesionada con las imágenes de la Comuna de París y su posible reproducción en España. También existían razones de carácter interno; por primera vez en la historia de España se producía un levantamiento armado, orquestado no por elementos previsibles tales como el ejército, la Iglesia o los liberales, sino por una organización de la clase obrera manifiestamente revolucionaria. Por primera vez en España, el proletariado industrial había actuado como una fuerza insurreccional independiente.

El levantamiento, acompañado de la caída de Pi i Margall, pronosticaba la supresión física de la Federación Española. Sin embargo la organización mantuvo, pese a los hostigamientos, su existencia pública durante otro medio año mientras en Madrid los políticos consumaban los ritos de inhumación de la Primera República española. Nicolás Salmerón, que había asumido la presidencia desde la dimisión de Pi i Margall en julio de 1873, fue sustituido en menos de dos meses por Castelar, un federalista a quien las clases conservadoras y los generales consideraban más flexible que sus predecesores. Una vez que el ejército consolidó su posición en el panorama político español, ni Salmerón ni Castelar pudieron controlarlo. Cuando se vio que Castelar no sería capaz de contener el vuelco parlamentario que devolvía el poder a los federalistas, los generales se decidieron a actuar abiertamente. En enero de 1874, el general Pavía, “el Salvador de España”,

se pronunció contra Castelar y lo sustituyó por el general Serrano, un político y militar conservador. En el transcurso de un año quedó claro que el gobierno de Serrano no sería sino un breve período de transición antes de la restauración de la monarquía borbónica. Cuando el incruento pronunciamiento de Martínez Campos llevó al trono, un año más tarde, al hijo de Isabel II, Alfonso XII, la noticia no cogió a nadie por sorpresa, ni en España ni fuera de ella. Incluso un número considerable de carlistas abjuraron de su credo en favor del nuevo monarca.

El movimiento federalista, resquebrajado irreparablemente por las sublevaciones cantonalistas, desapareció con la Restauración borbónica. Sin embargo, su importancia en el anarquismo hispánico difícilmente puede ser sobrestimada. A pesar de las fuertes diferencias que habían surgido entre los dos movimientos durante las revueltas, las dos organizaciones coincidieron en muchos de sus aspectos fundamentales. Ambos movimientos procuraron debilitar el gobierno central (los anarquistas, por supuesto, pretendían abolirlo) y fomentaron la importancia de la vida regional y comunitaria. Los "intransigentes", al igual que los anarquistas, estaban de acuerdo con el empleo de los métodos más extremados para lograr la descentralización del Estado. Anarquistas y cantonalistas lucharon juntos en las mismas barricadas en julio de 1873, y participaron en las mismas Juntas revolucionarias en las ciudades y pueblos de las diferentes provincias. Con el tiempo, muchos federalistas se volverían hacia el anarquismo como la lógica culminación del desarrollo de sus objetivos de descentralización. Los anarquistas, por su parte, terminarían por elevar a Pi i Margall al rango de precursor del movimiento libertario español.[7]

Tan pronto como Serrano asumió la presidencia de la vacilante República, emprendió la tarea de suprimir no sólo los grupos federalistas más extremos, sino también la Internacional. Los locales destinados a las reuniones y los centros obreros de la Sección española de la Internacional fueron clausurados, y cientos de sus militantes llevados a prisión. Las publicaciones de la Internacional fueron prohibidas. En septiembre de 1873, en su momento más álgido, la Federación estaba formada por casi sesenta mil miembros, lo que resultaba una fracción insignificante del seguimiento popular con el que los federalistas realmente contaban. Aún más relevantes

que los arrestos de los internacionalistas fueron los golpes que Serrano y los políticos de la Restauración asestaron a la base del movimiento, la clase obrera. Las huelgas fueron aplastadas por las armas, y la ley prohibió a los trabajadores el derecho de asociación. La persecución no cedió con el paso de los años. En La Carraca, en marzo de 1877, la policía arrojó al mar a sesenta y seis internacionalistas, metidos en sacos y con grandes pesas atadas a los pies. Una ola de miedo y represión se cernía sobre España. Duraría casi ocho años.

*La Federación* consiguió sobrevivir a estas persecuciones. Los Congresos nacionales fueron reemplazados por reuniones secretas, regionales o comarcales. Imprentas locales clandestinas sustituyeron las oficinas de las editoriales de los diarios de amplia circulación pública. Las huelgas de carácter económico fueron sustituidas por las huelgas revolucionarias, lo que en esencia significaba que ya no había más huelgas de ninguna clase. Habiendo bebido copiosamente de las fuentes de la revolución, la Federación Española se reorganizaba de nuevo por sí misma, esta vez en forma de una pequeña organización insurrecta.

Una nueva estructura, dirigida casi enteramente hacia la lucha armada, vino a reemplazar a la estructura libre, informal y pública establecida por el Consejo de Córdoba. En ciudades donde antes se podían contar por miles el número de afiliados a las diferentes Secciones, la Internacional se redujo a pequeños grupos de anarquistas militantes. Los “Defensores de la Internacional” pasaron a denominarse el “Núcleo Vengador Ejecutivo”, un nombre más agresivo y violento, representativo del estado de ánimo del movimiento anarquista de aquel momento.

Lo cierto es que la vida de los internacionalistas de las ciudades giraba en torno a un mito. No había ninguna revolución a la vista; de hecho, los primeros signos de inquietud dentro de las masas urbanas revolucionarias no aparecerían en España hasta el cambio del siglo. Incapaz de reunir el poder necesario para dirigir una huelga que exigiera la mejora de los salarios y las condiciones laborales, la Internacional había sido abandonada por el proletariado español; de ahí que se diera cuenta de que sus únicas armas eran la ideología, la esperanza y la conspiración. Muchos trabajadores oriundos de Cataluña nunca habían demostrado demasiado

entusiasmo hacia las violentas teorías anarquistas de la Federación. De no haber sido por la continua afluencia de murcianos y por la intransigencia de los propietarios de las fábricas catalanas, la inmensa mayoría habrían acabado en los sindicatos típicamente reformistas. De todos modos, con la creciente represión el péndulo comenzó a desplazarse, dentro de la Internacional, desde el norte hacia el sur. En febrero de 1873, cuando la Federación Española había alcanzado los sesenta mil miembros, dos tercios de ese número correspondían a los afiliados de Andalucía. Sería en el sur agrícola, en los pueblos de la montaña, en las ciudades empapadas por el sol, en los inmemoriales latifundios de Andalucía y Levante, donde el anarquismo español resistiría y crecería durante los primeros años de la Restauración borbónica.

# 5: Los desheredados

## Anarquismo campesino

Afirmar, como han hecho algunos estudiosos, que el anarquismo se introdujo en Andalucía y Levante como un fenómeno importado no es del todo correcto. Quizás sería más apropiado decir que el anarquismo estaba ya latente en estas regiones y que los internacionalistas lo reavivaron. Mientras los anarquistas de las ciudades se vieron obligados a crear su propia "contrasociedad", opuesta al corrosivo e inhóspito mundo capitalista, los anarquistas del mundo rural encontraron una en su propio medio. Sólo tuvieron que remodelar algunos de sus elementos para crear un medio social de ideas y formas de vida libertarias.[8]

La Internacional no tuvo dificultades para atraer a los braceros, la gran masa de trabajadores explotados que cultivaban los latifundios de la cuenca del Guadalquivir. Pero su verdadera fuerza radicaba en los pueblos de las montañas de Andalucía y de Levante. Allí, donde unos pocos cientos de familias vivían en pueblos de casas juntas, rodeadas de picos desnudos y escarpados, fue donde el movimiento libertario enraizó con más fuerza. La tenacidad y la constancia eran los rasgos más característicos de estas comunidades y se manifestaban de diversas maneras. Las bajas construcciones encaladas, construidas con piedra de granito sin tallar, tan comunes en las montañas, estaban hechas para perdurar, y del mismo modo sus tradiciones se remontaban a menudo varios siglos atrás en la turbulenta historia de España. El origen de algunos de estos pueblos puede rastrearse hasta la época de las invasiones moras.

En contraste con la rica cuenca del Guadalquivir, el suelo de estas regiones es pobre y marginal. En lucha con sus tierras ingratas, los labradores de las montañas tenían que trabajarlas con gran mimo para obtener una cosecha mixta de verduras y maíz; y todo ello a mano, ya que la maquinaria no sólo era costosa sino casi inútil en esta tierra rocosa y llena de desniveles. El olivo, la fruta y la cría de ganado jugaban un papel importante en esta economía agraria. La mayoría de los campesinos eran dueños de su propia tierra, casi siempre parcelas de menos de dos hectáreas. Para compensar las pequeñas dimensiones de las parcelas, el ganado pastaba en tierras comunales. Un pueblo grande de tres mil o más habitantes podía tener miles de hectáreas de bosques y pastos. Una minoría sustancial de campesinos tenía posesiones más grandes (por encima de las dos hectáreas). Otra minoría eran trabajadores sin tierra que eran contratados para trabajar en el pueblo o en grandes fincas del valle. El pueblo ganaba su dinero fundamentalmente mediante la venta de cerdos de engorde para la matanza, pero también el comercio con las aves, los huevos y gran parte de las cosechas contribuían a la economía de la aldea.

Tomado en su conjunto, el pueblo de la montaña era notablemente autosuficiente desde el punto de vista económico y asombrosamente autónomo en el aspecto cultural. Los medios primordiales para la subsistencia —alimentos, viviendas, combustibles y en algunas épocas incluso las ropas de vestir— eran abastecidos por el propio pueblo, por lo que los campesinos de las montañas eran menos vulnerables a las vicisitudes económicas que los braceros y los trabajadores de la industria. Su mayor problema era la sequía. En las áridas tierras del sur, donde las lluvias son tan escasas y el acceso al agua tan restringido, la agricultura podría verse como algo casi “místico”. Sin embargo, los campesinos del interior no sentían ningún tipo de devoción por la naturaleza, ni tenían actitudes místicas hacia el suelo ni especial sensibilidad para la agricultura.

Su más profunda pasión era la vida social: el placer de la conversación, de la discusión y el compañerismo. Como consecuencia las casas se construían muy próximas unas de las otras, aunque esto implicara muchas veces que los campesinos debían caminar largas distancias para llegar a sus tierras. Las virtudes más apreciadas eran el sentido de ayuda mutua, la

hospitalidad, la lealtad y la honradez en los negocios. La cohesión social era tan profunda que todo el pueblo respondía por cada uno de los vecinos como una sola comunidad, y cada uno de los individuos, a su vez, tendía a salvaguardar el buen nombre del pueblo por encima de sus propios intereses. Lope de Vega basa la trama de su obra *Fuenteovejuna* en la historia real de un pueblo del siglo XV que se levantó contra un tiránico Comendador y le dio muerte. Cuando llegaron los jueces del rey e intentaron determinar quién era el responsable de la muerte, la única respuesta que obtuvieron fue: "Fuenteovejuna". Para ellos habría sido inconcebible que la responsabilidad de un acto realizado por uno de sus miembros con la aprobación de todo el pueblo no fuese considerada como un acto del pueblo entero.

Esta solidaridad, fortalecida por un ambiente austero de escasos medios y por un destino común de duro trabajo, ayudaba a crear y mantener una formidable igualdad. La forma preferida de transacción entre campesinos y peones era, en lugar de los jornales, la aparcería, o la participación en la misma sociedad. Los campesinos, aunque eran dueños de sus tierras, trabajaban tan duro como los braceros y repartían a partes iguales sus cosechas con los temporeros. Éste era el tipo de intercambio preferido, no sólo porque era más sensato compartir lo que se tiene en la mano en lugar de especular con la retribución monetaria, sino también por un sentido de fraternidad y un desprecio hacia la posesión de bienes. En la vida del pueblo, la pobreza no confería en absoluto un sentido de inferioridad; del mismo modo, la riqueza, salvo que fuera empleada en beneficio de la comunidad, no otorgaba prestigio. El rico que poseía propiedades en el pueblo o en sus alrededores era considerado como miembro de una clase perversa, cuyo poder y ambición corrompía a la sociedad. El pueblo no sólo era inmune a su influencia, sino que, como reacción, tendía a organizar sus valores en torno a la dignidad del trabajo y a la importancia de los fines morales y espirituales.

Las montañas estaban plagadas de bandidos cuyas hazañas en defensa de los pobres adquirieron, en algunos casos, proporciones desmesuradas. Pero después de la década de 1870, los más diestros aldeanos de las montañas se convirtieron en "los que tenían ideas". Abrazaron las ideas

anarquistas con una devoción que sobreviviría a todas las persecuciones, excepto a la de los despiadados pelotones de ejecución de la Falange fascista.

Ser anarquista en los pueblos de la sierra implicaba adoptar las costumbres de los anarquistas de las ciudades. Los hombres no fumaban, no bebían, ni iban con prostitutas; llevaban una vida sana y ejemplar en una unión estable y libre con su "compañera". La Iglesia y el Estado eran anatemas, y debían evitarse completamente. Los hijos eran criados y educados bajo los principios libertarios y tratados con todo respeto, como corresponde a seres humanos independientes.

Entre el anarquismo de las ciudades industriales y el anarquismo rural existían, sin embargo, marcadas diferencias. Mientras el anarquismo proletario se inclinaba cada vez más hacia el sindicalismo, con un fuerte énfasis en la capacidad organizativa, el anarquismo campesino conservó sus principios morales, con frecuencia antagónicos a los valores y las exigencias ciudadanas. Según observa J. A. Pitt-Rivers, "los telegramas al Congreso de 1882 procedentes de Cataluña y del norte utilizaban expresiones como 'anarcosindicalistas', en contraste con los de las serranías que se referían únicamente a la justicia y a la causa del pueblo". Tales diferencias iban a resurgir en las principales controversias que dividirían al anarquismo español. La ciudad y el campo entrarían en conflicto en cuanto a las diferencias entre organización nacional y organización local, comunismo libertario frente al colectivismo bakuninista, o comunas agrarias frente a la división de la tierra en tenencias individuales (el reparto). Pero estas polémicas llegarían en años posteriores, cuando el anarquismo campesino comenzó a ceder ante el anarcosindicalismo.

En un entorno que exigía menos compromisos que los que tenían que asumir sus compañeros urbanos, los anarquistas de la sierra se comportaban como intachables profetas en medio de su gente. Su influencia y prestigio no se debían ni a la autoridad ni a la posesión de bienes. Frente al acoso del clero, de la Guardia civil y de los grandes terratenientes, los anarquistas de las sierras no disponían de más recursos que el respeto ganado por su ejemplar manera de ser y la relevancia de sus ideas. Al carecer de todo apoyo exterior, el movimiento era especialmente vulnerable. La Guardia

Civil campaba por sus fueros en las regiones interiores de España. El hecho de que los anarquistas pudieran sobrevivir a los continuos ataques de las fuerzas del Estado y de la Iglesia, es una prueba evidente del apoyo popular del que gozaban.

En realidad, los anarquistas rurales eran hombres semicultos y sus ideas no resultaban demasiado refinadas para mentalidades más educadas y sofisticadas, pero no debe olvidarse que en las postrimerías del siglo XIX, sólo a través de la aportación de los anarquistas podían conocer los campesinos la existencia y las enseñanzas de hombres como Darwin, Helmholtz, Laplace, Galileo o Copérnico. Muchos niños en los pueblos adquirieron el hábito de la lectura y de la escritura a través de esos concienzudos "apóstoles de la Idea"; sus voces eran las únicas que se levantaban en señal de protesta contra las injusticias de los notables del lugar, llevando las quejas de los aldeanos al mundo exterior por medio de cartas y de artículos en la prensa anarquista. Al mismo tiempo, la gente del campo les consultaba constantemente sobre los más insignificantes detalles de la vida local.

Es cierto que la mayoría de los aldeanos nunca se involucraron activamente en el movimiento anarquista, y aunque pasaran a la acción en períodos de desesperación o de conflictos, de ordinario tan sólo atendían a sus asuntos cotidianos, mostrando muy poco interés por principios y teorías. Por otra parte, las personas de convicción anarquista y los militantes formaban núcleos cerrados dentro del círculo más amplio del pueblo. Tendían a agruparse en pequeños clanes, e incluso se casaban entre ellos, estableciendo así lazos de sangre. E. J. Hobsbawn, autor de un extenso estudio sobre la sublevación de Casas Viejas, descubrió que María ("La Libertaria"), la hija de Curro Cruz, el viejo militante anarquista que avivó las brasas del levantamiento, estaba "comprometida" con José Cabañas Silva, el militante más joven y destacado. Otro de los miembros de la familia Silva era el secretario de la unión de trabajadores. Las familias Cruz y Silva quedaron por tanto unidas no sólo por la relación de María y José, sino también por la tragedia de la sublevación.

En los valles y en las elevaciones menores de la cuenca del Guadalquivir, los pequeños cortijos de los campesinos del interior cedieron

terreno ante las grandes fincas y más tarde ante el latifundio: las grandes plantaciones que caracterizan al campo andaluz. En estas tierras se encontraban los más notorios extremos de la riqueza y de la pobreza rural, la opulencia extravagante y el hambre crónica. Y fue también aquí, entre los proletarios rurales sin tierras —los braceros—, donde el anarquismo encontraría otro tipo de apoyo, tan variado y cambiante como el estado de ánimo de los andaluces más pobres.

Si la tenacidad del movimiento anarquista en la sierra puede explicarse por la firmeza del pueblo, la inestabilidad de este movimiento en los latifundios es debida a la ausencia de lazos sociales firmes entre los braceros. Estos llegaban juntos, pero luego habían de dispersarse debido las exigencias estacionales de la siembra. Estas grandes masas de trabajadores rurales no tenían un perfil social definido y carecían de cualquier tipo de organización. No habitaban en las fincas de los terratenientes, como los criados; ni en las aldeas, como los campesinos; ni tampoco en las ciudades como los trabajadores industriales, sino en los barrios bajos y sórdidos de poblaciones de alrededor de 15.000 habitantes. Estas poblaciones eran demasiado grandes e informes para propiciar la solidaridad que había en los pueblos de las sierras, y excesivamente pequeños para favorecer la agitación, como en el caso de Barcelona.

La existencia de los braceros, monótona y desprovista de objetivos determinados, era tremendamente inestable. Contratados por temporadas, semanas o días (de hecho eran trabajadores a jornal; jornaleros, como los llamaban), trabajaban doce o más horas al día, con algunos pequeños descansos, en lugares alejadísimos de sus hogares. Durante las estaciones de labranza y recolección de las cosechas, cuando tenían asegurados algunos meses de trabajo continuado, el bracero solía dejar a su familia para vivir en la gañanía del patrón, un ruinoso granero donde la cama no era más que un poco de paja amontonada en el suelo y sus compañeros eran gente solitaria y miserable, separados de sus hogares y de sus familias por la necesidad de trabajar.

No hay palabras para describir su miseria. El patrón los alimentaba a base de gazpacho, una sopa de agua, aceite, vinagre, judías o garbanzos. El pan, que se consumía como sustituto de otros elementos más nutritivos,

constituía la dieta básica de los andaluces pobres. El amo que agregaba otros ingredientes a esta empobrecida y descompensada alimentación, casi siempre deducía su costo adicional del jornal del bracero. El inhumano menosprecio que padeció esta gente hasta la década de 1930 queda reflejado en un relato de E. H. G. Dobby, un geógrafo inglés que pasó dos años en España realizando trabajos de campo:

> Recuerdo un incidente que tuvo lugar durante una visita a una granja experimental para la cría de cerdos, en un apartado lugar de Andalucía. En la oscuridad del fondo de la casa se veía un resplandor rojo. Me acerqué y encontré a una familia de trabajadores, todos sentados en cuclillas, en el suelo, alrededor de unas ramas que ardían y cuyo humo era tan denso que apenas permitía respirar. La hedionda suciedad contrastaba con la esmerada limpieza de las pocilgas que yo había visto. A una pregunta mía al respecto, una vieja mujer respondió: “Sí, vivimos aquí. Peor que los cerdos”. El propietario, que estaba presente, exclamó indignado: “Tienen un techo sobre sus cabezas, ¿qué más quieren?”.

Esta respuesta del patrón sintetiza con claridad la actitud de las clases terratenientes hacia los braceros: eran considerados seres tanto o más inferiores que los animales. Durante la época de las siembras y de las cosechas, familias enteras formadas por veinte o más personas de todas las edades tenían que trabajar, incluidos los niños más pequeños, hasta la extenuación.

En el terreno económico, los paupérrimos braceros se encontraban a merced de los amos, quienes no sólo rebajaban los jornales cuando les convenía, sino que podían hacer frente a las huelgas contratando esquiroles de los pueblos de montaña, o simplemente cultivando tan sólo las mejores tierras y dejando el resto en barbecho. En realidad, grandes superficies de tierra no se utilizaban para el cultivo; algunas eran utilizadas como cotos de caza, y otras se destinaban a pastos para la cría de toros de lidia. Los braceros, conscientes de su extremada pobreza, rara vez podían llevar a cabo largas huelgas de castigo; de ahí la violencia casi revolucionaria que se

desataba en los conflictos laborales en Andalucía. Sin el apoyo de los pequeños propietarios o de los aparceros de la región, las huelgas no tenían apenas poder de resistencia. Si no se daba la circunstancia de que los latifundistas estuvieran aterrorizados ante la posibilidad de una guerra campesina, los huelguistas resultaban casi siempre derrotados. En contadas ocasiones, la opinión pública se ponía de su lado y no faltaba algún terrateniente algo menos inhumano que se decidía a hacer alguna concesión en su favor.

Para los proletarios famélicos y sin tierras, que apenas tenían trabajo y que cobraban jornales de hambre, la espectacular visión de grandes extensiones de tierra baldía sólo podía generarles un sentimiento: un odio recalcitrante hacia los patrones y hacia los mayorales que ejecutaban sus órdenes. Este antagonismo podía haberse atenuado en 1835, cuando Mendizábal y su gabinete liberal iniciaron la expropiación de las tierras de la Iglesia. En los años siguientes, inmensas extensiones de tierras comunales y tierras pertenecientes a la Iglesia fueron puestas a la venta en Andalucía. Tal y como hemos visto anteriormente, ese enorme patrimonio fue arrebatado por la burguesía y convertido en su mayor parte en latifundios. Los braceros no consiguieron nada. La inquietud agraria fue contestada, no con reformas, sino con la acción de la Guardia Civil contra los campesinos y los trabajadores sin tierra.

Históricamente, el papel de esta fuerza policial especial ha sido tan importante que su papel debe ser analizado como el de un agente promotor de inquietudes revolucionarias en el medio rural, y como un factor determinante en el desarrollo del anarquismo campesino. La Guardia Civil, un cuerpo de élite cuidadosamente seleccionado y entrenado, fue establecido en el año 1844 para ocuparse del creciente bandolerismo en el sur. Por esa época, la gran mayoría de bandidos andaluces ya no se aproximaba ni remotamente a la imagen heroica que reflejan las leyendas populares. Esos bandidos se habían convertido en un instrumento de los caciques. Su función ahora era la defensa de la propiedad contra la oleada ascendente de campesinos descontentos, así como intimidar a los enemigos de la corrompida política de los amos en las elecciones locales. La alianza entre los caciques y los bandidos, lejos de contribuir a su extinción, sirvió

para extender aún más el bandolerismo. Protegidos de la amenaza de la cárcel gracias al padrinazgo de sus nuevos patronos, los bandidos comenzaron a cometer sus correrías con total impunidad, hasta un punto en que llegó a ser imposible viajar por las ciudades andaluzas sin la compañía de una escolta armada.

Recurrir a la milicia local y a la policía para mantener el orden en los caminos habría sido inútil. Al igual que los bandidos, ellos actuaban al servicio de los caciques y estaban motivados en gran medida por sus intereses. Por consiguiente, cuando se formó la Guardia Civil se adoptaron estrictas medidas para aislar a esta nueva fuerza de las influencias locales. Los agentes de la Guardia Civil no podían reclutarse en el mismo distrito donde prestaban servicio, y se les prohibía expresamente casarse o establecer relaciones familiares con los integrantes de la población local. Vivían en cuarteles especiales y fortificados, cerca del pueblo. Andaban siempre en pareja y fuertemente armados, y mostraban tal desconfianza hacia la comunidad que muy pronto merecieron la hostilidad de la población. Cada vez más aislado, el cuerpo de la Guardia civil se convirtió en una fuerza autónoma, desconfiada y presta a utilizar la fuerza y a convertir las menores protestas en tumultos y los tumultos en insurrecciones. Todo el apoyo popular que no lograron los grupos revolucionarios con sus escritos de propaganda y con su oratoria, lo iba a propiciar la Guardia Civil con sus carabinas. Ramón María de Narváez, que organizó estas fuerzas y les concedió la libertad de seguir su propia línea en el medio rural, merece ser reconocido como uno de los más hábiles propagandistas de los movimientos anarquista y socialista en España.

Los campesinos y braceros, marginados en la distribución de las tierras de la Iglesia (que como señalamos quedó en manos de la burguesía), acuciados por las armas de la Guardia Civil y amenazados por los burdos valores de una egoísta civilización, crearían en el sur su propia y original forma de rebeldía social. Hacia el final de la década de 1860, una nueva inquietud comenzaría a apoderarse de los pueblos, gañanías y aldeas del sur: un sentimiento de creciente exaltación que esperanzaba a las masas rurales y las arrastraban a la insurrección local. A menudo estas insurrecciones se llevaban a cabo no sólo para lograr meras mejoras

económicas, sino para alcanzar ese “comunismo libertario” del que hablaban las publicaciones anarquistas. Muchos estudiosos de los levantamientos andaluces —incluidos los propios anarquistas—, señalan el carácter milenarista de estas revoluciones; y es cierto que en la ingenua y simple franqueza de sus visiones, los insurrectos campesinos y braceros de Andalucía se asemejan a la gente del campo de la alta Edad Media, arrebatados por los mismos sueños de “una segunda venida” de Cristo. La maldad y la iniquidad serían borradas de la faz de la tierra. Ricos y pobres, iluminados por la brillante realidad de un mundo nuevo, se abrazarían con un espíritu nuevo de reconciliación y de ayuda mutua. Sería un mundo de vida ascética; “una austeridad justamente compartida, más que un sueño de riquezas” —como dice Hobsbawn—, donde pueda reinar la paz, la libertad y la igualdad. No sólo desaparecerían las diferencias de dinero y de clase, sino que además la gente adoptaría costumbres austeras, y dejaría de participar en el consumo de tabaco, alcohol, café y otros “vicios promotores del lujo”.

Esta idea se infiltraba poco a poco en las gañanías de los latifundios y en los pueblos de montaña, fortaleciéndose paulatinamente hasta que parecía inútil discutir sus valores, considerándose ya sólo sus méritos y posibilidades. Entonces, de pronto, ya fuera por la convocatoria de una huelga o por alguna estúpida intervención de las autoridades, todas estas condiciones entraban en ebullición, dando lugar a un breve período de agitación y de lucha, seguido de uno de represión en el cual el sueño parecía evaporarse. La exaltación y la esperanza daban paso a una sombría desesperación y al fatalismo. Ricardo Mella, un perspicaz ensayista anarquista que vivió muchos años en Andalucía, recuerda el carácter voluble de la gente, que rápidamente pasaban de un estallido de entusiasmo al desaliento y al fatalismo, incapaces de mantener la tenacidad y fuerza necesarias para la resistencia. Más tarde, sin embargo, las pasiones despertaban de nuevo y renacía la esperanza. El ciclo se repetía y todo volvía a suceder con el mismo fervor, como si no hubiesen sufrido la experiencia de pasadas derrotas.

El movimiento agrario en el sur tenía un núcleo económico que explica, en esencia, el continuo renacimiento frente a las diferentes adversidades.

Para muchos campesinos y braceros, el comunismo libertario equivalía al reparto, es decir, a una nueva división de la tierra. En Andalucía, donde vastas extensiones de tierra quedaban sin cultivar o eran utilizadas con ineficacia, una división racional del suelo habría elevado enormemente el nivel de vida, proporcionando un incentivo poderoso para el desarrollo económico de España. En la década de 1870 y comienzos de la de 1880, el reparto significaba la división de la tierra en parcelas individuales y no en granjas colectivas, siendo esta concepción compartida incluso por los anarquistas. Más adelante, con el desarrollo de los sindicatos anarcosindicalistas, los braceros —y en menor grado los campesinos— se sentirían atraídos por el sistema comunal de tenencia de la tierra.

Lo que hizo fracasar al movimiento de este período no fue lo impracticable de sus visiones, sino su aislamiento. Sus rebeliones casi siempre se limitaban a unas pocas localidades, siguiendo una a otra como el tableteo de una traca. Raramente hubo una explosión que abarcara una región entera. Los pueblos tendrían que haber estado vinculados a las gañanías. Faltaban periódicos que dieran las noticias del movimiento social de un distrito a otro, y organización para coordinar las insurrecciones dentro del movimiento común. Finalmente, y lo que es más importante, estaban las barreras que separaban las ciudades industriales del medio rural. Estas barreras tendrían que haber sido derribadas, y los movimientos obrero y campesino deberían haberse unido para emprender una lucha conjunta.

## Sindicatos agrarios y levantamientos

Algunos andaluces como Trinidad Soriano, José García Viñas y Antonio González Meneses habían destacado por su actividad en la formación de núcleos de la Internacional, e incluso participaron en la fundación del Congreso de la Federación Española en junio de 1870. Eran estudiantes de medicina y de ingeniería. Residían en la ciudad de Barcelona, donde se unieron en torno a Farga Pellicer cuando comenzaban las primeras actividades internacionalistas. Más tarde, algunos de ellos regresarían a sus hogares del sur, donde continuaron sus actividades propagandísticas

relacionadas con el anarquismo. Por otra parte, la Federación empezaba a llegar a numerosas ciudades andaluzas, donde tenía una limitada circulación entre el sector de extrema izquierda de los federalistas, formado por los más "socialistas" partidarios de Proudhon y de Pi i Margall. En el transcurso de 1870, sin embargo, la fuerza real de la Federación Española radicaba en el norte, particularmente en Barcelona y en las proximidades de los pueblos textiles. Desechando atractivas ideas preconcebidas, el hecho es que el anarquismo español se desarrolló primero entre los trabajadores industriales urbanos y artesanos, y más tarde entre los campesinos.

En 1871, la Federación Española comenzó a realizar grandes avances en las ciudades del sur, progresando con mucha rapidez. Un año más tarde, Anselmo Lorenzo, viajando por Andalucía, supo de la existencia de prometedores grupos en Sevilla, Carmona, Jerez, Málaga y Cádiz. *La Federación* contaba también con pequeños grupos en Córdoba, Aguilar de la Frontera y otras comunidades. Al correr de los años esas ciudades jugarían un papel clave en la difusión de las ideas anarquistas entre los campesinos y braceros del sur. A finales de 1872, la Federación se aproximaba los 28.000 afiliados en Andalucía, más de la mitad del total nacional.

Andalucía hubiera proporcionado un campo fértil para el desarrollo de las ideas anarquistas, aun cuando hubiera carecido de precursores socialistas o federalistas. Hacia 1860, y durante toda esa década, el sur de España fue cayendo en un estado de crónicas perturbaciones sociales. La venta de los bienes inmuebles de la Iglesia, y particularmente la de las tierras vinculadas (hasta entonces en su mayor parte ocupadas comunalmente por las aldeas y los municipios) había trastornado el tradicional equilibrio entre las clases dominantes y los oprimidos de la región. Durante siglos, los amurallados y encalados cortijos de los terratenientes y de sus administradores habían dominado el latifundio como una fortaleza donde imperaban los privilegios y la explotación. En la primera mitad del siglo XIX, prevalecía todavía una relación en la cual la arrogancia que confiere la opulencia contrastaba con el fatalismo del hambriento y del desposeído.

Ya había sido suficientemente negativo que las expropiaciones de las propiedades de la Iglesia —después de haber abierto las perspectivas del reparto— defraudaran las esperanzas de los campesinos de adquirir tierras por medios legales, pero peor aún fue que la venta de las tierras confiscadas cortara los últimos lazos entre los desheredados y el Estado, fortaleciendo el poder de una burguesía codiciosa que además carecía de la moderación y el paternalismo de la nobleza tradicional. En las grandes ciudades, las familias de la clase media adinerada se convirtieron en terratenientes absentistas, propietarios de inmensos latifundios. En las comunidades rurales, muchos burgueses locales (una clase formada principalmente por prestamistas, comerciantes, funcionarios y abogados) adquirieron las mejores propiedades medianas. De este último estrato procedían los caciques de Andalucía, los hombres que convertían en burla las elecciones en los distritos rurales. Con su lacerante explotación y su implacable búsqueda de beneficios, los burgueses rurales contribuyeron a alimentar una rebelión que desembocaría en la total desintegración de la estructura social andaluza.

El deterioro de las relaciones sociales tradicionales en Andalucía afectó no sólo a los campesinos y a los braceros, sino también a la clase media baja de los pueblos y de las ciudades de provincias. Esta vasta clase de maestros de enseñanza primaria, empleados, periodistas y tenderos vivían en una indigencia disfrazada con toques de elegancia y acompañada de inseguridad y humillación. Hacia la mitad del siglo XIX, el avance del capitalismo en el sur había desposeído a estas profesiones de todo prestigio social. Convertidos también en una reserva de trabajo explotable, comenzaron a sufrir como los demás la explotación generalizada que se practicaba en la zona. La endeble unidad que había creado el liberalismo a principios de siglo en la clase media comenzó a quebrarse, separando las clases más prosperas de las empobrecidas, e impulsando a la pequeña burguesía —y en especial a los intelectuales— a un federalismo extremo que en algunos casos llegaría al acercamiento a grupos de tendencia socialista.

Debemos destacar que Andalucía tiene su propia tradición socialista. Incluso antes de que Fernando Garrido fundase *La Atracción* (considerado el primer periódico socialista español) en Madrid, Juan Abreu había

divulgado ideas similares en Cádiz. Más tarde, Abreu establecería una colonia fourierista cerca de Jerez de la Frontera que sería suprimida por la autoridades. La expansión de un movimiento federalista militante en el sur había creado un gran interés por las ideas socialistas; interés que era alimentado por medio de publicaciones que divulgaban las ideas de Proudhon sobre el mutualismo y las traducciones de sus diversas obras. La fuerte tradición de republicanismo exaltado proporcionó, desde 1820, cierto vigor a estas ideas que enfatizaban el amargo antagonismo entre ricos y pobres, entre propietarios y desposeídos.

Este vigor representa uno de los rasgos más notables del movimiento radical del sur. No sería exagerado expresar que durante las décadas de 1850 y de 1860, la pequeña burguesía radical de Andalucía había pasado a ser uno de los estratos más revolucionarios de Europa. Sólo los parisinos podrían haber igualado la temeraria inclinación de los andaluces a levantarse en armas, construir barricadas y luchar, a menudo temerariamente, contra fuerzas muy superiores. Las sublevaciones más importantes estallaron en las ciudades meridionales en 1857, 1861 y de nuevo en 1873. La primera de éstas, dirigida por el veterinario Pérez del Alamo, en Loja, ha merecido un lugar en los anales de la historia revolucionaria española como una insurrección socialista. A comienzos de la década de 1870, todo el ámbito social de la región estaba cuidadosamente preparado para recibir las ideas más avanzadas emanadas de Madrid y Barcelona. En realidad se podría afirmar que el anarquismo representaba no ya la simiente de una nueva teoría social que había encontrado un espacio congénito en Andalucía, sino la maduración de un proceso revolucionario de ideas y condiciones sociales que había comenzado décadas atrás.

En muchos aspectos este proceso acumulativo explica el lento crecimiento de la Federación Española en las ciudades del sur entre 1870 y 1871. El movimiento federalista consumía la casi total energía de los revolucionarios andaluces, restándoles tiempo para el trabajo de la Internacional. El interés por la Internacional ya existía en Motilla, por ejemplo, a principios de Abril de 1871, pero como explica Díaz del Moral, los conflictos políticos municipales absorbían tanto el movimiento radical de la ciudad andaluza, que no pudo construirse una Sección viable hasta

aproximadamente tres años más tarde. En la obra de Díaz del Moral queda reflejado con bastante claridad el modo en que se constituyó la más antigua de las Secciones andaluzas y el tipo de personas a las que atrajo.

Quizás uno de los relatos más completos que se tienen sobre estos comienzos es el que se refiere a la ciudad de Córdoba. La primera evidencia de la actividad internacionalista apareció en el verano de 1871, cuando Rafael Suárez y el periodista José Navarro Prieto iniciaron su correspondencia con el Consejo Federal de Madrid. Más tarde se les unieron otros tres: el artesano Francisco Barrado García, el profesor de derecho canónico Agustín Cervantes y un empleado municipal, Eugenio González. Esta curiosa variedad de profesiones se daba con frecuencia en los grupos radicales del sur. Los cinco se habían iniciado en la Alianza bakuninista, en 1872 habían constituido una Sección de oficios varios, y más tarde la Federación local de Córdoba. Díaz del Moral nos ha dado una vívida descripción de los dos intelectuales del grupo, Navarro y Cervantes. El contraste de sus personalidades muestra un retrato fascinante de la diversidad de caracteres humanos que se sintieron atraídos por el anarquismo de aquella época.

José Navarro Prieto apenas alcanzaba los dieciocho años cuando comenzó su relación con el Consejo Federal. Como sucedía con tantos jóvenes radicales andaluces de aquel tiempo, en sus circunstancias vemos superpuestos el mundo artesanal y el de la clase media intelectual. Su padre, zapatero de profesión, deseaba un superior nivel de vida para su único hijo, aunque la educación universitaria significaba un gran esfuerzo económico. Pero Navarro era demasiado inquieto y hedonista para sacrificar su juventud a la rutina académica; seguramente le aterraba la perspectiva de una mezquina vida profesional. Decidió dedicarse al periodismo y pronto comenzó a labrarse una reputación en el ámbito local como periodista de pluma mordaz y satírica. Su agudeza y su agilidad mental pronto hicieron de él uno de los más destacados internacionalistas del sur, y hacia 1872 ya disfrutaba de la confianza de los aliancistas de Madrid y Barcelona.

Sin embargo, Navarro gozaba también de cierta fama de cobarde. La derrota del movimiento federalista en 1873 y las perspectivas de represión que se vivían en la época de Serrano pusieron de manifiesto sus dudas

políticas, que lo condujeron hacia los partidos de “orden”. Esto le llevó a convertirse pronto en un conservador. En los años posteriores colmó las aspiraciones de sus padres al ocupar los cargos de redactor jefe y editor de un periódico. Después de su muerte fue recordado afectuosamente por sus amigos conservadores como “una persona bromista e ingeniosa, de carácter jovial y agradable, más dedicado a Dionisos que a Apolo”, según palabras de Díaz del Moral.

La personalidad de Navarro, afable y amante de las bromas, era muy común en el sur. Contradiciendo el estereotipo del místico anarquista andaluz, muchos hombres con empuje juvenil y aficionados a la diversión ingresaron en la Internacional. Naturalmente, Andalucía tenía también su cuota de personajes sobrios, como Agustín Cervantes, con mayor vida espiritual que Navarro y apto para resistir con mayor fortaleza la situación represiva. Hijo de un abogado murciano, Don Agustín Cervantes del Castillo Valero estudió en la universidad de Madrid, donde se doctoró en Filosofía y Letras y en Leyes. Era un estudiante formal, un joven taciturno, retraído y reservado. Su aspecto imponente, unido a una gran sabiduría y a su vasta cultura, llevaron a Cervantes al estrato más alto del mundo académico. Cuando aún no había cumplido treinta años ya era profesor en la Universidad de Córdoba. Dos años más tarde contrajo matrimonio con doña Julia Valdivia y Ruiz de Valenzuela, introduciéndose así en la alta sociedad de la ciudad.

Don Agustín poseía un apasionado sentimiento humanitario que se manifestaba en sus visitas a los barrios más bajos de la ciudad, donde socorría con dinero a los más necesitados. Los notables cordobeses ignoraban todo acerca de esas visitas. Pocos meses después de su boda, Cervantes abrazó públicamente la causa de la Internacional, dejando a sus padres totalmente desconcertados. Publicó un trabajo propagandístico, “Tres discursos socialistas sobre la propiedad y la herencia”, y participó en el Congreso de la Internacional en Córdoba como delegado de la Federación local de Solana. Pronto comenzó a hacerse un vacío social en torno a Cervantes. Sus amigos burgueses —incluidos los republicanos— se distanciaron de él, y pronto se encontró rodeado casi exclusivamente de internacionalistas. Por último, cuando desde su sillón académico criticó el

catolicismo, fue atacado salvajemente por la sociedad oficial. Cuando ya le resultaba intolerable permanecer en la Universidad, Cervantes abandonó Córdoba y aceptó una cátedra en Badajoz, donde falleció poco tiempo después.

Aunque sus destinos fueron diferentes, Navarro y Cervantes fueron hombres de talento; y lo que es más significativo, ambos estuvieron en todo momento apoyados por miembros de la clase trabajadora y manifestaron una elevada dedicación a la causa. El núcleo cordobés no tardó en progresar. Después de junio de 1872 aumentó a cincuenta y cuatro miembros, y fueron fundados los grupos del calzado y de los sombrereros de la ciudad. En el mes de diciembre, durante el Congreso de Córdoba, desempeñó el papel de anfitrión, atendiendo a los internacionalistas que llegaron desde todas las regiones de España, y sus miembros comenzaron a ser conocidos en el ámbito nacional. La proclamación de la República dos meses más tarde le dio al grupo un gran impulso. Dirigió con éxito una huelga textil, creó una escuela progresista y en junio gestionó la publicación de su propio periódico, El Orden. Siguiendo el sentimiento general federalista de la última primavera, los cordobeses internacionalistas eligieron su propio candidato, el aliancista Barrado, para el consejo municipal; no debió causarles ningún problema de conciencia el hecho de que un anarquista ocupara un cargo en el cuerpo legislativo burgués.

Durante los meses siguientes la agitación fue espectacular. La propaganda federalista e internacionalista de la prensa era arrolladora. El levantamiento se extendió de la ciudad al campo, provocando revueltas e incendios. Circularon rumores sobre una inminente revuelta federalista e internacionalista. Se formaron grupos paramilitares de federalistas y monárquicos, y cada uno de ellos amenazó con tomar la ciudad, que era un punto estratégico en el control del tráfico ferroviario del sur. Anticipándose al levantamiento, el gobernador militar, el general Ripoll, arrestó a los sospechosos de ambos grupos. Más tarde, el general Pavía tomó posesión de la ciudad de Córdoba. La milicia republicana fue desarmada, y a consecuencia de esto la ciudad no se sublevó en las insurrecciones cantonalistas de julio de 1873. El entusiasmo decayó, los federalistas suspendieron la publicación de sus periódicos y empezaron a decrecer en

número. Fue más o menos en esta época cuando Navarro comenzó a distanciarse del movimiento obrero, decantándose por el partido gubernamental. Incluso el ilustre don Agustín decidió apartarse, prudentemente, de las actividades internacionalistas. La Sección cordobesa, conducida por el artesano Barrado, estaba integrada exclusivamente por trabajadores. A pesar de la dura represión y de la consiguiente deserción de algunos intelectuales, la Sección continuó creciendo. *El Orden*, de hecho, alcanzaría su mayor difusión durante el verano de 1873.

Con la llegada de Castelar a la presidencia de la República comenzó a producirse un serio resquebrajamiento social. Las garantías constitucionales fueron suspendidas, los huelguistas eran amenazados con armas de fuego si rehusaban volver al trabajo, los centros obreros fueron clausurados y los internacionalistas de mayor actividad encarcelados. El primero de octubre de 1873, Barrado fue detenido, encarcelado y deportado luego a Alicante. La Sección cordobesa iniciaba ahora una rápida decadencia. Durante la severa dictadura de Serrano, que en junio de 1874 reemplazó al régimen de Castelar, la Federación Española en su totalidad se vio forzada a actuar en la clandestinidad. En el mes de abril, después de varias semanas de dura persecución, la sección cordobesa desapareció completamente como grupo organizado. Las esperanzas engendradas a lo largo de la primavera y del verano de 1873 seguirían siendo alimentadas durante años por unos cuantos individuos aislados y dispersos. No iba a ser hasta el año 1881, momento en que resurgía en toda España la actividad radical, cuando se produciría el renacimiento del movimiento de forma organizada.

La Sección cordobesa ofrece un cuadro típico de la evolución del movimiento anarquista en sus primeros años en las ciudades andaluzas. Fueron los intelectuales quienes comenzaron las actividades y fundaron algunos núcleos, pero pronto fueron apoyados por trabajadores, generalmente artesanos, que constituyeron la base estable de la organización local. El movimiento arraigó en las ciudades de un modo sorprendente y creció con la impetuosidad de los acontecimientos. Cuando la situación se tornaba demasiado peligrosa, la mayoría de los intelectuales desaparecían, o sufrían una “modificación” en sus creencias, de tal manera que dejaban el grupo en manos de los miembros de la clase obrera, con lo

que el movimiento anarquista pasó a ser una organización predominantemente proletaria o campesina. Sus militantes más notorios fueron reclutados en los talleres y en las fábricas.

Es interesante destacar hasta qué punto existía un paralelismo entre el desarrollo de la Sección cordobesa y el de la Internacional de Sevilla, otro importante centro del anarquismo andaluz. También aquí dos intelectuales jugaron un papel capital como organizadores de núcleos. En ese tiempo, Trinidad Soriano regresó a su hogar en Sevilla, desempeñando un papel clave en el establecimiento del movimiento en la ciudad. En Sevilla se encontraba también Nicolás Alonso Marselau, un republicano del ala izquierda que se había acercado al anarquismo a fines de 1860. Marselau fundó *La Razón*, primer periódico internacionalista de la ciudad y uno de los primeros de toda Andalucía. Marselau había sido estudiante de teología, y su pasado presentaba muchas similitudes con el de Cervantes. Su participación en las decisiones principales del grupo local era considerada tan importante que cuando Anselmo Lorenzo visitó la ciudad para fundar el grupo “Defensores de la Internacional”, los aliancistas marcharon en tropel hasta la cárcel de Sevilla donde Marselau estaba confinado y mantuvieron una reunión con él. Sin embargo, un principio de ceguera y los levantamientos de 1870 iban a quebrar sus convicciones izquierdistas; terminó por renunciar al anarquismo y se hizo monje trapense. El movimiento que había ayudado a crear fue destruido por Manuel Pavía y por Serrano. Cuando más tarde renació el movimiento, sus núcleos eran principalmente proletarios. Allí se encontraba, por ejemplo, el zapatero Sánchez Rosa, que sólo había cursado dos años de escuela primaria. Después de una militante juventud en la que participó en el famoso levantamiento de Jerez, a consecuencia del cual sería encarcelado, Sánchez Rosa se convirtió en un destacado divulgador y educador anarquista. Fundó escuelas progresistas y libertarias y adquirió notoriedad por sus coloquios sencillos, de tipo moral, sobre las virtudes del anarquismo y los males del capitalismo.

Finalmente, Serrano y su sucesor, Cánovas, fracasaron en su intento de represión del movimiento anarquista. El aplastamiento de las insurrecciones cantonalistas iba a llevar a muchos federalistas al campo de las actividades

libertarias. El prestigio que había adquirido la Internacional entre los trabajadores era enorme. Más adelante, al reavivarse las actividades radicales, el número de trabajadores que ingresó en las organizaciones fue muy superior al de épocas anteriores. No fue menos importante el efecto que el movimiento y las insurrecciones federalistas tuvieron en la difusión de las ideas radicales entre los campesinos y los braceros. Las ondas expansivas de la actividad federalista y de las barricadas cantonalistas se propagaron desde las ciudades al medio rural. Los desposeídos del campo, emulando a los revolucionarios urbanos, incendiaron las cosechas y los pajares de los propietarios, mataron a sus perros guardianes, mutilaron al ganado e intentaron destruir algunos de los cortijos. Por los pueblos y las gañanías aparecían propagandistas anarquistas ambulantes, muchos de los cuales eran refugiados o deportados que provenían de la ciudad, y cuyo papel en la difusión de las ideas anarquistas fue de una importancia enorme. Varios años después de que Serrano prohibiera la Internacional en las ciudades andaluzas, las ideas anarquistas seguían calando profundamente en el campo andaluz.

La Federación Española, sin embargo, estaba entonces en una fase de desesperante declive. Su historia entre los años 1874 y 1880 es la historia de una decadencia. La Comisión Federal, huyendo continuamente de la policía, se desgarraba en disputas internas. El grupo, dividido e inestable, y dirigido por líderes poco carismáticos, había perdido el respeto de sus seguidores. Las elecciones para la Comisión fueron objeto de burla y una buena ocasión para intercambiar chistes maliciosos. La Federación Española, tan temida en otros tiempos, se apagaba. Cuando llegara el resurgimiento en la década de 1880, la Federación ya no existiría en las principales ciudades de España.

Las organizaciones hermanas al norte de los Pirineos también declinaban. La Internacional bakuninista, fundada en Saint-Imier, realizó su último congreso en la ciudad industrial belga de Verviers. Esta organización libertaria había durado tan sólo cinco años. Su decadencia se ha atribuido a la desaparición de la industria artesanal, en especial los artesanos relojeros del Jura que tanto habían apoyado a los bakuninistas en épocas anteriores. Pero esta explicación no es del todo cierta. Tal vez la razón más importante

de este declive de la Internacional libertaria, y en general del movimiento anarquista en toda Europa, fue la estabilización económica que se manifestó a mediados de 1870; una mejora que fomentó las posiciones conservadoras dentro de la clase trabajadora. Los marxistas, con su política de actividades electorales, parlamentarismo y sindicatos reformistas, aprovecharon los logros positivos de este período y se ganaron al grueso de los trabajadores del exterior de España y de Francia.

No fue sólo la represión policial lo que destruyó a la Internacional en España, sino también las tácticas generadas por su aislamiento. En el otoño de 1878, Juan Oliva Moncusí, un joven internacionalista de Tarragona, intentó asesinar al rey Alfonso XII disparándole dos tiros en la calle Mayor de Madrid. El atentado fracasó y el gobierno aprovechó la ocasión para incrementar sus medidas represivas contra el movimiento obrero. Muchos militantes sindicalistas y anarquistas fueron encarcelados. Los obreros catalanes respondieron contraatacando con un movimiento huelguístico, y los campesinos de Andalucía con una oleada de incendios. El compromiso de la Federación Española con el terrorismo y las represalias provocadas por el atentado exacerbaron las malas relaciones entre la Comisión Federal y la clase obrera. La máxima tensión se manifestó en Cataluña, donde la Internacional contaba con el apoyo de la mayoría del proletariado. Cuando el gobierno moderado de Sagasta reemplazó al gabinete de Cánovas el 10 de Febrero de 1881, la mayoría de los trabajadores catalanes se distanció de las actitudes violentas de la Comisión Federal.

Se trató entonces de establecer una federación de tipo más convencional, de teorías abiertamente anarquistas pero esencialmente posibilista en la práctica. La nueva organización, la Federación de Trabajadores de la Región Española, fue convocada por vez primera en el memorable Teatro del Circo barcelonés, el 24 de septiembre de 1881. Acudieron 140 delegados, representando a 162 federaciones de toda España, lo que supuso una extraordinaria respuesta teniendo en cuenta que el movimiento obrero acababa de resurgir después de años de severa represión. Pese a haber transcurrido más de una década entre los dos Congresos celebrados en dicho teatro, las sesiones de este último parecían una réplica exacta de las polémicas suscitadas en 1870. Los republicanos

intentaron llegar a un compromiso con la acción política. Como era de esperar, algunos de los sindicalistas aspiraban a una organización obrera convencional, orientada explícitamente al reformismo y a las mejoras económicas. El Congreso rechazó por una amplia mayoría estas dos posiciones, declarando que el objetivo social de la clase trabajadora española era el anarquismo. Asimismo, el uso de la táctica política entendida como medio fue rechazada enérgicamente. La nueva Federación de Trabajadores se situó organizativamente dentro del modelo de estructura descentralizada de la vieja Federación Española, pero se produjeron una serie de modificaciones respecto a las organizaciones locales (uniones de oficios símiles), muy cercanas a las que serían adoptadas posteriormente por la CNT.

El resultado de la votación que decidía la adopción del ideario puramente anarquista fue abrumador —110 a favor, 8 en contra—, pero la retórica no pudo disimular una desviación básica hacia un convencional y, en realidad, moderado sindicalismo. Con una fuerte oposición por parte de los anarquistas más militantes, la nueva Federación de Trabajadores decidió como cuestión de principios la provisión de cajas de resistencia para posibles huelgas. También limitó estrictamente el uso de la huelga como instrumento. La huelga, si era inevitable, tendría que conducirse de forma ordenada y disciplinada. Los fines se conseguirían por medio del desgaste y no de la coacción. Esencialmente, lo que esto significaba era el fin de la violencia y del sabotaje; en pocas palabras, el fin de las huelgas insurreccionales.

Este enfoque suponía una derrota decisiva para los verdaderos anarquistas de la Federación. El hecho de que las posturas de los líderes más convencionales catalanes pudieran prevalecer se debía, en parte, a la falta de unidad y a la confusión ideológica que se evidenciaba entre los delegados que se llamaban a sí mismos anarquistas. La vieja y bakuninista Alianza de la Democracia Socialista, que había jugado un papel tan decisivo en la orientación de la Federación Española, se había venido abajo junto con la Internacional. En 1880 no existía en España un movimiento anarquista de ámbito nacional. En su lugar existían numerosos grupos anarquistas desavenidos, cuyas ideas eran tan diversas que en un extremo

incluían a los que eran poco más que simples republicanos, y en el otro a terroristas combatientes e individualistas. También se daba el caso de reformistas que se autodenominaban “anarquistas”, debido al prestigio y al aura romántica que empezaba a adquirir este término entre los trabajadores.

Otra de las causas que explica el viraje hacia unos principios sindicalistas convencionales, fue la represión que siguió a las agresivas actitudes que se tomaron durante la Internacional. Aunque esta causa ya ha sido tratada, es necesaria una explicación más detallada. Los sindicalistas catalanes veían con gran suspicacia el régimen de Sagasta. El nuevo primer ministro, un notorio enemigo del movimiento obrero, había reunido a una incómoda coalición de grupos liberales moderados con el fin de alcanzar el poder. Los sindicalistas tenían razones para pensar que la legalidad de las organizaciones sindicales había sido restaurada tan sólo con el fin de presentar una fachada democrática para el nuevo gabinete. Sin embargo, los líderes obreros catalanes estaban claramente resueltos a preservar esa fachada, evitando toda confrontación violenta con el nuevo régimen. De hecho, uno de sus manifiestos de la época parece más un intento de refrenar todo movimiento que una llamada a la acción; en la práctica, todo defensor de las tácticas beligerantes era tachado de provocador.

El mero crecimiento numérico del movimiento sindical iba a ser suficiente para condenarlo. En la época de su segundo Congreso, celebrado en el Teatro Cervantes de Sevilla el 26 de septiembre de 1882, la Federación de Trabajadores contaba con aproximadamente 58.000 afiliados, organizados en 218 federaciones locales y 663 secciones. De la gran masa de afiliados, más de 38.000 correspondían a Andalucía, mientras que sólo 13.000 pertenecían a la industrializada Cataluña. Para muchos delegados del sur, las directrices posibilistas de los líderes catalanes suponían casi una traición. Durante los tres días que duró el Congreso, estalló una furiosa batalla entre las dos grandes regiones del anarquismo español. Fue en ese Congreso de Sevilla donde la Federación de Trabajadores definió en esencia el anarquismo como un objetivo a largo plazo, y las luchas por las mejoras económicas como una tarea cotidiana, lo que significaba enfrentarse a la misma dicotomía que había afrontado el Congreso de 1870. Aunque esta

definición fue presentada como un compromiso entre todas las partes, el punto de vista catalán fue el que prevaleció a la hora de tomar la decisión.[9]

Existía, sin embargo, un profundo descontento entre los delegados andaluces, en especial entre los de las comarcas más meridionales. Un grupo que se autodenominaba *Los Desheredados* rechazó los principios de la Federación y se separó, formando una organización propia comprometida con la acción directa. Los Desheredados eran probablemente una de las muchas sociedades secretas que habían proliferado en el sur entre los trabajadores del campo. A finales de la década de 1870 y principios de la de 1880, tuvo lugar un período de expansión económica en el norte industrial; sin embargo, en Andalucía estas décadas estuvieron marcadas por la sequía y una escasez próxima a la hambruna. En Jerez, donde los obreros y los trabajadores del campo se adhirieron al anarquismo en los años de la peor persecución, el descontento era cada vez mayor. Los trabajadores de los viñedos trabajaban a destajo, recibiendo a cambio jornales muy bajos y viviendo en una tremenda pobreza.

Se han atribuido a *Los Desheredados* más actos de violencia de los que en realidad llevaron a cabo, sin embargo, en el distrito de Jerez ya habían tenido lugar muchos incendios deliberados y un cierto número de asesinatos. Las víctimas de estos atentados eran por lo general confidentes de la policía y ocasionalmente algún patrón. Es muy posible que *Los Desheredados* y otros grupos clandestinos de la zona estuviesen implicados en esas muertes. El marco de clandestinidad en que operaba este grupo hace imposible distinguir la realidad del mito.

Un célebre suceso acaecido en la década de 1880 pone en evidencia la aureola mítica que rodeaba tales incidentes y la menos mítica represión que acarreó. En medio de una prometedora huelga de los trabajadores vinateros contra el trabajo a destajo, murió un tabernero sospechoso de ser un delator de la policía. Mientras la huelga continuaba, la Guardia Civil anunció repentinamente que sus investigaciones sobre el asesinato habían revelado la existencia de una inmensa sociedad secreta, la Mano Negra, que planeaba matar a todos los terratenientes de Andalucía. A pesar de la aparición de recientes argumentos en contra, en mi opinión, las sorprendentes historias que la Guardia Civil hacía públicas eran en realidad ficticias. El distinguido

sociólogo español Bernardo de Quiroz, que investigó el caso como asesor del gobierno, dudaba que la Mano Negra hubiese existido alguna vez en Andalucía. El caso, sin embargo, fue utilizado por la policía para encarcelar a los anarquistas y a los trabajadores beligerantes de todo el sur. Cientos de personas fueron torturadas por las autoridades policiales para arrancarles confesiones, aunque la mayoría tuvo que ser puesta en libertad por falta de pruebas. Los resultados de la investigación realizada en 1883 concluyeron con el juicio de cien presuntos conspiradores y con la ejecución, el 14 de junio de 1884, de siete de las catorce personas que habían sido sentenciadas a muerte. La leyenda de la Mano Negra continuó, en cualquier caso, durante varios años, y hasta bien entrada la década de 1890 muchos anarquistas fueron encarcelados y acusados de pertenecer a la espúrea organización.

Las persecuciones contra la Mano Negra destruyeron la Federación de Trabajadores de Andalucía y contribuyeron, sin duda, al declive de la Federación de Cataluña. En una atmósfera de temor, fomentada por los recuerdos de las anteriores represiones de 1870, miles de trabajadores empezaron a distanciarse del movimiento. El Tercer Congreso de la Federación, realizado en Valencia del 4 al 8 de octubre de 1883, denunció severamente las tácticas de violencia atribuidas a la Mano Negra, pero esto no palió su decadencia. En aquel momento solamente 3.000 miembros mantenían su filiación no secreta en las Secciones andaluzas. *La Revista Social*, una destacada publicación teórica anarquista que había llegado a alcanzar una tirada de 20.000 ejemplares, desfallecía por falta de suscriptores. A mediados de Mayo de 1877, cuando la Federación de Trabajadores de la Región Española celebró en Madrid su Cuarto Congreso Nacional, tan sólo asistieron dieciséis delegados. Dos años más tarde, la FTRE, que había comenzado ocho años antes con grandes esperanzas y expectativas, fue disuelta oficialmente.

Para los campesinos anarquistas de España, la aldea medieval tenía muchas limitaciones. Pero como comunidad, en cambio, presentaba rasgos muy vitales. Los anarquistas andaluces valoraban el pueblo, porque su espíritu de ayuda mutua, solidaridad, igualitarismo y sociabilidad armonizaban perfectamente con los objetivos del anarquismo, que por otra parte son también los objetivos de toda sociedad humana. Ellos veían la

aldea como punto de partida para un estilo de vida mejor; no como un fin en sí mismo, sino como un trampolín hacia una sociedad en la que las necesidades materiales podrían ser satisfechas por la tecnología y la ciencia moderna; la mente de los hombres, liberada por el conocimiento y la razón, y el espíritu humano, alentado por la cooperación y la libertad.

De acuerdo con esto, los anarquistas mantuvieron una implacable lucha contra los aspectos negativos del pueblo, como el parroquialismo, la superstición, la ignorancia y los valores autoritarios. Alentaban, por el contrario, el respeto por la cultura y por las más audaces ideas en casi todos los aspectos de la vida. Estas concepciones proporcionaban a los campesinos y braceros un sentido de la dignidad, de la autoestima y de la solidaridad hacia los expoliados de su propia clase, además de una visión humana profundamente marcada por el espíritu y el concepto del internacionalismo. Los anarquistas llevaron a sus pueblos el conocimiento de las ciencias que habían sido prohibidas por el clero, la reivindicación de las libertades que habían sido abolidas por el Estado y la exigencia del bienestar, que había sido usurpado por las clases dominantes.

En este sentido sería interesante comparar el anarquismo andaluz con otro movimiento campesino: el carlismo de las montañas del norte. El carlismo era en primer lugar una tentativa de preservar al pueblo y su moral clerical y patriarcal de cualquier forma de modernismo. Dirigido por la Iglesia, este movimiento era atávico: el único programa que le era posible ofrecer significaba un retorno al pasado. En agudo contraste con el anarquismo campesino, el carlismo fomentaba una ciega obediencia a la jerarquía de la Iglesia y a la autoridad de la corona. Provinciano y dogmático, este movimiento predicaba un evangelio de odio y de ignorancia hacia los conocimientos científicos, la experimentación y la independencia intelectual. En tres guerras civiles los ejércitos carlistas marcharon hacia las ciudades liberales del norte, incendiando estaciones ferroviarias y destruyendo otras innovaciones “demoníacas”. Sacerdotes fanáticos estimulaban a sus fieles a cometer salvajes brutalidades, aterrorizando a la península entera con el ejemplo de una reacción clerical enloquecida. Las guerras carlistas servirían de escenario a algunas de las más terribles carnicerías que tendrían lugar a lo largo del siglo XIX. El movimiento

carlista pretendía la censura de los libros y los periódicos, el control clerical sobre las instituciones de enseñanza y la restauración de la Inquisición.

Tanto el carlismo como el anarquismo rural tomaron al pueblo como punto de partida. Pero sería difícil concebir dos formas de ver la realidad más divergentes que las que estos dos movimientos campesinos proponían. Uno miraba hacia el pasado y el otro hacia el porvenir. Ambos movimientos, ante la situación de insatisfacción en la que se encontraba el pueblo frente a la sociedad burguesa, rastreaban en busca de potencialidades completamente opuestas. El hecho de que ambos movimientos tuvieran un punto de partida común resulta absolutamente secundario; cada uno de los movimientos fomentaba contingencias contrarias y se movía, por consiguiente, en una dirección distinta.

# 6: Terroristas y santos

La década de 1880 en España fue un período de rápido crecimiento industrial y de gran prosperidad agrícola. La entrada de inversiones inglesas y francesas en la industria minera convirtió al país en uno de los líderes europeos en producción de hierro y cobre. El desarrollo de Cuba como mercado para las exportaciones de productos textiles sirvió de sostén a la industria catalana, y cuando los viñedos franceses estuvieron a punto de ser destruidos por la filoxera, los vinos españoles gozaron de un breve período de liderazgo en el mercado mundial. Durante la década siguiente, sin embargo, el crecimiento económico fue truncado por la sucesión de varios años nefastos en los que la actividad comercial sufrió un proceso de anquilosamiento y de profunda decadencia. Si el alza anterior apenas había beneficiado a las clases trabajadoras del campo y de la ciudad, la caída de la economía iba a resultar agónica. El contraste entre ricos y pobres resultaba desolador: de un lado, España parecía precipitarse en un mundo de enloquecidos negocios en el que las clases adineradas estaban tan sólo preocupadas por amasar inmensas fortunas, mientras los de abajo sufrían la más absoluta miseria, viviendo en un estado de permanente desesperanza.

Este contraste hería la sensibilidad de la opinión pública de todos los centros urbanos y de buena parte de las zonas rurales. En Barcelona, mientras los industriales textiles comenzaban a levantar suntuosas residencias neobarrocas en el Tibidabo, los barrios bajos de los trabajadores se extendían hacia la periferia, alcanzando las chabolas de los recién llegados *murcianos* que malvivían en los suburbios de la ciudad. La mecanización invadió como un cáncer el universo tradicional del pequeño taller, y miles de artesanos —trabajadores cualificados cuya labor se había vuelto inservible— se vieron arrojados al nuevo mercado laboral. Más

ultrajantes aún eran las alarmantes diferencias económicas que prevalecían en el sur. En muchas provincias de Andalucía, la mitad de las tierras pertenecían a fincas de 2.000 hectáreas o más, mientras que el 80 por ciento de la población estaba formado por proletarios rurales sin tierras propias. Las enfermedades provocadas por la deficiente alimentación habían adoptado un carácter endémico, y la tasa de mortalidad continuaba elevándose. Las clases gobernantes no hacían ningún esfuerzo por facilitar una educación al pueblo: más de la mitad de los hombres y casi la totalidad de las mujeres eran analfabetos.

Se tomaron, asimismo, todas las medidas posibles para excluir a las masas rurales y urbanas de toda participación en el gobierno del país. Ente las décadas de 1830 y 1860, la vida política había oscilado como un péndulo entre gobiernos conservadores y liberales, dirigidos por generales, civiles y —sobre todo en los últimos años del reinado de Isabel— por una camarilla eclesiástica. Con cada oscilación, los conservadores se hacían más liberales y los liberales más conservadores. Ambos bandos estaban vinculados por el temor común a las sublevaciones, ya fueran clericales, militares o radicales. Tras la prematura muerte de Alfonso XII en marzo de 1885, los partidos liberal y conservador llegaron a un acuerdo para repartirse el control del Estado durante el período de la Restauración. Un sistema político de *turnismo* en el que el partido liberal, dirigido por el efervescente Práxedes Sagasta, tendría las riendas del poder todas las veces que fuesen necesarias; una fachada democrática para calmar las inquietudes sociales o para justificar la promulgación de una legislación represiva. El partido conservador, dirigido por Antonio Cánovas del Castillo, presidía el gabinete en los períodos de relativa estabilidad. A excepción de su tradición anticlerical y del interés que manifestaron en la defensa de la educación secular, los liberales no diferían en nada de sus oponentes conservadores. Lo que en realidad diferenciaba a estos dos partidos era el estrato social agrario al que cada uno representaba: los conservadores defendían los intereses de los terratenientes andaluces, y los liberales los de los cultivadores de trigo castellanos.

El artífice del *turnismo* fue Cánovas, un cínico consumado que combinaba su astucia política con una vastísima formación cultural, insólita

entre los políticos de su época. Antes de dedicarse a la política, Cánovas ya había adquirido una prestigiosa reputación como historiador. Su programa político tenía como principal objetivo mantener a toda costa el orden público. Este principio de deliberada política de estancamiento se apoyaba a su vez en un sistema de corrupción generalizada que dominaba todas las esferas de la vida política. En teoría, el Estado español era una monarquía constitucional basada en el sufragio restringido (que más tarde sería universal), con los acostumbrados caciques rurales y jefes urbanos que regulaban los votos según las necesidades de Madrid. La llamada "prensa libre" estaba comprada (casi ningún periodista destacado encontraba luego dificultades para ocupar un escaño en las Cortes), y los generales se encontraban ocupados con las campañas en Marruecos.

El problema de las relaciones del gobierno con la burguesía era más complejo. La industria española no se había desarrollado en Castilla o en Andalucía, sino en regiones de la periferia, como Cataluña y el País Vasco, regiones tradicionalmente opuestas al poder centralizado del Estado. El *turnismo* se vio obligado a tener en cuenta los intereses de la dominante burguesía industrial, pero sin cederle demasiada autoridad en el manejo del Estado. El problema se resolvió de manera extraoficial. Se desarrolló una política subterránea de intrigas y grupos de presión, de modo que para lograr cualquier concesión a sus demandas económicas los industriales tenían que recurrir a todo tipo de maniobras y negociaciones. El poder, mientras tanto, continuaba alternando entre los dos grandes grupos agrarios.

Hacia la década de 1890, el absurdo que significaba esta estructura política resultaba evidente para todos. En un período de un crecimiento industrial sin precedentes, el aparato del Estado seguía en manos de los arcaicos intereses agrarios, obligando a las clases industriales "progresistas" a entrar por la puerta de atrás, como mendigos. La pequeña burguesía, en su mayoría republicana, tenía que soportar la presencia de un monarca como jefe vitalicio, y aceptó un sistema de elecciones manipuladas que le negaba cualquier tipo de participación. La clase trabajadora y los campesinos pobres eran simplemente ignorados. Aunque en realidad estaban excluidos de la vida política activa, se les concedió el derecho nominal a ampararse en

sindicatos “legales”, que luego serían constantemente acosados por la policía y desmantelados cuando alcanzaran ciertas proporciones.

Las centrales sindicales trataron de adaptarse a esta situación. *La Federación* de Trabajadores, tal como hemos mencionado, había fracasado en su intento de promover un sindicalismo legal. Una estrategia más cautelosa trató de ponerse en práctica en 1881, el mismo año en que se fundara la Federación de Trabajadores, cuando los “autoritarios” de la vieja Internacional establecieron el Partido Socialista Obrero Español.[10] Aunque su retórica y su estructura organizativa eran marxistas, mantenían unos objetivos y unas ideas políticas fundamentalmente reformistas. Lo que probablemente libró al partido de seguir el destino de los anarquistas fueron las modestas exigencias de su programa, la naturaleza prudente de sus tácticas y la respetuosa delicadeza de su propaganda. El partido pronto se encontró embarcado en un círculo vicioso. Por una parte, su programa y sus tácticas generaban una respuesta muy pequeña entre los inquietos murcianos y braceros, que se incorporaron a las organizaciones anarquistas. Por otra parte, los trabajadores cualificados, a quienes el partido trataba de atraer, desarrollaron un sentimiento político y un punto de vista claramente burgueses que terminó por desplazarlos hacia los partidos republicanos.

Esto explica que no fuera hasta 1888, siete años después de la fundación del partido, que los socialistas españoles consiguieran crear su propia central sindical obrera, la Unión General de Trabajadores (UGT). Dirigida por Pablo Iglesias, esta prudente, discreta y burocrática organización obrera encontró apoyos entre los trabajadores industriales de las ciudades vascas, los artesanos madrileños y los campesinos de Castilla. Posteriormente, obtuvo un respaldo importante en Granada, la provincia que Brenan considera la más “castellana” de Andalucía. Es más difícil encontrar explicación al grado de influencia que los socialistas llegaron a tener entre los rebeldes mineros de Asturias y de Río Tinto, dos zonas donde el influjo anarquista era muy intenso, aunque es probable que esta influencia se debiera más a factores coyunturales que a las tendencias reformistas de los propios mineros. En cualquier caso el crecimiento fue lento, y a finales de siglo, más de diez años después de su fundación, la UGT contaba con menos de 25.000 afiliados. La UGT tropezó también con la hostilidad local en sus

gestiones organizativas, pero en general inspiró pocos recelos en el gobierno y escapó a la represión que acabó con la Federación de Trabajadores.

A los anarquistas europeos de finales del siglo XIX les parecía que las clases dirigentes llevaban las riendas del poder más firmes que nunca. Una opresiva atmósfera de egotismo burgués dominaba la vida cotidiana. Todo parecía tener una apariencia opaca, gris, insípida, y los pocos europeos que demostraban cierta sensibilidad eran rechazados por la autosuficiencia y la banalidad imperantes. El fantasma de la rebelión, neutralizado por la sólida estabilidad del capitalismo de fin de siglo, optó por ocultarse entre los estratos más bajos de la sociedad. El credo poético del trastorno sensorial de Arthur Rimbaud, el provocador arte "lumpen" de Toulouse-Lautrec o la ironía con que Oscar Wilde y Gauguin ridiculizaban los convencionalismos de la clase media, reflejaban el interés de escritores y artistas por ridiculizar la burguesía y la inerte complacencia de la época. Un anarquismo literario y artístico surgió entonces entre gente como Barrès, Mallarmé, Valéry o Steinlen, cuyos generosos ideales estaban salpicados de una rabia furiosa contra la mediocridad burguesa. El efecto que estos rebeldes tuvieron sobre la vida social de su tiempo fue prácticamente nulo. En el mejor de los casos, provocaron cierto escándalo entre los burgueses, aunque por lo común fueron acogidos en medio de la incomprensión y la indiferencia.

También había individuos cuyo afán provocador acababa por arrastrarlos a la acción terrorista. Estos hombres no pasaron desapercibidos. Normalmente se trataba de auténticos desheredados que provenían de las capas más bajas de la clase trabajadora y de la pequeña burguesía y cuyas vidas estaban condenadas a la pobreza y la injusticia. Unos pocos —por ejemplo Auguste Vaillant, que hizo estallar una bomba en la cámara de diputados francesa— pertenecían a grupos anarquistas. La mayoría, como es el caso del francés Ravachol, actuaban por su cuenta. Aunque no pertenecían a ningún grupo ni organización, se llamaban a sí mismos "anarquistas", ya que el término se había convertido por aquella época en un sinónimo de "terrorista". La identificación del anarquismo con el terrorismo se debió, más que a los primeros atentados, al nuevo énfasis que

iba a tomar entre los círculos libertarios la tesis política de “la propaganda por el hecho”.

La desaparición de la Internacional bakuninista después del Congreso de Verviers de 1877 dejó tras de sí pequeños grupos anarquistas diseminados por toda Europa. Muchos de ellos carecían de una estrategia para llevar a cabo el cambio revolucionario; sus miembros sólo podían oponerse al atrincherado poder del Estado con sus escritos y discursos; y un posible acuerdo con los emergentes movimientos socialistas era, por otro lado, impracticable. El socialismo, con una estructura claramente autoritaria y unos objetivos reformistas, parecía encarnar el pedestre espíritu burgués de la época.

En medio de esta atmósfera de frustraciones y creciente desesperanza, una audaz intervención llevada a cabo en Rusia iba a iluminar el camino. El primero de marzo de 1881, a orillas del Canal Catalina en San Petersburgo, una pequeña organización terrorista, “La Voluntad del Pueblo”, atentó contra el zar Alejandro II. El grupo de jóvenes revolucionarios, un grupo heterogéneo desde el punto de vista político, había sentenciado a muerte públicamente al zar en 1879; tras dos años de auténtico acoso, había cumplido su objetivo. La pugna entre un puñado de terroristas y el sólido Estado ruso, que había llevado al zar al borde de un colapso nervioso, fascinó al mundo entero.

El asesinato electrizó a toda Europa. Poco tiempo después, cuando fue convocado en Londres el Congreso internacional de anarquistas y de socialistas de extrema izquierda, uno de los principales asuntos que se debatieron fue el de “la propaganda por el hecho”. Los delegados llegaron a la conclusión de que “un acto ejecutado contra las instituciones tenía mayor influencia sobre las masas que los panfletos y los discursos”. Buena parte de la discusión se centró en la “Química”. Se determinó que “la técnica y las ciencias químicas habían prestado un gran servicio a la causa revolucionaria y estaban destinadas a prestar servicios aún mayores”. Por tanto se recomendó a los grupos afiliados y a los simpatizantes que se “dedicaran al estudio de estas ciencias”.

Entre los partidarios de la nueva táctica se encontraba Peter Kropotkin, un joven príncipe ruso que tras romper relaciones con los de su clase se

había incorporado al movimiento anarquista. Aunque tenía un temperamento muy distinto al de Bakunin, Kropotkin compartía la profunda humanidad de su predecesor. A pesar de su ascendencia aristocrática, pasó dos años encarcelado en la sombría fortaleza de *Peter and Paul* a causa de sus ideas políticas. Su dramática evasión y su reputación como geógrafo le otorgaron fama internacional. En la época del Congreso de Londres, Kropotkin se había convertido en un destacado portavoz del "anarco-comunismo", una teoría que él había propuesto y que se oponía al predominante "colectivismo" del bakuninismo tradicional.

Bakunin, como se recordará, opinaba que los medios de vida que los individuos reciben bajo el anarquismo deben estar en justa proporción con la aportación que cada uno realiza con su trabajo. Aunque fueran a recibir el total de la remuneración por su trabajo, la cantidad debía estar determinada no por sus necesidades, sino por el trabajo ejecutado. Kropotkin no discrepa con la visión de conjunto de la sociedad libertaria de Bakunin. Él también creía en una sociedad sin Estado formada por comunas libres y descentralizadas, unidas entre sí por una serie de convenios y contratos. Lo que le diferenciaba de Bakunin era su insistencia en que inmediatamente después de la revolución, cada comuna debía ser capaz de distribuir su producción de acuerdo a sus necesidades. "La necesidad debe estar por encima de los servicios", escribió; "cada uno de los que cooperan en el aumento de la producción tiene justo derecho a una vida confortable". Este punto de vista estaba basado en la convicción de que la tecnología había avanzado hasta un punto en que las necesidades de cada uno podían ser satisfechas. La famosa máxima comunista "de cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades", sería el principio que orientaría la distribución inmediatamente después de la revolución.

Se ha afirmado que Kropotkin era partidario de una élite netamente anarquista y que rechazaba la necesidad, preconizada por Bakunin, de una estrecha conexión entre los grupos anarquistas y las organizaciones de masas. Esto no es del todo cierto. En una discusión con varios anarquistas italianos que abogaban por un tipo de organización estrictamente conspiradora, Kropotkin insistió en que los "pequeños grupos

revolucionarios” debían sumergirse en las “organizaciones del pueblo”, una opinión muy semejante a las ideas organizativas de Bakunin.

La diferencia fundamental entre los principios organizativos de Bakunin y los de Kropotkin giraba en torno a “la propaganda por el hecho”. Según observa Max Nomad,

> Esta táctica no armonizaba con los bakuninistas; ellos creían que las masas eran esencialmente revolucionarias, y por lo tanto no necesitaban de la pirotecnia terrorista para alentar su espíritu de rebelión. Todo lo que se necesitaba, según Bakunin, era una organización de conspiradores que en el momento oportuno pudiera capitalizar el potencial revolucionario de las masas. Esta concepción ya no era compartida por Kropotkin y sus camaradas, que postulaban la necesidad de una suerte de “educación” revolucionaria de las masas que se realizaría a través de actos de rebelión, o de “la propaganda por el hecho”. Originariamente este tipo de “propaganda”, tal y como fue discutido en el Congreso Internacional de Berna (1876), se refería a las reducidas tentativas de insurrección local. Algo más tarde —después que semejantes acciones hubieran demostrado su ineficacia— el término fue aplicado a los actos de protesta individual.

Ninguna de estas ideas influyó significativamente en el anarquismo español hasta bien entrada la década de 1880, cuando la traducción de las obras de Kropotkin estuvo disponible y al alcance de todos. Por esa época, los anarco-comunistas italianos emigrados a Barcelona comenzaron a promover una aproximación a una forma más genuina de organización, y a subrayar la importancia de las acciones terroristas. Las duras controversias entre los anarquistas españoles sobre las nuevas ideas y tácticas precipitaron la ruptura de la Federación de Trabajadores. Cuando la prometedora Federación de Trabajadores se disolvió en 1888, su función fue asumida por una organización estrictamente anarquista y por los sindicatos libertarios, ideológicamente más flexibles. La primera, la Organización Anarquista de la Región Española, se fundó en septiembre de 1888 y estaba integrada por

varios movimientos libertarios, de tendencia anarco-comunista. Las bases de este movimiento estaban organizadas en torno a la *tertulia*: grupo tradicionalmente hispánico, formado por un conjunto reducido de amigos íntimos que se reunían diariamente en el café preferido para discutir e intercambiar todo tipo de opiniones.

Los grupos anarquistas eran por lo general más numerosos, y sin duda más inestables. Los anarquistas bautizaron algunos de sus grupos con nombres que expresaban sus nobles ideales (“Ni Rey Ni Patria”, “Vía Libre”), su fervor revolucionario (“Los Rebeldes”), o su sentido de la fraternidad (“Los Afines”). Al igual que los tertulianos, estos grupos solían reunirse en cafés para discutir ideas y planear actividades. Grupos similares a éstos se habían formado ya espontáneamente en los días anteriores a la Internacional, pero ahora la nueva organización anarquista había decidido conscientemente convertirlos en su forma básica de organización. En décadas posteriores, tales grupos reaparecerían en la FAI en forma de grupos de afinidad, y tendrían una estructura más definida. La mayoría de estos grupos no estaban involucrados en la acción terrorista; sus actividades se limitaban a la propaganda ordinaria y a la cuidadosa y no menos indispensable labor de reclutamiento e introducción en la organización de nuevos simpatizantes.

El movimiento sindicalista, por otro lado, centraba sus energías en la lucha económica. Varios de estos funcionarios, anticipándose a la disolución de la Federación de Trabajadores, habían decidido conservar una relación informal, que cristalizaría en 1888 con el Pacto de Unión y Solidaridad de la Región Española. Con el restablecimiento del movimiento obrero en 1891, el Pacto de Unión y Solidaridad convocó su primer Congreso en marzo, reuniendo tanto a socialistas como a anarquistas. Aunque el congreso se celebró en Madrid, la nueva organización era fundamentalmente un movimiento catalán, con influencias del anarquismo colectivista y del sindicalismo militante.

El Pacto de Unión y Solidaridad se malogró casi desde sus inicios, al nacer en una época en que se había intensificado la actividad terrorista en España. Aunque en la década de 1880 tampoco habían faltado los atentados con bombas ni los asesinatos, éstos habían constituido episodios aislados en

medio de la tremenda lucha de clases que había tenido lugar entre los sindicatos y los patronos. Las explosiones que inauguraron la década de 1890 eran un asunto completamente diferente. Los atentados pasaron al primer plano de la contienda, y en ciudades como Barcelona parecían destinados a convertirse en un fenómeno permanente. La primera de estas explosiones se produjo el primero de mayo de 1891, durante una huelga general que reivindicaba la jornada laboral de ocho horas y que había sido convocada por el Pacto de Unión y Solidaridad.

La huelga comenzó de forma pacífica, con un multitudinario acto en el Teatro Tívoli de Barcelona, seguido de una manifestación por las Ramblas que finalizó en el palacio del gobernador civil. Al día siguiente, sin embargo, los acontecimientos comenzaron a tomar dimensiones más serias. Varias fábricas se unieron a la huelga y se produjeron violentos enfrentamientos entre los obreros y la policía. El gobierno respondió a la situación de la forma habitual: declarando la ley marcial. Al día siguiente, una bomba estalló en la sede del Fomento del Trabajo Nacional (organización que designaba, eufemísticamente, a la poderosa y reaccionaria asociación de industriales de Barcelona).

La huelga fue erradicada con violencia; en adelante, los atentados pasarían a ser un rasgo común de la lucha obrera en Barcelona. Aunque las explosiones no ocasionaban grandes daños materiales, después de los atentados siempre se producían detenciones indiscriminadas y torturas. Normalmente, la regulación y colocación de los explosivos estaban planeadas de forma que no causaran víctimas. La intención de los terroristas era más la de asustar que la de provocar muertes. Lo que nunca podrá saberse con exactitud es cuántos de esos atentados fueron realizados por los anarquistas —quienes protestaron por las injurias que las autoridades infringieron a los trabajadores militantes— y cuántos se debieron a las actividades de agentes provocadores pertenecientes a la organización del Fomento o a la policía.

La creciente tendencia del anarquismo español hacia el terrorismo llegó a su punto más alto con un episodio relacionado con el malestar agrario y que pasaría a los anales de la historia del movimiento campesino andaluz.

Las ideas anarquistas habían arraigado en el famoso distrito vinícola a principios de la década de 1870, y, como ya hemos visto, consiguieron resistir durante largos años los embates de la represión que había iniciado Serrano. Mucho tiempo después de que en otras partes el movimiento hubiera decaído hasta quedar reducido a pequeños grupos aislados, los panfletos y periódicos enviados por los militantes que habían emigrado a América mantenían vivas las ilusiones de la gloriosa primavera de 1873. Las persecuciones que sucedieron a las investigaciones sobre la Mano Negra no lograron erradicar la actividad de los grupos anarquistas del distrito. Por el contrario, la ferocidad de la Guardia Civil originó un sentimiento de rabia y frustración reprimida, que iba a encontrar salida al reanudarse la actividad radical.

El resurgimiento comenzó en 1890. El primero de mayo de ese año, grandes manifestaciones de miles de obreros y campesinos que celebraban desafiantes el Día de los Trabajadores recorrieron toda Andalucía. Las autoridades, alarmadas, tomaron represalias: varias bombas fueron convenientemente "descubiertas" en la redacción de *El Socialismo*, el periódico anarquista de Cádiz, lo que sirvió como excusa para emprender una nueva ola de arrestos. Las persecuciones continuaron hasta el año siguiente, cuando las autoridades, invocando la desacreditada leyenda de 1833, encarcelaron a 157 anarquistas y militantes obreros bajo la acusación de pertenecer a la Mano Negra. Los ultrajados trabajadores esperaron durante cerca de seis meses antes de responder a ésta y otras provocaciones.

Hacia la medianoche del 8 de enero de 1892, una partida de cerca de 500 hombres, formada por trabajadores viñateros, peones y algunos artesanos, entraron en Jerez al grito de "¡Viva la anarquía!", "¡Muerte a la burguesía!", "¡Viva la revolución social!". Iban armados con guadañas, azadas y las armas de fuego que habían podido conseguir. Afuera, en los llanos de Gallina, demorándose por los caminos que llevaban a la ciudad, miles de hombres permanecían como fuerza de reserva, aunque estaban demasiado dispersos y probablemente demasiado acobardados para tomar parte en el asalto.[11] Lo que los manifestantes pretendían conseguir exactamente al entrar en la ciudad no estaba demasiado claro. Se había producido una gran agitación en toda la zona, y varios forasteros de aspecto

sospechoso —entre ellos un joven conocido como “el madrileño”— habían surgido de entre los trabajadores de las viñas, exhortándolos a prepararse para la “revolución social”.[12] Era evidente que los propietarios de los viñedos buscaban la ocasión de un enfrentamiento para sofocar la inquietud reinante.

Una vez dentro de la ciudad, los manifestantes se dividieron en pequeños grupos. Desorientados y confusos, tan sólo representaban una verdadera amenaza para los escasos transeúntes despistados que cayeron en sus manos. Un grupo se dirigió a la cárcel de Jerez con el objeto de liberar a los militantes encarcelados bajo la acusación de pertenecer a la Mano Negra. Un solo disparo, que al parecer fue hecho por la hija del alcaide, los dispersó. Otros grupos recorrían las calles de la ciudad en busca de “los burgueses”. Unas cuantas personas bien vestidas fueron increpadas e insultadas y sus manos examinadas para ver si estaban encallecidas. En el curso de estas acometidas, dos tenderos resultaron muertos tras ser confundidos con enemigos de clase.

Mientras ocurrían todos estos desmanes, la Guardia Civil y la caballería habían sido situadas estratégicamente por toda la ciudad, a la espera de órdenes para intervenir. Las autoridades policiales, por lo que parece, estaban al corriente de todo: de los miles de campesinos en los llanos de Gallina, de la marcha sobre Jerez y de los grupos de hombres rondando por las calles desiertas. Pero nada hicieron para contenerlos. Cuando se habían producido suficientes “incidentes” como para justificar una severa represión, la Guardia Civil y la caballería arremetieron directamente contra los manifestantes, quienes después de algunos enfrentamientos se dispersaron velozmente hacia los campos. A pesar de que en todo el suceso no se registraron incidentes verdaderamente importantes, la policía actuó con una contundencia desmesurada, como si de una insurrección a gran escala se tratara. Cientos de manifestantes fueron cercados y apaleados salvajemente. Dieciséis personas fueron procesadas y condenadas a penas que oscilaban entre diez años de prisión y cadena perpetua. En una demostración de arrogancia, las autoridades enjuiciaron a Fermín Salvochea —el venerado “santo” del anarquismo— ante un tribunal militar, bajo la acusación de haber instigado la sublevación, a pesar de que mientras se

desarrollaban los hechos, Salvochea se encontraba encarcelado en la prisión de Cádiz. Con la mayor desvergüenza, los oficiales del tribunal lo sentenciaron a doce años de presidio. Unas semanas más tarde, el 16 de febrero, los anarquistas Lamela, Busique, Lebrijano y Zarzuela fueron conducidos a la plaza mayor de Jerez y ejecutados ante una inmensa multitud silenciosa. Murieron con un grito desafiante: “¡Viva la anarquía!”. Antes de ser ejecutado, Zarzuela profirió unas últimas palabras que resultarían proféticas: “¡Pueblo de Jerez!”, gritó desde el patíbulo, “¡Que no se diga que morimos como cobardes! ¡A vosotros os toca vengarnos de esta nueva inquisición!”.

Tras la represión de Jerez, la actividad terrorista alcanzó su punto álgido: la ejecución de los cuatro anarquistas exacerbó los ánimos de los revolucionarios de todo el país. La consigna de Zarzuela no fue olvidada. Siete meses más tarde, en venganza por las ejecuciones de Jerez, un joven anarquista barcelonés intentó asesinar al general Martínez Campos, el oficial cuyo pronunciamiento había preparado el terreno para la llegada de Alfonso XII, y que en esos momentos ocupaba el puesto de Capitán General de Cataluña. El general escapó milagrosamente a la agresión, pero la explosión provocó la muerte de un soldado y de cinco transeúntes. La policía detuvo de inmediato al autor del atentado; se trataba de Paulino Pallás, un joven anarquista andaluz que había sido reclutado en la Patagonia por el famoso anarquista italiano Errico Malatesta. El andaluz fue juzgado por un tribunal militar y fusilado. La conducta de Pallás durante el juicio fue desafiante en extremo. Antes de que las descargas pusieran fin a su vida, repitió el amenazador grito que se había escuchado en el sur: “¡La venganza será terrible!”.

La amenaza se convirtió en realidad antes de que finalizara ese mismo año. El día 7 de noviembre, en la noche en que se inauguraba la temporada de ópera en Barcelona, dos bombas fueron arrojadas desde la galería del Gran Teatro del Liceo a los miembros de las familias más notables de la ciudad. Una de las bombas estalló, causando la muerte a veintidós personas e hiriendo a otras cincuenta. El pánico se apoderó de la burguesía. La policía, a la que se había conferido plenos poderes, clausuró los centros de trabajadores y efectuó redadas en las casas de todos aquellos que fueran

sospechosos de pertenecer a alguna organización radical. Centenares de personas fueron arrestadas y encerradas en los calabozos del castillo de Montjuïc, la prisión militar situada en la montaña que domina el puerto y los barrios obreros de Barcelona. Cinco anarquistas inocentes fueron sentenciados a muerte y ejecutados.

El verdadero autor del atentado, Santiago Salvador, no fue descubierto hasta dos años después. Salvador había sido amigo de Pallás, y se había decidido a responder a su llamada de venganza. Después de una frustrada tentativa de suicidio al ser arrestado, Salvador logró escapar a las torturas que la policía normalmente infringía a los presos políticos, fingiendo arrepentirse de sus actos y simulando una repentina conversión a la fe católica. Su ejecución fue postergada durante un año mientras algunos jesuitas y damas de la alta sociedad solicitaban al gobierno una conmutación de la sentencia. Cuando el joven anarquista fue finalmente llevado al cadalso, abandonó todo fingimiento y murió al grito de: “¡Viva la anarquía!”.

La muerte de Salvador fue seguida de más atentados, arrestos y ejecuciones. Para reprimir esta nueva oleada terrorista, el gobierno creó una unidad especializada, la Brigada Social, integrada por delincuentes comunes reconvertidos en policías. Este nuevo cuerpo policial esperaba una oportunidad para enfrentarse con el movimiento anarquista y, a partir de ahí, desarticular todos los grupos de oposición al gobierno. Existen poderosas razones para sospechar que la Brigada llevó a cabo por su cuenta una de esas provocaciones, tres años después de los sucesos del Liceo.

El 7 de junio de 1896, mientras la procesión del Corpus Christi desfilaba por la calle de Cambios Nuevos para hacer su entrada en una iglesia, una bomba fue arrojada desde la ventana de un piso alto. La procesión estaba encabezada por algunas de las autoridades más notables de la ciudad, como el gobernador de Cataluña, el obispo de Barcelona o el nuevo capitán general, Valeriano Weyler y Nicolau, cuya actuación en Cuba dos años más tarde merecería el oprobio del mundo entero. A pesar del tentador objetivo que constituían los que presidían la procesión, la bomba cayó sobre la gente que iba detrás, matando a once personas e hiriendo a cuarenta. Nunca se descubrió al asesino, pero en cambio el suceso

proporcionó a Weyler la excusa para arremeter no sólo contra anarquistas y militantes obreros, sino incluso contra republicanos y gentes de ideas cercanas al anticlericalismo. Más de cuatrocientas personas fueron arrojadas a los calabozos de Montjuïc, quedando a merced de la Brigada Social.

La revelación por parte de la prensa de las torturas a que fueron sometidos estos prisioneros causó una gran sensación en todo el mundo. Una de las víctimas, Tárrida de Mármol, un anarquista perteneciente a una prestigiosa familia catalana y director de la Academia Politécnica de Barcelona, relató sus experiencias en el libro *Les inquisiteurs de l'Espagne*; el libro causó el horror de la opinión pública extranjera. Las torturas fueron de una crueldad tal, que muchos prisioneros fallecieron antes de ser procesados. A algunos se les obligaba a caminar sin descanso durante días enteros, a otros les colgaron de la puerta de las celdas durante horas mientras les retorcían con cuerdas los genitales, y a otros les quemaron y les arrancaron las uñas de cuajo. En la primavera de 1897, después de pasar más de seis meses en prisión, noventa presos fueron llevados a juicio. Ocho hombres fueron condenados a muerte, y aunque todos eran inocentes cinco de ellos fueron ejecutados. El vengativo Cánovas ordenó arrestar de nuevo a los prisioneros que habían sido absueltos y los envió al penal colonial africano Río de Oro, el equivalente español a la francesa Isla del Diablo.

La tentativa represora de Weyler, cuya intención era liquidar la oposición en Barcelona, fracasó por completo. No sólo no fue capaz de acabar con el anarquismo, sino que consiguió que en todo el mundo, desde Europa hasta América del Sur, se produjera una respuesta masiva. Se convocaron manifestaciones de repulsa en grandes ciudades como París o Londres. Destacadas personalidades de todo el continente expresaron su indignación ante la barbarie de la "España inquisitorial". Los últimos años del siglo XIX fueron un período de gran malestar para un pueblo enfurecido por las evidentes muestras de injusticia.

Finalmente, el 8 de agosto de 1897, unos meses después de los juicios de Montjuïc, el terror alcanzó al jefe del gobierno. Un joven anarquista italiano, Michele Angiolillo, acorraló a Cánovas en la terraza de un balneario del País Vasco y lo mató de un disparo. Angiolillo fue condenado a morir en el garrote vil. Sin embargo, el frustrado atentado del anarquista

Sempau contra el teniente Narciso Portas (uno de los oficiales de la Guardia Civil que había dirigido las atrocidades de Montjuïc) concluyó de una manera bien diferente. A pesar de que el atentado contra Portas ocurrió un mes después de la muerte de Cánovas, los sucesos de Montjuïc habían causado una conmoción tan honda que ningún juez se atrevió a condenar al frustrado asesino, y éste quedó en libertad.

Los hombres que ejecutaban estos atentados anarquistas (que era como en aquella época se llamaba a las acciones terroristas) no eran ni tan crueles ni tan inhumanos como podían serlo Weyler o Porta, quienes parecían disfrutar con la violencia. Los primeros atentados de 1891 y 1892 habían sido actos relativamente inofensivos, cuyo objetivo no era causar ninguna víctima sino quebrar la complacencia burguesa y estimular el espíritu de rebelión de los trabajadores. Los letales atentados que llegaron después fueron la reacción a las atrocidades cometidas por el Estado y por la policía. Se había pasado de unas acciones inofensivas, casi de opereta, a desesperados actos de venganza. A pesar del terrible precio que se pagó en vidas y en sufrimiento, estos actos terroristas sirvieron para desenmascarar la fachada "liberal" del *turnismo* y poner de manifiesto el indiferente despotismo que se escondía detrás del remedo del gobierno parlamentario de Cánovas.

De una tradicional postura de generoso humanismo, los anarquistas se habían visto arrastrados a un terrorismo vengativo. Como ya hemos visto, el cambio comenzó cuando los internacionalistas, prácticamente diezmados tras la represión de Serrano, establecieron el "Núcleo Vengador Ejecutivo". Cuando la Sección cordobesa planteó enérgicas quejas al Consejo Federal respecto a la cuestión de la represión policial, la respuesta que recibió fue bien significativa: "Tomad nota de los nombres de vuestros perseguidores para cuando llegue el día de la revancha y la justicia". En esa época, el "Núcleo Vengador Ejecutivo" y la Sección cordobesa apenas equilibraron el juego; el gobierno y la policía les llevaba la delantera. Pero llegaría el día en que las fichas reunidas por la policía serían equiparables a las listas que confeccionaban sus oponentes; el día en que los pelotones de ejecución de la falange encontrarían su reflejo en los de la FAI.

Con todo, uno se ve obligado a preguntarse si todo este sangriento conjunto de imágenes, tan habitual en la mayoría de los testimonios de la Guerra Civil, nos da una idea precisa del anarquismo español. En un período en el que incluso el socialismo español sucumbía ante el espíritu burgués de la década de 1890, el movimiento anarquista contaba todavía con miembros cuya espontánea humanidad y solidaridad ante al sufrimiento de sus semejantes justificaban ampliamente la calificación de "santos". Hay que admitir que fue la misma profunda humanidad que transformó a Pallás en un terrorista, la que convirtió al gran anarquista andaluz, Fermín Salvochea, en uno de esos "santos". Los dos hombres eran equivalentes, y no opuestos. La "santidad" de Salvochea, en cualquier caso, tenía dimensiones bien terrenales.

Fermín Salvochea era un hombre de amplia cultura, un racionalista y un humanista que había sido preparado por sus padres para la vida de los negocios, y no para obtener un puesto en la Iglesia o en la Universidad. Nació el primero de marzo de 1842 en Cádiz, donde estaba situado uno de los puertos más importantes y prósperos de la España atlántica, y donde su padre había acumulado una considerable fortuna. A los quince años fue enviado a Londres para que aprendiera inglés y completara su preparación para el mundo de los negocios. Durante los cinco años que permaneció en Londres y Liverpool, Salvochea tomó contacto con la literatura radical. Las críticas a la religión de Thomas Paine y las teorías socialistas de Robert Owen le influyeron profundamente. Antes de abandonar Inglaterra, en 1864, el joven Salvochea se había convertido en un ateo convencido y en un comunista. De vuelta en Cádiz pasó a tomar parte activa en el movimiento federalista, llevando una forma de vida austera y consagrando la mayor parte de su fortuna a la causa revolucionaria.

Pronto participó en destacadas e intrépidas conspiraciones. En 1866, por ejemplo, tomó parte en una trama cuyo objetivo era la liberación de unos artilleros que estaban encarcelados por su participación en una rebelión y que iban a ser deportados a Manila. Más tarde trató de promover un levantamiento militar en Cantabria. Durante el período de inestabilidad que comenzó con la salida de Isabel II del país, Salvochea fue elegido miembro de la comuna revolucionaria de Cádiz y segundo comandante del

destacamento más radical de la milicia republicana. Cuando las fuerzas gubernamentales atacaron a la republicana Cádiz, Salvochea, como era característico en él, resistió hasta el final, tratando de defender la ofensiva de las fuerzas invasoras con tan sólo un pequeño grupo débilmente armado.

Su coraje era extraordinario. Cuando ya todo hacía pensar que la resistencia era inútil, Salvochea disolvió la milicia y se rezagó para asumir la responsabilidad de la sublevación. Su comportamiento le hizo ganarse el respeto incluso de aquellos que eran sus enemigos. En lugar de ser ejecutado, Salvochea fue enviado a la fortaleza de San Sebastián en calidad de prisionero de guerra. En esa época ya era idolatrado en Cádiz por miles y miles de pobres. Unos pocos meses después, cuando permanecía aún en prisión, Salvochea fue elegido diputado a Cortes por Cádiz. El gobierno de Madrid rechazó la elección, le negó su escaño y lo mantuvo en prisión. La liberación le iba a llegar con la amnistía de febrero de 1869. Ocho meses más tarde, cuando le fue ofrecida la corona española a Amadeo de Saboya, Salvochea se echó de nuevo al monte; marchó, al mando de seiscientos republicanos armados, a reunirse con otras fuerzas de Jerez y de Ubrique. El enfrentamiento con el ejército gubernamental se produjo cerca de Alcalá de los Gazules. Después de tres días de combate, Salvochea y los suyos fueron derrotados.

Los rebeldes se dispersaron. Salvochea escapó a Gibraltar y de allí viajó a París, donde se introdujo en los círculos radicales vinculados a los periódicos *La Revue* y *La Repell*. Después de una breve estancia en Londres, pudo regresar a Cádiz gracias a la amnistía de 1871 y fue elegido alcalde de la ciudad. El levantamiento cantonalista de 1873 encontró a Salvochea implicado en un infructuoso intento de incorporar a Cádiz al movimiento revolucionario.[13] Tras sufrir una nueva derrota, Salvochea se enfrentó a un tribunal militar en Sevilla, acusado de rebelión. En aquella ocasión fue condenado a cadena perpetua en el penal de la colonia africana de Gomera, y fue a partir de este momento cuando, por su ejemplar conducta, comenzó a conocérsele como el “Cristo anarquista”. Salvochea soportó la condena con calma y entereza, compartiendo todo cuanto recibía de su familia con sus compañeros de prisión. Cuando el gobernador le leyó el decreto del indulto que su influyente madre, auxiliada por la

municipalidad de Cádiz, había conseguido, Salvochea rompió el documento y declaró que sólo había dos formas de que él dejara la prisión: o bien por una amnistía general, o bien por un motín. Nueve meses más tarde consiguió evadirse y se estableció en Tánger.

Hasta su encarcelamiento en Gomera, Salvochea no era un anarquista, aunque sí sentía una gran afinidad por el movimiento libertario. Perteneció a la Internacional casi desde la primera época; sin embargo, fue en el retiro del presidio colonial donde comenzó a examinar con mayor detenimiento las teorías de Bakunin. En poco tiempo se convirtió en uno los más fervientes propagandistas del anarquismo en España, movimiento al que pertenecería hasta el fin de su vida.

Cuando Salvochea regresó a España en 1885, tras la muerte de Alfonso XII, Andalucía vivía una época de intensa agitación anarquista. La prensa libertaria volvía a circular legalmente, y Salvochea fundó *El Socialismo* en Cádiz, que distribuyó, junto con las ideas del movimiento, entre los trabajadores de los viñedos y los braceros del sudoeste de España. Fue arrestado en repetidas ocasiones, pero sus enérgicas defensas ante los tribunales resultaron contraproducentes para el gobierno. Su capacidad y su talento prestaron un gran servicio al movimiento; al parecer fue Salvochea quien planeó las grandes manifestaciones del Primero de Mayo que surcaron toda Andalucía en 1890 y 1891. El caso de la Mano Negra, seguido por el "hallazgo" de dos bombas en las oficinas de *El Socialismo*, desencadenaron nuevos arrestos policiales por toda la región, y en el año 1892 Salvochea se vio de nuevo en la cárcel. A pesar de que durante la sublevación de Jerez Salvochea se encontraba preso en la cárcel de Cádiz, un tribunal militar lo sentenció a doce años de presidio por su presunta actividad inductora. Los tribunales civiles rehusaron revisar su causa, y Salvochea, a su vez, se negó a participar en procedimientos conducidos por jueces militares. Encarcelado en Valladolid, Salvochea tuvo que soportar condiciones aún más duras que las que había padecido en el penal de la colonia africana. Estuvo confinado en régimen de incomunicación y se le negó el derecho a escribir cartas. El momento más crítico llegó cuando Salvochea se negó a obedecer la orden del alcaide que regulaba la obligatoriedad de la asistencia a misa. Como castigo, fue encerrado en un

húmedo calabozo subterráneo durante meses. Salvochea, muy debilitado y sin ninguna esperanza ya de liberación, trató de quitarse la vida; este gesto —tan profundamente humano y comprensible dadas las circunstancias— inquietó al alcaide, y desde ese momento las condiciones de vida en la cárcel mejoraron. Al poco tiempo, Salvochea fue trasladado a la prisión de Burgos, donde volvió a retomar su actividad intelectual; volvió a escribir e incluso tradujo un libro de astronomía.

En 1899 Salvochea fue indultado gracias a una amnistía general que siguió a las protestas por las atrocidades de Montjuïc. Regresó a Cádiz, donde fue acogido con gran entusiasmo, y reanudó sus actividades dentro del movimiento anarquista. Por entonces ya estaba cerca de los sesenta años y su salud estaba quebrantada como consecuencia de su vida en prisión, de modo que se dedicó a escribir y a traducir. Su último trabajo fue una traducción de *Campos, fábricas y talleres*, de Peter Kropotkin, uno de los libros anarquistas que con mayor lucidez analiza el papel liberador de la tecnología moderna.

Fermín Salvochea murió en Cádiz el 8 de septiembre de 1907, en la misma ciudad resplandeciente que le había visto nacer y a la que tan profundamente amó. Más de 50.000 personas, incluyendo los cientos que llegaron de toda España, siguieron al féretro hasta el cementerio. La mayor parte de esta inmensa manifestación estaba integrada por trabajadores de las distintas zonas de Cádiz y Jerez, que sentían una gran devoción por este hombre que parecía encarnar sus esperanzas de un futuro mejor. Mientras el féretro era lentamente depositado en la tumba, el inmenso grupo de gente prorrumpió en un espontáneo y unánime “¡Viva la anarquía!”.

Salvochea fue un hombre de una generosidad extraordinaria. Manuel Buenacasa, anarquista e historiador del movimiento, se refiere a él como “nuestro santo mayor”, y recuerda que sus amigos solían verlo sin sombrero o sin abrigo, porque se los había dado a algún necesitado. Nunca se casó y vivió muy sencillamente. Pero no aspiraba a la ascética mortificación de la carne, ni exaltaba las privaciones de la austeridad. Era un hombre tranquilo y rara vez parecía triste o sombrío. Sus relaciones con sus amigos eran afectuosas, y con sus enemigos desplegaba una ecuanimidad que rayaba la ironía.

Terroristas como Paulino Pallás y “santos” como Salvochea seguirían existiendo hasta la década de 1930 como ejemplo de la doble personalidad del anarquismo español. A través de esta curiosa mezcla de pistolerismo y humanismo, se expresaría la contradicción fundamental que existía dentro del movimiento anarquista y que en los períodos de crisis se resolvía por medio de una fervorosa adhesión a la libertad y de un profundo respeto por la individualidad. Quizá ningún otro movimiento haya sabido aglutinar tendencias tan conflictivas, de un modo que abastecía el entusiasmo y la dedicación de la gente más desposeída de la sociedad española. Únicamente los profundos cambios que sufriría la historia de España hasta nuestros días, serían capaces de borrar la memoria de los santos y terroristas de la leyenda popular de la península. Para bien o para mal, la tradición influiría profundamente en las personalidades más destacadas del movimiento, e iba a determinar su trayectoria durante al menos dos generaciones.

# 7: Anarcosindicalismo

## La nueva agitación

En los últimos años del siglo XIX, el anarquismo libertario en España prácticamente había dejado de existir como movimiento organizado. La ofensiva policial contra el terrorismo, unida a la aplicación de una legislación represiva, provocó, en 1896, la disolución del Pacto de Unión y Solidaridad. La Organización Anarquista de la Región Española pasaba también por un momento complicado. Los trabajadores comenzaron a abandonar las organizaciones libertarias con la misma rapidez con la que se habían afiliado a ellas unos años atrás. En Córdoba, por ejemplo, después del prometedor resurgimiento que había tenido lugar en la década de 1880, tan sólo unos pocos miembros pudieron ser persuadidos para asistir a la celebración del Primero de Mayo de 1893. En los años siguientes, las reuniones fueron totalmente abandonadas; de nada sirvió que los líderes anarquistas variaran sus posiciones y se manifestaran contrarios al terrorismo. Ya en 1891, Kropotkin advertía que aunque “el desarrollo del espíritu revolucionario progresa enormemente a través de actos heroicos individuales […], no son estos actos heroicos los que hacen las revoluciones”. Alrededor del año 1900, salvo algunos destacados anarquistas que seguían apoyando “la propaganda por el hecho”, la mayoría había abandonado los métodos terroristas como estrategia de acción directa.

Sin embargo, “la Idea” estaba lejos de desaparecer, y el terrorismo español nunca interrumpiría por completo su actividad. Las ideas libertarias comenzaron a arraigar entre los intelectuales. Destacados escritores y

pintores españoles, tales como el novelista Pío Baroja o el joven artista Pablo Picasso, comenzaron a sentirse atraídos por “la Idea”; otros intelectuales, como los ingenieros Tárrida de Mármol y Ricardo Mella, se incorporaron activamente al movimiento. *La Revista Social*, destacada revista teórica anarquista fundada en 1896, se convirtió en un amplio foro para diferentes profesionales del mundo universitario, de las artes y de la ciencia. Desencantados tras el fracaso de las tácticas terroristas, muchos anarquistas comenzaron a hacer especial hincapié en la importancia de la educación como medio para el logro de sus objetivos sociales. Este período se caracterizó por el apogeo de las escuelas libertarias y de los proyectos pedagógicos en todas las regiones del país donde se apreciaba aún cierta influencia anarquista. Probablemente el proyecto más conocido en este campo fue el de Francisco Ferrer y su Escuela Moderna, que ejerció una considerable influencia en la educación catalana en particular, y en las técnicas experimentales de la enseñanza en general. Los constantes ataques y persecuciones de los que fue objeto Ferrer en los años siguientes proporcionan un buen ejemplo de los problemas y obstáculos que tenía que afrontar cualquier intento de reforma en la sociedad española. Para defender y promover los conceptos de la Escuela Moderna, Ferrer se vio obligado a ir más allá de su vocación de pedagogo; su trayectoria y su trágico destino se convertirían en acontecimientos de gran relevancia política en los primeros años del siglo XX.

Cuando se rastrea en la biografía de Francisco Ferrer i Guardia,[14] es difícil encontrar algún antecedente que explique su vocación pedagógica o su posición iconoclasta. Ferrer nació el 10 de enero de 1859 en Alella, a veinticuatro kilómetros de Barcelona. Sus padres, que profesaban con devoción la fe católica, educaron a su hijo en las costumbres tradicionales de los campesinos medianamente acomodados (su padre era propietario de una pequeña viña); no hay evidencias de que el niño mostrara signos de rebeldía antes de que, a la edad de quince años, fuera enviado a trabajar en una tienda de Barcelona. El dueño, un militante anticlerical, probablemente ejerció una gran influencia sobre el joven empleado. En cualquier caso, al cumplir veinte años Ferrer se declaró republicano y anticlerical y se

incorporó a la francmasonería, el tradicional refugio del pensamiento liberal y la conspiración política en España.

El joven catalán atrajo la atención de Manuel Ruiz Zorrilla, el radical republicano que había sido primer ministro durante el reinado de Amadeo de Saboya y que en 1885, conspiraba vehementemente desde su exilio parisiense. Ferrer trabajó como empleado ferroviario, cubriendo el trayecto de Barcelona a la frontera francesa, circunstancia que aprovechó para la peligrosa tarea de pasar refugiados políticos de España a Francia. También actuó como correo de Ruiz Zorrilla, ayudándolo en sus esfuerzos por captar a oficiales del ejército para la preparación de un golpe republicano.

En septiembre de 1886, participó en el pronunciamiento republicano del General Villacampa, el último intento de convertir a España en una república en los próximos 50 años. Durante la frustrada insurrección, Ferrer se encontraba en París ocupando el puesto de secretario de Ruiz Zorrilla.

Fue en la capital francesa donde Ferrer comenzó a distanciarse de la política pedagógica del Partido Republicano. Éste fue un paso muy importante, que marcó su evolución hacia el anarquismo, si bien Ferrer fue siempre muy cuidadoso en definirse exclusivamente como un “filósofo anarquista”, un ácrata. En ese sentido, estuvo muy influido por Anselmo Lorenzo, a quien tuvo oportunidad de conocer en París. En cualquier caso, la decisión de Ferrer de dedicar sus esfuerzos a la educación era muy acertada, si consideramos la absoluta indigencia que caracterizaba al sistema educativo de la sociedad española de entonces. Alrededor del setenta por ciento de la población española de principios del siglo XX era analfabeta. Los profesores estaban muy mal pagados, y las escuelas rurales (cuando existían) estaban ubicadas en miserables chozas, donde los niños, la mayoría descalzos y desnutridos, recibían una instrucción rudimentaria.

El programa de la Escuela Moderna de Ferrer tenía muchos elementos que ahora mismo resultarían casi convencionales, pero también incluía avances que incluso hoy día apenas se han desarrollado más allá del plano experimental. Para comprender el notable avance que significó la Escuela Moderna, debemos estudiar la situación del sistema educativo español en su conjunto.

Aunque España poseía una ley de educación universal, la mayoría de las escuelas eran dirigidas por el clero, que utilizaba brutales métodos de enseñanza y atendía preferentemente a la instrucción mecánica del dogma católico. Estos clérigos lanzaban arengas contra todo grupo político, teoría científica o tendencia cultural que no fuera del agrado de la Iglesia. La educación mixta, tolerada en el campo debido a la escasez de medios, estaba rigurosamente prohibida en las ciudades.

Ferrer se opuso a esta lúgubre institución con un programa y un método de instrucción que los curas considerarían "diabólico". Proyectó establecer un plan de estudios basado en las ciencias naturales y en un racionalismo moral, libre de todo dogma religioso e influencia política. Los alumnos recibirían una instrucción científica, pero se eliminarían las notas, los exámenes, los premios y en general todo rasgo de competitividad, de coacción o de humillación. Según palabras de Ferrer, las clases se guiarían por "los principios de igualdad y solidaridad". En una época en que en los colegios religiosos se obligaba a los alumnos "díscolos" a ponerse de rodillas cual penitentes para recibir un castigo físico, la Escuela Moderna advertía a los maestros que debían "abstenerse de infringir cualquier castigo físico o moral", bajo pena de inhabilitación permanente. La enseñanza se basaba exclusivamente en la libre voluntad espontánea de los estudiantes para adquirir conocimientos y en la adecuación del ritmo de este aprendizaje a la propia marcha de los alumnos. El propósito de la escuela era fomentar en los alumnos "una rigurosa hostilidad hacia el prejuicio", para así desarrollar "inteligencias sólidas, capaces de formarse unas convicciones propias y razonadas respecto a cualquier materia".

Para Ferrer, sin embargo, "la educación de un hombre no consiste meramente en adiestrar su inteligencia, dejando a un lado su corazón y su voluntad. El hombre, a pesar de la variedad de sus funciones, forma un todo. Presenta varias facetas, pero en el fondo es una energía única que discierne, ama y ejerce su voluntad". Una de las tareas más importantes de la Escuela Moderna, recalcaba Ferrer, consistía en reforzar esta unidad y desterrar las creencias que postulaban la "dualidad de caracteres en el ser humano: uno que aprecia la verdad y el bien, y otro que ambiciona el mal". La escuela misma debía ser un microcosmos que integrara los diferentes

aspectos y personalidades del mundo real. Por ello, Ferrer no sólo insistía en la necesidad de la educación mixta, sino también en la convivencia de alumnos procedentes de distintas clases sociales; era necesario reunir a los hijos de los obreros con los de la clase media para crear un ambiente en que los jóvenes pudieran sentirse liberados, una “escuela de emancipación que se comprometa a acabar con todo aquello que divide al hombre, los falsos conceptos de propiedad, patria y familia”. Muchas de estas ideas estaban directamente relacionadas con el anarquismo, y revelan la influencia que sobre Ferrer tuvo el pensamiento de Anselmo Lorenzo y de Kropotkin.

En septiembre de 1901, Ferrer funda la Escuela Moderna en Barcelona. Durante su estancia en París ya había trabajado como maestro. Una de sus alumnas de español, ya de avanzada edad, Ernestine Meunier, le legó a su muerte una importante cantidad de dinero. Con estos recursos se puso en marcha la primera Escuela Moderna, con un grupo formado por doce niñas y dieciocho niños. En el espacio de diez meses, el número de estudiantes había aumentado a más del doble; durante los años siguientes, cincuenta escuelas fieles a los principios de la Escuela Moderna serían fundadas por toda España; la mayoría de estas escuelas estaban en Cataluña. Ferrer, que había hecho una buena inversión en títulos con el dinero de Mlle. Meunier, reunió suficientes fondos para financiar una editorial en la que publicó pequeños libros de divulgación, a precios muy asequibles, sobre temas científicos y culturales. Estos libros se distribuyeron por toda España, especialmente entre los campesinos, braceros y obreros en general; la distribución era casi siempre llevada a cabo por los propagandistas ambulantes del anarquismo. Estos folletos permitieron que las clases más pobres de España tuvieran noticia de la actividad cultural y científica que se desarrollaba más allá de los Pirineos, hasta entonces prácticamente desconocida. Aunque de una forma más cautelosa que en París, Ferrer seguía vinculado a las ideas anarquistas, y contrató como colaboradores a algunos libertarios, como fue el caso de su amigo Anselmo Lorenzo, que trabajó como traductor en la editorial.

El crecimiento de la Escuela Moderna y la amplia difusión de sus folletos irritaron al clero. No obstante, durante años poco pudieron hacer en su contra, aparte de denunciar a las escuelas y difundir calumnias acerca de

la vida personal de Ferrer. La oportunidad para acabar con sus esfuerzos llegó finalmente en 1906, cuando Mateo Morral, perteneciente al grupo de la Escuela Moderna, arrojó una bomba contra la pareja real española. El atentado fracasó y Morral se quitó la vida. A pesar de que el joven había criticado en más de una ocasión al pedagogo catalán y a Anselmo Lorenzo por su oposición a los atentados, Ferrer y la Escuela Moderna fueron acusados de haber colaborado en la acción. Tal era en aquella época el estado de la justicia española que Ferrer permaneció encarcelado durante un año entero mientras la policía fingía estar acumulando pruebas de su complicidad en el atentado de Morral. Una revisión del caso en los tribunales civiles probó su inocencia y liberó a Ferrer, pero éste ya nunca volvería a abrir la primitiva Escuela Moderna de Barcelona.

Esta marcada preocupación por la educación no significaba, por otra parte, que el anarquismo español hubiera abandonado las tareas que tradicionalmente consideraba prioritarias: la lucha de clases y la construcción de un movimiento revolucionario. El sindicalismo iba incrementando su popularidad cada día que pasaba. La idea, aparentemente de origen francés, de que una organización económica de trabajadores —un sindicato revolucionario, y no un partido político— puede ser capaz de tomar el control de la sociedad por medio de la huelga general se remonta hasta los días de la Revolución Industrial. En la década de 1830, en Inglaterra, el movimiento *cartista* había propuesto la celebración de una "gran fiesta nacional" (eufemismo que disimulaba la llamada a la huelga general) para lograr las reivindicaciones de los trabajadores. Este atractivo concepto del cambio social pronto se desvaneció cuando el movimiento obrero inglés adquirió un carácter reformista, para reaparecer más tarde en el famoso Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores celebrado en Basilea en 1869. En esa ocasión, en un debate iniciado por la sección belga, apoyada por los delegados de España, el Jura suizo y Francia, se propuso que los sindicatos deberían aportar la estructura elemental del socialismo futuro. Eugene Hins, el delegado belga, esbozó la organización sindical como "una forma dual de organización", con una federación de "asociaciones de trabajadores" de todos los sectores industriales y otra federación de "consejos laborales" locales, regionales,

nacionales e internacionales. Esta estructura conformaría el modelo de una organización laboral de tipo sindicalista. Como hemos observado, la antigua Internacional española adoptó esta forma desde el comienzo. Las "asociaciones de trabajadores" se convirtieron en las Secciones de oficio, y los "consejos laborales" en las federaciones locales.

Para comprender con mayor claridad la organización sindicalista debemos distinguir dos etapas bien diferenciadas: antes del cambio revolucionario y después de éste, momento en que los sindicatos tendrían que tomar el control de la administración de la economía. Bajo el capitalismo, la federación de "asociaciones de trabajadores", organizada por oficios, tiene el cometido de conducir diariamente la lucha de clases y ocuparse de las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores. En este período, los "consejos laborales", organizados geográficamente, asumen las tareas de educación, propaganda y promoción de la solidaridad entre las "asociaciones de trabajadores" locales. Después de la revolución social, las "asociaciones de trabajadores" asumirán la total responsabilidad de la gestión y coordinación técnica de la economía, controlando el abastecimiento de materias primas, los medios de transporte, la maquinaria y en definitiva todo lo necesario para el funcionamiento de las unidades de producción. Los "consejos laborales", formados por representantes de cada ramo y actividad de la localidad, manejarán las operaciones económicas de la colectividad o región, determinando sus necesidades y gestionando la distribución de las mercancías. En este sistema dual de organización, las "asociaciones de trabajadores" locales y los "consejos laborales" están federados en organismos municipales, regionales y nacionales hasta que, en la cumbre organizativa, dos consejos —uno compuesto por los representantes de las empresas y otro por los de las regiones— coordinarán la producción y la distribución de las mercancías.

Este modelo, desde luego, es excesivamente abstracto y esquemático. Su finalidad es explicar la estructura esencial de una organización sindicalista de la manera más simple posible. En la práctica, la flexibilidad de las federaciones sindicalistas esquivó esta rigidez esquemática, por ejemplo mediante la incorporación de gremios, creados tiempo atrás y que conservaban características no sindicalistas. Sin embargo, no existe un

modelo que por sí mismo constituya una garantía de que una federación es sindicalista en el sentido revolucionario del término. El movimiento reformista de los trabajadores norteamericanos está también organizado como una estructura dual. Los sindicatos “internacionales” de los Estados Unidos —tales como las federaciones de trabajadores de la industria del automóvil y del acero, por ejemplo— corresponden, de un modo muy aproximado, a las “asociaciones de trabajadores” y a los distintos “consejos laborales” locales, regionales y nacionales, descritos por Hins en el Congreso de Basilea. En todo lo demás, sin embargo, las diferencias entre el sindicalismo revolucionario y los sindicatos reformistas son mayores y más decisivas que sus semejanzas.

El objetivo del sindicalismo es la eliminación del capitalismo, y no simplemente la mejora de los inmediatos problemas económicos de los trabajadores y de las condiciones laborales. Sus propósitos son asumidos claramente como revolucionarios. No menos importante es el objetivo sindicalista de otorgar la responsabilidad de todas las decisiones económicas y sociales a los productores directos, es decir, a los trabajadores de cada empresa específica. El principio más importante que guía al sindicalismo es que la dirección de la producción debe localizarse en la base de la sociedad, y no en la cúpula: las decisiones deben circular de abajo hacia arriba. El sindicalismo es, por tanto, antiautoritario. Los órganos económicos democráticos, federalistas y descentralizados del proletariado sustituyen a los instrumentos políticos del Estado. La autoridad generalmente detentada por los órganos políticos es transferida a las unidades económicas de la sociedad y a los productores reales que operan sobre ellas.

Por consiguiente cada empresa está administrada por sus propios trabajadores por medio de un comité electo. Los diferentes comités están representados por delegados en los “consejos laborales” locales y en las “asociaciones de trabajadores” o sindicatos. Obviamente los órganos vitales de esta estructura son los comités de trabajadores que administran las fábricas y los sistemas de transporte, así como los “consejos laborales”, que se ocupan de los problemas y las necesidades locales. Los sindicatos profesionales, aunque resultan útiles en la organización de huelgas

industriales bajo el capitalismo, no tienen una función real después de la revolución, a diferencia de las uniones organizadas geográficamente. Las tareas de coordinación de la producción pueden ser manejadas fácilmente por los “consejos laborales” locales, regionales y nacionales, sin necesidad de la intervención de los sindicatos. De hecho, un síntoma del deterioro de las ideas sindicalistas en Francia fue el incremento de la autoridad de las asociaciones de trabajadores, que eclipsaron a los “consejos laborales”.

Al acentuar la importancia del control económico en la base de la sociedad, el sindicalismo es conscientemente antiparlamentario y antipolítico. Se encara con los problemas prácticos del ejercicio del poder, pero además afronta la cuestión clave de su desintegración. El verdadero poder en la doctrina sindicalista es el poder económico. El modo de disolver el poder económico no es otro que hacer que todos los trabajadores sean poderosos, con lo cual se elimina el poder como un privilegio social. El sindicalismo, de esta forma, rompe todos los vínculos entre los trabajadores y el Estado. Se opone a la acción política, a los partidos políticos y a toda participación en los actos electorales. En realidad, rechaza funcionar dentro del sistema establecido y del Estado. ¿Cuáles serían, entonces, los sustitutos de estos métodos tradicionales? El sindicalismo recurre a la acción directa: pequeños paros, sabotajes, bloqueos y, sobre todo, la huelga general revolucionaria. La acción directa no sólo perpetúa la militancia de los trabajadores y mantiene vivo el espíritu de rebelión, sino que estimula en ellos un mayor sentido de la iniciativa individual. La acción directa, a través de presiones continuas, pone a prueba en todo momento la fuerza del sistema capitalista y del que tal vez sea su espacio más importante: la fábrica, donde gobernado y gobernante parecen estar enfrentados de una forma más directa.

Al tiempo que el sindicalismo ejerce esta tenaz presión sobre el capitalismo, va tratando de construir la sociedad nueva dentro de la vieja. Los sindicatos y los “consejos laborales” no son simplemente medios de lucha e instrumentos de la revolución social; también son la estructura fundamental en torno a la cual se construirá la sociedad libre. Los trabajadores deben ser educados en la tarea de destruir la vieja clase propietaria y reconstruir una sociedad libertaria, sin Estado. Los dos

procesos han de ser simultáneos. Cuando las condiciones hayan madurado hasta el punto que la revolución social sea posible, los trabajadores se levantarán en una huelga general, con la manifiesta aspiración de derribar la sociedad capitalista. Todos los medios de producción y de transporte dejarán de funcionar. La economía capitalista se detendrá.

En la década de 1870, casi dos décadas antes de que el sindicalismo alcanzara popularidad en Francia, Friedrich Engels atribuyó a los bakuninistas la creación del concepto de huelga general revolucionaria. Resulta revelador examinar con detenimiento su crítica. “Una hermosa mañana —escribe— los trabajadores de todos los sectores, en algún país o incluso en todo el mundo, se declararán en huelga, y de este modo, a lo sumo en cuatro semanas, obligarán a las clases dominantes a poner fin a la violencia ejercida contra los trabajadores que, ejerciendo su derecho a defenderse, procederán al derrumbe total de la vieja sociedad”. Después de analizar la genealogía de este concepto, Engels añade: “Por otra parte, los gobiernos, especialmente si se encuentran apoyados por una alta abstención política, nunca permitirán a las organizaciones o a la tesorería de los trabajadores llegar a tales extremos; además, los acontecimientos políticos y los excesos de las clases dominantes provocarán la explosión social que liberará a los trabajadores mucho antes que el proletariado logre alcanzar esas organizaciones ideales y esas inmensas reservas de fondos. Y si llegara el día en que dispusiera de estas reservas, no necesitaría tomar los tortuosos caminos de la huelga general para alcanzar sus propósitos”.

Esta descripción, su inadmisible perspectiva ideológica y su usurera perspectiva de futuro son pura demagogia. Pero resulta interesante comprobar cómo el más íntimo colaborador de Marx se vio obligado a plantear así el asunto. Aun admitiendo que los bakuninistas estuviesen preparados para “defenderse” (es decir, para sublevarse), Engels señala que los anarquistas no estaban preparados para detener la actividad por medio de una huelga pacífica; ciertamente, también los anarquistas sabían que un período de resistencia económica de “a lo sumo cuatro semanas” era demasiado largo. Para los anarquistas, la huelga general constituía una fase de la confrontación insurreccional entre las dos clases, confrontación en la que el proletariado también emplearía su poder económico con el objetivo

de paralizar el funcionamiento del organismo estatal y bloquear el movimiento de tropas.

Mucho más interesante es la afirmación de Engels de que el Estado, "apoyado por la abstención política, nunca permitiría a las organizaciones o a la tesorería de los trabajadores llegar tan lejos".[15] Irónicamente, esta afirmación podría aplicarse mejor a un partido político que a una unión sindicalista. Sesenta años más tarde el fascismo alemán aniquilaba a dos colosales partidos marxistas, con escasa resistencia de sus líderes y simpatizantes. En efecto, los muy disciplinados partidos socialdemócrata y comunista extirparon la iniciativa revolucionaria del proletariado alemán con una eficacia tal, que Hitler quedó asombrado de lo sencillo que fue su sometimiento.

El sindicalismo, sin ninguna duda, tiene muchos defectos, pero el marxismo no estaba en condiciones de hacer críticas, porque estos mismos defectos eran compartidos por los partidos socialistas. Al organizarse estructuralmente dentro de la economía burguesa, los sindicatos tendían a convertirse en un reflejo del aparato centralizado que querían combatir. Al proclamar la necesidad de pactar de una forma efectiva con el aparato, estrechamente unido a la burguesía y al Estado, los líderes reformistas de los sindicatos se encontraban con escasos obstáculos para desviar el control organizativo desde la base a la cumbre. Muchos de los más viejos anarquistas estaban atentos a esos peligros, y miraban con desconfianza las doctrinas sindicalistas. Errico Malatesta, temiendo el resurgimiento de una burocracia en el nuevo movimiento sindical, advertía que "la oficialidad es para la clase trabajadora un peligro sólo comparable al que proviene del parlamentarismo; ambos conducen a la corrupción, y de la corrupción a la muerte hay sólo un paso".[16] Estos anarquistas pensaban que el sindicalismo simplemente desviaba —y equivocaba— los objetivos: sustituía comuna por sindicato, calles por fábricas, masas oprimidas por proletariado industrial y, finalmente, insurrección por huelga general.

En 1890, cuando el sindicalismo francés iniciaba una corriente radical, todos los riesgos latentes en la estructura de los movimientos fueron analizados para establecer una organización reformista. Bajo la dirección de Léon Jouhax, la sindicalista Confédération Générale du Travail (CGT) se

burocratizó y, prescindiendo de su retórica revolucionaria, se transformó en un sindicato bastante convencional. De composición casi exclusivamente proletaria, no ejerció apenas influencia en las zonas rurales. La palabra *syndicalisme* adquirió un significado neutro, y los partidarios revolucionarios de la doctrina primitiva fueron denominados, en contraposición, "anarcosindicalistas". Unos pocos intelectuales fueron atraídos por los viejos ideales sindicalistas y, muy especialmente, por el arrojo activista del anarcosindicalismo. George Sorel, que buscaba en la agresividad proletaria una fuerza regeneradora para vencer la decadencia burguesa, intentó dotar al sindicalismo de su propia filosofía heroica, pero sus libros ejercieron poca influencia entre los trabajadores franceses y ninguna en el conjunto de los movimientos obreros españoles. Lo mismo que la mayoría de los intelectuales que se acercaron al sindicalismo, Sorel se sintió desilusionado con los pragmáticos y posibilistas objetivos del movimiento.

En contraste con Francia, el sindicalismo en España, ya desde los tiempos de la Internacional, desarrolló un vivísimo impulso que se extendió hacia el campo. Quizá fuese más preciso decir que el sindicalismo español se vio obligado a evolucionar en una dirección revolucionaria y anarcosindicalista, a causa de las condiciones sociales y políticas que prevalecían al sur de los Pirineos. A principios del siglo XX esta evolución todavía no era fácilmente perceptible. El gobierno de Madrid parecía más estable que nunca, y la vida económica gozaba de una sorprendente recuperación tras el reflujo producido por la pérdida de Cuba y de Filipinas en la guerra hispanoamericana. En la inquieta Cataluña, la vida política local estaba dividida entre la Lliga Regionalista, un grupo político del ala derecha autonomista, apoyado por los industriales, y el Partido Republicano Radical, camarilla política manejada por un demagogo sin escrúpulos, Alejandro Lerroux y García. La Lliga congregaba en torno a sí a los catalanes acomodados que no confiaban en los partidos de Madrid. Los radicales, sostenidos por la inflamada retórica de Lerroux, gozaban del apoyo de la gran mayoría de los trabajadores y de la clase media demócrata de Barcelona. El movimiento anarquista, fuera de un breve período de entusiasmo durante las huelgas de 1901-1903, parecía haber caído víctima

de la represión contra las organizaciones obreras de Barcelona. Durante algún tiempo todo hacía pensar que los trabajadores de la industria de Cataluña se inclinarían por el socialismo y dejarían de lado el anarquismo.

Sin embargo, ocurriría todo lo contrario. El asesinato de Cánovas, en agosto de 1897, no produjo cambios en el *turnismo*, el desvirtuado sistema político en el que se turnaban alternativamente gabinetes conservadores y liberales. En el período comprendido entre 1899 y 1909 el gabinete fue ocupado por tres ministros conservadores, Silvela, Villaverde y Maura, seguidos por los liberales Montero Ríos y Moret, y finalmente, durante casi tres años, de nuevo por Maura. Durante este último gabinete, Maura dilapidaría el crédito político que le quedaba al *turnismo*, abriendo el camino a uno de los períodos más turbulentos de la moderna historia de España.

A finales del siglo XIX el estancamiento político del sistema de Cánovas no podía responder a las nuevas exigencias que surgían en la sociedad española. Las décadas de 1880 y de 1890, como hemos observado, fueron las de mayor industrialización y sobreexpansión. Los industriales catalanes, agobiados por los grandes excedentes de productos textiles y por los altos precios del algodón en rama, presionaron para obtener una bajada de impuestos y una subida en los aranceles. Como sus demandas no fueron atendidas, se vieron obligados a seguir, fatalmente, una doble estrategia de acción política independiente y de reducción de salarios.

Aunque en 1907 el gobierno cedió a las exigencias de los industriales, cerrando completamente el mercado interno español a la competencia extranjera, ya se había consumado el irreparable deterioro de la estabilidad política de Cataluña. Se había puesto en marcha un sistema de "realimentación degenerativa" que no sería posible detener hasta tres décadas más tarde. A pesar de sus pretensiones catalanistas, el ala derecha de la Lliga era esencialmente oportunista. Los industriales que la subvencionaban no podían despojarse de sus viejos hábitos y continuaron haciendo concesiones a Madrid a cambio de privilegios económicos. Esta vacilante línea de conducta fomentó la expansión del Partido Radical de Lerroux, que por entonces había congregado a muchos republicanos desilusionados ante el oportunismo de la Lliga. Esta organización había

levantado el fantasma del nacionalismo catalán para atemorizar a Madrid. Lerroux estaba ansioso por reunir la gran masa de murcianos, que eran indiferentes o incluso hostiles al catalanismo; de este modo originó una violenta campaña antinacionalista en Barcelona. Esta campaña fue aderezada con un amargo anticlericalismo que confirió al Partido Radical un aura de militancia, sin comprometer la posición de la burguesía. El gobierno de Madrid, por su parte, decidió hacer su jugada enfrentando a la Lliga y a los radicales entre sí, considerando que cuanto mayor fuese la inestabilidad catalana, más improbable resultaría la unidad del poder catalán en contra del poder central.

Las arcas de Lerroux comenzaron a engordar gracias a la llegada de misteriosas donaciones. Al mismo tiempo comenzaron a estallar algunas bombas en los locales de los fabricantes textiles catalanes pertenecientes a la Lliga. Parecía que con cada oleada de actividad nacionalista catalana, renacía el terrorismo “anarquista”. La espiral de violencia en Barcelona fue utilizada por Madrid para provocar una crisis en la sociedad catalana. Pero el gobierno central erró en el cálculo; esta crisis alcanzaría una magnitud tal que serían necesarias una dictadura y una guerra civil para controlarla. Lerroux, por su parte, nunca resolvería la contradicción existente entre su retórica y su práctica política, contradicción que terminó por debilitar los últimos vínculos existentes entre la clase trabajadora de Barcelona y los partidos políticos.

Pero estos factores, de innegable importancia, simplemente exacerbaron algo más la creciente lucha de clases entre los trabajadores de Barcelona y los industriales textiles. Aunque la industria del algodón había experimentado una expansión importante entre 1880 y 1890, no creció lo suficiente como para absorber la enorme afluencia de murcianos y catalanes que llegaban a la zona industrial provenientes del campo. La población urbana de Barcelona había crecido en un diez por ciento entre los años 1900 y 1910. Para muchos de los nuevos emigrantes del campo no había trabajo; desmoralizados, hambrientos, casi desnutridos, esta gente desesperada constituía una irritable reserva de descontento, a la que Lerroux alentaría con llamamientos a la acción violenta contra el clero.

El descontento no era menor entre los trabajadores industriales de Barcelona y de las zonas periféricas. Las familias obreras no podían hacer frente al aumento de los precios solamente con salario del cabeza de familia. Aunque una familia formada por cuatro miembros necesitaba un mínimo de 112 pesetas para satisfacer sus necesidades elementales, un jornalero ganaba sólo 60 pesetas, un albañil, 96, y un metalúrgico, 108. Las tres cuartas partes del salario del obrero se dedicaban a la alimentación. Para poder sobrevivir, también la mujer y los hijos debían ser víctimas de la explotación. No debía ser fácil para el trabajador aceptar esta desoladora circunstancia. También le resultaría intolerable convivir con la amenaza constante de la reducción de salarios. Obligado a adaptarse a esta situación, el proletariado catalán se sumía en un efervescente descontento.

La confluencia de las crecientes dificultades económicas con las ideas sindicalistas que venían de Francia pronto condujo a la formación de una nueva organización anarquista obrera. El 13 de octubre de 1900, un conjunto de sindicatos obreros organizó, por iniciativa del gremio de albañiles de Madrid, una conferencia que se celebró en dicha ciudad entre los días 13 y 15 del mencionado mes. Los delegados, en representación de unos 52.000 trabajadores, llegaron desde Cataluña, Andalucía, Valencia, Asturias, País Vasco, La Coruña, Valladolid y otras ciudades. Muchos representaban a los afiliados locales de la vieja Federación de Trabajadores y del Pacto de Unión y Solidaridad, que habían sobrevivido a la represión de la década de 1890.

La nueva organización se denominó Federación Regional de Sociedades Obreras, y pretendía continuar la obra de sus predecesoras de 1873 y 1881. A partir de mayo del siguiente año, cuando no había cumplido aún su primer año de vida, esta organización provocó una ola de huelgas generales en Valencia, Sevilla, Zaragoza y otras plazas fuertes anarquistas. En Andalucía, una ciudad tras otra se alzaban en huelga, en algunos casos planteando una sola demanda: el comunismo libertario. Hubo otras insurrecciones más pequeñas en conmemoración del levantamiento de Jerez. El movimiento en el campo continuó durante varios años y no finalizó hasta 1905, cuando la hambruna en el sur acabó con toda iniciativa.

*La Federación* Regional de Sociedades Obreras fue suprimida, pero antes llevó a cabo una de las más prodigiosas huelgas generales de la historia del movimiento obrero catalán. La huelga revelaría la extraordinaria solidaridad que en aquella época reinaba entre los trabajadores de Barcelona, así como la intransigencia de los patronos hacia las reivindicaciones obreras. Fue además un adelanto de los conflictos que se producirían en los años venideros entre las nuevas fuerzas de la sociedad catalana.

Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en la primavera de 1901, cuando los fabricantes de hilo del valle del Ter reventaron los salarios al despedir a los hombres y contratar mujeres para las recién instaladas hiladoras automáticas. Se llevó a cabo una huelga, seguida por un grave enfrentamiento entre los trabajadores y la policía, que provocó un ultimátum patronal y el cierre de las fábricas. Parecía probable que el triunfo de los patronos en el valle del Ter condujera a la inmediata reducción de los salarios, no sólo entre los operarios textiles, sino entre los obreros de las distintas ramas de la industria. Cuando el verano de 1901 llegaba a su fin, los principales sindicatos de Barcelona empezaron a prepararse para el enfrentamiento con toda la clase patronal.

Los obstáculos a los que se enfrentaron los sindicatos fueron enormes. Sólo una cuarta parte de la masa obrera urbana pertenecía a organizaciones sindicales. La mayoría de operarios de la gran industria textil eran mujeres y niños, menos susceptibles a la influencia sindical. A la hora de la toma de decisiones estratégicas, la dirección del sindicato se dividía entre sindicalistas, anarquistas y socialistas. El inmenso conjunto de campesinos desocupados, no especializados y analfabetos, constituía una gran reserva de esquiroles para los patronos. Los trabajadores textiles estaban distribuidos en unas 750 fábricas, muchas de ellas situadas a grandes distancias unas de las otras, lo que dificultaba la coordinación de acciones conjuntas. Finalmente, los patronos se asociaron en una organización propia, bien cohesionada y muy poderosa, denominada Fomento del Trabajo Nacional, que contaba con el respaldo del ejército y de la policía. *La Federación* Regional de las Sociedades Obreras, la descentralizada organización libertaria, tuvo que superar todos estos obstáculos para llevar a

cabo una huelga general efectiva. Sólo gracias a la iniciativa del proletariado de Barcelona, aleccionado en la acción directa y en las tácticas anarquistas, la huelga tuvo éxito.

Un conflicto local dio inicio a las hostilidades. El 6 de diciembre de 1901 los obreros metalúrgicos de Barcelona se declararon en huelga. A pesar de la falta de fondos de reserva, la resistencia de los trabajadores se alargó durante tres meses, para reivindicar la jornada de trabajo de ocho horas. Los patronos se mostraron inflexibles y rechazaron categóricamente todas las ofertas de mediación, haciendo oídos sordos a las críticas de la opinión pública. Al cabo de unas semanas se hacía evidente que la huelga se estaba convirtiendo en un enfrentamiento entre el proletariado de Barcelona y los patronos; por tanto era absolutamente necesario recurrir a la solidaridad de la clase trabajadora. La organización local de la Federación Regional de Sociedades Obreras decidió intervenir y el 17 de febrero de 1902 declaró una huelga general en toda la ciudad.

La huelga duró una semana laboral completa. Su alcance aumentó debido al miedo de algunos patronos, que prefirieron cerrar sus negocios provisionalmente por temor a los altercados. Fuera de algunos enfrentamientos callejeros entre los huelguistas y el ejército, la huelga fue bastante pacífica. El lunes 24 de febrero la mayoría de los obreros se reintegraron al trabajo. Los huelguistas no impusieron condiciones, y a pesar de la participación de la Federación Regional de Sociedades Obreras, ningún grupo apareció como coordinador de la acción de una forma visible. La huelga general, en definitiva, no sólo significó un acto solidario con los trabajadores metalúrgicos, sino que además constituyó una espléndida demostración de la iniciativa de la clase obrera y de su capacidad de organización.

Estas lecciones no pasaron inadvertidas para los patronos y el gobierno, quienes aunaron sus esfuerzos para aplastar al movimiento obrero en Barcelona. En 1903, cuando el proletariado intentó desesperadamente resistir a la ofensiva conjunta del Estado y los patronos, se desencadenaron nuevas huelgas. Carlos González Rotwos, el nuevo gobernador designado por los liberales, hizo arrestar ese año a más de trescientos cincuenta militantes y clausuró un gran número de locales pertenecientes a los centros

obreros. En 1904, el movimiento huelguístico comenzaba a apaciguarse. La mayoría de las huelgas habían fracasado, arrojando un saldo de dos mil parados. Entre 1902 y 1909 el número de afiliados del sindicato de Barcelona descendió de 45.000 a 7.000, y los patronos podían celebrar que el movimiento obrero casi se había extinguido en la ciudad.

El Partido Socialista Obrero Español, que no había intervenido en la huelga, extrajo sus propias conclusiones. Advirtió que la huelga general constituía una amenaza para el orden público, siendo la causante de serias represalias que reducían las posibilidades de un convenio colectivo entre los patronos y los sindicatos. Esta reacción es significativa porque señala las líneas de actuación del partido por esa época. Desde el punto de vista político y organizativo, el Partido Socialista Obrero Español se había convertido en otra rama del árbol de la socialdemocracia europea: oportunista en los métodos y reformista en la orientación. En Barcelona, donde la violencia de los patronos y de la policía convertía cada huelga ordinaria en una pequeña insurrección, el partido no tenía ninguna relevancia y su distanciamiento de los trabajadores era cada vez mayor. Que el Partido Socialista Obrero Español y la UGT llegaran a abandonar su posición reformista no fue debido al carácter revolucionario de estas organizaciones, sino al equilibrio inestable entre fuerzas sindicales provocado por la crisis social. Brenan observa que cuando los sindicatos anarquistas eran fuertes, los socialistas eran, por lo general, reformistas; en cambio, cuando estaban debilitados, los socialistas actuaban como radicales. Tal vez fuese más acertado decir que cuando los sindicatos anarquistas eran fuertes acaparaban todos los ataques de las ofensivas patronales, en tanto que la UGT, escudada por sus rivales libertarios, trataba de entenderse con los patronos a expensas de los anarquistas. Sin embargo, cuando la UGT era la organización más numerosa, se veía arrastrada a la beligerancia por la intransigencia patronal y por las exigencias de sus afiliados.

Estas maniobras no pasaron inadvertidas para los trabajadores de Barcelona. La UGT trató de atraer repetidamente al proletariado de la ciudad hacia el terreno socialista. De hecho, la primera sede nacional de la UGT se constituyó en Barcelona, donde el sindicato hizo algunas incursiones entre

los trabajadores cualificados. Atrapada entre la militancia anarquista y la intransigencia patronal, no pudo apenas prosperar. En 1898 sus centros operativos fueron trasladados al ambiente más afín de Madrid, pero también allí siguió encontrando la competencia anarquista, y nunca logró un control completo sobre el importante gremio de la construcción, que terminaría por recalar en los sindicatos anarquistas.

En Madrid se hicieron denodados esfuerzos para lograr que la UGT apoyase la huelga general; Pedro Vallina nos ha dado un valioso relato de lo que sucedió. Después de un mitin en la capital, en el Casino Federal del Horno, donde los anarquistas acordaron por unanimidad apoyar a los trabajadores de Barcelona, se creó un comité para visitar la sede de la UGT. "Uno de los líderes de la UGT, Largo Caballero, nos recibió en su despacho" —escribe Vallina—, "y sin consultar a nadie rechazó nuestra petición. Con un tono burlón y maneras despectivas, nos preguntó si creíamos que la huelga tenía posibilidades de éxito. Le contesté afirmativamente, añadiendo que aunque no tuviéramos el apoyo socialista confiábamos en la buena voluntad de los trabajadores de Madrid. La actitud de Largo Caballero fue tan desagradable que uno de nuestros delegados, indignado, amenazó con agredirle. Los socialistas evitaron toda participación en el conflicto. En esa época eran un modelo de sentido común".

El contraste entre el sarcasmo del líder del sindicato socialista y las pretensiones idealistas y volátiles de los anarquistas proporciona un ejemplo perfecto para el estudio comparado de estos dos distintos tipos humanos. Tanto los patronos catalanes como los líderes socialistas de Madrid demostrarían estar equivocados en sus previsiones. El movimiento sindical obrero de Barcelona se recuperaría, y convocaría una segunda huelga general que provocó una semana de insurrección a gran escala. También fracasó, y se conocería en adelante como la "Semana Trágica". Sin embargo, el movimiento obrero barcelonés no fue aniquilado y en el futuro resurgiría aún con mayor vigor y mayor espíritu revolucionario.

## La Semana Trágica

El colapso que sufrieron los sindicatos catalanes después de la huelga general de 1902 desvió el centro de atención del conflicto del campo económico al político. En los años siguientes, los trabajadores de Barcelona abandonarían la militancia sindical para adherirse en masa al Partido Radical de Lerroux.

Este partido no era simplemente una organización política; era también un hombre, Alejandro Lerroux y García, y un circo popular institucionalizado. Superficialmente, Lerroux adoptaba las maneras del republicano radical, en la tradición de Ruiz Zorrilla: rabiosamente anticlerical y contrario a la autonomía catalana. Las tácticas de Lerroux, como las de Ruiz, se centraron en el propósito de apartar al ejército y a los desheredados de la monarquía, y atraerlos hacia la perspectiva de una república española.

En su juventud, es posible que Lerroux fuera un partidario sincero de este plan. Hijo de un veterinario del ejército, se convirtió en un hábil periodista, capaz de fascinar tanto al populacho como a los ilustrados. Después de trasladarse de Madrid a Barcelona en 1901, cortejó abiertamente a los altos mandos del ejército, al tiempo que, siguiendo la exaltada tradición de los viejos revolucionarios republicanos, recorría Europa en busca de armas. En caso de haberlas encontrado, es probable que las hubiese utilizado. Su objetivo primordial no era la insurrección, sino reavivar el movimiento republicano agonizante por medio de transfusiones de apoyo de la clase obrera. Todo esto lo llevó a cabo por medio de teatrales reuniones públicas donde desarrollaba una violenta y demagógica oratoria, y a través de una cadena de centros públicos repartidos por todo el territorio (sólo en Barcelona pasaban de cincuenta).

Lerroux fue quien introdujo en España la Casa del Pueblo, una institución socialista belga que reunía en un solo edificio aulas, biblioteca, taberna y una sala de reuniones. Posteriormente los socialistas españoles fundarían sus propias Casas del Pueblo como un medio para ayudar a la expansión del movimiento. Además de las Casas, Lerroux y los radicales atendían las necesidades de la gente pobre de Barcelona a través de economatos, mutualidades benéficas, clases diurnas y nocturnas y representaciones teatrales a precios asequibles. Parte del dinero para el

establecimiento de esta costosa organización procedía de fondos secretos del gobierno que el primer ministro liberal Moret entregó a los radicales con la esperanza de neutralizar a los autonomistas catalanes.

El pueblo se congregó en torno a los radicales. Más de las dos terceras partes del partido estaban integradas por los trabajadores, incluyendo a las sufridas mujeres de la clase obrera, quienes formaron sus propias organizaciones radicales —"Damas Radicales" y "Damas Rojas"—. Los jóvenes menos estables de Barcelona se incorporó a la Juventud Republicana Radical —los "Jóvenes Bárbaros", como se les denominaba—, cuya tarea era la de prestar protección a las reuniones radicales y tratar de reventar las de organizaciones opuestas. Este aparato se extendió desde Barcelona hasta los suburbios, donde vivía la mayoría de los trabajadores, logrando atraer a miles de ellos a sus filas.

Entre los autonomistas catalanes no existía ninguna organización que igualara a este sistema en el ámbito sindical. Alrededor de marzo de 1907, se habían visto obligados a unir sus fuerzas para luchar contra la Ley de Jurisdicciones, que confería a las autoridades militares el poder de juzgar los actos civiles hostiles al ejército por medio de tribunales militares. El nuevo grupo electoral denominado Solidaridad Catalana incluía a los republicanos moderados, la Lliga de los empresarios y los carlistas. A pesar de su popularidad en las elecciones, Solidaridad Catalana no consiguió atraer a los obreros y a los murcianos, quienes, por otra parte, ya no tomaban los actos electorales muy en serio.

Las asociaciones sindicales se encontraban aún en un estado ruinoso. Aunque los líderes se mantuvieron en contacto durante los años siguientes a la huelga general, muchos sindicatos (que era como se les llamaba entonces) se habían dispersado, o se habían convertido en organizaciones clandestinas. No fue hasta 1907 que el movimiento obrero de Barcelona se encontró lo suficientemente recuperado como para celebrar un congreso local. En el mes de junio, una comisión compuesta por metalúrgicos, tipógrafos, panaderos, pintores y tenderos, se reunió en la secretaría general del Sindicato de tenderos para establecer las bases de una federación municipal. La federación, que se denominó Solidaridad Obrera, se fundó el 3 de agosto, y dos meses después comenzó a publicar un periódico del

mismo nombre. Aunque la nueva organización se desarrolló lentamente, se las ingenió para atraer a los trabajadores de fuera de la ciudad. Un año después, en septiembre de 1908, se transformó en una federación regional, abarcando 112 sindicatos de trabajadores de toda Cataluña, y llegando a alcanzar los 25.000 afiliados. Los líderes radicales se sintieron desconcertados ante la aparición de estos nuevos rivales que buscaban el apoyo de la clase obrera. Después de un intercambio de sospechosas cordialidades, comenzaron a entrar en acción con el propósito de dominarlos o destruirlos.

En un primer momento, los radicales tenían pocos motivos para preocuparse. Solidaridad Obrera era una organización "puramente sindicalista", orientada a la reivindicación de demandas inmediatas y de convenios colectivos. El sindicato declaró que no se encontraba bajo "el tutelaje de ningún partido político… ni tampoco de ninguna de las dos ramas del socialismo" (marxismo o anarquismo). Gozaba del favor del gobernador Ángel Ossorio y Gallardo, que simpatizaba con los miembros socialistas, y lamentaba la debilidad del partido en Cataluña. Inevitablemente, sin embargo, la federación se convirtió en un campo de batalla entre socialistas y anarquistas. Los socialistas, dirigidos por funcionarios sindicales como Antonio Badía Matamala, Arturo Gas y el intelectual catalán Antonio Fabra i Rivas, tratarían de conquistar *Solidaridad Obrera* para la UGT. Estos hombres aprobaban firmemente el oportunismo del sindicato; es más, según Arturo Gas, "los trabajadores conscientes de su posición surgen de los sindicatos fuertes, y de tales trabajadores salen los buenos socialistas". Al igual que los radicales, los socialistas consideraban *Solidaridad Obrera* como un rival de sus propias organizaciones, e intentaban absorberla o disgregarla. El ingreso de algunos socialistas en el sindicato se debió a la escasa influencia de la Federación Socialista Catalana en Barcelona.

Los anarquistas de *Solidaridad Obrera* eran anarcosindicalistas, como los trabajadores José Rodríguez Romero, Tomás Herreros y Leopoldo Bonafulla, que eran partidarios de operar en el marco de los grandes movimientos obreros. Alentados por Francisco Ferrer, desplegaron un ataque contra los socialistas, e intentaron orientar la federación obrera hacia

objetivos revolucionarios. Sus esfuerzos, estimulados por el rumbo que tomaba la cercana CGT francesa hacia el sindicalismo revolucionario, pronto tuvieron éxito. Poco después *Solidaridad Obrera* cayó bajo la influencia anarcosindicalista, y el 13 de junio de 1909 un Congreso de la federación obrera aprobó unánimemente la táctica de huelga general "dependiendo de las circunstancias".

Los anarcosindicalistas eran tratados con desdén por los anarco-comunistas barceloneses vinculados al periódico *Tierra y Libertad* y a la agrupación terrorista "Grupo Cuatro de Mayo". Este pequeño grupo era todo lo que había quedado de aquel extenso movimiento anarco-comunista fundado en la década de los 90. Sus filas habían sido severamente mermadas por arrestos y persecuciones y, debido a la carencia de fondos, se vieron obligados a abandonar su sede central y a reunirse en las oficinas del periódico. Los editores Juan Barón y Francisco Cardenal consideraron a los anarcosindicalistas como desertores reformistas, y reafirmaron su fidelidad a aquellas doctrinas que habían configurado los fundamentos de la antigua Organización Anarquista de la Región Española.

Aunque en esta época no existían federaciones libertarias, los anarquistas eran numéricamente significativos dentro del movimiento obrero catalán. Una gran cantidad de anarcosindicalistas estaban unidos en torno a *Solidaridad Obrera*. El propio partido de Lerroux incluía a muchos ex anarquistas cuyos compromisos con las ideas políticas republicanas eran superficiales. Estos especímenes de anarquistas (si así puede llamárseles) contribuirían a la destrucción del Partido Radical haciendo simplemente lo que el propio partido predicaba. Pero al final no sería el potencial numérico lo que consolidaría la influencia que los anarquistas ejercieron en el movimiento obrero de Barcelona, sino su arrojo en la lucha entre el proletariado catalán y los patronos.

Los conflictos de la primavera de 1909 entre los trabajadores de Barcelona y los patronos del sector textil reproducirían los acontecimientos que desembocaron en la huelga general de 1902. El 15 de mayo la fábrica Rusiñol, del valle del Ter, cerró sus puertas y 800 trabajadores fueron despedidos. El *lock-out* era la señal evidente del inicio de otra campaña para reducir los salarios en toda la industria textil. En la asamblea de *Solidaridad*

*Obrera* de julio de ese año, los oradores exhortaron a sus miembros a concentrar todos los esfuerzos de la federación para apoyar a los trabajadores y proyectar una huelga general. Al parecer, la mayoría de los delegados secundaron la propuesta. Aunque muchos obreros ajenos a la industria textil se mostraban apáticos, la idea de la huelga general fue aceptada por la organización no sólo como estrategia abstracta sino como recurso inmediato en caso de provocación de los patronos o el gobierno.

Mientras la situación en Barcelona era cada vez más crítica, el gabinete Maura anunció el 11 de julio que los reservistas se incorporarían al servicio activo en Marruecos. Esta convocatoria no fue del todo una sorpresa. Los esporádicos enfrentamientos entre las tribus rifeñas y las tropas españolas venían sucediéndose desde hacía semanas. La atmósfera bélica era palpable, y no era un secreto para nadie que los rifeños amenazaban las rutas de abastecimiento de las valiosas minas de hierro, que eran propiedad de los principales capitalistas españoles. Para los trabajadores españoles la perspectiva de verter su sangre en defensa de las posesiones coloniales de unos pocos magnates acaudalados no resultaba particularmente tentadora. La decisión de Maura provocaría dramáticas escenas en Barcelona, principal puerto de embarque para Marruecos. Muchos reservistas eran trabajadores catalanes, sumamente pobres, cuyas familias no estaban en condiciones de prescindir ni siquiera por unos pocos días de quienes ganaban el sustento, y mucho menos aún de permitir que sus vidas fueran puestas en peligro en aventuras imperialistas. Un sentimiento profundamente antibelicista se extendió por todo el país. El 18 de julio, Pablo Iglesias, un hombre que durante décadas había hecho de la prudencia la tónica de la política socialista, advirtió durante un mitin contra la guerra que si fuera necesario los trabajadores declararían una huelga general, con todas sus consecuencias.

¿Pero cuándo sería necesario? El mismo día del discurso de Iglesias, los rifeños atacaron las líneas españolas de abastecimiento, convirtiendo lo que hasta entonces había sido una sucesión de pequeñas escaramuzas en una guerra a gran escala. Las manifestaciones en el puerto catalán se extendieron a las estaciones de ferrocarril y a otras ciudades donde se reclutaban reservistas. La crisis se agudizaría en Barcelona cuando el 21 de

julio *El Poble Català* publicó una petición de los socialistas catalanes a la secretaría general de Madrid, llamando a la huelga general en toda España. Pasó casi una semana desde la advertencia de Iglesias, sin que la UGT se decidiera a tomar alguna decisión. Mientras tanto los disturbios aumentaban en todo el país. Según un editorial de *El Poble Català*, la situación no era alentadora: "Se han cerrado las válvulas y el vapor se está acumulando. ¿Quién sabe si explotará?".

Esta situación de calma inestable desapareció el 24 de julio, cuando dos anarquistas de Barcelona, José Rodríguez Romero y Miguel Villalobos Morena, decidieron constituirse como núcleo de un Comité de huelga. Rodríguez Romero era un anarcosindicalista que trabajaba en *Solidaridad Obrera*, y Villalobos Morena había sido maestro de un pueblo minero, hasta que se vio forzado a abandonar la escuela por haber divulgado ideas anarquistas. Villalobos, que había pertenecido a la plantilla de la Escuela Moderna de Ferrer, representó a los "sindicalistas" en el Comité de huelga. Por supuesto, estos dos hombres, por su dedicación a los ideales de una sociedad libertaria y por sus métodos libertarios de lucha, podían considerarse anarquistas.[17]

Reunieron fondos entre los militantes de *Solidaridad Obrera* y empezaron a recorrer la ciudad entrevistando a diferentes líderes para obtener su participación. Enfrentados a una situación insostenible, los socialistas catalanes, que habían estado esperando noticias de Madrid, no tuvieron otra alternativa que unirse al Comité. Quedarse al margen les hubiera supuesto perder la oportunidad de desempeñar un importante papel en el proceso de la huelga.

Dentro del grupo de los radicales la huelga provocaría la división entre los líderes principales y la masa de militantes. Lerroux había marchado al extranjero en febrero de 1909, huyendo de un juicio por sedición provocado por un artículo suyo. Lerroux, prudentemente, permaneció fuera hasta octubre de 1909, cuando todo rastro del conflicto había desaparecido. La dirección del partido recayó en Emiliano Iglesias Ambrosio, un astuto abogado cuya única línea política consistía en obstaculizar todo lo posible la acción revolucionaria sin perjudicar la imagen radical. Aunque trataron de lograr, el favor tanto de los altos mandos militares como de los

trabajadores —dos campos esencialmente antagónicos—, los políticos radicales no consiguieron satisfacer a ninguno de los dos grupos. Si bien un año más tarde los radicales iban a lograr una amplia victoria electoral, los trabajadores catalanes ya habían abandonado por aquel entonces el partido y toda actividad política. Por su parte, el ejército formaría sus propias organizaciones, las Juntas de Defensa, y desde entonces su orientación sería casi en exclusiva reaccionaria.

El Comité de huelga se constituyó la noche de un sábado, y el lunes la huelga ya estaba en marcha. Durante las primeras horas de la mañana, delegaciones del Comité se presentaron en las puertas de las fábricas, exhortando a los trabajadores a unirse al paro. Los patronos cerraron sus fábricas una vez más para proteger sus propiedades, acrecentando, como ya había ocurrido en 1902, las filas de los huelguistas. Los anarquistas asociados a *Tierra y Libertad* intentaron convertir la huelga en una insurrección, pero las autoridades arrestaron de inmediato a los más importantes activistas de este grupo por incitar a las masas al ataque de los cuarteles de la policía. De este modo fueron eliminados de la escena tan pronto como se inició la huelga. Los socialistas, por otra parte, temerosos de los "desórdenes anarquistas", trataron de limitar la huelga a una protesta antibelicista y consideraron todo intento de rebelión como aventurado.

Los acontecimientos iban a asombrar al mundo entero. Durante la semana comprendida entre el 26 de julio y el primero de agosto, Barcelona ofrecía el espectáculo de una insurrección a gran escala, una sublevación prácticamente espontánea que no recibía apenas indicaciones de los líderes sindicales o del Partido Radical. Como comenta Anselmo Lorenzo en una carta a Tárrida del Mármol, que se encontraba en Londres, "lo que está sucediendo aquí es asombroso. En Barcelona ha estallado una revolución social y ha sido desencadenada por el pueblo. Nadie la ha instigado. Nadie la ha dirigido. Ni los liberales, ni los nacionalistas catalanes, ni los republicanos, ni los socialistas, ni los anarquistas".

Si Lorenzo hubiese conocido todos los detalles, habría añadido que el gobierno civil en la ciudad se había desplomado. El primer día de huelga, el entonces gobernador, don Ángel Ossorio y Gallardo, dimitió de su cargo y se retiró muy irritado a su mansión veraniega en el Tibidabo. El Capitán

General de Cataluña, receloso de la guarnición local, confinó a la mayoría de su tropa en los cuarteles, dejando las calles en manos de los revolucionarios.

Todos aquellos que despuntaron de algún modo durante la insurrección eran militantes pertenecientes al Partido Radical y a *Solidaridad Obrera*. Debido a la falta de liderazgo de la sublevación, los militantes fueron los líderes, según observa Joan Conelly Ullman en su detallado estudio sobre la insurrección. Eran anarquistas en sus convicciones, aun cuando nominalmente fueran miembros del Partido Radical o de *Solidaridad Obrera*. Sus esfuerzos nunca fueron coordinados por el Comité, que rechazó dictar ningún tipo de normas y empleó la mayor parte de su tiempo intentando convencer al jefe radical Iglesias para que se uniese a ellos. Iglesias, preocupado en aquel momento únicamente por su seguridad personal, se negó a ello. Así, desde el comienzo la insurrección siguió su propio curso. El gentío que vagaba por las calles principales trataba de manera muy diferente a soldados y a policías. Los primeros eran saludados con vivas y proclamas en contra de la guerra; los cuarteles de la Guardia civil, por el contrario, fueron atacados ferozmente. Esta hábil estrategia tuvo éxito: la policía desapareció prácticamente de la escena, y en el Paseo de Colón un grupo de dragones se negó a obedecer la orden de abrir fuego contra la multitud. Las líneas férreas de entrada a la ciudad fueron dinamitadas, de modo que Barcelona quedó aislada por un tiempo de las guarniciones externas. En los distritos obreros se levantaron barricadas y se repartieron armas. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante en la rebelión, y a menudo se unieron a los hombres en el momento de la lucha. La contienda no sólo movilizó a trabajadores y murcianos, sino que involucró también a grupos de desclasados, especialmente prostitutas.

A pesar de las objeciones a la eficacia de la espontaneidad popular, la insurrección no fue derrotada por la falta de liderazgo. El problema crucial fue la falta de apoyo exterior. La interrupción de las comunicaciones entre Barcelona y el resto de España resultó ventajosa para el gobierno, quien tergiversó los hechos y presentó la sublevación como un movimiento exclusivamente autonomista. Los obreros y campesinos no catalanes, apaciguados por esta falsa imagen de los sucesos, no tomaron ninguna

iniciativa para apoyar a los revolucionarios. Con la excepción de un grupo de trabajadores de las ciudades cercanas, el proletariado de Barcelona luchó solo y lo hizo con gran coraje e iniciativa. El miércoles 28 de julio llegó a la ciudad un importante destacamento de tropas que se desplegó para ir al encuentro de los insurrectos. La intensa lucha se prolongó hasta bien entrado el día siguiente. En las barriadas del Clot y Poble Nou la resistencia de los trabajadores fue tan tenaz que fue necesaria la artillería para despejar las barricadas, y después de que éstas fueran arrasadas, la lucha continuó en el interior de los edificios y en las azoteas.

En otros lugares el combate fue esporádico. La moral de los trabajadores había decaído debido a las noticias de que la rebelión era un hecho aislado. Por ejemplo, la UGT, única federación obrera de ámbito nacional por entonces, no emitió ningún llamamiento a la huelga general hasta la noche de martes 27 de julio, dos días después del levantamiento de Barcelona. El llamamiento, además, no fue distribuido hasta el miércoles, y fijaba la huelga para el lunes siguiente, 2 de agosto, dos días después de que la insurrección de Barcelona hubiera sido reprimida.

Los objetivos de la insurrección estaban poco claros. Para los socialistas, como hemos dicho, se trataba de una sublevación en contra de la guerra; para los anarquistas, una revolución social, y para los republicanos, un ataque a la monarquía. El martes 27 de julio se desencadenó una violenta persecución anticlerical que continuaría hasta el final mismo de la sublevación. Antes de terminar la semana, alrededor de ochenta iglesias, monasterios e instituciones católicas benéficas fueron destruidas. Hoy está probado que el enorme daño causado a las instituciones clericales fue instigado por los políticos radicales, que deseaban desviar a los trabajadores de la vía revolucionaria y encauzar su descontento mediante la destrucción de la propiedad eclesiástica.

No hizo falta mucho para convencerles: los trabajadores detestaban la Iglesia, y lo mismo sucedía con la clase media radical de Barcelona. Los monasterios y conventos de monjas, se decía, eran prisiones donde las novicias indóciles eran vejadas hasta la total sumisión o sencillamente asesinadas. El pueblo asociaba la Iglesia con el terror y la tortura, lo que dio lugar a numerosos incidentes macabros. Tras “liberar” a frailes y monjas,

los bienintencionados agresores procedieron a exhumar los cuerpos enterrados en las criptas monásticas y en los cementerios, buscando evidencias de malos tratos producidos antes de la muerte. Cuando encontraron algunos cadáveres con las extremidades atadas (una práctica habitual entre las monjas Jerónimas), llevaron los cuerpos al ayuntamiento como prueba de las torturas. En algunos casos, varios cadáveres fueron depositados delante de las casas de prohombres católicos. Un joven carbonero algo simple, Ramón Clemente García, ejecutó una danza obscena con uno de los cadáveres, como "diversión". Fue arrestado por la Guardia Civil y poco después murió en el paredón, acusado de "construir barricadas".[18]

La lucha en Barcelona llegó a su fin el sábado 31 de julio, cuando Horta, la última avanzada de resistencia rebelde, fue dominada. Allí los rebeldes lucharon hasta que fue imposible continuar el combate. Cuando la Semana Trágica finalizó, la policía registró un saldo de bajas de sólo 8 muertos y 142 heridos. La cifra oficial de muertes entre la población civil fue de 104, pero es casi seguro que estas cifras fueron manipuladas, y deben ser contrastadas con los 600 muertos de los que habla Buenacasa (Buenacasa fue uno de los participantes en la sublevación, y sus datos, si bien indicaban cifras seis veces mayores que las oficiales, no deben ser desestimados). El número de heridos no se conocerá nunca. Aunque la prensa reaccionaria exigía que se castigara "la furia del diablo con la furia de Dios", en realidad sólo dos monjes fueron asesinados deliberadamente. En los asaltos contra las instituciones religiosas el objetivo no era matar sino —según Joan Connelly Ullman— "destruir la propiedad —la riqueza — del clero".

Tan pronto como terminó el alzamiento se establecieron tribunales militares para castigar a los revolucionarios. De acuerdo con las informaciones oficiales, en el período de los diez meses siguientes al levantamiento, 1.725 personas fueron acusadas por los tribunales militares y 214 escaparon a la persecución del ejército y no fueron nunca capturadas. Durante las investigaciones, los tribunales tuvieron que retirar los cargos sobre 469 personas y poner en libertad a otras 584. El resto de acusados, alrededor de 450, fueron juzgados y condenados a los más variados

períodos de reclusión; 17 fueron condenados a muerte, aunque sólo se ejecutó a 5.

En cuatro de los casos en que se aplicó la pena capital, los procesos carecieron de bases judiciales: las víctimas fueron ejecutadas no porque hubiesen cometido las graves ofensas de que fueron acusadas, sino porque las autoridades querían que sirviesen de ejemplo. Los militares, al parecer, habían decidido ejecutar a una persona por cada incidente importante. La selección de las víctimas fue muy arbitraria. La quinta y última persona en ser ejecutada fue Francisco Ferrer i Guardia. Ferrer había permanecido en el extranjero entre marzo y junio de 1909. Había regresado a Barcelona para visitar a su cuñada enferma y a una sobrina que estaba muy grave. Durante la insurrección pasó la mayor parte del tiempo en su casa de campo, situada a unos veinticinco kilómetros de Barcelona, y sus movimientos fueron controlados muy de cerca por la policía.

Ferrer tenía muy poca influencia entre las masas revolucionarias y los radicales de la ciudad. Aunque había protegido a anarquistas tan notorios como Anselmo Lorenzo y "Federico Urales" (Juan Montseny), los anarquistas y sindicalistas no aprobaban sus actividades financieras y la notoriedad que había alcanzado su vida privada. Los radicales estaban interesados en Ferrer por las contribuciones económicas que pudiese hacer a la causa. Los socialistas, por su parte, lo detestaban. Casi todos lo veían como un elemento necesario y se mostraban diligentes a la hora de recibir su dinero (por ejemplo, la sede central de *Solidaridad Obrera* había sido arrendada con un préstamo de Ferrer), pero estaban muy poco dispuestos a escuchar sus consejos.

Sin embargo, este hombre era un auténtico revolucionario. En contraste con los líderes radicales, como Iglesias, él tenía la esperanza de que la huelga general se convirtiera en una revolución. El gobierno y el clero le odiaban y era obvio que intentarían destruirle. Cuando fue capturado el 31 de agosto, después de permanecer durante cinco semanas escondido en su masía, los prelados de Barcelona enviaron una carta a Maura exigiendo públicamente una acción enérgica en contra de Ferrer y su Escuela Moderna. La respuesta de Maura fue la siguiente: "el gobierno obrará de

acuerdo con el espíritu de vuestra carta y seguirá las líneas de conducta que señaláis".

Francisco Ferrer fue condenado a muerte por un tribunal militar que ya había dictado veredicto mucho antes de que el proceso comenzase. Los procedimientos duraron tan sólo un día. Durante el proceso se cometieron irregularidades que escandalizaron a la opinión pública mundial: por ejemplo, se admitieron como pruebas contra el acusado rumores y declaraciones de personas anónimas. Prisioneros que tenían que responder por sus propios y graves atentados, tuvieron la oportunidad de rebajar sus duras condenas a cambio de declarar en contra de Ferrer. En cambio, las pruebas a favor del acusado fueron eliminadas, y en general la actuación procesal resultó escandalosa incluso para lo que era habitual en la época. Un testigo declaró que Ferrer había participado en la quema de conventos de una barriada donde en realidad no se había producido ni un solo incendio.

La mañana del 13 de octubre de 1909, Ferrer fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el castillo de Montjuïc. Se dice que se enfrentó a la muerte con gran serenidad y valor. Cuando los soldados lo apuntaron con sus armas, gritó: "¡Soy inocente! ¡Viva la Escuela Moderna!".

El asesinato judicial de Ferrer fue un acto no sólo de tremenda injusticia, sino también de una enorme estupidez política. El proceso suscitó una oleada de manifestaciones en toda Europa y contribuyó directamente a la caída del gabinete Maura. No menos importantes fueron los efectos a largo plazo que tendrían las jornadas represivas que siguieron a la sublevación. El gobierno utilizó la rebelión como excusa para suprimir los sindicatos catalanes, suspender las publicaciones de la oposición y cerrar todas las escuelas laicas privadas de la provincia. Aunque toda España estuvo sometida a la ley marcial desde el momento que comenzó la insurrección, el régimen civil no se restableció en Cataluña hasta el 7 de noviembre, es decir, seis semanas más tarde que en el resto del país. Estas medidas radicalizaron más al proletariado catalán, al tiempo que incrementaron la influencia anarcosindicalista en el movimiento obrero.

La Semana Trágica acercó a la patronal catalana a Madrid, y fue el principio del fin de las políticas independentistas burguesas en Cataluña. En

realidad, casi todo el mundo en España se volvió receloso hacia los métodos electorales y confió en el subterfugio político y la acción directa. Los miembros de las clases privilegiadas comenzaron a vivir bajo la sombra de una sola preocupación: el miedo a una insurrección en masa del proletariado urbano. El estancamiento interior de estas clases terminaría por paralizar por completo el sistema constitucional, restringiendo la vida política a maniobras que tenían lugar dentro del gobierno.

Irónicamente, la sublevación de Barcelona podría haber revitalizado el agonizante sistema del *turnismo* —del mismo modo que la rebelión federalista de 1873 lo había propiciado— si no hubiera sido por las maquinaciones políticas del joven rey Alfonso XIII. Su evidente intervención en los asuntos parlamentarios asestaría un golpe fatal a la política electoral, conduciendo directamente a la dictadura de Primo de Rivera de los años veinte.

El primer monarca de la Restauración, Alfonso XII, se había adaptado al régimen constitucional de las décadas de 1870 y 1880. Básicamente, la oligarquía terrateniente ordenaba y la monarquía obedecía. La muerte del rey en noviembre de 1885 habría sido muy lamentada por los oligarcas si éstos hubieran podido adivinar el carácter de su sucesor. El segundo monarca de la Restauración, Alfonso XIII, nació seis meses después de la muerte de su padre. Su madre, doña María Cristina, no emprendió ninguna acción que pudiese desestabilizar el esquema diseñado por Cánovas, y esas décadas fueron las más estables de la moderna historia española. El desarrollo industrial avanzaba a un ritmo medianamente rápido. Se redujo la influencia política del ejército, los carlistas fueron asimilados dentro del orden establecido y el movimiento obrero fue reprimido cada vez que su actividad resultaba amenazante.

Pero mientras Cánovas perfeccionaba su nuevo sistema político, el joven rey se hacía cargo del ejército. Educado al estilo de un príncipe castrense, pasó su vida entre desfiles, espadas, uniformes y oficiales que le instruyeron en las prerrogativas de mando. En 1902, el joven Alfonso comenzó a manifestar un inquietante interés por sus privilegios reales. La constitución de 1876 le otorgaba al monarca el derecho de designación y de destitución del primer ministro; cuando finalizaba el año 1909, Alfonso

decidió ejercer su autoridad real del modo más expeditivo. Cuando Maura, obstaculizado por la oposición liberal en las Cortes, intentó fortalecer su posición pidiendo al soberano una renovación del voto de confianza, Alfonso dejó estupefacto al primer ministro al aceptar su propuesta formal de dimisión y sustituyéndolo por el liberal Segismundo Moret. Con este acto de traición, Alfonso sentenció a muerte al *turnismo*, un sistema que había estabilizado el gobierno español durante un cuarto de siglo.

Las esperanzas de Maura de fortalecer su posición con una política represiva se desvanecieron muy pronto. Aunque contaba con mayoría en las Cortes, las maniobras durante la Semana Trágica y el caso Ferrer habían acentuado las divisiones dentro del país y habían vuelto a la opinión internacional en contra de España. Aunque el rey hubiese apoyado a Maura, habría resultado difícil predecir cuánto tiempo se habría mantenido en su cargo. Era obvio que toda la estructura creada por Cánovas se estaba desintegrando, y que la intervención de Alfonso XIII en los asuntos de la oligarquía era un efecto, y no simplemente la causa de su caída. Con la desaparición del gabinete Maura, el sistema canovista, basado en un relevo disciplinado de los partidos, daría paso a una irresponsable lucha interna entre distintas facciones políticas que acabaría socavando la estructura constitucional.

# 8: La CNT

## Los primeros años

La década siguiente a la Semana Trágica inaugura el período de madurez del anarquismo español, período en el cual el movimiento alcanzó enormes dimensiones y desarrolló plenamente sus tácticas y formas de organización. En esta época se produjo también el nacimiento de la CNT, la más importante de las organizaciones libertarias que actuarían durante la Guerra Civil Española.

La maduración del anarquismo español constituyó un complejo proceso de perfeccionamiento de los métodos anteriores de lucha. Durante la época de la Internacional, los anarquistas trataron de determinar una línea de actuación que desarrollara de una forma coherente la teoría y la práctica, pero su influencia sobre la clase obrera española fue muy limitada. Este fue probablemente el período más experimental en la temprana historia del movimiento. Sus métodos —la huelga general y las insurrecciones locales — se desarrollaban en un espacio limitado por el histórico telón de fondo del federalismo. Durante las décadas de 1880 y 1890, la línea de acción había evolucionado hacia una política de insurrecciones locales que culminaría con el levantamiento de Jerez. A lo largo de estos años, sin embargo, existieron siempre anarquistas que resaltaron la importancia de otras tareas menos dramáticas como la propaganda y la organización sindical. Con el tiempo todas estas tácticas decaerían simultáneamente y dejarían de considerarse como excluyentes entre sí. Agotadas las posibilidades del uso único de cualquiera de estos métodos, los anarquistas

españoles comenzaron a desarrollar la integración de éstos en el seno del anarcosindicalismo. La huelga general se alternaba con las insurrecciones locales, el bombardeo propagandístico, la acción directa individual o de pequeños grupos y la tenacidad organizativa de los sindicatos Esta combinación de tácticas simples, flexibles y transmisibles, es lo que explica, en gran parte, el notable crecimiento del movimiento en los años siguientes. El gran problema radicaba entonces en desarrollar formas libertarias de organización capaces de agrupar esta amplia gama de actividades y tácticas, y de promover su utilización a escala nacional.

Tales formas organizativas maduraron gradualmente, de un modo casi inconsciente, alentadas por la desintegración de las instituciones sociales y políticas españolas. Después de 1909, el sistema constitucional quedó tan debilitado por las divisiones políticas internas que era completamente imposible llevar a cabo políticas represivas o acometer reformas que resultaran satisfactorias. Maura había intentado afianzar la oligarquía y aplastar el movimiento obrero. En junio de 1907, trató de eliminar el sufragio popular y de disminuir la influencia de los caciques otorgando privilegios al voto “corporativo”. Para los liberales y los republicanos esta política parecía pronosticar la tendencia hacia un monolítico régimen conservador. Siete meses más tarde, cuando el ministro de Gobernación del gabinete Maura, De la Cierva, presentó una ley “antiterrorista” que otorgaba amplios poderes a las juntas provinciales con el propósito de eliminar a los “terroristas” anarquistas y suspender sus publicaciones y sus actividades en el exilio, el gobierno se encontró con el firme rechazo de casi toda la oposición.

El partido liberal, más consciente que los conservadores de la necesidad de neutralizar el descontento revolucionario por medio de una política de concesiones, formó una alianza con los republicanos para deponer al gobierno. Cuando, el 21 de octubre de 1909, el liberal Moret fue llamado a formar gobierno y reemplazó a Maura como primer ministro, se comprometió públicamente a llevar a cabo un programa menos represivo. En noviembre, cuatro anarquistas acusados de rebelión en la Semana Trágica fueron excluidos de la jurisdicción militar y puestos a disposición de los tribunales civiles. Pocos días después se suspendió la ley marcial en

Cataluña. Finalmente, se declaró una amnistía general para los insurrectos encarcelados por los sucesos de julio. Esta atmósfera menos represiva se prolongó hasta el año siguiente, cuando Moret fue reemplazado por el liberal José Canalejas (en febrero de 1910), cuyo gobierno estaba claramente orientado hacia la reforma y hacia una mayor libertad política.

Por entonces el movimiento obrero catalán daba los primeros signos de recuperación. El 18 de diciembre de 1909, *Solidaridad Obrera* convocó una asamblea especial con el fin de aglutinar de nuevo la fragmentada organización. Asistieron tan sólo delegados de 27 sindicatos; esto suponía un descenso importante, teniendo en cuenta que en la asamblea del mes de abril, ocho meses atrás, habían participado delegados de 108 asociaciones. Los afiliados de la federación obrera habían descendido de 15.000 a cerca de 4.500. Una patética actitud defensiva dominó la asamblea. Los delegados se empeñaron en negar toda conexión con la huelga general del mes de julio anterior, así como cualquier vinculación ideológica con Ferrer. Unos meses atrás, en junio, *Solidaridad Obrera* había tratado de convertir la Federación Regional Catalana en una organización de ámbito nacional; ahora aquellos esperanzadores planes parecían quedar muy lejos. “Sin duda —observa el historiador anarquista José Peirats—, la tremenda represión que culminó con los fusilamientos de Montjuïc retrasó la consolidación de la confederación”.

En el lapso de unos pocos meses, no obstante, volvió a surgir la idea de constituir una confederación nacional. La caída de *Solidaridad Obrera* después de la Semana Trágica, supuso en cierto modo una ventaja: los líderes obreros más moderados se habían apartado por el momento del movimiento, permitiendo mayor libertad de acción a la influencia anarquista. Esta influencia se vio fortalecida por la rehabilitación del nombre de Ferrer. La injusticia de los cargos en su contra, seguida por el drama de su martirio, produjo —en palabras de Díaz del Moral— “una gran exaltación del sindicalismo y del anarquismo en la península”. Finalmente, un fuerte interés por la creación de una confederación nacional fue desarrollándose entre los sindicatos de fuera de Barcelona, donde la represión de Maura había sido menos severa.

El 30 de octubre de 1910, los delegados de todas las confederaciones locales de España fueron convocados durante tres días en el Palacio de Bellas Artes de Barcelona para un informal intercambio de opiniones y experiencias. En esta reunión, organizada por la reconstituida Confederación Obrera Catalana (la organización regional de *Solidaridad Obrera*), se tomó por fin la decisión de fundar una nueva confederación del trabajo: la Confederación Nacional del Trabajo, la conocida CNT. Debido en gran parte a los esfuerzos de Anselmo Lorenzo, muchos anarco-comunistas de *Tierra y Libertad* comprendieron la necesidad de trabajar en un movimiento obrero de masas. La nueva Confederación era, lógicamente, todavía muy limitada: los delegados representaban a casi 30.000 miembros, pertenecientes a cerca de 350 sindicatos de toda España. Sin embargo, las discusiones fueron muy acaloradas, y todas las actividades fueron llevadas a cabo con gran energía.

Debemos detenernos para examinar la estructura inicial de esta organización. La CNT, en sus comienzos, fue estructurada orgánicamente en torno a la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. Posteriormente se establecieron otras confederaciones regionales de los sindicatos de cada provincia. La organización nacional era, en la práctica, una maleable agrupación de confederaciones regionales, divididas en confederaciones comarcales (locales y por distritos), que se dividían a su vez en sindicatos. Estos sindicatos, conocidos antes por el aparatoso nombre de Sociedades de Resistencia al Capital, fueron establecidos sobre principios ocupacionales de oficio, en el típico estilo sindicalista de federaciones locales y sindicatos de oficio. Para coordinar esta estructura, los congresos anuales de la CNT elegían por votación un Comité Nacional, cuyas funciones primordiales eran la realización de estadísticas y la asistencia a los presos.

La secretaría general del Comité Nacional y las secretarías de los Comités Regionales eran los únicos cargos remunerados de la Confederación. Durante los primeros años, el cargo de secretario general fue desempeñado por José Negre. En contraste con su rival socialista, la CNT evitó toda manifestación burocrática o centralista. A la hora de llevar a cabo el trabajo de organización, se confiaba primordialmente en las iniciativas locales, comarcales y regionales. No se crearon fondos para las

huelgas; confiaban en que éstas fueran breves y, si era necesario, violentas, como correspondía a una organización revolucionaria cuya aspiración principal era el derrocamiento del capitalismo. El propósito de la CNT —o al menos así lo creían sus militantes— era mantener vivo el espíritu de rebelión sin debilitar su capacidad de lucha con reformas graduales y largas y agotadoras huelgas; no obstante, se establecieron fondos fijos destinados a la ayuda a los presos y a sus familias y, en menor medida, a la creación de "escuelas racionalistas". Habría resultado difícil encontrar una organización más implicada en la defensa de militantes encarcelados y en la mejora espiritual, cultural y moral de la clase obrera que la CNT. La frase "emancipación integral de los trabajadores" está presente en todos los documentos importantes de esta extraordinaria organización.

¿Cómo funcionaba la CNT? Para responder a esta pregunta debemos volver a los estatutos de la Confederación Regional Catalana, que fue la que estableció las pautas para el conjunto del movimiento nacional. La organización estaba comprometida con la "acción directa" y rechazaba toda "injerencia política o religiosa". Las federaciones locales y comarcales afiliadas serían "dirigidas con la mayor autonomía posible, entendida ésta como una absoluta libertad en todos los asuntos profesionales relacionados con los sindicatos que estaban integrados en ellas". Cada miembro debía pagar una cuota mensual de diez céntimos (una cantidad ínfima) que se repartiría en partes iguales entre la organización local, la Confederación Regional, la Confederación Nacional, un fondo especial para "presos sociales", y el periódico del sindicato, *Solidaridad Obrera*.

El Comité Regional —el equivalente al Comité Nacional de la CNT en el ámbito regional— era un ente administrativo. Aunque desempeñaba un claro papel directivo en la coordinación de las actividades, estaba sujeto a las líneas políticas marcadas por el Congreso Regional anual. En situaciones extraordinarias el Comité estaba obligado a consultar a los órganos locales por medio de un referéndum y de propuestas escritas. Además del Congreso anual se convocaba un Congreso Regional cada año, en el que el Comité Regional era elegido mediante votación. Los estatutos no contenían disposiciones para el cese de los miembros del Comité —una omisión significativa—, pero podían convocarse Congresos extraordinarios

a requerimiento de la mayoría de las federaciones locales. Éstas debían presentar sus solicitudes con una anticipación de tres meses respecto a la fecha de celebración de un Congreso ordinario, “de modo que se pudieran preparar los temas para el debate”. Un mes antes del Congreso, el Comité estaba obligado a publicar en los periódicos de los sindicatos los temas a tratar, dejando tiempo suficiente a los trabajadores para definir sus posiciones respecto a los mismos y preparar a sus delegados. Las delegaciones al Congreso eran elegidas en las asambleas generales de trabajadores convocadas por las federaciones locales y comarcales; la fuerza de su voto estaba determinada por el número de afiliados al que representaban.

En la práctica, la CNT era más democrática de lo que sus estatutos parecían indicar. En las bases de la organización se revelaba una vitalidad vibrante, un control real y una iniciativa ejercida desde abajo. Los centros obreros, que los anarquistas habían fundado en la época de la Internacional, no eran meras oficinas del sindicato local; eran lugares de reunión y actividad cultural, donde los afiliados discutían sus ideas, leían y asistían a clases. Todos los asuntos de la CNT local eran tratados por trabajadores que no recibían sueldo ninguno. Aunque la reunión oficial del sindicato se realizaba una vez cada tres meses, todos los sábados por la noche y los domingos por la mañana se efectuaban “conferencias de carácter instructivo”. El Consejo del sindicato local contaba con un presidente, varios vicepresidentes y secretarios, un pequeño equipo de “contables” para controlar los fondos y un bibliotecario.[19] La solidaridad entre los sindicatos era tal que resultaba difícil mantener una huelga aislada en una localidad; casi siempre una huelga generaba otras huelgas. Esto era frecuente sobre todo en sólidos centros anarquistas como Zaragoza, donde el movimiento tenía hondas y vitales raíces.

El respeto a la voluntad de los afiliados era una regla fundamental. En el Congreso anual, por ejemplo, muchas delegaciones llegaban con instrucciones claras sobre el signo que debía tener su voto en las cuestiones más importantes. Ninguna de las delegaciones tenía la obligación de adoptar una medida con la que estuviese en desacuerdo o que considerase que estaba más allá de las capacidades de sus afiliados. La participación en

las votaciones era enteramente voluntaria. Muy a menudo, a través de este sistema se obtenían resultados equiparables a los de cualquier organización centralizada. En otras ocasiones, conducía a estallidos esporádicos, que eran erradicados con facilidad. Estas insensatas explosiones se debían generalmente a un exceso de confianza por parte de los sindicatos locales, que solamente se corregiría con la experiencia.

En 1911, la CNT era aún una organización muy inmadura; su radiante optimismo la conduciría muy pronto a resultados desastrosos. Apenas el Congreso fundó la Confederación Nacional, ésta decidió secretamente convocar una huelga general de apoyo a los huelguistas de Bilbao y en protesta por la guerra de Marruecos. La acción fue programada para el 16 de septiembre, sólo cinco días después de la fundación de la CNT. Comenzó en Zaragoza y se extendió rápidamente a Gijón, Valencia y Sevilla. Hubo también brotes de huelga en Oviedo, La Coruña, Málaga, Santander y otras ciudades. En Cullera, un pueblo próximo a Valencia, el paro general derivó en una insurrección a gran escala. Los trabajadores se apoderaron de la localidad durante varias horas y en el curso de la sublevación mataron al alcalde y a un juez. En Madrid el movimiento fue abortado por la intervención socialista, que utilizó su influencia para prevenir la huelga que se estaba gestando. Sorprendentemente, no se produjo ninguna acción en la ciudad de Barcelona, donde la CNT había celebrado su Congreso pocos días antes. Allí las autoridades habían sido alertadas por Sánchez Villalobos Morena, hermano de Miguel Villalobos Morena, uno de los colaboradores en la formación del Comité de huelga en julio de 1909. En la noche del 15 de septiembre, la policía arrestó a 500 cenetistas y, con la cooperación de Lerroux, que veía al sindicato como un peligroso rival de los radicales, logró frenar el movimiento huelguístico.

Canalejas, el Primer Ministro liberal, reaccionó enérgicamente. Las tropas fueron trasladadas a las ciudades más importantes y se impuso la ley marcial. Los centros obreros de la CNT fueron clausurados, al igual que las Casas del Pueblo de los socialistas, a quienes el gobierno consideraba sospechosos de querer apoyar la huelga. La prensa anarquista fue suspendida y se impuso la censura parcial en otras publicaciones. Se llevaron a cabo numerosos arrestos de militantes obreros, y los líderes de la

huelga que fueron apresados recibieron duras condenas. Los que escaparon a la persecución se exiliaron en Francia; esta fue la primera fuga de cenetistas al país vecino, circunstancia que se repetiría más tarde en diversas ocasiones. El 10 de enero de 1912 cinco anarquistas fueron condenados a muerte por su participación en la sublevación de Cullera, pero se les conmutó la pena por cadena perpetua. El último del grupo, Juan Jover Ferrer ("Chato de Cuqueta") se libró del garrote vil gracias a Alfonso XIII, quien estaba entonces interesado en ganarse el favor de las fuerzas de izquierda.

La CNT pasó a la clandestinidad. Sus miembros se dispersaron precipitadamente y la prensa cenetista desapareció. Canalejas, que había sido recibido con agrado como un primer ministro con tendencias reformistas, inició una fuerte represión contra el movimiento obrero en su conjunto, perturbando incluso a los moderados socialistas y republicanos. Para quebrar una huelga ferroviaria en 1912, Canalejas reclutó a 12.000 trabajadores, que pasaron a formar parte del ejército. El Primer Ministro liberal pagaría cara su actitud. Fue asesinado en la Puerta del Sol por Miguel Pardiñas, un joven anarquista aragonés. Pardiñas, a quien Buenacasa consideraba un joven inofensivo y de buenos modales, se quitó la vida tras el atentado. Tras la represión del movimiento obrero comenzó una nueva ola de atentados. En abril del año siguiente, otro joven anarquista de Barcelona, José Sancho Alegre, intentó matar a Alfonso XIII durante un desfile militar en Madrid. Aunque el atentado fracasó, Sancho Alegre fue condenado a muerte. De nuevo la indulgencia del monarca propició la conmutación de la pena.

La suerte del movimiento anarcosindicalista comenzó a cambiar gradualmente, aunque su crecimiento sería lento en los años siguientes. En 1913, el sucesor de Canalejas, el liberal Romanones, concedió la amnistía a todos los presos de la huelga general de septiembre de 1911. La CNT continuaba siendo una organización ilegal; no obstante siguió funcionando de forma clandestina, sin dejar de dirigir huelgas y llevar la agitación a las fábricas.

El estallido de la Primera Guerra Mundial dividió prácticamente a todas las organizaciones de la clase obrera al norte de los Pirineos. La deserción

de destacados líderes anarquistas como Kropotkin, Frave y Malto, que pasaron al bando aliado junto con un pequeño grupo de seguidores, sacudió al movimiento, que se declaró firmemente en contra de la guerra, "¡Antes que la guerra, la revolución!", clamaba el Ateneo Sindicalista de Barcelona en un manifiesto de Antonio Loredo, suscrito por cientos de organizaciones. *Tierra y Libertad* continuó fiel al internacionalismo, asumiendo una posición antibelicista desde el comienzo del conflicto.

Buenacasa estaba convencido de que las deserciones de Kropotkin y otras notorias figuras del movimiento internacional anarquista precipitaron la muerte de Anselmo Lorenzo. Sea como fuere, este gran patriarca del anarquismo español murió el 30 de noviembre de 1914, después de dedicar casi medio siglo al movimiento libertario en España. La CNT, cuya formación había significado tanto para Lorenzo, no superaba los 15.000 afiliados en aquellos días. En 1916 la organización se había recobrado lo suficiente como para editar *Solidaridad Obrera* a diario; sin embargo el movimiento seguía sujeto a un permanente acoso. La postura anti-bélica de los militantes anarquistas desagradaba profundamente a las autoridades. Aunque España se mantenía neutral, sus clases dominantes estaban comprometidas ideológicamente con los beligerantes y obtenían grandes beneficios de la guerra.

En la primavera de 1915, el Ateneo Sindicalista de El Ferrol intentó organizar un congreso internacional anti-bélico, acontecimiento que atrajo a delegados de Portugal, Brasil y otros países, incluyendo representantes de grupos juveniles del socialismo francés. El entonces Primer Ministro, Eduardo Dato, conservador y temeroso de ofender a las potencias europeas en guerra, ordenó clausurar el congreso poco después de la llegada de los delegados, pero la prohibición no evitó que los cenetistas catalanes convocaran una conferencia secreta con el propósito de reconstruir la desmembrada CNT.

Para las masas españolas, la guerra propició la creación de puestos de trabajo y cierto crecimiento económico. También provocó, sin embargo, una espectacular subida de los precios, que sobrepasaron la capacidad adquisitiva de los asalariados, especialmente la de los trabajadores no cualificados o semi-cualificados. Una vez más una ola de descontento

invadió el país. Pero esta vez el descontento no sólo creció entre los trabajadores, sino que alcanzó también al ejército, a la clase media y a la burguesía industrial. La situación social en España comenzó entonces a tomar un cariz ciertamente curioso. Los partidos liberal y conservador se habían dividido en facciones, dificultando cada vez más el funcionamiento del viejo sistema parlamentario. El ejército, minado por el descontento, había comenzado a formar las Juntas de Defensa, un sistema de asociaciones que parecía guardar cierta semejanza con los sindicatos obreros, por lo menos en cuanto a sus reclamaciones. Reivindicaban ascensos por antigüedad, aumento de sueldos y el derecho a negociar con el gobierno todo lo relacionado con las mejoras del servicio militar. Su jefe, el coronel Márquez, tenía fama de ser un sencillo y honesto soldado de tendencia republicana que pretendía lograr ciertas reformas en el ejército y acabar con la oligarquía y el caciquismo.

En 1917 se dio una paradójica situación: el ejército, que había sido durante décadas relegado de la política, se convirtió en la esperanza de la regeneración. La burguesía industrial, cansada de las restricciones económicas y de los elevados impuestos, comenzó a ver en el ejército un posible instrumento para desterrar a la burguesía terrateniente y apoderarse del poder político. Francisco de Asís Cambó, industrial catalán y líder de la Lliga, estableció contactos con el coronel Márquez, a los que se unirían Lerroux y varios republicanos, radicales y conservadores catalanes. Los contactos se extendieron al movimiento obrero a través de alianzas que habían sido pactadas entre socialistas y republicanos. Por primera vez parecía que España se encaminaba hacia una libre coalición de industriales conservadores, clase media republicana, pequeña burguesía demócrata y socialistas. Esta aglomeración de elementos básicamente hostiles estaba unida por el deseo de despojar a la clase terrateniente de su poder y establecer unas Cortes Constituyentes elegidas libremente, que redactarían una nueva e ilustrada Constitución para España.

¿Qué actitud tomaría la CNT frente a este curioso bloque político? El sindicato anarcosindicalista se implicó hasta el extremo de comprometerse en una política de acción común con la UGT. Debemos destacar que la CNT no era completamente homogénea en cuanto a opiniones. Existían fuertes

tendencias sindicalistas representadas por Salvador Seguí, secretario de la Confederación Regional Catalana, y posteriormente por Ángel Pestaña, editor de *Solidaridad Obrera*. Tanto Seguí como Pestaña creían en el anarquismo como ideal social, y fueron sin lugar a dudas personas de gran honestidad y capacidad de sacrificio, si bien para ellos la actuación práctica debía estar estrechamente relacionada con los problemas cotidianos y las exigencias organizativas; también resaltaron la necesidad de obtener resultados inmediatos, frecuentemente a expensas de sus principios libertarios. En clara oposición a esta postura se encontraban los anarquistas de principios más firmes, que seguían comprometidos con un revolucionario derrocamiento del capitalismo y con el establecimiento de una sociedad libertaria.

Seguí estaba impaciente por llegar a un acuerdo con la UGT. Es probable que pensara que los socialistas prácticos como Pablo Iglesias y Largo Caballero eran más "compatibles" que los "fanáticos" integrantes de *Tierra y Libertad*. Ya avanzado el año 1916, la cooperación entre las dos organizaciones obreras más importantes parecía algo inevitable. En esos días, los partidos políticos estaban en constante conflicto, los industriales y la burguesía estaban más divididos que nunca, los sindicatos experimentaban un continuo y rápido crecimiento, la fidelidad del ejército hacia la corona resultaba algo ambigua y entre los trabajadores se manifestaba un gran descontento por el alza del coste de la vida. ¿En tales circunstancias, qué podía resultar más lógico que establecer una relación de cooperación dentro del movimiento sindical?

Estas perspectivas comenzaron a tomar forma en Valencia, cuando en una asamblea de la CNT se decidió formalmente analizar las posibilidades de una acción conjunta con la UGT. Después de un "intercambio de impresiones", las dos organizaciones establecieron un acuerdo de trabajo, que luego fue conocido como el "pacto de Zaragoza". El acuerdo se centraba, en un principio, en temas económicos: en primer lugar, la CNT y la UGT decidieron hacer un llamamiento al gobierno para reducir el coste de la vida, frenando a los monopolistas, a los especuladores y a los exportadores de productos alimenticios. Para reforzar estas demandas, se trazó un plan de acciones escalonadas. El movimiento culminó cuando las dos

organizaciones obreras acordaron, el 16 de diciembre de 1916, una huelga general de veinticuatro horas en toda España en protesta por la subida de los precios.

En el verano de 1917, el vínculo entre las dos centrales obreras había alcanzado ya un carácter político. Había llegado el momento de que los industriales, la clase media republicana y los lerrouxistas tuviesen una confrontación con la oligarquía. En junio, Dato, el Primer Ministro recientemente designado, respondió al ascenso y avance revolucionario disolviendo las Cortes y suspendiendo las garantías constitucionales. Los diputados catalanes fueron requeridos en Barcelona por la Lliga y se constituyeron en Asamblea Nacional, con la misión de renovar totalmente la estructura económica de España. La asamblea logró reunir alrededor de setenta diputados de los setecientos sesenta, y mantuvo dos sesiones secretas antes de ser disuelta por la policía.

En esta ocasión el gobierno incitó astutamente al movimiento obrero a una acción prematura. La intención de Dato era bastante clara: se proponía llevar a los partidarios de la Lliga al terreno del gobierno y apaciguar la inquietud revolucionaria de los trabajadores, antes de que ésta fuera demasiado lejos. La ocasión surgió cuando en Valencia los trabajadores ferroviarios de la Compañía de Ferrocarriles del Norte decidieron ir a la huelga. El motivo de la huelga no estuvo del todo claro, y es posible que fuera obra de un agente provocador. En cualquier caso, el gobierno aconsejó a la compañía que tomase medidas enérgicas contra el sindicato ferroviario afiliado a la UGT. Si bien los socialistas procuraron que los trabajadores se reintegraran a sus puestos de trabajo, la compañía provocó la crisis al negarse a readmitir a cuarenta y tres militantes obreros, en vista de lo cual los trabajadores ferroviarios decidieron reanudar la huelga.

Una creciente efervescencia se extendía a casi toda la clase trabajadora de las provincias españolas. En Vizcaya, 25.000 metalúrgicos se declararon en huelga, recibiendo el apoyo moral y material de los mineros de la región. Los socialistas se encontraban en una situación desesperada. Convencidos de que la huelga general estaba destinada a fracasar debido a la falta de preparación previa, intentaron persuadir a la CNT para aplazar la acción huelguística en Barcelona. Al mismo tiempo, tras hacer una interpretación

errónea de las intenciones gubernamentales, amenazaron con la huelga general si los cuarenta y tres obreros ferroviarios no eran readmitidos en sus puestos de trabajo. Esta amenaza, que los socialistas consideraban suficiente para hacer retroceder al gobierno, era precisamente lo que Madrid estaba esperando.

La huelga general se convocó para el 13 de agosto, y en su mayor parte fue aplastada en pocos días. En algunas ciudades estallaron duros combates, sobre todo en Barcelona, donde la CNT respetó a regañadientes el pacto con sus aliados socialistas. Se levantaron barricadas en el distrito de Atarazanas y los choques más violentos se produjeron cuando los huelguistas intentaron impedir la circulación de los tranvías. De forma muy significativa, las tropas se pusieron de parte del gobierno y barrieron las calles a fuego de ametralladoras y artillería, aceptando incluso a oficiales de la Guardia Civil como comandantes. Según fuentes oficiales, el combate arrojó un saldo de setenta muertos y centenares de heridos, además de más de 2.000 detenciones. La ley marcial fue declarada en todo el país. Esta vez el mayor peso de la represión cayó sobre los socialistas: Largo Caballero, Anguiano, Besteiro, Saborit y Zulueta fueron arrestados, encarcelados en el penal de Cartagena y luego sentenciados a cadena perpetua. Un año más tarde, sin embargo, fueron puestos en libertad por la amnistía general que siguió al período de represión. Dato, en conjunto, había demostrado mayor determinación en la represión del movimiento obrero que Canalejas, y varios años más tarde pagaría el mismo precio que su predecesor liberal.

La huelga tuvo una naturaleza esencialmente política, y sus demandas estuvieron más inspiradas por las ideas socialistas que por las anarquistas. El programa político de la CNT en Barcelona, por ejemplo, no fue más allá de la demanda de una república, la sustitución del ejército profesional por las milicias, el derecho de los sindicatos a vetar (que no a decretar) leyes, la legislación del divorcio, la separación de la Iglesia del Estado, y la clausura de las iglesias “durante un cierto período”. En el terreno económico, el sindicato reivindicaba, entre otras cosas, siete horas de trabajo diarias, un mínimo de cuatro pesetas de jornal, la nacionalización de la tierra, la abolición del trabajo a destajo y una regulación más firme del trabajo infantil. Con respecto a la demanda de un plebiscito para decidir la

intervención en conflictos armados, el programa irónicamente estipulaba que “los que voten a favor, serán alistados en primer lugar”. A pesar de su carácter moderado, teniendo en cuenta el contexto anarquista, estas demandas no apaciguaron a los parlamentarios burgueses de Barcelona. Como era de prever, la Lliga y sus aliados se alejaron completamente del movimiento obrero.

La huelga general de agosto de 1917 marca, no obstante, un punto decisivo en la historia moderna de España. Supuso la alianza de la burguesía catalana con Madrid, de tal modo que a partir de ese momento la Lliga y sus acaudalados partidarios subordinarían totalmente su visión autonomista a los simples intereses de clase. La burguesía catalana encontraría su principal enemigo, no en los terratenientes de Castilla y de Andalucía, sino en el proletariado catalán. De este modo quedaba conformado el marco social que terminaría por llevar a los industriales de Barcelona a los brazos del general Franco.

## Los años de la posguerra

El fin del conflicto europeo significó para España el inicio de un período de crisis económica y de encarnizada lucha social. La recesión del mercado en tiempos de guerra, junto con el cierre de astilleros, plantas siderúrgicas y minas y el abandono de las tierras de cultivo, provocó un desempleo generalizado en las ciudades y en el campo. En el empeño de reducir los salarios, los industriales comenzaron a prepararse para el enfrentamiento con los sindicatos. Para este fin estaban dispuestos a utilizar los *lock-outs*, las listas negras de militantes sindicales, los “Sindicatos Libres” (promovidos por los patronos para sustituir a la CNT) y, como veremos más adelante, las pandillas de pistoleros que a través de la intimidación, e incluso del asesinato, presionarían a los líderes sindicalistas.

El objetivo principal de esa ofensiva era la CNT. La organización obrera había surgido, tras los años de guerra y huelga general, con más fuerza que nunca: en 1919, la CNT tenía entre 600.000 y un millón de afiliados. Había absorbido a la mayor parte de los sindicatos catalanes más antiguos, que de

forma prudente se habían resistido a ingresar en *Solidaridad Obrera*. Esta expansión de la confederación anarcosindicalista después del fracaso de la huelga general de agosto es bien significativa. En épocas anteriores, los sindicatos de tendencia anarquista eran reprimidos con facilidad y, después de cada derrota, o bien resurgían fuertemente debilitados, o bien desaparecían totalmente. La CNT no sólo había sobrevivido a los ataques del gobierno, sino que además había conseguido desarrollar una extraordinaria fuerza revolucionaria en todo el país.

El desarrollo sindical puede atribuirse a la intransigencia de la burguesía catalana. La militancia de los industriales provocó como respuesta la militancia de la clase obrera; el fracaso de los métodos políticos promovió las posturas apolíticas y la acción directa. Ciertamente, todo esto había ocurrido antes, pero el movimiento nunca había logrado superar la eficacia de las medidas represivas. Por otro lado, en este momento aparecían otros factores que estimulaban el crecimiento de la organización sindical, a pesar de los enérgicos esfuerzos por destruirla.

En ese sentido uno de los factores más importantes fue la crisis revolucionaria de la posguerra, entre 1918 y 1920. La clase obrera española participó del entusiasmo que conmovió al mundo entero por el éxito de la Revolución Soviética. El derrocamiento del Zar y la posterior toma del poder por los bolcheviques —una insurrección que proclamó los ideales socialistas— produjo un enorme alborozo en toda la península. Las clases dominantes quedaron aterrorizadas. “La inminencia de una revolución política —escribe Díaz del Moral— inquietaba incluso a los más optimistas […] La visión de estos acontecimientos y el ejemplo de la Europa oriental sembró en todos los estratos proletarios la esperanza de una victoria. Desde ese momento, la más poderosa corriente de agitación obrera de la historia de nuestro país había comenzado”.

Esta agitación pone de manifiesto el importante papel que tuvieron los militantes anarquistas en el crecimiento de la CNT y en su orientación revolucionaria. En el invierno de 1918 se convocó en Barcelona una conferencia anarquista de ámbito nacional para definir una línea de actuación común con respecto a la CNT. Se acordó que el sindicato no podía ser considerado como una organización anarquista en el sentido estricto del

término, pero se decidió que la CNT sería el referente principal en el desarrollo de las actividades anarquistas. Todos los anarquistas españoles fueron animados a ingresar en la unión sindical y a convertirse a sus principios. “Los resultados de la Conferencia de Barcelona no pudieron ser más positivos —observa Buenacasa—. En el espacio de unos meses, todas las entidades de la CNT se encontraban perfectamente compenetradas con el espíritu y el ideario anarquista”.

Las conclusiones de Buenacasa, sin embargo, no deben ser aceptadas precipitadamente, como prueba el resultado del Congreso de la Confederación Regional Catalana (el famoso “Congreso de Sans” convocado el 28 de junio, y que duró hasta el primero de julio). Esta asamblea contó con la asistencia de 164 delegados en representación de alrededor de 73.860 afiliados de 27 federaciones locales. Las decisiones del Congreso fueron tan importantes para el desarrollo futuro de la CNT, que merecen un examen más detallado.

Los sindicatos fueron completamente reestructurados. Hasta el Congreso de Sans, los trabajadores de una misma fábrica estaban divididos en secciones de oficio separados e independientes. A partir de entonces se organizarían alrededor de un *sindicato único*, en el que estarían integrados todos los trabajadores de una misma empresa. Esta reorganización no eliminó todas las Secciones que ya estaban establecidas en la CNT (un determinado número de ellas todavía persistiría en zonas donde dominaba la UGT), ni tampoco suprimió la representación por oficios dentro del mismo sindicato único. Trabajadores de distinta cualificación y experiencia se agrupaban en Secciones que se reunían luego en un gremio industrial común.[20] Frente a los problemas o conflictos industriales, todas las secciones actuaban como una sola entidad. El *sindicato único* formó las bases de la Confederación Regional Catalana y de los gremios que se integrarían luego en la CNT. Al unir a los obreros cualificados y no cualificados en un organismo común, los sindicatos no sólo incrementaron su capacidad de lucha, sino que también facilitaron a los trabajadores no cualificados, que percibían los salarios más bajos, ejercer una influencia radical sobre la élite mejor remunerada de los gremios.

Para fortalecer aún más la militancia sindical, el Congreso reafirmó su oposición a las cajas de resistencia, o fondos de huelga. En ese aspecto el acuerdo fue unánime. De acuerdo con las afirmaciones de Pestaña, “desde tiempos inmemoriales los obreros catalanes se han opuesto a las cajas de resistencia, porque piensan que disminuyen la voluntad de lucha”. Al mismo tiempo Pestaña reconocía el derecho de los miembros de la CNT a contribuir con una aportación personal en la ayuda a los participantes en huelgas de grandes dimensiones. Tales arreglos, sin embargo, tenían un carácter privado: la estructura sindical no era utilizada. Al mismo tiempo el Congreso de Sans anunció el compromiso con la acción directa —como “medio preferente”— y expresó sólo de forma indirecta su oposición a los métodos políticos. El Congreso también se abstuvo de apoyar el “comunismo libertario”. Buenacasa, en desacuerdo con estas conclusiones, observó que “el Congreso no respaldaba una franca declaración de principios libertarios”.

Resulta más sorprendente aún que los delegados eligieran para un nuevo comité nacional a Buenacasa como secretario general, y a anarquistas como Evelio Boal, Vicente Gil, José Ripoll y Andrés Miguel, como secretarios. “Los cinco —cuenta Buenacasa— nos constituimos en grupo anarquista y, con arreglo a nuestras ideas, dirigimos la Confederación hasta el Congreso de Madrid” (el segundo Congreso Nacional de la CNT, en 1919).

El Congreso Regional de Sans se constituyó como órgano nacional interino. La autoridad que asumió para llevar a cabo este paso, así como la elección de un Comité Nacional provisional compuesto exclusivamente por anarquistas, resultó tan discutible como ambigua. La asamblea catalana había sido inspirada en gran medida por la Andalucía anarquista, donde se había establecido una Confederación Regional en un Congreso realizado en Sevilla el Primero de Mayo. Fue de hecho en ese Congreso de Sevilla donde los sindicatos únicos fueron adoptados por primera vez por una unión sindicalista española, preparando el terreno para su aceptación, primero en Cataluña y finalmente por la CNT en su conjunto. Puesto que Cataluña y Andalucía se encontraban ahora firmemente unidas, los catalanes tenían plena certeza de que sus actividades reflejaban los deseos de toda la federación obrera.

En esa época el sur ardía en expectativas. Lejos quedaban los recuerdos de las derrotas sufridas cuando el cambio de siglo y de la hambruna de 1905, que había matado de hambre al auténtico espíritu de rebelión agraria. En la primavera de 1913, cuando el Congreso en Córdoba estableció las bases de la Federación Nacional de Agricultores (FNA), ya eran evidentes los signos de recuperación. Los éxitos de esta nueva organización fueron casi siempre modestos, pero siguió adelante convocando congresos anuales regularmente hasta 1919, año en que se integró en la CNT. Los logros más importantes de esta federación fueron el de atraer a la mayor parte de Murcia y Valencia al campo libertario, y el de proporcionar a la agitación una plataforma para promover una demanda fundamental, la del reparto: "La tierra para el que la trabaja".

Con el brote de huelgas generales en el norte y el éxito de la Revolución Soviética, una embriagadora ola de esperanza se extendió velozmente por todo el sur. Los populares escritos de Sánchez Rosa, el famoso libro *La conquista del pan* de Kropotkin, junto con los periódicos *Acción*, en Sevilla, *La Voz del Campesino*, en Jerez y *Solidaridad Obrera*, en Valencia, inundaron las zonas rurales. Sánchez Rosa efectuó una gira propagandística por la región, acompañado por Diego Alonso, Higinio Noja, Francisco Cabello y otros populares oradores anarquistas de aquella época. En diciembre de 1919 se lanzó una importante campaña con el fin de ganar terreno en Andalucía. En docenas de ciudades se pusieron en marcha periódicos locales, y una oleada de conferenciantes, folletos y panfletos anarquistas recorrió todo el sur.

Díaz del Moral, testigo presencial de la repercusión de esta propaganda anarquista, describe el hecho con gran entusiasmo y colorido:

> Aquellos que estuvieron presentes en 1918-1919 nunca olvidarían el asombroso espectáculo. En el campo, en los albergues y caseríos, dondequiera que se reuniera un grupo de campesinos, para regocijo de todos, aparecía siempre el mismo tema de conversación, un tema que era tratado seria y rigurosamente: la cuestión social. En los descansos que se hacían para fumar durante el día, y por la noche, después de la cena, el más instruido leía en voz alta los folletos y

> periódicos, mientras los demás escuchaban con gran atención; luego venían las intervenciones corroborando lo que se había leído y las inacabables alabanzas. No todo era entendido; había palabras que eran desconocidas; algunas interpretaciones resultaban infantiles y otras maliciosas, dependiendo de los caracteres de cada uno, pero en el fondo todos estaban de acuerdo. ¿Cómo iba a ser de otro modo? ¡Si todo aquello era la verdad pura, la verdad que ellos habían padecido toda su vida, aunque no acertaran a expresarla! Se leía continuamente, todo el tiempo; la curiosidad y el afán de aprender eran insaciables; incluso en los caminos, montados en sus mulas, con las riendas colgando, se veía a los campesinos leyendo.

El relato, escrito después de que la agitación se hubiera calmado, resulta ingenuamente condescendiente. Pueden encontrarse narraciones similares de viajeros que visitaban París en vísperas de la gran Revolución: el cochero del carruaje que abandonaba las riendas mientras se nutría de propaganda sediciosa; el soldado de guardia que escudriñaba ávidamente un diario radical; las discusiones acaloradas en el Palais Royal, en las callejuelas, en los cafés. En el caso de Francia, todo esto sería considerado como la evidencia de los frutos producidos por la Ilustración, y como un testimonio de la "civilización" gala; en el caso de España se consideraría como "fanatismo" y "milenarismo infantil". Pero la cuestión es que Andalucía en 1918-1919, igual que Francia en la década de 1780, estaba al borde de la revolución.

En todas las situaciones revolucionarias la sedición se propaga velozmente. Así había sucedido en Francia, y así sucedió en Andalucía. En el relato de Díaz del Moral encontramos no sólo la descripción de los hechos, sino también los temores de las clases privilegiadas, quienes juzgaban el movimiento como una terrible epidemia que se extendía por todo el país:

> En pocas semanas, el primitivo núcleo de diez o doce adeptos se había convertido en un grupo de cien o doscientos; a los pocos meses, la casi totalidad de la población obrera, presa de un ardiente

> proselitismo, propagaba frenéticamente el flamante ideario. Los pocos reacios, bien por discretos o por pacíficos, o bien por temerosos de perder su posición, se veían acosados mientras labraban, en el caserío, en la taberna, en las calles y plazas, por grupos de convencidos que los asediaban con razonamientos, con gritos, con desdenes, con ironías, hasta que también ellos cedían, puesto que la resistencia era imposible. Una vez que todo un pueblo se había convertido, la agitación se transmitía a los colindantes; bastaba para ello que los trabajadores de un pueblo hablaran con un camarada de otro. Al efecto, cualquiera era bueno; con más o menos aptitudes, todos eran agitadores. De tal suerte, el incendio se propagó rápidamente por los pueblos "combustibles"; la labor del propagandista era muy sencilla; bastaba la lectura de un artículo de *Tierra y Libertad* o de El Productor, para que los oyentes, como los de Fanelli en el cenáculo de Rubau Donadeu, se sintieran súbitamente iluminados por la nueva fe.

Enseguida empezarían las huelgas. Muchas de ellas estallaron espontáneamente, arrastrando a todos, desde los jornaleros y artesanos hasta los sirvientes domésticos y las niñeras de las clases privilegiadas. Las tiendas cerraban, los cafés estaban vacíos y los campos desatendidos. Cualquier provocación de la Guardia Civil podía conducir a una situación de violencia: desórdenes, actos incendiarios o asesinatos de perros guardianes y de ganado. Sin embargo, con bastante frecuencia un silencio imponente envolvía al pueblo entero. Aunque muchas de estas huelgas promovían demandas específicas (y según cuenta Díaz del Moral, en 1918 la mayoría tuvieron éxito), otras eran estrictamente revolucionarias; no planteaban reivindicaciones, pretendían alcanzar el comunismo libertario. Cuando finalmente quedaba claro que esto no iba a suceder, las huelgas terminaban tan repentinamente como se habían iniciado, y todo el mundo volvía a su trabajo. Entonces el pueblo esperaba una próxima oportunidad. Los grupos se reducían a pequeños núcleos de fervorosos revolucionarios, hasta que una nueva oleada agitaba toda la región.

El advenimiento de la CNT proporcionaría a estos movimientos agrarios una mayor cohesión. El sindicato estableció un centro obrero en cada pueblo y creó estructuras permanentes, con reuniones regulares y organizadores experimentados. Con el tiempo, incluso los pueblos más aislados desarrollaron una militancia cuantiosa y fiel, y por medio de sus publicaciones y conferencias regionales crearon lazos con otras poblaciones. Esto constituyó un avance de vital importancia. En el pasado, las huelgas habían sido esporádicas, y muchas veces habían estado condenadas al fracaso por culpa de la falta de coordinación. Con el tiempo, estas pequeñas huelgas se agruparían en grandes movimientos provinciales, algunas veces adelantándose al movimiento de las ciudades, y otras fortaleciendo las luchas urbanas. Los oradores de las grandes ciudades —y ocasionalmente los visitantes extranjeros— recorrían los centros obreros, estableciendo un acercamiento vital entre la gente del campo —inquieta, ansiosa por adquirir conocimientos— y las figuras más relevantes del movimiento: los grandes teóricos del anarquismo, los organizadores más capacitados o los más famosos periodistas. Estos fueron los grandes momentos, jornadas de ambiente festivo, con reuniones donde los trabajadores escuchaban arrebatados la aparición de las nuevas ideas, y acalorados debates que trataban las propuestas más polémicas. Después llegaría el tiempo en que los oradores locales, expondrían “la Idea”, con todos sus matices, a amigos y vecinos.

Los periódicos locales desempeñaron un importante papel en este crecimiento, no sólo por el hecho de informar y coordinar el movimiento agrario, sino también porque proporcionaron a los braceros y a los campesinos un medio y una fuente de expresión. Tanto la CNT como los periódicos anarquistas recogían notables documentos humanos. En ellos se publicaban numerosas cartas —a menudo pobremente escritas— procedentes de todos los lugares de la región. Los sindicatos únicos anunciaban las noticias de sus actividades, los braceros y campesinos sacaban a discusión multitud de cuestiones tanto de carácter político como moral; también se intercambiaban experiencias y, naturalmente, se informaba de todos los acontecimientos relevantes para la clase obrera. En definitiva, los periódicos eran órganos vivos en los que los lectores

participaban activamente por medio de sus cartas. Los anarquistas más comprometidos solían suscribirse a varios de los periódicos que se publicaban en las grandes ciudades, como *Tierra y Libertad* o *Solidaridad Obrera*. Además, sólo en Andalucía se podía escoger entre una veintena de diarios locales. Estos periódicos iban acompañados de suplementos y muchas veces de folletos o libros sobre geografía, historia, ciencias y agronomía, así como diálogos sobre problemas sociales y morales, poemas y novelas. De muchos de ellos se editaban grandes tiradas en papel barato que costaban unos pocos céntimos.

En Andalucía y Levante el sindicato único abarcaba por lo general el conjunto de la ciudad, congregando simultáneamente a obreros, artesanos, campesinos, braceros e incluso tenderos en un mismo sindicato. De ahí que en cualquier huelga se involucrara, de una manera u otra, casi todo el mundo, adquiriendo a menudo las proporciones de una huelga general. En las poblaciones pequeñas, los mítines sindicales de los domingos eran en realidad simples asambleas del pueblo. La asistencia era libre y todos tenían voz y voto en los temas que se debatían, entre los que no sólo se incluían asuntos del sindicato, sino todo lo concerniente a la comunidad. Las mujeres participaban sin reservas, como los hombres. La administración de los asuntos de la comunidad era ejercida por la Junta del Sindicato y sus comités. Las asambleas tomaban todas las decisiones sobre la línea de asuntos de la comunidad era ejercida por la Junta del Sindicato y sus comités. Las asambleas tomaban todas las decisiones sobre la línea de actuación, y los comités las ejecutaban, imponiendo multas si era necesario. Las asambleas semanales tenían asimismo el derecho de objetar y revocar cualquier actuación de los comités. Durante los períodos de perturbaciones, el sindicato en su conjunto se convertía en un “poder dual”, en el amplio sentido de la palabra, socavando a menudo la autoridad de la municipalidad.

Aunque recientes estudios indican que los braceros ya estaban organizados en estructuras casi sindicalistas en la década de 1880, y que, por tanto, no constituían la masa amorfa descrita por Brenan y por Hobsbawn, la rica articulación de las formas que acabamos de señalar no surgió plenamente hasta la Segunda República. En 1918, la CNT era aún una organización nueva en el sur, y el sindicato único, si bien funcionaba en

Andalucía, tenía todavía que crear una base sólida. En cualquier caso, el tiempo corría en contra de la rebelión en el campo. Durante años, las clases dominantes del sur de España habían respondido a las demandas de sus trabajadores con una arrogante indiferencia, confiadas en el poder total que ejercían sobre sus dominios. Con las agitaciones de 1918, esta confianza desapareció. Las primeras concesiones que hicieron frente a las huelgas campesinas fueron, sin duda alguna, decisiones dictadas por el miedo, y no medidas tomadas como resultado de un espíritu de diálogo. Muchos terratenientes reaccionaron frente a las demandas de sus trabajadores marchándose a vivir a las capitales de provincia, y en algunos casos, marchándose de España para siempre. Los que se quedaron —los propietarios más decididos, los caciques y sus rufianes, la clase media conservadora— se movilizaron, formando grupos armados. Los cortijos se convirtieron en verdaderos arsenales.

Finalmente, en mayo de 1919, el gabinete Maura envió al sur al general La Berrera con una división de tropas. Los soldados, distribuidos en pequeños destacamentos, ocuparon los indóciles pueblos y aldeas del sur. A esta invasión le acompañó la ley marcial; los centros obreros fueron clausurados, los periódicos suprimidos y miles de personas arrestadas. Gran parte de los detenidos fueron encarcelados y otros tantos desterrados de la región. El movimiento rural comenzó entonces a replegarse. El reflujo se precipitó a causa de las desmoralizadoras reyertas entre socialistas y anarquistas, y por las encarnizadas luchas internas entre anarquistas y sindicalistas en las federaciones locales de la CNT.[21] Finalmente, allí donde las medidas represivas habían fracasado, las huelgas fueron sofocadas por la profunda crisis económica de la posguerra. El sur entraba de nuevo en una quietud de la que no saldría hasta la década de 1930.

Durante el verano de 1918, la CNT lanzó una campaña masiva de propaganda por casi toda España para atraer a la clase obrera. Al cabo de seis meses la organización había incrementado el número de sus afiliados en Cataluña hasta casi quintuplicar las cifras, pasando de 75.000 en el mes de junio a 350.000 hacia final de año. Los oradores de la CNT recorrieron el país organizando grandes mítines y logrando la afiliación de miles de personas. En algunos casos los resultados fueron espectaculares: en

diciembre, por ejemplo, cuando se detuvieron en Valencia, Buenacasa y sus compañeros lograron para la CNT la adhesión de toda la Federación Nacional de Agricultores, que celebraba su quinto Congreso Nacional. Por otro lado, la CNT consiguió también el ingreso de la Federación Regional de Trabajadores de Andalucía. De este modo, la organización incorporó a su campo de acción a dos de los sindicatos rurales más importantes del país.

Ante la creciente agitación, el gobierno, alarmado, decidió emprender una contraofensiva. El 16 de enero de 1919, el primer ministro Romanones decretó la suspensión de todas las garantías constitucionales en Cataluña. Casi todos los altos cargos de la CNT, incluyendo a Buenacasa, Seguí, Herreros y Negre, fueron arrestados y encarcelados en el acorazado Pelayo, fondeado en Barcelona. Pestaña se las ingenió para eludir el arresto, pero *Solidaridad Obrera*, donde él ejercía las funciones de director, fue clausurado.

Estos arrestos provocaron una gran conmoción en Cataluña. Aunque la organización obrera operaba clandestinamente, no cesó de crecer. De hecho, fue en uno de los momentos más críticos para la CNT —funcionando como una organización ilegal, con sus cuadros principales en la cárcel y sus periódicos clausurados— cuando Barcelona presenciaría una de las huelgas más memorables de la historia del movimiento obrero español.

La huelga comenzó como una disputa menor en “La Canadiense”, nombre con el que se conocía popularmente a la compañía hidroeléctrica anglocanadiense Riegos y Fuerzas del Ebro, que suministraba energía y luz eléctrica a la ciudad de Barcelona. En esta compañía, la CNT contaba con uno de sus sindicatos únicos más fuertes. Sin embargo, la huelga de “La Canadiense” no se inició en el sector organizado de trabajadores de servicios públicos, sino en la oficina de empleados. Hacia fines de enero varios empleados de la compañía se dirigieron al sindicato solicitando apoyo para sus reivindicaciones salariales tras haber sufrido una reducción de sus salarios. El sindicato intentó negociar, pero el director del Consejo de Administración de la empresa, el británico Peter Lawton, a pesar de que había mostrado su disposición a dialogar con los trabajadores, terminó despidiendo a ocho de los empleados. El día 5 de febrero, tres días después, el personal de oficina declaró una huelga pacífica de protesta y envió a un

comité a entrevistarse con las altas instancias catalanas para requerir su mediación en el conflicto. La única respuesta que obtuvieron fue la intervención de la policía, lo que precipitó la huelga y la extendió a todos los trabajadores de la planta.

La intransigencia del director de “La Canadiense” requiere ciertas explicaciones. En aquel momento existía en Barcelona un conflicto de opiniones entre las autoridades civiles y militares. El gobernador civil, González Rotwos, era partidario de mantener un diálogo amistoso con los delegados más moderados de la CNT. Rotwos consideraba que una línea de brutal represión fortalecería a los militantes anarquistas del sindicato, socavando la posición de Seguí. Por otra parte, para el capitán general Milans del Bosch, un duro reaccionario de la vieja escuela, sólo había una respuesta a la agitación obrera: “dar la batalla”. Su postura estaba amparada por la recién fundada Federación de Empresarios, que trataba de establecer un régimen antiobrero y militarista, en abierto desafío a las autoridades civiles de Barcelona y Madrid. Como observa Brenan, la paradójica unión de los industriales catalanes “nacionalistas” con el ejército anticatalán, había convertido a Milans del Bosch en “una especie de virrey”, demostrando claramente que “para la Lliga, la cuestión social tenía prioridad sobre la cuestión catalana”. Aparentemente, la influencia del capitán general y de la Federación de Empresarios fue lo que llevó a Lawton a endurecer su postura en el conflicto con el sindicato.

Antes de que Milans del Bosch pudiera “dar la batalla”, la huelga comenzó a extenderse a los sectores más relevantes de la economía. El mismo día que “La Canadiense” entraba en huelga (el 8 de febrero), los obreros de la Energía Eléctrica de Cataluña ocuparon la empresa en un acto de solidaridad. Nueve días más tarde, el 17 de febrero, los obreros textiles también se declararon en huelga. Comenzó luego el paro casi total de los obreros de las compañías eléctricas de Barcelona.

La ciudad quedó sumida en la oscuridad. El gobierno, enfrentado a una tremenda crisis en la zona industrial más importante del país, movilizó al ejército con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico, lo que sólo fue parcialmente posible, ya que el setenta por ciento de las fábricas de la zona continuaron paralizadas.

El conflicto entre las autoridades civiles y militares se hizo entonces evidente. Mientras González Rotwos trataba de restablecer las negociaciones, Milans del Bosch decretó la ley marcial en toda la provincia. Por su parte “La Canadiense” dio a conocer una declaración en la que se advertía que todo trabajador que no se reintegrase al trabajo antes del 6 de marzo podía considerarse despedido. A estas alturas del conflicto, tuvo lugar un hecho extraordinario: el Sindicato único de Artes Gráficas informó a los editores de los diarios de Barcelona que se negaban a publicar cualquier noticia o comunicado que perjudicara los intereses de los huelguistas. Cuando Romanones, desde Madrid, intentó acabar con la huelga ordenando a los trabajadores que se reincorporasen a sus puestos de trabajo, los editores se negaron a publicar la noticia del decreto en sus diarios. Cuando se consiguió finalmente la publicación del documento, todos los obreros ferroviarios y tranviarios respondieron declarándose asimismo en huelga. La mayoría de los trabajadores que fueron llamados a incorporarse a sus puestos se negaron. Unos 3.000 obreros fueron detenidos y enviados a la fortaleza de Montjuïc. Alrededor del 13 de marzo, Romanones, frenético, tratando de encontrar una solución negociada al conflicto, eligió a dos reconocidos liberales, Carlos Montañés y Gerardo Doval, para los cargos de gobernador civil y de jefe de policía, respectivamente. Para entonces, las instalaciones de “la Canadiense” estaban gravemente deterioradas, y la compañía se encontraba al borde de la quiebra.

Finalmente, un funcionario de la gobernación catalana, José Morote, logró que las partes en conflicto llegasen a un acuerdo. Aunque los huelguistas actuaban fundamentalmente movidos por solidaridad hacia sus compañeros, la mayoría pedía también el aumento de los salarios, la jornada laboral de ocho horas, el reconocimiento sindical para negociar los conflictos y la readmisión del personal despedido. Todas estas demandas fueron concedidas. Los obreros exigieron además a la compañía el reintegro de los salarios que habían perdido a causa de la huelga. Con relación al gobierno, exigieron la libertad de los presos sociales, incluyendo a los cuadros principales de la CNT que habían sido detenidos en enero. En este

aspecto las autoridades se negaron a liberar a los que en ese momento eran objeto de procesos.

El convenio se sometió a votación en una gran asamblea de huelguistas que tuvo lugar en la plaza de toros de Las Arenas, la noche del 16 de marzo. Los obreros estuvieron de acuerdo en todos los puntos excepto en lo referente a los presos. Un grito resonó entonces en toda la plaza: "¡Libertad para todos!". Los concurrentes se enfervorizaron y por unos momentos parecía que el convenio no iba a ser aprobado; pero Seguí, argumentando que un levantamiento no beneficiaría a los presos, consiguió la aprobación provisional. Se acordó la vuelta al trabajo, pero se adoptó la decisión de reanudar la huelga si el gobierno no liberaba a todos los presos en un plazo de 72 horas.

La huelga general había durado cuarenta y cuatro días y había paralizado la actividad económica de Barcelona y de las ciudades cercanas. Los huelguistas se habían negado a reincorporarse, lo que les podía haber valido una condena de cuatro años de prisión. No sólo los trabajadores de la industria y el transporte, sino también los empleados de los comercios y los funcionarios, habían abandonado su trabajo.

Finalmente, el 11 de marzo, Romanones, con el ánimo de ganar la adhesión de los huelguistas, estableció por decreto una jornada de ocho horas de trabajo para los obreros de la construcción, medida que se extendió a los demás gremios el 3 de abril. Este hecho convirtió a España en el primer país del mundo en establecer por ley dicha jornada laboral.

Los obreros eran conscientes de que habían logrado una victoria histórica (pero también los patronos eran conscientes de ello). Fue entonces cuando las amenazas de Milans del Bosch comenzaron a cumplirse. Pese a las peticiones de los líderes sindicales, el gobierno no liberó a los presos en el plazo previsto de 72 horas. El 24 de marzo, los obreros reanudaron la huelga general con toda su fuerza.[22] Esta vez, el capitán general actuó con energía y decisión. Tropas militares, armadas con ametralladoras y artillería, se apostaron en puntos estratégicos de la ciudad. Como refuerzo a las tropas regulares, Milans del Bosch movilizó a 8.000 hombres de la antigua Guardia Cívica, una milicia de voluntarios reclutados principalmente entre las clases burguesas. Los comercios fueron obligados a

abrir sus puertas a punta de fusil, aun cuando sus empleados permanecieran en huelga. Mientras las tropas armadas se encargaban de patrullar las calles, los miembros de la Guardia Cívica se ocupaban del abastecimiento de la ciudad y del transporte de provisiones.

El gobierno se negó de plano a establecer cualquier compromiso con los huelguistas. Por el contrario, la policía emprendió una persecución, dirigida en especial contra los más destacados militantes de la CNT, Comités de huelga y militantes sindicalistas. Alrededor del 28 de marzo la huelga manifestaba un evidente declive. Muchos trabajadores regresaron a sus puestos de trabajo, en primer lugar los dependientes y oficinistas, seguidos de los obreros de las empresas eléctricas, del transporte y de los servicios públicos en general. Los trabajadores metalúrgicos intentaron continuar hasta el final, pero el 17 de abril la huelga general prácticamente había terminado. Uno de los factores que más influyeron en la decisión de muchos obreros de volver al trabajo fue la detención de los miembros del Comité de huelga, lo que causó una profunda desmoralización entre los huelguistas. Aunque los trabajadores no regresaron a sus puestos hasta la primera semana de abril (en parte debido al *lock-out*), y pese a que el conflicto continuó en algunos pueblos industriales de la región, la columna vertebral de la huelga había sido definitivamente quebrada. Milans del Bosch, representando al ejército y a la arrogante Federación de Empresarios, coronó su triunfo con un acto de desafío cercano al pronunciamiento: destituyó a Montañés y a Doval y envió a Madrid al gobernador civil, lo que provocó la caída del gobierno liberal y la sustitución de Romanones por Maura.

Pero Milans del Bosch no consiguió acabar con la CNT. La confederación constituía una organización muy poderosa en Cataluña, y en los años siguientes, a pesar de los obstáculos, se incrementaron sus movilizaciones. La actuación del capitán general tuvo como resultado —como temía el ex gobernador civil González Rotwos— la radicalización del conflicto: las tácticas violentas defendidas por los militantes anarquistas pasarían en adelante a sustituir a los moderados métodos de los sindicalistas. Los pistoleros entrarían pronto en escena, unas veces a favor del sindicato, y otras al lado de los patronos.

La última tentativa seria para solucionar el grave conflicto que sufría Barcelona tuvo lugar en el segundo semestre de 1919, cuando Sánchez de Toca sustituyó a Maura después de que éste fuera repudiado por el electorado. El nuevo Consejo de Ministros, integrado en su mayor parte por conservadores, puso todos sus esfuerzos en conciliar las posturas de ambas partes. La formación del nuevo gabinete fue casi un milagro; el rey comenzaba a interponerse en los asuntos parlamentarios de una forma bastante excéntrica. Las Juntas Militares, extremadamente reaccionarias en aquel momento, apoyaban a los patronos en su empeño por "dar la batalla". A pesar de estos formidables obstáculos, Sánchez de Toca realizó un esfuerzo excepcional para llegar a un acuerdo con el movimiento obrero. Su actitud serena y conciliadora durante las grandes huelgas de Málaga, Valencia y Zaragoza en 1919, contrastaba con la insensata represión iniciada por Maura y su ayudante La Cierva.

La situación en Barcelona era tratada con suma cautela. El nuevo gobernador civil, Julio Amado, trató de consolidar un sistema de arbitraje laboral estableciendo una Comisión Mixta integrada por representantes de los empresarios y de los trabajadores.[23] En un principio se pensó que las medidas conciliatorias de Amado tendrían éxito; se acordó la reincorporación al trabajo de 70.000 obreros (la mayoría en paro forzoso debido a los *lock-outs*), y se apreció, además, una importante disminución en el número de atentados.

Pero esta etapa iba a tener una duración muy corta. Un congreso de la Federación de Empresarios, realizado en 1919, votó secretamente la aplicación de un *lock-out* general en Cataluña, que se extendería en caso necesario al resto de España si el gobierno no lograba poner fin "a la situación existente de desorganización social". La decisión fue seguida por un corto período de gestiones entre los sindicatos y los patronos, durante el cual los últimos trataron de provocar la verdadera "desorganización social" de la que se quejaban los primeros.[24] Los patronos decidieron que el momento oportuno para su ofensiva había llegado cuando el día 25 de noviembre unos 25.000 obreros de la construcción se declararon en huelga. El *lock-out* se inició ese mismo día, dejando en paro a 200.000 trabajadores. Las medidas adoptadas por la patronal se mantuvieron hasta bien avanzado

el mes de enero del año siguiente, lo que significó un lapso de diez duras semanas de estancamiento para Barcelona.

En medio de esta situación, en una de las peores fases por las que pasaba, la CNT decidió convocar su Segundo Congreso Nacional. Como Barcelona no ofrecía en aquel momento ninguna seguridad, la reunión se celebró en Madrid, la plaza fuerte de los socialistas.[25] El congreso se inauguró el 10 de diciembre de 1919 en el madrileño Teatro de la Comedia, con la asistencia de 437 delegados. La concurrencia fue muy numerosa, y además de los obreros se dio cita un singular grupo de artistas, escritores, poetas y académicos que las organizaciones anarquistas madrileñas habían conseguido reunir. Fue realmente un Congreso del pueblo. Cada delegación concurrió con sus vestimentas regionales; los vascos, con sus características txapelas; los andaluces, con sus amplios sombreros y sus blusas campesinas, y así todos los demás. Los delegados representaban a más de 700.000 afiliados. La inmensa mayoría —427.000— pertenecía a Cataluña, mientras que la zona de Levante contaba con 132.000. La delegación andaluza —"la delegación más anarquista", según Buenacasa— representaba a menos de 90.000 afiliados, lo que evidenciaba el retroceso provocado por la dura represión impuesta por Maura en el sur.

Aunque mantuvo una estructura bastante formalizada, con un Comité de credenciales y comités especiales encargados de la información, el congreso fue plenamente democrático. Desde el comienzo se adoptó la resolución de conceder a todos los presentes el derecho a hacer uso de la palabra, aunque muchas de las personas que se encontraban presentes no pertenecían a la CNT. Por supuesto el derecho a voto correspondía sólo a los delegados autorizados. Fue un congreso turbulento desde el principio hasta el final. La represión había impedido durante ocho años que una asamblea representativa nacional de esta naturaleza pudiera llevarse a cabo. Durante ocho años, los opositores habían tenido que renunciar a expresar sus puntos de vista y opiniones en reuniones libres. Cuando Evelio Boal hizo una llamada al orden para iniciar la asamblea, una veintena de delegados se pusieron en pie pidiendo la palabra. El secretario de la delegación asturiana, José María Martínez, de un modo afable pero firme, exhortó a seguir el

proceso ordenadamente, pero los vivas al anarquismo y a la CNT no cesaron de escucharse a lo largo de todas las sesiones.

El Congreso proclamó rotundamente su confianza en el comunismo anárquico. Se decidió adoptar el Sindicato Único de Ramos e Industrias para las ciudades grandes, y los Sindicatos Únicos de Trabajadores para las ciudades más pequeñas y para los pueblos; con esto se demostraba que las Secciones de oficios dentro del sindicato único no eran viables para los sindicatos de las comunidades rurales.

Al adoptar el sindicato único, el congreso eliminó las Federaciones de Oficio, reemplazándolas por simples Comités de Relaciones Profesionales. El carácter dual defendido por el sindicalismo tradicional para las organizaciones obreras desaparecería, permaneciendo solamente el sindicato único, agrupado en federaciones locales o territoriales. Los problemas particulares de cada oficio se tratarían a través de las secciones que cada ramo tendría dentro del sindicato único, y en una escala más amplia, por Comités de Relaciones Profesionales libremente organizados. “La Confederación tendría dentro del sindicato único, y en una escala más amplia, por Comités de Relaciones Profesionales libremente organizados. “La Confederación Nacional deberá componerse básicamente de sus federaciones regionales”, declaraba la resolución adoptada sobre este punto. La CNT lograba de este modo una estructura descentralizada y unas relaciones internas enteramente orgánicas. Aunque continuaba existiendo un Comité Nacional, la autonomía de las federaciones locales y regionales ya no sería reducida por la existencia de organizaciones de oficios paralelas.

El Congreso exhortó a los sindicatos de Artes Gráficas a negarse a publicar periódicos en todas aquellas localidades donde las autoridades habían suprimido las publicaciones de la CNT. Asimismo se les pidió que practicasen la “censura roja” a la prensa local no controlada por la CNT, del mismo modo que las autoridades habían censurado la prensa obrera. Los delegados afirmaron su compromiso con la acción directa y manifestaron su apoyo a la “inteligente” y “oportuna” utilización del sabotaje. Condenaron, en cambio, cualquier participación de los sindicatos de la Confederación Nacional en las Comisiones Mixtas. La Confederación Regional Catalana había reconocido ya en aquel momento su error al participar en las

Comisiones Mixtas durante el gobierno de Sánchez de Toca; un acto de autocrítica que los delegados aceptaron sin reproches.

El problema de mayor envergadura que debía afrontar el Congreso era el de las relaciones de la Confederación con otros movimientos, en especial con respecto a la UGT y a la Internacional Comunista. Los delegados de Asturias y de Castilla manifestaron su deseo de llevar a cabo la unificación con la UGT, lo que no sorprende si se piensa en la gran fuerza que la sindical socialista tenía entre la clase obrera de esas regiones. El delegado de Zaragoza apoyó la unificación tras recordar al Congreso que los trabajadores de su región todavía no formaban parte de ninguna de las dos organizaciones obreras. En cambio, los delegados andaluces y algunos militantes anarquistas de otras regiones se opusieron drásticamente a esa moción. El rechazo de los cenetistas a la unificación con la UGT quizá se entienda mejor si tenemos en cuenta una de las resoluciones condenatorias de dicha unificación. Se acusaba a los ugetistas de *amarillos* y de estar al margen del movimiento obrero, y todavía estaba vivo el recuerdo de las huelgas en que los obreros ugetistas habían trabajado como esquiroles, actuando contra sus compañeros de la CNT, al tiempo que los líderes socialistas medraban a costa de las derrotas anarquistas. Esta cuestión fue debatida acaloradamente durante tres días. En el momento de la votación, los partidarios de la unificación fueron derrotados por 324.000 votos frente a sus 170.000. Las abstenciones fueron muchas: inexplicablemente, un elevado número de delegados, que representaban a 200.000 obreros, no participaron en la votación.

La Revolución Bolchevique, en cambio, fue acogida con encendido entusiasmo. El congreso animó a los obreros de las fábricas de armamentos a que no produjeran armas destinadas a la lucha contra el Ejército Rojo, y decidió convocar una huelga general si España enviaba tropas a Rusia. Después de declarar su adhesión a los principios bakuninistas de la Primera Internacional, los delegados votaron a favor de la entrada provisional en la Internacional Comunista.

“A pesar del hecho de que ni uno solo de los cuatrocientos delegados anarquistas de la organización española en Madrid estábamos dispuestos a ceder ni un ápice en nuestras convicciones ideológicas —dice Buenacasa—,

lo cierto es que la inmensa mayoría nos comportábamos como perfectos bolcheviques. Fue así a pesar del gran amor que sentíamos por el ideal libertario. Por supuesto, todo ello tenía una explicación: la Revolución Rusa nos impresionó extremadamente, hasta el punto de ver en ella la revolución con la que nosotros soñábamos". El delegado asturiano Eleuterio Quintanilla hizo una advertencia al respecto: "La Revolución Rusa no encarna nuestros ideales; se trata de una revolución de carácter socialista, semejante a todas las corrientes socialistas revolucionarias que se han iniciado en Europa. Su dirección y orientación no corresponden a nuestra idea de la intervención de los trabajadores, sino a la de la intervención de los partidos políticos". Mientras exhortaba a los delegados a oponerse a la intervención europea en la guerra civil rusa, el asturiano defendió la no adhesión a la Internacional Comunista.

Las relaciones entre la CNT y los bolcheviques rusos seguirían una trayectoria muy particular. En junio de 1920, Ángel Pestaña acudió al segundo Congreso de la Internacional Comunista en Moscú como delegado de la Confederación. Allí fue agasajado por Zinoviev y Losovsky; pero muy pronto se dio cuenta de lo lejos que estaban las prácticas autoritarias de los bolcheviques de los ideales libertarios del movimiento español. Los rusos se mostraron muy complacientes y crearon, con el fin de atraer a los anarcosindicalistas al campo comunista, un organismo independiente en el que integrar a todos los sindicatos revolucionarios, al margen de sus puntos de vista políticos: la Internacional Sindical Roja ("Profintern").

Pero estos acercamientos durarían poco tiempo. A principios de marzo de 1921 tuvo lugar la sublevación del Kronstadt, que fue duramente sofocada por el régimen soviético. La rebelión de Kronstadt, junto con la campaña contra los anarquistas rusos, provocó una fuerte oposición al bolchevismo por parte del movimiento libertario de todos los países. Las relaciones entre la CNT y Moscú se volvieron cada vez más tensas. Los informes de Pestaña a su regreso de Moscú, y de Gastón Leval (que había ido a Rusia en representación de los anarquistas catalanes) coincidieron en su condena al régimen soviético. El 11 de junio de 1922, en una conferencia de la CNT en Zaragoza, se rechazó el apoyo al movimiento bolchevique, y la CNT, junto con otros sindicatos independientes de Europa, contempló la

posibilidad de fundar una nueva Internacional. La Internacional Socialista, bajo la tradicional denominación de “Asociación Internacional de Trabajadores”, fue fundada en Berlín en un congreso que tuvo lugar entre el 26 de diciembre de 1922 y el 3 de enero de 1923. La adhesión de la CNT al nuevo organismo formalizó la ruptura de la organización obrera española con Moscú.

Los bolcheviques, sin embargo, no perdieron totalmente la adhesión española. En abril de 1921, un grupo encabezado por Andreu Nin y Joaquín Maurín apareció en Moscú, asegurando representar a la CNT. En realidad, Nin y Maurín sólo podían representar en ese momento a la federación local de Lérida, a la que habían persuadido para que los enviara a Rusia.[26] Ambos hombres estaban profundamente entusiasmados con el nuevo régimen ruso y, sin consultar al movimiento que pretendían representar, procedieron a afiliarlo a la Internacional Comunista. En agosto del año siguiente, un pleno de la CNT constituido en Logroño desautorizó sus actuaciones. Tras un vano intento de volver a España, Nin regresó a Moscú, convirtiéndose en la figura más importante del “Profintern”. Maurín logró regresar a España, y junto con disidentes del anarcosindicalismo y del socialismo fundó un grupo comunista-sindicalista, independiente del Partido Comunista Español, recientemente creado. Años más tarde Nin y Maurín crearían el Partido Obrero de Unificación Marxista, el malogrado POUM, de orientación semitrotskista.

El Congreso madrileño de la CNT, en diciembre de 1919, señala el momento álgido en el proceso de desarrollo del anarcosindicalismo español de la posguerra. La CNT había logrado establecerse nacionalmente. A la UGT le había salido una seria competidora, tanto en las regiones mineras de Oviedo, como en las plantas siderúrgicas de Gijón y La Felguera. Zaragoza era un centro de anarquismo “puro”, la “Jerez del norte”, con ramificaciones en las haciendas de la meseta y en los viñedos de la Rioja. También en La Coruña existía un fuerte movimiento anarquista —particularmente entre los trabajadores de los muelles— así como en los distritos rurales circundantes. La mayoría de los marineros y estibadores de los puertos españoles apoyaba a la CNT. La unión sindical contaba con el

amplio respaldo de los campesinos del interior de la zona de Levante, y con fuertes sindicatos en el distrito minero de Río Tinto.

Los grupos anarquistas, a diferencia de los sindicatos anarcosindicalistas, vivieron durante años en un relativo aislamiento, y sólo más tarde se organizaron en federaciones rurales. *La Federación* Anarquista Andaluza había sido fundada en 1917; otras federaciones de este tipo aparecieron después en Cataluña y en otras provincias. Estos distintos grupos se reunieron finalmente en la Federación Nacional de Grupos Anarquistas, organización sobre la que se que se formaría después, desde el exilio en Francia, la denominada Federación de Grupos Anarquistas de Lengua Española. A finales de la década de 1920, estas dos federaciones sentarían las bases de la Federación Anarquista Ibérica, la temida FAI de los años de la República y de la Guerra Civil.

En Cataluña, sin embargo, la CNT conocería entonces un período de profunda crisis. El movimiento obrero estaba completamente exhausto como consecuencia del *lock-out* y la guerra de los pistoleros, que iba a ocasionar un lamentable número de muertos y heridos entre las filas militantes. Este brutal duelo entre los anarquistas armados y los asesinos a sueldo se cobraría, además, muchas vidas entre los funcionarios públicos e industriales, y entre las altas esferas del Estado.

Igual de importante resultó la atmósfera de ilegalidad que fue generada por esta tremenda lucha; el país no volvería a recuperarse en mucho tiempo. Todo el mundo, desde los diputados de las Cortes hasta los militantes anarquistas, iba armado, y casi todas las grandes organizaciones disponían de algún tipo de fuerzas paramilitares. Cada vez con mayor frecuencia, las armas eran utilizadas como recurso frente a las disputas políticas.

El retorno de la “guerrilla permanente” a la sociedad española es un aspecto fundamental para la comprensión del clima social que desembocaría en la Guerra Civil.

## Los pistoleros

En 1916, el por entonces director de *Solidaridad Obrera*, Ángel Pestaña, fue abordado por dos jóvenes trabajadores, que le manifestaron, sin preámbulos, lo siguiente:

> Venimos a plantearte un problema. Pertenecemos a un grupo anarquista de acción y estamos dispuestos a continuar el trabajo que ya hemos comenzado. Queremos que seas nuestro portavoz en los comités confederales, especialmente en el Comité Regional. Nuestros propósitos son los siguientes: estamos dispuestos a cometer un atentado contra un patrono o director de fábrica que la organización considere aconsejable eliminar. A cambio de este sacrificio que hacemos voluntariamente por la organización, sólo solicitamos que nos paguen los gastos que tengamos y los jornales de los días de trabajo que debamos perder. Además, queremos un fondo de reserva, de dos o tres mil pesetas, del que echar mano de inmediato en caso de que se descubriese nuestra identidad y fuese preciso huir. Si alguno de nosotros cae preso, necesitaremos ayuda. Lo que pedimos es muy poco, como ves; por otra parte, lo que ofrecemos es mucho.

Pestaña intentó disuadirles de sus propósitos. Les aseguró que perdían el tiempo, pues estaba totalmente en contra del empleo de tales métodos. Más tarde supo que la organización había aceptado una oferta similar a través de uno de los comités. Estos jóvenes anarquistas, dice Pestaña, no decidían qué patronos y directores de fábrica serían asesinados. La decisión la tomaban los hombres que aceptaban sus servicios. Los atentados no respondían a intereses personales y nunca se ejecutaban a cambio de recompensas monetarias o por venganzas personales. Según Pestaña, por aquella época operaban en Barcelona dos o tres grupos de acción anarquista. “Admitamos que los que sacaban partido de esta situación y pagaban a los jóvenes por su trabajo —añade Pestaña— eran algunos, muy pocos, de los líderes de los sindicatos textiles. Una vez hecho esto, el primer paso estaba dado”.

Si bien ese era el “primer paso”, no era el principal. Sastre y Sama, en sus estudios sobre los atentados cometidos contra empresarios barceloneses,

demuestra que su número entre 1916 y 1919 no superó la cifra de los de 1914.[27] Los atentados anarquistas aumentaron de forma significativa a fines de 1919, siguiendo un incremento paralelo al de asesinatos de militantes y dirigentes cenetistas. Ese año fue particularmente penoso para la federación obrera, con huelgas generales en febrero y marzo, la campaña represiva de Maura y el largo *lock-out* entre noviembre y enero del año siguiente. Exceptuando una breve tregua durante el mandato de Sánchez de Toca, el gobierno se caracterizó por sus actos de provocación. Las garantías constitucionales fueron suprimidas en enero durante un mes y medio, y a finales de marzo 40.000 obreros fueron encarcelados. Los sindicatos fueron allanados repetidas veces, sus archivos incautados y los centros obreros clausurados. Finalmente, esta situación llegó al límite cuando uno de los más destacados dirigentes cenetistas cayó bajo las balas de los asesinos. En la noche del 19 de julio, dos hombres con uniformes policiales se dirigieron a la casa de Pablo Sabater, secretario del sindicato textil, y lo asesinaron. Quizás más que cualquier otro acto, este asesinato de un militante anarcosindicalista tan respetado por todos contribuyó a incrementar el pistolerismo en Barcelona de una forma irrefrenable.

En esta ciudad el problema se convirtió en un mal endémico. En los años anteriores a la guerra, agentes provocadores contratados o incitados por la policía o por los gobernadores civiles llevaron a cabo actos de violencia (como la explosión de bombas) para culpar al movimiento sindical y utilizar el hecho como excusa para ejercer una dura represión. Una red de informadores de la policía pululaba por toda la ciudad, introduciéndose en el seno del movimiento obrero. Durante las rebeliones tenían el “trabajo” hecho, pero en los períodos de calma creaban sus propios “incidentes” para acusar al movimiento obrero. Uno de los ejemplos más conocidos de estos agentes provocadores fue el caso de la familia Rull. Juan Rull, sus hermanos y su madre actuaron durante años en Barcelona colocando bombas, trabajo por el que luego obtenían gratificaciones. Asimismo reunían información para la policía (casi siempre falsa) sobre los “perpetradores” de esos “ultrajes anarquistas”. Juan Rull trabajó de “soplón” para tres gobernadores civiles; existen precisas evidencias de que estaba pagado por destacados políticos clericales, como Eusebio Güell. La

detención de Rull en julio de 1907 provocó un escándalo que se prolongó incluso después de su ejecución, el 8 de agosto del año siguiente. Ese día estalló una bomba en una de las principales avenidas de Barcelona, y apareció una nota asegurando que Rull era inocente y que las bombas continuarían a pesar de su muerte, lo que significó para muchos que no se trataba de los actos de un hombre o su familia, sino de un terrorismo policial que llevaba a cabo esos atentados.

Durante la Primera Guerra Mundial, la neutralidad de España animó a todo tipo de aventureros, criminales y mercenarios a establecerse en el país, particularmente en Barcelona. En un principio vivían del espionaje, pero pronto prosperaron gracias a la creciente necesidad de asesinos a sueldo por parte de la crispada burguesía y el departamento de policía. Tal vez el ejemplo más significativo de estas siniestras conexiones fue el revelado por *Solidaridad Obrera* el 8 de junio de 1918, donde Ángel Pestaña dio a conocer públicamente las pruebas que relacionaban al jefe de policía de distrito, Manuel Bravo Portillo, con una banda alemana de espionaje que operaba en la zona portuaria. Si bien los cargos que le atribuyó Pestaña le costaron el puesto, Bravo Murillo sería restituido por el capitán general Milans del Bosch durante las luchas callejeras con la CNT.

Bravo prestó sus servicios en el cuartel de Atarazanas, donde era conocido por la brutalidad de sus métodos, que le valieron el odio de los obreros de Barcelona. Durante los disturbios de la huelga general de febrero y marzo, este ex policía y sus compinches, junto con el sedicente “Barón Koenig”, recibían un sueldo especial de los empresarios por los servicios prestados. Sus “trabajos” incluían atentados contra dirigentes cenetistas y activistas sindicales. No cabe la menor duda de que Sabater fue asesinado por los hombres de la pandilla de Bravo. Éste, por su parte, no sobrevivió a ese verano. El 15 de setiembre, a mediodía, fue derribado a balazos en la calle de Santa Tecla. Dos días más tarde, uno de sus agentes más odiados, Eduardo Ferrer, que había llegado a ser líder de un sindicato metalúrgico, fue asesinado. La muerte de Bravo se recibió con satisfacción, incluso con entusiasmo, en los círculos obreros de Barcelona. Cuenta Buenacasa que “miles de trabajadores barceloneses festejaron el acontecimiento con meriendas, canciones y discursos alusivos”.

Sin embargo, la banda no desapareció; el “Barón” pasó a convertirse en su nuevo líder. “Koenig” (se decía que su verdadero nombre era Coleman) empezó a exigir más de lo que podía obtener; pedía “protección” económica a cada uno de los empresarios, y los que rehusaban pagarle terminaban siendo víctimas de los “ultrajes anarquistas”. El “Barón” terminó por perder el control de la situación, que se hizo todavía más crítica cuando se vio envuelto en disputas internas de la misma Federación de Empresarios. En la primavera de 1920 fue expulsado de España, y su banda fue disuelta.

Pero las funciones de la banda de Bravo-Koenig ya habían sido asumidas por una nueva organización antes de que el “Barón” abandonase el país. En diciembre de 1919, el carlista Ramón Sales fundó el Sindicato Libre en el Ateneo Legitimista de Barcelona. Financiado por la Iglesia y los patronos, el verdadero objetivo de este nuevo organismo —independientemente de la integridad de muchos de sus fundadores y seguidores, entre los que podían encontrarse sindicalistas convencidos— era el desmembramiento del movimiento obrero. Sus integrantes fueron reclutados entre los sectores más religiosos, más conservadores, o simplemente más oportunistas de la clase obrera. Estos organismos, aunque no consiguieron dividir el movimiento cenetista, generaron una nueva cantera de pistoleros y proporcionaron cobertura ideológica a los pistoleros profesionales que ya existían. La rivalidad intersindical en Barcelona se convirtió en una lucha a mano armada.

Para empeorar la ya de por sí difícil situación, en noviembre de 1920 el capitán general de Cataluña, Severiano Martínez Anido, fue designado gobernador civil en sustitución de Carlos Bas. Este nombramiento, como señala Brenan, “constituyó un desafío a la opinión más moderada del país”. La desconfianza hacia Martínez Anido se fundamentaba en los métodos extralegales que utilizaba para combatir el terrorismo; se decía que había presentado a Bas una lista de 675 sindicalistas que, según él, debían ser asesinados sin tardanza. Unamuno describe así a Martínez Anido: “Este hombre es un perfecto bruto; no sabe ni siquiera hablar; no hace más que rugir y rebuznar, aunque sus rugidos y rebuznos siempre quieren decir algo”.

Los anarquistas, por su parte, intentaban reagrupar sus fuerzas. No hay duda de que elementos violentos comenzaron a influir cada vez más en la dirección de la CNT, aunque los pistoleros profesionales difícilmente habrían tenido cabida en una organización de recursos insuficientes y cuyos militantes eran objeto de duras persecuciones.[28] A este respecto, las observaciones de Buenacasa señalan la inquietud que experimentaban los anarquistas más rigurosos ante su incapacidad para detener los atentados. Buenacasa se lamentaba de que muy pocos de los atentados eran actos realmente revolucionarios, y concluía indicando que "a los sindicatos les era imposible liberarse de estos pistoleros que actuaban por cuenta propia, y que en algunos casos llegaban incluso a ejercer el liderazgo de importantes comités de la organización".

Es muy posible que en esa época los anarquistas no tuvieran muchas alternativas: con Martínez Anido en el poder, era preferible el uso desenfrenado del revólver que arriesgarse a cometer un fallo actuando en la resistencia. El nuevo gobierno civil y la Federación de Empresarios parecían dispuestos a exterminar a la CNT. Un distinguido político conservador, Burgos y Mazo, despejaba las dudas sobre la responsabilidad de la clase dominante en la crisis de Barcelona: "Debe decirse con claridad y sin temores, que la clase empresarial y dominante de Barcelona fue la principal culpable de este terrible estado social".

En Barcelona la situación empeoraba cada día que pasaba. Los atentados de uno y otro lado se sucedían con macabra equivalencia. El mortal ajuste de cuentas cobró una intensidad nunca antes conocida. Tras el intento de asesinato de Salvador Seguí el 4 de enero de 1920 (en la calle Mendizábal de Barcelona), los anarquistas atentaron contra el presidente de la Federación de Empresarios, contra uno de sus directores y contra dos agentes de la policía. Estos actos se alternaron entre uno y otro bando con una regularidad asombrosa. En el otoño de 1920 se producía uno prácticamente cada veinticuatro horas. Una de las mayores atrocidades se cometió la noche del 12 de septiembre, cuando en una sala de espectáculos de la clase obrera, la sala "Pompeya", situada en el Paralelo, explotó una bomba que causó la muerte de tres personas e hirió a otras veinte. Un mes más tarde, el presidente de una empresa metalúrgica, E. Tarrida, fue

asesinado, y dos semanas después caía Jaime Pujal, presidente de la Asociación de Empresarios de Compañías Eléctricas.

El 20 de noviembre, Martínez Anido ordenó la detención de sesenta y cuatro militantes de la CNT, lo que originó una huelga general de protesta que tuvo lugar al día siguiente. El 23 de noviembre Martínez Anido declaró ilegal la federación obrera, y restableció la censura. Tres días más tarde el presidente del Sindicato Libre de Reus fue asesinado, y al día siguiente moría José Canela, un destacado militante del Comité Regional de la CNT. También los abogados de la federación obrera fueron víctimas de los pistoleros: el 30 de noviembre fue arrestado el letrado Lluís Companys, y unas horas más tarde fue asesinado el conocido diputado republicano Francisco Layret, abogado de los sindicalistas.

Esta guerra a punta de pistola alcanzó también a algunos altos cargos del gobierno. En 1920, el gobernador civil de Cataluña, el conde de Salvatierra, que había dirigido los *lock-outs* de fines de 1919 y principios de 1920, cayó bajo las balas de los pistoleros anarquistas. El 9 de marzo de 1921, el primer ministro conservador, Eduardo Dato, fue asesinado en Madrid a manos de tres anarquistas catalanes, en represalia por el restablecimiento de la funesta ley de fugas, ley que permitía a la policía disparar a los militantes obreros detenidos si éstos “intentaban escapar”. En respuesta, Evelio Boal, secretario general del Comité Nacional, fue asesinado el 15 de junio, al amanecer, pocos minutos después de ser liberado por la policía. Su compañero Antonio Feliu, tesorero de la CNT, logró escapar, pero dos semanas después fue abatido a balazos.

Entre 1918 y 1923 esta matanza sistemática se cobró cerca de 900 vidas sólo en Barcelona, y alrededor de 1.500 en toda España. Un primer ministro, dos ex gobernadores civiles, un arzobispo, unos 300 empresarios, directores de empresas, capataces y policías, y muchos trabajadores y líderes del sindicato libre, fueron víctimas de la acción armada de grupos anarquistas. La CNT, por su parte, perdió numerosos y destacados dirigentes y militantes de sus comités nacionales, regionales y locales. En cierto modo, el precio que pagó la organización obrera fue más alto que el de sus enemigos. “Al asesinato en la vía pública —escribe Buenacasa—, se le unía la autoritaria persecución del Estado; nuestros dirigentes debían decidir

entre morir, matar, huir o caer en prisión. Los más violentos se defendían y mataban; los más estoicos eran asesinados […]; los más cobardes y prudentes huían o se escondían; los más activos daban con sus huesos en la cárcel".

A finales del verano de 1920, el declive de la organización obrera era ya evidente; fue en esa época cuando la CNT inició otro de esos curiosos acercamientos a la burocracia de la UGT, por la que siempre había sentido tanto recelo. La alarmante situación opresiva provocada por los patronos de Barcelona, condujo a los militantes más moderados del Comité Nacional y del Comité Regional Catalán a solicitar un pacto de defensa común con la UGT. En sí mismo, dicho pacto no tenía mucho sentido para la CNT, a menos que condujera a una huelga general conjunta. La UGT carecía de recursos en Cataluña, y a pesar de la política reaccionaria del gobierno central, en aquellas ciudades donde tenía una importancia significativa, la organización no estaba excesivamente amenazada por la represión. En realidad, los socialistas tenían mucho que ganar con el pacto con la CNT. La Revolución Rusa había provocado una división interna, y un gran porcentaje de afiliados había manifestado la necesidad de una adhesión a la Internacional Comunista. Los reformistas del partido y de la UGT necesitaban un nuevo talante revolucionario, y nada mejor para lograr su objetivo que un pacto con la militante organización anarcosindicalista.

Después de recibir una primera respuesta favorable por parte de los socialistas de Madrid, Salvador Seguí, Evelio Boal y Salvador Quemades, en representación de la CNT, se trasladaron a la capital para reunirse con Largo Caballero, Cordero, Fernández, de los Toyos y Martínez Gil. El 3 de septiembre de 1920 estos dirigentes firmaron un pacto que exigía, en primer lugar, el restablecimiento de las garantías constitucionales. El tono del manifiesto era, a todas luces, sorprendente: "¡Nosotros, enemigos declarados de la sociedad burguesa, nos constituimos en defensores de sus leyes!". Poco tenía que temer la burguesía española de esta nueva corriente.

Habría sido provechoso para las clases dominantes captar a líderes de ambas federaciones, lo que en tales circunstancias no parecía demasiado difícil. En lugar de esto, el gobierno conservador de Eduardo Dato fortaleció su posición y se preparó para "dar la batalla".

El pacto produjo una gran indignación en los comités regionales de fuera de Cataluña, especialmente por el hecho de que el Comité Nacional y los dirigentes catalanes habían actuado sin previa consulta. En el mes de octubre de ese mismo año, se convocó un pleno donde el pacto fue ampliamente atacado. Sin embargo, se tomó la decisión de no censurarlo públicamente con el fin de apoyar la huelga de los mineros de Río Tinto, donde la colaboración CNT-UGT era muy necesaria.

Pero la huelga tampoco se vio favorecida por el pacto. El conflicto de Río Tinto, una zona de Andalucía rica en cobre, fue sin duda uno de los más controvertidos e intensos de la historia del movimiento obrero español. Las minas pertenecían a grandes empresas británicas que las habían adquirido por una suma irrisoria décadas atrás, cuando la riqueza nacional de España se había puesto a la venta en el libre mercado de la explotación extranjera. La huelga comenzó el 26 de junio de 1920, bajo la dirección de la CNT. Aunque en la región existían importantes sindicatos de la UGT, fuertes recelos mantenían divididos a anarcosindicalistas y socialistas. Sin embargo, todas estas disputas internas se vieron eclipsadas por los desesperados esfuerzos de los mineros en su lucha. La mayoría de ellos habría preferido dejarlo todo para marcharse a vivir a los pueblos antes que ceder y pactar con los patronos. Se hablaba de tomar las minas y las oficinas administrativas de los patronos. Las dramáticas características de esta lucha conmovieron a los obreros de toda España. Andalucía se encontraba al borde de una huelga general como muestra de solidaridad con sus compañeros, una posibilidad que también se habría dado en el norte si las dos organizaciones obreras hubieran estado preparadas para una acción de esta envergadura.

El movimiento no prosperó. Dirigentes de la CNT y de la UGT se trasladaron a Río Tinto para analizar el problema de cerca. A su regreso, los líderes de la UGT sólo fueron capaces de proponer que los afiliados de las dos organizaciones hicieran una pequeña contribución personal, de una peseta semanal, para ayudar a los huelguistas. Los socialistas madrileños habían rechazado anteriormente la propuesta de la CNT, que pretendía realizar una huelga general conjunta que iniciarían los mineros y los obreros ferroviarios ugetistas. El conflicto quedó resuelto para los moderados de

ambas organizaciones, cuando los mineros, después de una huelga de cuatro meses, regresaron al trabajo.

El pacto, a esas alturas, estaba hecho pedazos. Cuando la huelga general estalló en Barcelona como protesta por las detenciones de los dirigentes cenetistas y por el asesinato de Layret, la CNT solicitó una vez más la ayuda de la UGT; pero no sólo les fue denegada, sino que la arrogancia con contestó la UGT indicaba que los socialistas habían perdido todo interés en futuras colaboraciones con la CNT. La respuesta la dio Largo Caballero; cuando se le preguntó por qué los trabajadores de UGT de la provincia vasca de Vizcaya no habían prestado ayuda a los obreros catalanes, contestó: "Porque no estamos obligados hacer eso". Buenacasa relata que los anarcosindicalistas de Bilbao, al despedirse de Largo Caballero, le dijeron en tono enérgico: "Está bien, habrá huelga en Vizcaya". Pero Largo Caballero envió un mensaje a sus partidarios diciéndoles que "si los obreros pretendían paralizar el trabajo en las fábricas y en las minas, los recibieran a estacazos".

La huelga fracasó en Cataluña, y con ella cualquier perspectiva de colaboración entre las dos organizaciones obreras en los años venideros.

La CNT se encontraba en medio de una crisis, no sólo por la implacable persecución de las autoridades estatales, sino también por las fisuras abiertas por los comunistas, que ante la imposibilidad de controlar la organización se habían propuesto dividirla. En Cataluña, Andalucía y otras regiones, estos continuos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas supusieron un enorme desgaste para los sindicatos. Los comunistas fueron derrotados por la gran influencia anarquista en el seno de la CNT, y por un renacimiento del movimiento obrero que eliminó, al menos temporalmente, el opresivo clima de frustración y aislamiento que habían creado las luchas internas. En abril de 1922 se restablecieron las garantías constitucionales por primera vez después de un año y medio. Un paro de camioneros en Barcelona terminó en huelga general, en la que participaron la gran mayoría de los trabajadores del transporte de Cataluña. La CNT, recién salida de la clandestinidad, se las arregló para llevar a cabo con éxito una Conferencia Nacional en Zaragoza el 11 de junio. La Conferencia Nacional de la CNT

resolvió separarse de la Internacional Comunista. Dominada por los militantes moderados de la CNT, la conferencia declaró su apoyo a la participación de Salvador Seguí en las comisiones mixtas y se mostró partidaria del empleo de funcionarios pagados por parte de la organización. Por otro lado, se aprobó una vaga estrategia "política" conciliadora dirigida a socialistas y liberales, que proponía la formación de "bloques" electorales con los partidos dispuestos a favorecer la restauración y ampliación de las libertades civiles. Ésta iba a ser la más extensa e importante reunión de la Confederación hasta la declaración de la Segunda República.

Como un símbolo del fin de la posguerra, el 10 de marzo de 1923 Salvador Seguí y un compañero, Francisco Comas, fueron acribillados a balazos en la barcelonesa calle de la Cadena. El asesinato se perpetró en una área de la ciudad muy concurrida y en un momento del día de plena actividad. La muerte de Seguí a los 33 años supuso la pérdida del más importante e influyente portavoz de la corriente moderada de la CNT. A los sindicalistas de la gran organización obrera les resultó muy difícil reemplazar a Seguí, y durante un tiempo se limitaron a cumplir tareas secundarias. Pero con el desorden que la dictadura generó en los grupos anarquistas muy pronto volverían a colocarse de nuevo en un primer plano.

Aunque a Seguí le corresponde un lugar importante entre los mártires anarcosindicalistas, su contribución a la CNT es de difícil evaluación. Nació en un hogar de clase trabajadora en la Lérida industrial. Su familia se trasladó a Barcelona cuando aún era un niño, y allí, en las calles de los barrios proletarios, se fueron configurando las cualidades y el carácter combativo que hicieron de él uno de los más capacitados organizadores de la CNT. Este hombre impulsivo, criado en la calle y conocido por todos como el "Noi del Sucre", (aludiendo a su trabajo en una refinería azucarera), fue también un admirador del individualismo nietzscheano, del superhombre a quien "todo le era permitido". Salvador Seguí se sintió atraído desde muy joven por el movimiento obrero. Participó activamente en las luchas de la Semana Trágica de 1909, y la represión posterior le obligó a esconderse por un tiempo. A partir de ese momento, su vida giraría casi exclusivamente en torno al movimiento: participaba en mítines, giras de propaganda, negociaciones y conferencias, y pronto se haría cargo de la

organización de las huelgas. Aunque Seguí conocía a los teóricos del anarquismo y del socialismo, fue ante todo un organizador práctico, para quien el comunismo libertario (él se consideraba a sí mismo anarcosindicalista) constituía un ideal lejano. Para Seguí, la revolución era, primordialmente, una cuestión de organización. Como militante moderado que era, defendía la posibilidad de establecer una colaboración con la UGT, aunque esto lo convirtió en blanco de duras críticas por parte de los militantes anarquistas, quienes detestaban su actitud política, aunque admiraran su talento administrativo. Seguí, por su parte, les tachaba de doctrinarios y aseguraba que su falta de realismo ponía en peligro el desarrollo de un movimiento unificado de masas trabajadoras. Por consiguiente, el nombre de Seguí siempre salía a colación cuando era necesario aquietar los ánimos en las filas más radicales de la CNT. Seguí fue uno de los artífices del Pacto de Zaragoza, así como de la Comisión Mixta (en la que participó activamente), y se convirtió en el negociador ideal en los acuerdos con los patronos y con los burócratas de la UGT.

Durante la huelga general de 1919 fue Salvador Seguí quien, prácticamente en solitario, convenció a los trabajadores barceloneses para reincorporarse al trabajo, justo en el momento en que “La Canadiense” se enfrentaba a la bancarrota y los empresarios estaban en franca retirada. Muchos de los consejos que dio fueron tan poco acertados como éste. Aunque términos como “compromiso”, “restricción” y “moderación” evocan aún cierta veneración en algunas regiones, nunca formaron parte del vocabulario de la burguesía española. Por tratar de fomentar el compromiso y restringir la violencia, Seguí fue humillado por los intransigentes patronos catalanes, y fueron seguramente sus mismos pistoleros quienes lo asesinaron.

Irónicamente, los hombres que vengaron el asesinato de Seguí fueron los mismos a quienes se enfrentó en la CNT. El 17 de mayo de 1923, los pistoleros anarquistas de Barcelona asesinaron a Fernando González Regueral, ex gobernador de Vizcaya; casi un mes más tarde, el 11 de junio del mismo año, mataron al cardenal Juan Soldevilla y Romero, arzobispo de Zaragoza. Ambos fueron notorios reaccionarios y antisindicalistas. Los responsables de estos asesinatos eran miembros de “Los Solidarios”, un

grupo de jóvenes anarquistas cuyas opiniones y prácticas diferían en extremo de las de Seguí.

Conviene hacer ciertas consideraciones sobre este grupo de acción anarquista, puesto que en muchos aspectos tipifican el "grupo de afinidad" que tanta influencia ejercería posteriormente en la FAI. Muchos de estos pequeños grupos anarquistas ya existían desde la década de 1890. "Los Solidarios", y otros como "El Crisol", que adquirieron cierta fama años más tarde, se formaron entre finales de 1920 y principios de 1921, cuando se creó la Juventud Sindicalista con el propósito de hacer frente a los pistoleros del Sindicato Libre.

Ricardo Sanz, que fue miembro de "Los Solidarios", relata que se trataba de gente joven —la mayoría menores de veinticinco años— que había llegado a Barcelona procedente de distintas regiones de España. Estos jóvenes,

> espontáneos en principio, se sentían cada vez más ligados moralmente al grupo —escribe Sanz—. Hubo muchos de ellos, los que podríamos llamar colaboradores directos, que se consideraban miembros del grupo no sólo de hecho, sino también de derecho. Todos sus componentes eran trabajadores y vivían de un jornal diario. El grupo no tenía ningún otro tipo de ingreso, pero tampoco gastos; éstos se cubrían con arreglo a las posibilidades de cada uno de los miembros. La idea de "lo tuyo es tuyo y lo mío mío" apenas existía en el seno del grupo, sobre todo cuando se trataba de actividades relacionadas con el plan colectivo. Individualmente, cada miembro del grupo era libre de hacer lo que creyera conveniente, siempre que su actuación no entrara en contradicción con la pureza de las ideas.[29]

"Los Solidarios" incluían al famoso trío formado por Buenaventura Durruti, su íntimo amigo Francisco Ascaso y Juan García Oliver, cuya colaboración bajo el nombre de "Los Tres Mosqueteros" alcanzó proporciones legendarias. Sin embargo, según Sanz, ni Durruti, ni Ascaso, ni García Oliver actuaban como líderes. "Los Solidarios era ante todo un

grupo de individuos —precisa Sanz—; ninguno era más o menos importante que el otro". Desde este punto de vista, "Los Solidarios" se acercaban más a una comunidad que a una organización política convencional. Para comprender la estrecha relación personal que unía a los miembros de este grupo de afinidad, deberíamos compararlo con una organización comunista o socialista. Un partido marxista se organizaba en torno a un cuadro jerárquico —una burocracia integrada por funcionarios pagados— que formaba una cadena de mando claramente definida. Los comunistas, y en menor medida los socialistas, exigían la obediencia de las bases. La autoridad era asumida por un organismo ejecutivo, jerárquicamente superior, que tomaba todas las decisiones políticas y administrativas del partido.

El complejo cuadro del partido estaba encarnado por militantes bien disciplinados, que siempre actuaban de acuerdo con las decisiones de los Congresos del partido y de los principales comités. Dentro de este ejército político el trato entre sus miembros era bastante impersonal. Aunque en cualquier grupo acosado por la persecución resulta casi imposible no desarrollar algún tipo de afinidad, el marxismo tendía a poner de relieve el valor de los vínculos neutrales desde el punto de vista moral y emocional. Los camaradas del momento presente bien podrían ser los integrantes de las facciones opositoras del futuro. El "socialismo científico" requería un cierto desprendimiento, un severo racionalismo que prevaleciera sobre las pasiones, los impulsos y la intimidad personal. La lealtad se debía al partido por encima de todo, y no a los compañeros que compartían luchas, riesgos y responsabilidades. Para los anarquistas esas disposiciones resultaban aterradoras. Las consideraban frías, desapasionadas e incluso indecentes desde el punto de vista moral. Para ellos, la revolución significaba sobre todo la transformación moral de los individuos, la recuperación de su libertad y de la posibilidad de su espontáneo desarrollo. La revolución permitiría a los individuos reafirmarse, construirse de nuevo, no sólo como meros elementos sociales capaces de producir bienes, sino como personas libres para decidir su futuro y su vida cotidiana. No merecía la pena luchar por nada que estuviera por debajo de estas aspiraciones. Por consiguiente, los anarquistas consideraban al partido marxista como una manifestación

más del Estado, que ejercería el poder manteniendo la subordinación de unos seres humanos sobre otros, preservando la autoridad del que domina sobre aquellos que son dominados. El partido marxista era el reflejo de la sociedad que ellos mismos decían querer cambiar, en una suerte de inversión de los valores, métodos y estructuras burguesas.

El marxismo se defendía, afirmando que sus formas organizativas permitían una mayor eficiencia, argumento que los anarquistas rechazaban rotundamente; es más, insistían en que la organización más eficiente no es la que se apoya en una obediencia formal o en la coacción, sino la construida a partir del voluntarismo. Un movimiento que pretenda fomentar una revolución liberadora sólo debe desarrollar formas liberadoras y revolucionarias. Es decir, todo movimiento revolucionario debe ser el reflejo de la sociedad libre que intente crear, y nunca una copia a pequeña escala de la represiva sociedad que quiere derrocar. Si un movimiento aspira a crear un mundo unido por la solidaridad y la ayuda mutua, ha de estar guiado por estos preceptos; si pretende una sociedad descentralizada, sin Estado, sin autoritarismo, la lucha también ha de ser estructurada de acuerdo a estos principios. Con sus ideas voluntaristas, los anarquistas trataban de construir un movimiento en el cual los individuos estuviesen relacionados por un sentimiento de “afinidad” hacia los mismos intereses y tendencias, y no sujetos por rígidos lazos burocráticos y abstracciones ideológicas.

No olvidemos que los anarquistas destacaban la importancia de la educación y la necesidad de vivir de acuerdo a los principios anarquistas; la necesidad de crear una “contrasociedad” que proporcionara el terreno adecuado para que los seres humanos se regeneraran. Por eso mismo daban tanta importancia al tiempo libre y a la moral más elevada. Desdeñaban a los socialistas porque sus reivindicaciones se centraban principalmente en el aumento de salarios y las mejoras materiales de las condiciones de vida. Los anarquistas consideraban mucho más importante la reducción de las horas de trabajo, de modo que, como sostenía Anselmo Lorenzo, la gente “tuviese libertad para pensar, para estudiar, para satisfacer sus instintos morales”. Este tipo de lenguaje —términos como “libertad” e “instintos morales”— era ajeno a los partidos socialista y comunista.

La adhesión proletaria lograda por los anarquistas en Zaragoza puede considerarse (por sus dimensiones) única en la historia de los movimientos revolucionarios. Los obreros aragoneses reivindicaron con fuerza los valores morales, políticos y humanistas, así como la lucha necesaria para alcanzarlos, siempre en detrimento de los valores económicos. Según E. H. Carr, las huelgas de los anarquistas "se caracterizaban por su desdén hacia las exigencias económicas, y por la tenaz resistencia de su solidaridad revolucionaria; las huelgas de solidaridad con los compañeros presos tenían mayor seguimiento que las que reivindicaban la mejora de las condiciones laborales".

"Los Solidarios" destacaron de los demás grupos de afinidad por su alcance y la audacia de sus ingeniosas acciones, aunque compartían los aspectos característicos de los grupos de acción anarquista que operaban en ese tiempo en España. No cabe duda de que ellos, y otros similares a ellos, aterrorizaron a muchos hombres del gobierno que eran culpables de crímenes contra el movimiento obrero. A este respecto, es revelador el caso de Martínez Anido, que después de ejercer brutalmente su cargo de gobernador civil de Barcelona durante dos años, tiempo en el que sus métodos sacudieron continuamente la opinión pública del país, fue finalmente destituido en 1922. Una de las razones para su cese fue su implicación en un suceso que, por otra parte, era una práctica habitual en su política: mientras Ángel Pestaña se restablecía de las heridas que le habían causado los pistoleros del gobernador, otro grupo de pistoleros de Martínez Anido esperaba al anarquista a la salida del hospital para dispararle tan pronto como apareciese por la puerta. Esta historia tuvo amplia repercusión. En ese momento, un gobierno conservador más moderado, presidido nuevamente por Sánchez de Toca, había accedido al poder y pretendía llevar a cabo reformas políticas. Tras la destitución de Severiano Martínez Anido, "Los Solidarios" comenzaron a buscarle con el fin de "arreglar cuentas", según palabras de Sanz.

Martínez Anido, obviamente, decidió ocultarse. En mayo de 1923, "Los Solidarios", armados con ametralladoras ligeras y bombas, le siguieron la pista hasta San Sebastián. Anido ya había huido a La Coruña, y hasta allí le siguieron sus perseguidores. Martínez Anido desapareció entonces por un

tiempo. Aunque era general del ejército y ex gobernador de Cataluña, se vio forzado a permanecer escondido hasta que la amenaza de los pistoleros fuera borrada por la represión. Durante la caza, “Los Solidarios” lograron localizar a Ramón Laguía, uno de los jefes de los pistoleros del Sindicato Libre, y le hirieron gravemente en un café de Manresa. Por esa misma época asesinaron al ex gobernador de Vizcaya y al cardenal de Zaragoza. También cometieron audaces atracos; el más espectacular fue el ocurrido el primero de septiembre de 1923, cuando un grupo de “Los Solidarios” asaltó el Banco de Gijón llevándose más de 600.000 pesetas. El atraco ocasionó una tremenda conmoción en toda España, y todavía figura como una de las mayores “expropiaciones” de la época.

Mientras tanto, los grupos de acción anarquista preparaban una insurrección contra la recién instalada dictadura de Primo de Rivera. Había una necesidad acuciante de armas, por lo que llevaron a cabo una serie de intrépidas operaciones para fabricarlas o para “expropiarlas”, incluso ante los ojos de la policía; las acciones se desarrollaron con un coraje y una desenvoltura que sólo podía darse en las filas anarquistas de la España de aquella época. “Los Solidarios” compraron una fundición de hierro en el barrio barcelonés de Poble Nou, y allí fabricaron granadas y bombas. Antes de que fueran descubiertos por la policía fabricaron cerca de 6.000 armas, que fueron distribuidas en el barrio de Poble Sec. La organización, además, tenía ocultos rifles y pistolas en casi todos los barrios de Barcelona. También se estableció un tráfico regular de armas adquiridas en Bélgica y en Francia, que llegaban clandestinamente a España por barco o a través de la ciudad fronteriza de Puigcerdà.[30]

En octubre de 1923, cuando se aproximaba la fecha del levantamiento, “Los Solidarios” se las ingeniaron para comprar 1.000 rifles y 200.000 cartuchos de la marca Gárate y Anitua, en la ciudad de Éibar. La insurrección nunca se llevó a cabo, por lo menos no entonces, y las armas se quedaron en el almacén. Posteriormente fueron trasladadas a Barcelona, donde permanecieron durante meses, mientras los anarquistas negociaban con los nacionalistas catalanes el uso que debía darse a este arsenal. No hubo acuerdo, así que las armas fueron llevadas de nuevo a Éibar (donde el fabricante las aceptó como “mercancía devuelta”). Este testimonio pone de

manifiesto la sorprendente eficacia del grupo de acción, que no sólo compró, sino que además almacenó y trasladó 1.000 rifles y 200.000 cartuchos en pleno período de dictadura, sin ser descubiertos nunca por la policía.

"Los Solidarios" desarrollaron por aquella época una actividad libertaria de gran osadía. En el grupo había al menos treinta miembros dispuestos en todo momento a abandonar Barcelona y dirigirse a cualquier otra región de España en la que una "operación" debiera realizarse. Aparte de traficar con miles de armas, poner en funcionamiento una fundición donde fabricaban bombas de mano y llevar a cabo acciones cuidadosamente planeadas, este grupo constituía una importante fuente de ingresos para los diversos proyectos libertarios.

Las "expropiaciones" financiaban las escuelas racionalistas inspiradas por las ideas de Francisco Ferrer, y las publicaciones de la prensa anarquista. Este dinero también permitía el funcionamiento de una importante empresa editora en Francia, que se encargaba de la publicación de la Enciclopedia Anarquista, así como de gran variedad de libros, folletos y periódicos. El grupo incluía hombres como Durruti, que gozaba de un gran prestigio; sin embargo, de acuerdo con Sanz, no había ni líderes ni jerarquía.

Durruti merecía su prestigio; era el resultado de su valor personal y su evidente talento. No era su formación lo que le había destacado de otros integrantes del grupo. Igual que todos, era un obrero, tal vez un poco mejor educado que los demás. Nació en León en julio de 1896 en el seno de una familia obrera. Cuando apenas tenía 14 años entró a trabajar como aprendiz en un taller de maquinaria. Cuatro años más tarde comenzó a trabajar como mecánico en un taller ferroviario. En esa época se afilió a la UGT y comenzó a militar activamente en el movimiento obrero. Su padre había sido socialista, y en un principio parecía que seguiría su mismo camino político, pero Durruti era un joven combativo y muy pronto se vería atraído por la militancia anarcosindicalista de la CNT, donde comenzó a actuar en agosto de 1917, durante la huelga general. Como consecuencia de la represión y de las listas negras que aparecieron después de la fracasada huelga, Durruti se vio obligado a abandonar León y marchó en busca de trabajo en dirección al

litoral Cantábrico, estableciéndose en la ciudad de Gijón. Allí fue acogido por Buenacasa, quien le instruyó en las ideas anarquistas.

Durruti tenía entonces 21 años y fue llamado a incorporarse al servicio militar obligatorio. Abandonó España y se instaló en París, donde conoció a las más destacadas personalidades anarquistas de la capital francesa, comprometiéndose cada vez más con el movimiento libertario. El resurgimiento de la actividad revolucionaria le hizo regresar a España después de tres años en el país vecino. Se estableció entonces en San Sebastián, donde recuperó el contacto con Buenacasa y se unió a "Los Justicieros", un grupo anarquista de reciente creación. En busca de un entorno más combativo para trabajar, Durruti se trasladó a Barcelona. De camino se detuvo en Zaragoza, donde se encontró con Francisco Ascaso, el hombre que sería en los años siguientes su *alter ego*.

Con la llegada de Durruti a Barcelona en el mes de junio de 1922, "Los Solidarios" comenzaron a tomar forma como grupo de acción. Al poco tiempo el revolucionario se vio obligado a utilizar un nombre de batalla y a operar en el sombrío terreno de la clandestinidad. Su audacia se puso de manifiesto cuando acudió a la cárcel a visitar al grupo que asesinó a Dato, hecho que le costó un arresto y varios meses de encierro. Pero a pesar de que estaba implicado en la mayor parte de las acciones de su grupo, la policía se vio obligada a liberarlo por falta de pruebas. En 1923 la situación de Durruti era tan arriesgada que tuvo que abandonar España y refugiarse en Francia.

El grupo de "Los Solidarios" se enfrentaba a su disolución. Los atentados, los asaltos a bancos y el tráfico de armas habían pasado factura a los miembros más militantes y activos. Ascaso estaba en prisión por el asesinato del cardenal Soldevilla, aunque pronto conseguiría evadirse. En cuanto pudo regresó en ferrocarril a Barcelona, haciéndose pasar por maquinista, y de allí partió a París al encuentro de Durruti.

Eusebio Brau había sido asesinado en el asalto de Gijón, y Rafael Torres Escartín fue encarcelado y acusado de participar en el atentado contra el cardenal. Según Sanz, en febrero de 1924 la policía secreta asesinó a Gregorio Suberviela y a Manuel Campos, dos miembros del grupo de "Los Solidarios". García Oliver y Figueras estaban en la cárcel; Sanz y Alfonso

acababan de ser liberados. La época de los atentados y de las "expropiaciones" había pasado, y se iniciaba un nuevo período marcado por la dictadura militar de Primo de Rivera.

¿Qué habían conseguido los pistoleros anarquistas? ¿Fueron los atentados simples acciones frívolas, provocaciones insensatas que hicieron el juego a las autoridades, justificando las posteriores acciones de presión contra la CNT? Esta es, en realidad, la opinión que predomina entre la mayoría de los historiadores contemporáneos, hasta el punto de que muchos anarquistas españoles han adoptado actitudes defensivas ante esta cuestión, y tratan el asunto de las actividades ilegales de Durruti con gran reticencia. Esta interpretación resulta, cuanto menos, simplista. Al evaluar las consecuencias políticas de los asesinatos de Cánovas en 1897, y de Canalejas en 1912, nos encontramos con el hecho evidente de que estos atentados eliminaron a dos de los primeros ministros más sagaces de la historia moderna de España. Ambos atentados llegaron en momentos críticos —el período inmediatamente anterior a la guerra hispanoamericana, y el ocaso del *turnismo*, antes de la Primera Guerra Mundial— cuando las decisiones políticas eran necesarias para hacer frente a una situación política de desintegración. Las muertes de Cánovas y Canalejas dejaron un gran vacío en la jefatura del Estado español. Los primeros ministros que les siguieron fueron absolutamente incapaces de resolver las crisis y contradicciones que se desarrollaron en la sociedad española. Cuando los empresarios recurrieron al pistolerismo después de la Primera Guerra Mundial, no cabía otra respuesta que el contrapistolerismo de los anarquistas.

Para entender mejor aquel período hay que analizar el frustrado intento de Seguí por promover un moderado enfoque sindicalista en la CNT. Los esfuerzos de Seguí dieron resultado por un tiempo, pero el proceso se interrumpió repentinamente con la huelga general de 1919. Se aceptó la creación de una Comisión Mixta y se persistió en la política de colaboración con la UGT, incluso subordinándose a la orientación socialista de la huelga. Los patronos, por su parte, aprovecharon la tregua para movilizar sus fuerzas y lanzar una feroz contraofensiva. Los socialistas

terminaron dando la espalda a los anarcosindicalistas cuando se les exigió una acción decisiva.

A pesar de todos sus defectos, el pistolerismo y la política anarquista militante de la CNT surgieron como consecuencia de las derrotas sufridas por el ala moderada del sindicato. Una línea política conformista habría llevado a la organización obrera a la desmoralización. Los pistoleros anarquistas demostraron a los obreros militantes de Barcelona que en la época en que los patronos parecían tener el camino completamente libre, todavía había una fuerza que les hacía frente y que respondía eficazmente, golpe por golpe.

Por último, los militantes anarquistas no estaban interesados en la "paz social" o en un período de sosegado desarrollo sindical. Para ellos la sociedad burguesa era una sociedad enferma. Desde su punto de vista, el oportunismo de Largo Caballero o las reformas de Sánchez de Toca no eran sino pusilánimes esfuerzos por preservar una sociedad fundamentalmente enferma. El terrorismo anarquista español estaba destinado no sólo a mantener vivo el espíritu de rebelión y provocar a la burguesía española, sino también a socavar la estabilidad del sistema social. De este modo surgió una política de "desestabilización del capitalismo" que —como se vería en la década de 1930— catapultó a España a una revolución social. Como veremos, los anarquistas lograron lo que tanto deseaban. Sin su presencia, es poco probable que hubiese estallado la revolución en 1936. Y si la revolución fracasó, no fue por falta de esfuerzo.

# 9: De la Dictadura a la República

## La Dictadura de Primo de Rivera

El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña (cargo al que había accedido el año anterior) se proclamó dictador militar de España por medio de un golpe de Estado, liquidando el parlamentarismo oligárquico que había instaurado Sagasta en la década de 1870.

La dictadura culminó un período marcado por el descontento con el ejército y con la actitud de la monarquía hacia los asuntos políticos del país. El ejército había demostrado su incompetencia cuando, dos años antes, en junio de 1921, una gran columna al mando del general Fernández Silvestre, al avanzar desde Melilla hasta Alhucemas, en el Marruecos español, sufrió una emboscada en la región de Annual y fue prácticamente exterminada por las fuerzas rifeñas. Alrededor de 10.000 hombres murieron y unos 4.000 fueron capturados por el enemigo, perdiendo también en el combate todo el armamento, que fue a parar a manos de los rifeños. En las siguientes dos semanas, los rifeños ocuparon todas las plazas fuertes españolas hasta la caída de Monte Arruit, llegando a los alrededores de Melilla sin encontrar resistencia. La incursión del general Silvestre, que en un principio se pregonó como una audaz ofensiva contra los rifeños, muy pronto se convirtió en una vergonzosa derrota que puso en peligro la presencia española en el norte África.

Todo el país sabía que el rey estaba implicado en este desastre. Silvestre, que pereció en la emboscada de Annual, era un protegido de

Alfonso XIII. El rey le había animado a avanzar con la esperanza de que un éxito militar en Marruecos fortaleciera su posición en las Cortes. El monarca, en un mensaje enviado al malogrado Silvestre, le ordenaba: “Haz lo que te mandé y olvídate del ministro de la Guerra, que es un imbécil”. Pese a los dos años transcurridos entre el desastre de Annual y el pronunciamiento de Primo de Rivera, el clamor sobre este asunto no había desaparecido. Agravada por los rumores de corrupción en el ejército, la situación empeoró tanto que hubo una crisis de gobierno y el por entonces primer ministro conservador, Sánchez de Toca, fue sustituido por el liberal García Prieto, que puso fin a la sucesión de gabinetes conservadores que dominaban España desde 1919. El nuevo gobierno de “concentración liberal” amenazaba con poner en marcha medidas reformadoras, que incluirían la democratización del ejército y de la monarquía. Mientras las Cortes suspendían sus actividades por las vacaciones de verano, una comisión que se encargaba de evaluar las derrotas de Marruecos comenzó a investigar todas las causas del desastre, desde la baja moral de las tropas hasta la complicidad del rey en la derrota de Annual y la corrupción del ejército en general. Todo el mundo era consciente de que en otoño, cuando las conclusiones de la comisión salieran a la luz, el rey y el ejército tendrían que afrontar el juicio de la opinión pública.

La dictadura de Primo de Rivera dio carpetazo a estas investigaciones y culpó al gobierno parlamentario de los errores del ejército y del rey. Se decretó la ley marcial en todo el país, se suspendieron las Cortes y se anuló la libertad de prensa. Los partidos políticos que continuaron sus críticas hacia la dictadura fueron suprimidos. El dictador, mediante la sencilla maniobra de ofrecer al pueblo —agobiado por tantas luchas e inestabilidad — “la paz social”, se aseguró cierta reserva de capital político para comenzar su mandato. En una España saturada de crisis parlamentarias y de políticos corruptos, la llaneza patriótica de Primo de Rivera y su inexperiencia parecían cualidades atractivas. Libertino y amante de los placeres, Primo de Rivera funcionaba por “intuición”; sus discursos, sus ademanes y su comportamiento público se caracterizaban por una franqueza algo torpe y por una mezcolanza de efusividad sensiblera y prudencia provinciana. “No tengo experiencia como gobernante”, declaraba.

“Nuestros métodos son tan simples como claros”: trabajar a ráfagas, sin continuidad, dirigir a los españoles peroratas de una verbosidad incontinente plagada de asuntos personales, y repartir caridad para paliar los abusos sociales padecidos por el “pobre pueblo”. Primo de Rivera inició este estilo paternalista de grandes gestos desde el comienzo mismo del régimen, cuando amortizó con el superávit de su primer presupuesto todos los recibos que los más pobres de Madrid tenían pendientes en el Monte de Piedad.

Primo de Rivera creó una organización indefinida e incoherente, la Unión Patriótica (UP), destinada a proporcionar el apoyo popular que necesitaba la dictadura. La Unión Patriótica se oponía al individualismo, a la democracia y al intelectualismo, proponía una filosofía política pragmática y defendía los valores del respeto a las instituciones sociales. A mediados de la década de 1920, este programa se asemejaba cada vez más al fascismo. De hecho, Primo de Rivera manifestaba públicamente su admiración por Mussolini, y adoptó el boato y el estilo verbal del dictador italiano. Los liberales y republicanos marcharon al exilio, forzados más por el ostracismo al que les abocaba la dictadura que por una persecución política, y comenzaron a conspirar contra el régimen. Sin embargo, Primo de Rivera no era un fascista, y su Unión Patriótica no era tampoco un movimiento fascista. La dictadura existía gracias a la tolerancia de la monarquía y del ejército, que veían en ella la última posibilidad de evitar la democratización de ambas instituciones. El destino de la monarquía estaba ahora ligado al de la propia dictadura, puesto que Alfonso XIII no sería ya nunca perdonado por haber aprobado el pronunciamiento de Primo de Rivera y haber designado a éste como Primer Ministro. Al final, prácticamente todos los sectores de la clase dominante terminaron por despreciar al nuevo régimen. Los reaccionarios y los monárquicos más sofisticados, que habían consentido en un principio que Primo de Rivera se estableciera en el gobierno debido a lo desesperado de la situación, iban a rechazar muy pronto la ingenuidad, la excentricidad y la ordinariez del dictador.

La evidencia más significativa acerca de la naturaleza del régimen la proporciona su política social; una política que se sitúa más en la tradición

bonapartista que en la fascista. Primo de Rivera no estaba en contra del movimiento obrero organizado, siempre que éste no persiguiera cambios políticos. Su despótica benevolencia otorgó a la clase obrera muchas concesiones materiales, incluyendo servicios médicos subvencionados por el Estado, pequeños aumentos de sueldo, viviendas baratas y un aparato burocrático de arbitraje laboral. Todas estas medidas encontraron la colaboración espontánea del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT. El socialismo español, de acuerdo con su tradición reformista y posibilista, fue casi el único de los movimientos políticos antiguos que colaboró con la dictadura. Los líderes ugetistas participaron en los comités paritarios, donde los representantes de los trabajadores, del gobierno y de la patronal decidían las disputas salariales. Como burócratas asalariados del sindicato que eran, no encontraron grandes dificultades para convertirse en burócratas asalariados del Estado. Largo Caballero, acallando incluso sus escrúpulos democráticos, se mostró condescendiente hacia el régimen y se convirtió en consejero de Estado. El Partido Socialista (al que Primo de Rivera admiraba sinceramente) mantuvo en pleno funcionamiento su aparato burocrático, o como advierte Carr, "su organización moderna, con sus máquinas de escribir, sus secretarios y sus seguros de vida". La UGT disfrutó incluso de un modesto incremento de afiliados, que pasaron de 208.170 en diciembre de 1922, a 228.501 en diciembre de 1929, poco antes de la caída de la dictadura.

Los anarquistas y la CNT fueron erradicados. Es posible que Primo de Rivera mantuviera ciertas esperanzas de que se produjesen divisiones entre militantes y moderados dentro de la CNT; en cualquier caso pasaron casi seis semanas antes de que la CNT fuera desarticulada. Aunque algunos sindicalistas moderados, como Ángel Pestaña, trataron de adaptarse al nuevo estado de cosas, la implacable hostilidad de la federación hacia la dictadura quedó demostrada desde el comienzo del nuevo régimen. El 14 de septiembre, al día siguiente del pronunciamiento de Primo de Rivera, la CNT declaró una huelga general. La falta de apoyo socialista, junto con la inevitable improvisación de la convocatoria, facilitó que la huelga fuera fácilmente sofocada por el ejército. Es destacable que, a pesar de esta

acción, a la CNT le fuese permitido mantener su actividad pública.[31] El 30 de diciembre de 1923, la Confederación Regional Catalana convocó un pleno en Granollers que congregó a cientos de obreros; a éste le siguió otro, realizado el 4 de mayo de 1924 en Sabadell. En ambas ocasiones los sindicatos reafirmaron su compromiso anarquista. Pero la legalidad acabaría pronto. Tres días después de la reunión plenaria de Sabadell, terroristas anarquistas asesinaron a uno de los esbirros de la policía de Barcelona, Rogelio Pérez Cicario, lo que provocó la inmediata persecución de la organización obrera. A partir de ese momento la policía encarceló a los miembros del comité de la CNT y a todos los integrantes de grupos anarquistas que pudo detener. Obligada a la clandestinidad, la CNT iba a desaparecer de la escena durante muchos años.

Pero las hostilidades continuaron hasta finales de la década de 1920. Muchos cenetistas recalaron en otros sindicatos legales, donde formaron grupos clandestinos antidictatoriales. A pesar de las detenciones del 7 de mayo, en las que cayeron muchos de sus líderes, el Comité Nacional de la CNT se las ingenió para funcionar clandestinamente durante algún tiempo en Zaragoza; del mismo modo, el Comité Regional de Cataluña sobrevivía en Mataró. Los grupos de acción anarquista recurrieron a las más espectaculares operaciones, e intentaron varios heroicos e incluso temerarios ataques contra la dictadura. Estas acciones, destinadas al fracaso, tenían un alto valor simbólico. El 6 de noviembre de 1924, pequeños grupos de militantes atacaron el cuartel barcelonés de Atarazanas, confiando en que simpatizantes desde el interior franquearían las entradas al cuartel. Al mismo tiempo, un grupo armado de exiliados anarquistas que vivían en Francia, liderado por Durruti, cruzó la frontera y tomó Vera de Bidasoa, enfrentándose con la Guardia civil. Las dos acciones fracasaron. La de Atarazanas ocasionó la prisión, el juicio sumarísimo ante un tribunal militar y la ejecución de dos anarquistas, Juan Montijo Aranza y José Llacer Bertrán. En el episodio de Vera de Bidasoa perdieron la vida Juan Santillán y Enrique Gil, que fueron ejecutados; otro de los participantes, Pablo Martín, fue encarcelado y murió al caer desde la galería de la prisión.

Tal vez la más famosa de las conspiraciones tramadas durante la dictadura fue el plan de Durruti, Ascaso y Gregorio Jover para secuestrar al

rey durante una visita de estado en París, en el verano de 1924. La policía francesa logró detenerlos. Los tres *Solidarios* no sólo no negaron su participación en el complot, sino que declararon orgullosamente que pretendían retener a Alfonso XIII hasta que se cumpliera su única exigencia: la desaparición de la dictadura. Durruti y Ascaso, que habían estado en América Latina antes de llegar a Francia, fueron acusados también del asalto al Banco San Martín, en Argentina. El gobierno de este país solicitó su extradición. También el gobierno español elevó una petición formal de extradición, acusando a los tres anarquistas del asalto al Banco de España en Gijón, y a Ascaso en particular del atentado contra el cardenal Soldevilla. El suceso causó un gran revuelo en la opinión pública francesa. La campaña de protestas organizada por los trabajadores y los intelectuales franceses consiguió la anulación de los expedientes de extradición, y un año más tarde los anarquistas fueron liberados y expulsados de Francia. Se refugiaron en Alemania hasta que el Ministro del Interior de Prusia, del partido socialdemócrata, ordenó su expulsión. De allí marcharon a Rusia, donde tampoco se quedaron mucho tiempo, ya que no quisieron aceptar las condiciones ideológicas que pretendía imponerles el gobierno soviético. Utilizando nombres falsos volvieron un tiempo después a Francia, donde una vez más fueron detenidos, pasando seis meses en prisión para finalmente marchar de nuevo a Alemania, también con identidades falsas.

Sin embargo, no debe pensarse que durante este período las actividades anarquistas se limitaron a las acciones desesperadas de unos pocos militantes aislados. En mayo de 1925 Primo de Rivera suspendió la ley marcial y la vida social española comenzó a apaciguarse. Los periódicos anarquistas y sindicalistas reaparecieron en varias ciudades, sobre todo en el norte. Uno de ellos, *¡Despertad!*, editado en Vigo y dirigido por el gallego José Villaverde, sirvió de vínculo entre los cenetistas del norte y fue muy bien acogido por su alto nivel teórico y sus enérgicos artículos. La CNT publicaba además *Acción Social Obrera*, en Gerona; *El Productor*, en Blanes; *Redención*, en Alcoi, y *Horizontes*, en Elda. Reapareció también *La Revista Blanca*, que tanto prestigio había cosechado en el siglo anterior. En Valencia, donde el movimiento anarquista siempre había tenido cierto matiz artístico, la revista *Estudios* se dedicaba, en palabras de José Peirats, a “la

regeneración física y humana". Los anarquistas individualistas, en colaboración con vegetarianos, naturistas hedonistas y anarcomísticos, publicaban *Iniciales*. En un delicioso pasaje de su libro, Peirats nos cuenta cómo

> estas tendencias extremas florecieron en el anarquismo en aquellos tiempos borrascosos para algunos y de hibernación para la mayoría. Las reuniones clandestinas en la montaña se hacían pasar por excursiones de ingenuos nudistas, devotos del aire puro y del sol. Todo esto formaba un pintoresco contraste si se tiene en cuenta que esta sincera vuelta a la naturaleza era perfectamente compatible con las conspiraciones secretas, la preparación de los explosivos, los ejercicios de tiro, el intercambio de periódicos y de material clandestino y las campañas en contra del tabaco y el alcohol.

Pero la situación general del anarquismo español no era demasiado boyante. Durante el último período del régimen de Primo de Rivera, la CNT fue sacudida por crecientes conflictos internos. Al obligar a la Confederación a replegarse, la dictadura forzó a las dos tendencias que la dividían desde hacía tiempo a que afrontaran sus diferencias, a menudo encubiertas en el pasado por las urgencias de las huelgas y las acciones de masas. El exilio y la clandestinidad exacerbaron esos desacuerdos. Teóricamente, casi todas las tendencias de la CNT aceptaban los principios anarquistas de una u otra manera. Seguí, por ejemplo, a pesar de sus inclinaciones reformistas había reafirmado su compromiso con las ideas libertarias, y así lo hizo también Ángel Pestaña, el más importante portavoz de las tendencias moderadas después de la muerte de Seguí. Sin embargo, los moderados consideraban que la realización del ideal anarquista debía aplazarse casi indefinidamente. Para Pestaña y sus seguidores, España no estaba preparada para una revolución anarquista. Esquivando los argumentos marxistas que enfatizaban el retraso económico del país, los moderados, sagazmente, utilizaban los principios fundamentales del pensamiento libertario para desafiar a sus opositores. La CNT, según ellos,

no sólo carecía del apoyo de la mayoría de la población española, sino también del de la mayoría de la clase obrera. Los anarcosindicalistas constituían una minoría dentro de una minoría. Aun en el seno de la CNT, muchos afiliados obreros y campesinos sólo mantenían una lealtad "nominal" a los ideales libertarios. Pertenecían a la CNT porque el sindicato era fuerte y activo en sus localidades y lugares de trabajo. Los moderados advertían que en esas condiciones una revolución degeneraría en una detestable dictadura de ideólogos. Posteriormente, en un manifiesto que dividiría a la CNT en dos movimientos sindicalistas diferentes, los moderados afirmaron que la revolución no debía confiar exclusivamente en la "audacia de las minorías, más o menos valientes; queremos una revolución del pueblo, de la clase obrera camino de la liberación definitiva". Según José Villaverde "en la actualidad podría establecerse una economía comunista-libertaria, pero en la esfera política y moral la CNT, en contra sus principios, tendría que instaurar una dictadura, pues la clase obrera no está dentro de la CNT".

Este argumento sería incontestable si le acompañara una estrategia de educación revolucionaria. Como no es el caso, hay que concluir que los moderados utilizaban esos argumentos para imponer sus políticas posibilistas. Ya a principios de 1924, el Comité Nacional de la CNT, dominado por entonces por los moderados, había contactado con la conspiración separatista catalana del coronel Francesc Macià, fundador del liberal *Estat Català*. Dos años después, en junio de 1926, el Comité se vio envuelto en una malograda conspiración realizada en la noche de San Juan, la "Sanjuanada", complot que pudo ser urdido por la misma monarquía para tratar de recuperar su dañado prestigio destituyendo a Primo de Rivera y restableciendo un gobierno constitucional. Descubierto el complot por la dictadura, los nombres de generales reaccionarios como Weyler y Aguilera, demagogos como Lerroux y otros desaprensivos, aparecieron junto a los de anarquistas como Amalio Quílez.

Los años 1928 y 1929 vieron el declive de Primo de Rivera. Gracias al *boom* económico mundial de la década de 1920, el nivel de vida mejoró y las rentas aumentaron. Pero la dictadura se había ganado la animadversión de todos los sectores de la sociedad española. Las reformas propuestas,

como el Estatuto Municipal de marzo de 1924, que prometía conceder una amplia autonomía a las municipalidades, fracasaron. El ministro de finanzas, Calvo Sotelo, intentó crear un verdadero impuesto sobre la renta, pero se encontró con la resistencia de los defraudadores habituales. La dictadura emprendió la construcción de carreteras, obras de regadío y proyectos de alumbrado público, pero dejó de lado el problema vital de la reforma agraria; pese a la persistente colaboración de los socialistas con el gobierno, la clase obrera española no se había enterado de que sus organizaciones legales eran dóciles instrumentos del régimen. Primo de Rivera cometió un gran error de cálculo cuando ofendió al más importante pilar del régimen, el ejército, al recusar las prerrogativas de prioridad de los cuerpos de artillería. Hasta Alfonso XIII fue víctima de este error; al no respaldar las protestas de los oficiales, el rey empujó a los comandantes de artillería al bando del ejército republicano.

Tras haber contrariado a importantes financieros, a los campesinos, a los oficiales, a los obreros, a los funcionarios públicos de los pueblos y a los constitucionalistas de Madrid, Primo de Rivera había perdido toda posibilidad de obtener el apoyo político de las clases medias conservadoras y de los intelectuales. En los pueblos y universidades comenzó a manifestarse una estimable corriente opositora que reclamaba la legalidad constitucional. La tentativa de Primo de Rivera de crear una constitución que estableciera una nítida separación entre los poderes electivos y corporativos sólo logró aumentar la oposición, incluyendo a los monárquicos, ya que la constitución impedía al rey designar y destituir a los ministros. Por primera vez después de cuatro años, en la primavera de 1928, una protesta general estudiantil se enfrentaba públicamente a la dictadura. El periódico liberal *El Sol*, aprovechando que la censura había disminuido, publicó comentarios sobre la constitución y “aconsejó” a Primo de Rivera “abandonar el cargo”. Para no desoír el clamor de los “exaltados defensores del Parlamento y de las libertades públicas”, Sánchez Guerra, líder del partido conservador, de 70 años de edad, volvió del exilio en Francia y ofreció su persona como una garantía de respetabilidad en las negociaciones previas a un pronunciamiento del general Castro Girona, capitán general de Valencia; pero éste desistió en el último momento y arrestó a Sánchez

Guerra. El complot fue un fiasco; solamente se sublevaron los oficiales de artillería de Ciudad Real.

A pesar del fracaso de la "Conspiración de Valencia", como la denominaron los viejos políticos conservadores, la dictadura agonizaba. El 26 de enero Primo de Rivera, desesperado por la creciente oposición interna y las dificultades fiscales, resolvió reunirse con los capitanes generales para saber si podía contar con el apoyo del ejército. El dictador tenía la intención de dimitir de inmediato si el ejército no le respaldaba. Las respuestas fueron muy frías y Primo de Rivera entendió que el rey estaba decidido a destituirle. Dos días después de esta encuesta, el 28 de enero de 1929, Primo de Rivera dimitía, exiliándose en los burdeles de París, donde fallecería unos meses después. Su lugar fue ocupado por el general Dámaso Berenguer, un oficial muy respetado pero ya algo achacoso, que difícilmente podía ser considerado como una solución duradera para los problemas de la política española. A Berenguer se le encomendó la imposible tarea de restaurar el gobierno constitucional sin comprometer el futuro de la monarquía.

La CNT no permaneció ajena a las conspiraciones que se tramaban durante el período final de la dictadura. Cuando se organizaba la "Conspiración de Valencia", Sánchez Guerra se entrevistó con el Comité de la CNT en París y solicitó su cooperación. Los moderados estaban resueltos a participar en la conjura antidictatorial, a pesar de la decisión del último pleno que prohibía al Comité Nacional la negociación con los partidos políticos. El 28 de julio de 1928, el Comité Nacional convocó un pleno secreto en Barcelona, con la representación de todas las regiones excepto Levante, con el propósito de autorizar las negociaciones con los políticos de la oposición al régimen y con los jefes militares. Sirviéndose de la autoridad del pleno, el Comité Nacional decidió adherirse a la "Conspiración de Valencia". Si tenemos que creer a Comín Colomer, un oficial de policía convertido en historiador, cuya poco fiable historiografía se compone sobre todo de informes policiales, algunos sindicatos apoyaron la conspiración convocando varias huelgas. Sin embargo, parece que en conjunto la aportación de la CNT corrió la misma suerte que la propia conspiración.

De hecho, la CNT apenas contribuyó a la caída de Primo de Rivera. Sus intentos por consolidar una posición clara en la lucha contra la dictadura resultan interesantes como prueba del tira y afloja que existía entre los militantes anarquistas revolucionarios y los prudentes sindicalistas moderados. La corriente centrista representada por Buenacasa actuaba como mediadora en el conflicto. Los moderados controlaban el Comité Nacional y les bastaba con trabajar dentro de la estructura de la confederación, cuyo aparato les proporcionaba la cohesión necesaria. Por el contrario, los anarquistas estaban divididos en pequeños grupos, y la Federación Nacional de Grupos Anarquistas (FNGA), fundada en los turbulentos días de la posguerra, prácticamente había dejado de existir.

Por iniciativa de grupos anarquistas catalanes y de la Federación de Grupos Anarquistas en Lengua Española, organización de exiliados con base en Marsella, se hicieron tentativas para restablecer un movimiento de ámbito nacional. El 24 y el 25 de julio 1927 se celebró en Valencia una conferencia secreta de anarquistas españoles y portugueses. A fin de evitar la vigilancia policial de los agentes de Primo de Rivera, se hizo coincidir la fecha de la conferencia con la de una fiesta que atraía a miles de visitantes a la ciudad mediterránea. Peirats nos ofrece una divertida imagen de los delegados disfrutando de la playa como simples veraneantes:

> Un grupo de bronceados bañistas, tendidos en la dorada playa de la costa latina, bajo la benevolente y cálida caricia del sol; hombres, mujeres, jóvenes, viejos y niños, cogidos del brazo algunos, jugando y divirtiéndose los otros, todos junto a la tradicional paella hirviendo a borbotones. Individuos como estos fundarían una de las organizaciones revolucionarias más románticas, viriles y heroicas que registra la crónica de la emancipación popular: la FAI.

En efecto, en la historia de los movimientos obreros y campesinos, la Federación Anarquista Ibérica (FAI) ocupa un lugar importantísimo. Su misión inicial era la de asegurar el compromiso de la CNT con los principios anarquistas, pero muy pronto alcanzó notoriedad como una de las más

temidas y admiradas organizaciones revolucionarias de España. El término "ibérica" se escogió para señalar el alcance peninsular de la organización, aunque finalmente no contó con participación portuguesa. La FAI recuperó gran parte del espíritu que animaba a los anarquistas españoles desde la época de la Primera Internacional. El concepto de *grupo de afinidad*, término adoptado oficialmente por la FAI, incorpora las ideas del primer anarquismo español sobre la naturaleza de los auténticos grupos revolucionarios, que debían estar integrados por un número muy limitado de compañeros para así conservar la estrecha vinculación entre sus miembros. Un grupo de afinidad rara vez se componía de más de doce integrantes, que se encontraban unidos no sólo por ideales comunes, sino también por simpatías y afinidades que entraban en el terreno de lo personal. En realidad cada grupo era como una gran familia, respetando la independencia de espíritu y la iniciativa personal tan caras al anarquismo español. Debido a estas circunstancias la infiltración policial era prácticamente imposible. La FAI era una organización secreta muy selectiva en lo que se refería a la elección de sus miembros, y aunque podía haber obtenido fácilmente la legalidad con el advenimiento de la República, prefirió conservar su carácter clandestino hasta la llegada de la Guerra Civil.

Al igual que la CNT, la FAI se organizó en torno a una estructura confederal; los grupos de afinidad de una localidad se vinculaban por medio de una federación local, y éstas se unían a su vez en federaciones de distritos y de regiones. La federación local era administrada por un ágil secretariado compuesto generalmente por tres miembros, y por un comité formado por un conjunto de delegados que representaban a cada uno de los *grupos de afinidad*. Este organismo constituía una especie de comité ejecutivo local. Para conseguir la mayor participación posible de los miembros de base, la federación local tenía la obligación de convocar asambleas a las que asistían todos los faístas de la zona. Las federaciones de distritos y de regiones eran simplemente réplicas ampliadas de la federación local. Todas las federaciones estaban representadas en un Comité Peninsular, cuyas tareas, al menos teóricamente, eran administrativas. Este comité era el responsable de relaciones, correspondencia, detalles prácticos

de organización y, según palabras de Alfonso González, secretario de la FAI, de “ejecutar cualquier acuerdo general de la organización”.

González admite con franqueza que la FAI “no pudo sustraerse a la inercia centralista”. Es probable que el Comité Peninsular funcionara a menudo, más que como un mero organismo administrativo, como un Comité Central de tipo bolchevique. La FAI contaba con miembros realmente agresivos y carismáticos, como García Oliver, los hermanos Ascaso y Durruti. Las principales declaraciones políticas de la FAI se presentaban en nombre del Comité Peninsular, y en muy pocas ocasiones hacían referencia a los plenos faístas. Es evidente que el Comité Peninsular bien podría haber aprovechado su clandestinidad para actuar de manera más consecuente con los principios libertarios.

A pesar de todo, hay que señalar que los grupos de afinidad gozaban de una mayor independencia que cualquiera de los órganos del Partido Socialista, y mucha más aún que los del Partido Comunista. En la novela *Siete domingos rojos* de Ramón J. Sender, basada en un conocimiento minucioso de la FAI de Madrid, puede comprobarse el alto grado de independencia de las actuaciones de los faístas. En años posteriores todas las organizaciones españolas de la izquierda no anarquista repudiarían las acciones terroristas de estos grupos incontrolados, que desafiaban las normas gubernamentales e incluso las propias directrices de la FAI. La atmósfera de la organización atraía a mucha gente de ese tipo.

Otro aspecto a destacar es que la FAI, aun cuando comenzó a declinar como movimiento libertario, era una organización en la que no existía la represión interna; desde un principio se concedió a los disidentes una gran libertad para expresar y publicar material en contra de la dirección y de las normas establecidas.

En teoría, todo integrante de la FAI estaba afiliado a la CNT. No disponemos de hechos que justifiquen las afirmaciones de Comín Colomer, que asegura que la FAI intentó utilizar a sus militantes en la CNT para apropiarse de forma indirecta de la dirección del sindicato, colocando núcleos de anarquistas en cada comité local y regional de la CNT. Por otra parte, no era ningún secreto que los anarquistas pretendían controlar las

líneas políticas de la CNT. Incluso es probable que un centrista como Buenacasa, que fue uno de los más antiguos secretarios del Comité Peninsular, se uniera a la FAI para apartar a los moderados del liderazgo de la CNT. Esta era una actitud habitual; bastantes centristas que, igual que Buenacasa, aborrecían las tácticas violentas, ocuparon posiciones claves en la FAI en diversas oportunidades persiguiendo estos mismos objetivos. Pero es evidente que muchos de los faístas eran hombres y mujeres jóvenes, muy poco interesados en las maniobras por el control del aparato de la FAI, y que estaban realmente comprometidos con la acción directa y a menudo violenta contra el orden social impuesto. Estos "aguiluchos de la FAI" y sus grupos de afinidad más "técnicos" fueron responsables de las periódicas insurrecciones, de las "expropiaciones" de bancos y joyerías y de las acciones terroristas que constituirían la actividad faísta en el turbulento período republicano anterior a la Guerra Civil.

Debido al carácter genuinamente clandestino de la FAI sabemos muy poco acerca del número de sus afiliados. A juzgar por los datos publicados por el destacado faísta Diego Abad de Santillán, en vísperas de la Guerra Civil la cifra podría haberse aproximado a los 39.000. En cualquier caso, la organización salvaguardó tan cuidadosamente su clandestinidad que su existencia sólo se hizo pública en 1929, más de dos años después de su fundación. De diciembre de ese año data la primera declaración pública del Comité, un manifiesto que denunciaba muy severamente la tendencia moderada de la CNT.

Los acontecimientos que siguieron a la publicación de este manifiesto revelan las graves discrepancias que estaban desgarrando a la CNT. Ya el mismo nacimiento de la FAI en el verano de 1927 no fue probablemente un hecho casual; ese mismo verano Pestaña, dirigiéndose a los miembros del sindicato textil de Barcelona, había declarado que los comités paritarios de la dictadura eran compatibles con los principios cenetistas. Pestaña era lo bastante prudente como para abstenerse de aconsejar a los obreros delegados que participaran en esos comités, pero estas declaraciones suscitaron la indignación de anarquistas y centristas. Pestaña llegaría aún más lejos dos años después, cuando en una serie de artículos publicados en

*¡Despertad!* bajo el título de "Situémonos", reclamó una revisión de los principios fundacionales de la CNT y atacó el puritanismo anarquista. Peiró, como representante de los centristas, respondió que aunque "los congresos confederales tenían potestad para modificar toda la estructura de la CNT", no se podía permitir que se amenazaran "los principios que son fundamento y razón de ser de la CNT: el antiparlamentarismo y la acción directa". Las opiniones de Peiró fueron respaldadas por importantes militantes centristas como Buenacasa y Eusebio Carbó, que gozaban de gran prestigio en todas las corrientes sindicalistas. La presión ejercida por los anarquistas de izquierda y centro contra los moderados provocó en el otoño de 1929 la dimisión del Comité Nacional de la CNT, de ascendencia moderada. El Comité hizo pública su decisión en un fúnebre artículo en *¡Despertad!*, que lamentaba la "defunción orgánica" de la CNT.

Dentro de este contexto de creciente conflicto es donde corresponde situar la primera declaración pública de la FAI. El manifiesto, más que el resultado de un razonamiento, parecía un ultimátum. En un breve documento el secretariado del Comité Peninsular declaró que pensar que el movimiento obrero podía ser ideológicamente neutral era, a todas luces, erróneo. Si bien las mejoras de las condiciones de trabajo eran objetivos deseables, todo movimiento obrero debía perseguir "la cauterización de todas las heridas abiertas por la bestia capitalista y la desaparición completa de todos sus privilegios políticos y económicos". Para ello, la CNT debía establecer una "conexión" con aquel organismo que coincidiera con sus tácticas y postulados revolucionarios; es decir, con la FAI. "Por el contrario, si la CNT no acepta la propuesta formulada por este secretariado de la FAI —concluye el manifiesto— pone en peligro los altos ideales que dice reivindicar, y los valores morales y revolucionarios que la han distinguido".

Evidentemente, Pestaña y los moderados perseguían un objetivo estratégico: la legalización de la CNT; y lo lograrían aunque significara nuevas concesiones a la dictadura. La teatral dimisión del Comité Nacional pretendía tal vez precipitar este desenlace. En cualquier caso, el problema de la clandestinidad pronto dejaría de ser apremiante. La sustitución de Primo de Rivera por Berenguer en enero de 1930 alteró completamente la

posición *de facto* de la CNT, y muchos sindicatos, aun antes de obtener la legalidad oficial, comenzaron a funcionar abiertamente.

Pero el conflicto entre los moderados y los anarquistas no desapareció. Es más, se consolidaron entonces diferencias fundamentales en la manera de entender las estrategias revolucionarias, y durante los años próximos, los primeros de la República, las controversias en el seno de los órganos dirigentes de la organización rozarían el cisma. En el curso de una exposición bastante extensa sobre los objetivos de la CNT, el Comité Nacional, controlado por los moderados, expresó "su interés por los problemas nacionales" y, más específicamente, su disposición "a intervenir con sus propios métodos, su ideología y su historia, en el proceso de enmienda constitucional". Apoyándose en esta manifestación, el Comité Nacional daría más tarde su bienvenida a la República, definiéndola como la estructura más adecuada para trabajar por los principios libertarios. Este documento escalonaba la revolución española en dos períodos: el primero (y más inmediato), representado por una democracia burguesa; el segundo (y más utópico), el establecimiento de una sociedad comunista libertaria. Si exceptuamos los recursos habituales de la retórica anarcosindicalista, el Comité Nacional se expresaba de una manera muy similar a la de los menospreciados ugetistas. Evidentemente, esta "escandalosa" declaración (como Peirats la calificó) del Comité Nacional produjo una seria conmoción entre los militantes anarquistas y dividió aún más las filas de la CNT.

Estos matices no son insignificantes; sirven para entender el desarrollo posterior de la CNT. Los moderados no sólo estaban de acuerdo en colaborar con la burguesía republicana, sino que estaban dispuestos a seguir una prudente estrategia acomodaticia dentro de la estructura política de la futura república. Por su parte, los anarquistas seguían leales a su antigua postura antiestatal, ya fuera dirigida contra un régimen dictatorial, monárquico o republicano. Buena parte de la historia de la CNT está determinada por los conflictos y compromisos que iban a sucederse entre ambas posiciones.

Aun así, los acontecimientos de la época de Berenguer muestran que las estrategias de los dos grupos no eran inflexibles. Los moderados adoptarían actitudes intransigentes cuando beneficiaban a sus propósitos, y la FAI haría concesiones para conseguir objetivos a corto plazo. Pestaña, por ejemplo,

asumió una posición anarcosindicalista radical durante las negociaciones secretas que dieron lugar a la legalización de la CNT, hasta el punto de calificar a los comités paritarios como una "monstruosidad". Por supuesto, es difícil saber si Pestaña actuaba con convicción o si sólo pretendía un arreglo con la masa militante. Pero hay que ser justos con Ángel Pestaña; era un hombre íntegro y de un coraje excepcional. El general Emilio Mola, que representó al gobierno en las negociaciones, quedó impresionado por la dignidad y la rectitud moral de este líder obrero. Aunque tres años antes Pestaña había estado dispuesto a participar en los comités paritarios cuando las duras condiciones justificaban un acercamiento, Mola observó que Pestaña consideraba casi una afrenta el hecho de que los delegados obreros de los comités percibieran salarios, lo que significaba un privilegio con respecto a la masa de trabajadores que representaban y que eran sus iguales.

Por otra parte, la FAI no se comportaba siempre como un modelo impecable de rectitud anarquista; por el contrario, enfrentada a menudo a situaciones cruciales, estaba dispuesta a olvidar parte de sus principios antiparlamentarios. En las elecciones municipales de 1931, los delegados faístas se aliaron con los moderados para apoyar a la coalición socialista-republicana que envió al rey al exilio. Y aunque la FAI no participó en las coaliciones electorales de 1936, "eximió" a los trabajadores anarquistas de sus posibles escrúpulos ante la votación, contribuyendo decisivamente a la victoria del Frente Popular.

Las inconsistencias de la FAI se pondrían en evidencia más tarde, en un momento crítico del desarrollo del movimiento obrero español. La dimisión de Primo de Rivera inauguró un período de reconstrucción de las dispersas fuerzas anarcosindicalistas. El 30 de abril de 1930, la CNT logró del Gobernador de Barcelona la legalidad "condicional", que fue seguida de la legalización en otras provincias.[32] Aunque en el resto del país numerosos sindicatos continuaban todavía siendo ilegales, y miles de cenetistas llenaban las cárceles del régimen de Berenguer, el anarcosindicalismo parecía recuperarse de los reveses sufridos en 1924. En poco más de un año el número de afiliados ascendió a cerca de medio millón. La cifra todavía no alcanzaba los 700.000 afiliados de 1919, pero aun así era bastante importante si tenemos en cuenta que en los siete años del mandato de Primo

de Rivera la organización prácticamente había desaparecido. Las conferencias, plenos y jornadas organizativas celebrados bastaron para que la CNT recuperara buena parte de lo perdido y lograra restablecer su presencia en todas las zonas del país. Apenas aflojó la censura, *Solidaridad Obrera* salió de nuevo a la calle, esta vez como publicación diaria. Siguiendo la costumbre de los años predictatoriales, aparecieron numerosas publicaciones homónimas en otras ciudades de España.

Pero la CNT de 1930 ya no era la organización que Primo de Rivera había aplastado en 1924; tampoco la FAI era igual a la FNGA. El violento período del pistolerismo entre 1919 y 1923; los duros años de clandestinidad en que las discrepancias latentes en el seno de la organización emergieron a la superficie; la dura represión llevada a cabo por la dictadura; todas estas circunstancias tenían que alterar el carácter moderado, casi ecuménico, que había prevalecido en la vieja CNT y aun en la FNGA. El fenómeno del pistolerismo generó un nuevo tipo de anarquistas jóvenes, proclives a la violencia e impacientes ante las medidas y compromisos contemporizadores. Esta juventud anarquista, cuyo paradigma son sin duda Durruti, García Oliver, Ascaso y Sanz, estaba habituada a las más temerarias aventuras. Eran ilegales en el más amplio sentido del término. Incluso los moderados puntos de vista de los sindicalistas se tambaleaban, especialmente después de que la crisis económica mundial de 1929 extendiera un renovado espíritu activista entre la clase trabajadora. Progresivamente, el grueso de los miembros de base de la CNT se identificaba con la FAI más que con los moderados, con los anarquistas más que con los contemporizadores, con los jóvenes idealistas más que con los viejos líderes, que seguían fieles a las estrategias sindicales de la generación anterior.

Sin embargo, entre 1930 y 1931, los moderados todavía controlaban la CNT, y los centristas como Buenacasa aún mantenían a raya a los jóvenes faístas. El Comité Nacional y la redacción de *Solidaridad Obrera* estaban en manos de los moderados y centristas. Esta situación sólo podía alterarse si la poderosa influencia de los cenetistas catalanes cambiaba de signo. Siguiendo la tradición de la vieja Internacional, la CNT asignó la responsabilidad de elegir el Comité Nacional a la región fijada por el

Congreso Peninsular como centro nacional de la organización. Hasta la década de los treinta, la reiterada elección de Cataluña, y en particular de Barcelona, como sede nacional de la CNT aseguró el control de los moderados sobre el Comité Nacional y sobre *Solidaridad Obrera*.

La influencia catalana aumentó aún más por otra circunstancia que se había producido en el movimiento anarcosindicalista español: el ocaso de Andalucía como núcleo tradicional del movimiento. Contrariamente a la tendencia tradicional del anarquismo español, el número de obreros afiliados a la CNT superaba con mucho al de los campesinos, y sus esfuerzos se concentraban más en el progreso del norte que en el del sur, castigado por un atraso endémico. El mito de que el anarquismo era un pequeño movimiento rural al que servía de sostén una clase obrera periférica ha sido refutado por Edward Malefakis en su estudio sobre la agitación campesina en España. En 1873, cuando el anarquismo ejercía una considerable influencia sobre el campesinado, Andalucía proporcionaba (tanto en el medio rural como el urbano) las dos terceras partes del total de los afiliados a la vieja Internacional. En 1936, esta proporción había descendido a una quinta parte. Según apunta Malefakis,

> El predominio de Andalucía en las federaciones anarquistas de las décadas de 1870 y 1880 había desaparecido con el cambio de siglo. Los dos antiguos centros del anarquismo español ya no estaban en un plano de igualdad. El anarcosindicalismo urbano había tomado la delantera; Cataluña iba muy por delante de Andalucía. Esta situación era acentuada por el hecho de encontrarse Cataluña flanqueada por el nuevo feudo anarcosindicalista de Zaragoza. Los vínculos existentes entre estas dos regiones eran mucho más estrechos que los que relacionaban cualquier otra zona de España, por lo que se podía hablar de la existencia de un nuevo bloque geográfico en el seno de la CNT. Los dirigentes de la FAI —Durruti, Ascaso y García Oliver— procedían de Barcelona y Zaragoza. Las principales insurrecciones organizadas por la CNT-FAI se originaron y encontraron el mayor apoyo en estas dos regiones. Y, durante la Guerra Civil, fue este bloque, junto con el vecino Levante, el que

iba a continuar la lucha anarcosindicalista tras la caída de Andalucía en manos de los nacionales.

Se realizaron algunos intentos por reavivar el movimiento en el medio rural, pero no contaron con suficientes apoyos. Así, por ejemplo, *La Voz del Campesino*, publicación de la antigua organización anarcosindicalista destruida por la represión dictatorial, la FNAE (Federación Nacional de Agricultores de España), volvió a ver la luz en 1932 en Jerez de la Frontera, para desaparecer tan sólo unos pocos meses después. En el Congreso Extraordinario de Madrid, en 1931, se decidió adoptar una serie medidas para la convocatoria de un congreso campesino y la creación de una federación rural, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. La CNT, desde luego, contaba aún con un importante apoyo en las ciudades del sur, especialmente en Cádiz, Málaga, Córdoba y Sevilla, así como en los pueblos de toda Andalucía. Pero los vínculos entre los pueblos y las ciudades eran extremadamente débiles. Malefakis observa que "existía una escasa cooperación entre las secciones anarcosindicalistas de las grandes ciudades andaluzas y los sindicatos anarcosindicalistas campesinos".

La verdadera base campesina de la CNT se situaba entonces en Aragón. Durante los primeros años de la década de 1920 Andalucía se había transformado en el símbolo del más "negro" y resuelto anarquismo, y sirvió como revulsivo para la agitación libertaria en el bajo Aragón, particularmente entre los empobrecidos campesinos de la árida meseta, acosados por las deudas. Aparte de la *Unió de Rabassaires* de la región viticultora, el distrito rural catalán había estado sumamente agitado por la actividad anarquista procedente de Barcelona. La CNT aún conservaba su vigor en los pueblos del interior de Levante y en la zona rural gallega de las inmediaciones de La Coruña. Durante la dictadura muchas de esas zonas rurales se mantuvieron en calma. En realidad, no iba a ser hasta la proclamación de la República, con sus promesas de reforma agraria y las nuevas posibilidades políticas que ofrecía, cuando el campo resurgiría nuevamente como fuerza social.

Con la salida de Primo de Rivera del poder comienza el ajuste de cuentas de España con la monarquía. Alfonso XIII, mal visto por su

intervención en el establecimiento de la dictadura, trató desesperadamente de mantenerse en el trono e implantar una monarquía casi constitucional. Pero la monarquía —tanto la figura de Alfonso XIII como la institución— estaba completamente desprestigiada. Las dilaciones de Berenguer a la hora de convocar las Cortes y las maniobras del rey para conservar sus prerrogativas reales terminaron por erosionar la confianza incluso de los políticos reaccionarios. “No soy republicano —decía el viejo reaccionario Sánchez Guerra—, pero admito que España tiene derecho a ser una República”. Las conspiraciones contra la monarquía reemplazaron a las conspiraciones contra la dictadura, e incluyeron no sólo a republicanos y socialistas, sino también a caciques liberales como Alcalá Zamora y a oficiales del ejército como Queipo de Llano y Ramón Franco, hermano del futuro caudillo. En agosto de 1930, con la firma del famoso Pacto de San Sebastián, se solucionaron los perturbadores conflictos sobre la autonomía catalana, que habían introducido la división de catalanistas y españolistas en las filas republicanas. A Cataluña se le prometió autonomía para resolver sus asuntos internos. El pacto fue firmado por un grupo heterogéneo de políticos, que incluía a Alcalá Zamora, Manuel Azaña (habitual de los círculos literarios que se reunían en el Ateneo madrileño) y al inevitable Alejandro Lerroux. Desde San Sebastián, de donde la España republicana reclutaría algunos de sus presidentes y primeros ministros, se exigió que se llevara a cabo una “acción revolucionaria” contra la monarquía, una declaración cercana a la retórica anarquista que los firmantes del Pacto se encargarían de modificar con apelaciones a la no violencia.

Dos cuestiones quedaron sin resolver tras la firma del pacto: el papel del ejército y el de los trabajadores en el derrocamiento del rey. El ejército, naturalmente, no dispararía a los republicanos, pero ¿se uniría activamente a un levantamiento republicano? Sólo los trabajadores constituían una apuesta segura para ellos, pero el Comité no se atrevía a proporcionarles armas. Los liberales del Ateneo tenían tantos prejuicios contra los trabajadores como los monárquicos, y la idea de una clase obrera armada les horrorizaba. Para impedir la participación de la CNT en la conspiración de San Sebastián sin herir su susceptibilidad, los republicanos, con mucho

tacto, no invitaron a ninguna de las dos organizaciones obreras a la firma del Pacto.

¿Cómo podían conseguir la ayuda de la CNT sin correr el riesgo de que se produjese una auténtica revolución social? En un intento por halagar a los anarcosindicalistas, el Comité Revolucionario Nacional envió a Miguel Maura y a Ángel Galarza a Barcelona para conseguir la participación de la CNT en una huelga general "pacífica" contra la monarquía. Dicha huelga debía ser iniciada por los trabajadores ferroviarios de la UGT y culminaría con la sublevación general del ejército. Según el cenetista moderado Juan Peiró, la CNT, en un pleno nacional de sus delegados regionales, "acordó establecer un intercambio de información con los elementos políticos con el fin de formar un movimiento revolucionario". Dicho de otro modo, la CNT dio su aprobación al plan. El pleno de delegados, para guardarse las espaldas, redactó un manifiesto expresando el compromiso de la CNT con sus principios apolíticos y su adhesión a las formas libertarias de organización.

La huelga resultó un completo fracaso en Cataluña; el desastre estuvo provocado por los cambios en las fechas, las deficientes comunicaciones y un grave error de cálculo respecto a la posición del ejército. La insurrección había sido programada para el 15 de diciembre. Según la versión republicana, se adelantó de un modo imprevisto para el día 12, debido a la prematura rebelión de la guarnición de Jaca, en Aragón. Las tropas rebeldes fueron rápidamente sometidas y sus dos comandantes, los capitanes Fermín Galán y García Hernández, ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Alcalá Zamora, Miguel Maura y sus colaboradores socialistas Largo Caballero y Fernando de los Ríos fueron detenidos en Madrid inmediatamente. La CNT convocó una huelga general y lanzó ataques armados contra objetivos estratégicos, pero todas estas tentativas fracasaron.

Peirats, en desacuerdo con la versión republicana, nos proporciona un relato enteramente distinto. La rebelión había sido programada realmente para el 12, pero el Comité Revolucionario Nacional había decidido atrasar la fecha. Casares Quiroga fue enviado para comunicar el cambio, pero al para el 12, pero el Comité Revolucionario Nacional había decidido atrasar

la fecha. Casares Quiroga fue enviado para comunicar el cambio, pero al llegar a Jaca por la noche, “prefirió reparar sus fatigas en una buena cama a cumplir instantáneamente su urgente misión”, según Peirats. Si la versión de Peirats es verdadera, Galán y García Hernández fueron víctimas de la negligencia republicana. Puesto que en España todos sabían (excepto la monarquía) que la proclamación de la República era inminente, los conspiradores detenidos en Madrid fueron tratados con indulgencia y hasta con deferencia, puesto que serían los futuros líderes del Estado. Tras unos pocos meses en prisión, se les concedió la libertad provisional. “No cabía esperar otra cosa de aquel Comité Revolucionario —añade ásperamente Peirats— que tenía su sede social en el Ateneo de Madrid, y que en prisión disponía de servicio telefónico y pijamas de seda”.

Difícilmente puede reprocharse a la CNT su participación en estos sucesos. Abandonada a su propia suerte, se había comportado más honorablemente que todos sus “aliados” republicanos y socialistas. Las huelgas que organizó la CNT, tanto antes como después del “levantamiento” del 12 de diciembre, cumplieron muchos de sus objetivos, y los esfuerzos de la Confederación por reagrupar sus fuerzas conocieron un éxito casi general. El primer pleno de la Federación Regional Catalana se convocó para el 17 de mayo de 1930, y se inició con una moción para volver a publicar *Solidaridad Obrera*. A este acto le siguió una reunión plenaria pública que se realizó el 6 de julio. Poco después, el 5 y 6 de octubre, el Comité Nacional sugirió la celebración de una Conferencia Nacional de Sindicatos para dos semanas más tarde; pero finalmente la convocatoria fue suspendida debido a la agitada situación política nacional. El estallido de la huelga general de Madrid, provocada por la brutalidad policial, decidió a la CNT a llevar a cabo una demostración de fuerza. El propósito de la Confederación, nos explica Peirats,

> era demostrar que aun cuando el sindicato del transporte había sido clausurado por el gobernador, la huelga general aún era posible en Barcelona. El gobernador Despujols tuvo que rendirse a la evidencia de que su empeño en no acceder a la legalización del sindicato había sido inútil. El paro fue total. El fin de la huelga estaba fijado para el

20 de noviembre (había comenzado el 17), pero los obreros la prosiguieron hasta el día 24. La huelga se extendió a varias poblaciones importantes de la región, y fue tal el número de detenciones que varios barcos anclados en el puerto tuvieron que ser habilitados como cárceles.

El fiasco republicano del 12 de diciembre de 1930 no había resuelto los problemas de las relaciones de la CNT con los movimientos políticos burgueses. En teoría, al menos, la CNT se adhirió a los principios antiestatales, renunciando a los métodos políticos para lograr un cambio social, y defendiendo la acción directa de los oprimidos contra cualquier sistema de autoridad política. Más lejos aún llevaron sus argumentos los anarquistas más intransigentes de la Confederación, añadiendo que todo Estado era nocivo de por sí y no podía ser apoyado, se tratase de una monarquía, de un régimen dictatorial o de una república. Pero ¿no podían trazarse distinciones entre las distintas formas de gobierno en función de las tácticas anarquistas? La CNT difícilmente podía ignorar las significativas diferencias que existen entre una dictadura y una república, y entre una monarquía y una república. El régimen de Primo de Rivera había aplastado cualquier forma de actividad pública de los sindicatos españoles, mientras que la República sin duda ofrecería nuevas posibilidades para el activismo obrero. En realidad, por mucho que los anarquistas españoles negaran la importancia de las distinciones entre los tipos de Estado, en la práctica habían tenido en cuenta esas diferencias desde el comienzo mismo de su movimiento. A principios de la década de 1870, se habían unido a los federalistas radicales para formar una república cantonal. Durante la huelga general de 1917, la CNT había anunciado un programa de mínimos que proclamaba una república, la separación de la Iglesia y el Estado, la ley de divorcio y el derecho de los sindicatos a vetar la legislación aprobada por las Cortes. En marzo de 1930, Peiró y tres de sus compañeros centristas habían firmado un manifiesto republicano que reivindicaba reclamaciones aún más moderadas que el programa de mínimos de la CNT. En *Acción Social Obrera*, Peiró reconoció —pero sólo tras enumerar prolijamente sus

múltiples méritos revolucionarios— que su postura estaba en "contradicción" con sus principios libertarios.

La FAI, aunque arrastrada por sus miembros centristas a cometer algunas sombrías violaciones de sus principios anarquistas, condenó enérgicamente todas estas contradicciones. Faístas como Buenacasa aplacaron las voces de los jóvenes militantes, pero no las silenciaron. El fracaso del "levantamiento" republicano del mes de diciembre fortaleció la posición de los "aguiluchos de la FAI" frente a los republicanos; en realidad, incluso los centristas comenzaron a oscilar; algunos de ellos hacia posiciones inflexibles de no colaboración, y otros hacia una posición más moderada.

¿Cómo se entendería la CNT con la República, una vez que ésta llegara al poder? Esta incómoda pregunta cobraba importancia a medida que la monarquía comenzaba a tambalearse. En febrero de 1931 Berenguer, enfrentado a una enorme hostilidad pública, dimitió de su cargo. El rey, obligado a hacer importantes concesiones, aprobó finalmente la celebración de elecciones municipales libres. Un gobierno no político encabezado por el almirante Aznar ocupó el lugar que había dejado vacante Berenguer. Incluso el rey tuvo que reconocer que el destino de la monarquía dependía del resultado de las elecciones municipales. El 12 de abril de 1931, España acudió a las urnas. Por la noche, los primeros resultados no dejaban lugar a dudas: la coalición republicano-socialista había obtenido una abrumadora mayoría de los votos. Dos días más tarde, Alfonso XIII partía apresuradamente hacia Marsella, mientras por las avenidas de las principales ciudades de España, una muchedumbre jubilosa hacía ondear las banderas republicanas.

## La coalición Azaña

La Segunda República inició su existencia aclamada por el júbilo popular. España, conmovida como en un día de fiesta nacional, se lanzó a la calle vitoreando al nuevo régimen y agitando la bandera tricolor republicana. Pero el pueblo había decidido refutar el mito reaccionario y demostró que entre sus virtudes se encontraba la disciplina. Para proteger a

la reina y a sus hijos del gentío, los socialistas de la Casa del Pueblo de Madrid formaron una escolta integrada por jóvenes obreros que lucían como distintivo un brazalete rojo. Los ciudadanos improvisaron una fuerza de orden para vigilar las puertas de los bancos, en prevención de saqueos. Según palabras de Ramos Oliveira, “propios y extraños se admiraban de la magnanimidad y disciplina del pueblo, que tras reconquistar la libertad y el poder no se servía de ellos para destruir o humillar a sus opresores”.

Desgraciadamente un año después de esta ejemplar demostración de generosidad popular, la República se vio envuelta en duros conflictos políticos y sangrientas olas de huelgas que iban a provocar que, dos años más tarde, cayera en manos de sus oponentes. El prestigio de la República se reduciría de una manera evidente e inevitable. La Segunda República española, precisamente a causa de su buena voluntad, había permitido la llegada al poder del más heterogéneo grupo de políticos y líderes sindicales con los que jamás haya contado un gabinete español. El gobierno, presidido por el primer ministro Alcalá Zamora, estaba integrado por Miguel Maura, ex monárquico y católico ferviente; Casares Quiroga, un adinerado liberal gallego que creó junto a Manuel Azaña la Izquierda Republicana; Martínez Barrio y Alejandro Lerroux, lumbreras del corrupto Partido Radical; y tres socialistas: Largo Caballero, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto, portavoz este último del ala derecha de su partido. Como era de esperar, esta extraña combinación ideológica no duraría mucho tiempo.

Alcalá Zamora y Maura formaron parte del gabinete para asegurar que la República no se volviese excesivamente republicana, es decir, para que respetara la propiedad inmobiliaria y la autoridad de la iglesia y del ejército. Azaña y Casares Quiroga, como portavoces de la clase media baja y de los intelectuales, admitían la necesidad de reformas, pero era imprevisible hasta qué punto eran posibles las reformas en aquel maremágnum, formado por una oligarquía antirepublicana, un ejército secretamente reaccionario, una iglesia manifiestamente conservadora y una clase obrera revolucionaria. Martínez Barrio y Lerroux vacilaban entre la oligarquía antirrepublicana y los liberales del Ateneo. Los socialistas, comprometidos con la república burguesa, proporcionaron a Casares Quiroga y a Azaña un ala izquierda “responsable”. Utilizados por los republicanos para mantener a raya al

proletariado, eran los mendigos del liberalismo, pero las limosnas reformistas que suplicaban nunca aplacaron el hambre del pueblo.

Las intenciones iniciales del gobierno eran jacobinas: expropiar a los grandes terratenientes, adoptar medidas efectivas para frenar la grave crisis económica y reducir tanto la influencia política del ejército como el poder de la iglesia en la sociedad española. Si durante los primeros meses de la República, cuando todavía gozaba del entusiasmo popular, se hubiese sacado adelante este programa, los liberales habrían colocado a España al nivel de una nación burguesa europea. Pero el gobierno, titubeante, temeroso de indisponer a las clases que estaba obligado a combatir, dejó pasar el tiempo, mientras las Cortes se dedicaban a la redacción de una Constitución. Este documento, aunque humano y liberal en su espíritu, se perdió en entresijos legales que neutralizaron su capacidad para atender a las necesidades sociales. A la larga nadie se tomó muy en serio esta Constitución, que sirvió sin embargo para reflejar la diversidad ideológica del nuevo gabinete. Cuando las Cortes aprobaron el artículo 26, una disposición que ponía en tela de juicio la legitimidad del enorme poder de la iglesia española —institución que se beneficiaba del "presupuesto de Culto y Clero" y de otras leyes especiales—, Alcalá Zamora y Maura dimitieron. Más tarde Niceto Alcalá Zamora volvería al gobierno, esta vez como presidente de la República. Azaña, notorio defensor del artículo 26, se convirtió en Primer Ministro y en portavoz de las virtudes republicanas. Estos primeros meses, no obstante, no fueron totalmente desaprovechados. Gracias a la iniciativa de Largo Caballero, nuevo ministro del Trabajo, el gobierno aprobó de inmediato una serie de leyes que protegían a los pequeños arrendatarios de las expulsiones arbitrarias que sufrían. La jornada de trabajo del proletariado rural se redujo a ocho horas. Se concedió la prioridad del arriendo a las sociedades de trabajadores rurales frente a los arrendatarios individuales. Para prevenir el éxodo de trabajadores, las Cortes aprobaron, con el apoyo socialista, una ley de Términos Municipales que estableció cupos laborales en cada uno de los nueve mil municipios de España. Ningún hacendado podía contratar a trabajadores forasteros sin la aprobación de los sindicatos municipales. Otro decreto negaba a los propietarios el derecho a dejar sin cultivar las tierras que hasta entonces

hubiesen sido trabajadas según los “usos y costumbres” de cada región; en caso contrario, estas tierras pasarían a las organizaciones obreras locales, que se responsabilizarían de su cultivo.

Sin embargo, estas disposiciones no provocaron un cambio real en las condiciones de trabajo agrícola. Para Malefakis estas leyes significan una “revolución sin precedentes en la vida rural española”, pero sus razones son esencialmente jurídicas. Es cierto que estas leyes reconocían por vez primera los derechos jurídicos de las masas rurales, pero no lograron acabar con el desempleo endémico que paralizaba a las zonas rurales de España, ni tampoco solucionaron el problema fundamental del régimen de propiedad de la tierra. La famosa ley de Reforma Agraria de septiembre de 1932 proyectaba un amplio programa de redistribución de tierras, pero apenas suscitó la atención necesaria. El estatuto, obstaculizado por la escasez de fondos y los retrasos administrativos, se aprobó a duras penas y su efecto fue prácticamente nulo. A fines de 1934, años más tarde de su aprobación, poco más de 12.000 familias habían recibido tierras. El descontento de los campesinos, alimentado por las múltiples decepciones, aumentaba progresivamente. Pronto explotaría con una virulencia mayor aún que la de los tormentosos años que siguieron a la guerra.

El gobierno fue tan mezquino con los campesinos como generoso con el ejército. En 1931, el ejército español poseía el dudoso mérito de contar con más comandantes y capitanes que sargentos; su estructura de dieciséis divisiones, que normalmente requeriría de ochenta jefes de grado superior, disponía de cerca de ochocientos. La reforma militar que emprendió el gobierno no fue excesivamente agresiva. Las disposiciones redujeron a ocho las dieciséis divisiones existentes, limitaron el servicio militar obligatorio a un año y suprimieron el rango de Capitán General, institución anacrónica que había permitido la subordinación del gobierno civil a la jurisdicción militar en épocas turbulentas. Para apaciguar al cuerpo de oficiales, el gobierno ofreció la paga íntegra a los oficiales que aceptaran el retiro, paga que igualaba el mayor sueldo alcanzado durante su servicio en el ejército. Los círculos militares, según Gabriel Jackson, reaccionaron ante el decreto de Azaña “con emociones encontradas”. “Casi todos reconocían que en el ejército había demasiados galones, pero muchos orgullosos

oficiales de carrera opinaban que Azaña sólo quería destruir el cuerpo de oficiales por medio del soborno". Por añadidura, el gobierno clausuró la Academia General Militar de Zaragoza, lo que alimentó más aún estas sospechas. Muchos oficiales interpretaron este decreto como "un golpe al *esprit de corps* del ejército", puesto que la Academia era la única institución en la que los oficiales de los distintos cuerpos del ejército se formaban juntos.

A la larga, las reformas del gobierno provocaron en el país un profundo descontento. La República despertó suspicacias en la clase conservadora, cuyo poder, por otra parte, dejó intacto; entre los oprimidos despertó esperanzas pero no satisfizo necesidades. De hecho, la República sufrió un serio revés sólo un mes después de su nacimiento. A comienzos de mayo de 1931, el cardenal Segura, primado de la jerarquía eclesiástica en España, emitió una pastoral denunciando severamente la "anarquía" y la "grave conmoción" que había invadido el país con la llegada del nuevo régimen. El comunicado expresaba el agradecimiento al rey en nombre de la Iglesia por haber fomentado y conservado las tradiciones religiosas en España. No es necesario un exceso de susceptibilidad para interpretar esto como una provocación. Tres días después de la publicación de la pastoral, tuvieron lugar en Madrid varias refriegas callejeras entre monárquicos y antimonárquicos; un gentío enfurecido se manifestó frente al ministerio de la Gobernación exigiendo la expulsión de las órdenes religiosas. En una mañana seis conventos de la capital fueron incendiados. Los alborotos se extendieron de Madrid a Málaga, Sevilla, Alicante y otras ciudades. El gabinete, temeroso de mancillar el nuevo régimen con "sangre republicana", tardó dos días en reaccionar. Aunque los incendios fueron sofocados rápidamente, el daño ya estaba hecho; la reacción de la Iglesia no se hizo esperar y la derecha haría en adelante buen uso del filón anticlerical. El buen nombre de la República había sido empañado por la violencia.

Para la clase media estos acontecimientos significaron un duro golpe. Poco después, agitadores derechistas iniciaron una campaña contra el régimen que aumentó la desilusión popular. En 1932 las conspiraciones monárquicas y reaccionarias contra la República culminaron en un golpe militar. El 10 de agosto, el general Sanjurjo, que había sido jefe de la

Guardia Civil, se pronunció en contra de las “Cortes ilegítimas”. El planeamiento y la ejecución del levantamiento fueron tan pobres que Sanjurjo fue fácilmente derrotado. El régimen de Azaña salió fortalecido de este suceso. Pero esta victoria duraría poco tiempo. Este gobierno de liberales y socialistas de clase media duró poco más de un año; su caída no fue consecuencia de los ataques de la derecha, sino que, irónicamente, sería provocada por la acción de la izquierda.

Aunque la CNT había recibido de buen grado el advenimiento de la República, no sería exagerado responsabilizar a los anarquistas de la caída del régimen republicano. En abril de 1931, muchos trabajadores sindicalistas se unieron a los obreros socialistas para votar por el bloque republicano. “El voto de la clase obrera estaba dividido”, señala Madariaga.

> Los trabajadores afiliados a la UGT (socialistas) votaron a sus candidatos; pero los anarcosindicalistas votaron por los liberales de la clase media. Dos razones pueden explicar este hecho: la primera era la encarnizada lucha entre socialistas y sindicalistas por el liderazgo de la clase obrera; la segunda, el desprecio anarcosindicalista por el sufragio, que les despojó de una maquinaria capaz de organizar una acción política colectiva. De modo que al decidirse esta vez a votar con la esperanza de ayudar a desalojar a la monarquía, prefirieron hacerlo por la clase media republicana, cuyas opiniones liberales armonizaban más con las ideas antimarxistas de los sindicalistas españoles que con el credo ortodoxo y dogmático de los socialistas.[33]

Al día siguiente de la proclamación de la República, *Solidaridad Obrera* se aventuró a publicar el siguiente editorial: “No estamos entusiasmados con la república burguesa, pero no daremos nuestro consentimiento a una nueva dictadura…”. El artículo continuaba recordando a sus lectores que aún se pudrían en la cárcel muchos miembros de la CNT, y exigía su inmediata liberación. Para reforzar esta reivindicación, la Confederación Regional Catalana convocó una huelga

general de veinticuatro horas, pero la Generalitat actuó con astucia, declarando ese día fiesta nacional.

Tras esta demostración, la organización se retiró durante algún tiempo y permaneció vigilante. Aparte de algunas acciones violentas en las que militantes cenetistas resolvían viejas cuentas pendientes con dirigentes de los odiados sindicatos libres, la situación en Barcelona era relativamente tranquila, respirándose todavía cierto aire festivo en la ciudad. Cataluña, dejando de lado a la vieja y desprestigiada Lliga, se había volcado de forma abrumadora con la Esquerra, nuevo partido de la clase media, con el coronel Macià y el joven abogado Lluís Companys a la cabeza. Companys había sido defensor de los cenetistas en los juicios políticos de la década de 1920; estaba relacionado personalmente con los líderes moderados de la Confederación, y muchos de ellos lo consideraban como un "amigo". Comprometido con la autonomía catalana, también estaba vinculado, por puntos de vista comunes y estrechos lazos personales, con los republicanos de Azaña. La certeza de que en ese momento la autonomía estaba al alcance de la mano, hacía que la gente mostrase una disposición de ánimo poco exigente hacia el nuevo gobierno.

La CNT actuaba con cautela frente al nuevo régimen de Madrid. Resulta dudoso, sin embargo, que existiera una tregua prolongada entre los respetables liberales del gobierno republicano y los ilegales anarquistas que ocupaban el primer plano de la CNT. Mientras que la coalición Azaña hacía muy poco por apaciguar los recelos de la CNT, los anarquistas, avivando la situación hasta convertir las desilusiones de la clase obrera en cólera, construían los cimientos para la completa ruptura con la República. Los acontecimientos muy pronto se desarrollarían de tal modo que iban a justificar las mutuas reservas y la hostilidad entre ambos bandos; tanto la escalada represiva del gobierno como los ataques anarquistas crearon las condiciones necesarias para una guerra civil.

Cabe resaltar aquí el crítico papel que jugó el Partido Socialista, al exacerbar hasta un punto crucial este conflicto. Que la CNT y la UGT eran enconados adversarios ya fue en su día destacado por Salvador de Madariaga y otros muchos escritores. Durante décadas, las dos organizaciones obreras se disputaron sectores que se solapaban, cooperando

raras veces entre sí; los pocos pactos que firmaron para realizar acciones conjuntas degeneraron generalmente en un cruce de recriminaciones. Con el establecimiento de la República, las actitudes socialistas hacia la CNT se volvieron irracionalmente venenosas. En 1932 un líder socialista decía lo siguiente: “Existe una gran confusión en la mente de muchos de nuestros camaradas. Consideran al anarcosindicalismo como un ideal paralelo al nuestro, cuando es su antítesis absoluta; y a los anarquistas y sindicalistas como nuestros compañeros, cuando en realidad son nuestros más grandes enemigos”.

Estas declaraciones no deben ser consideradas como mera retórica. Expresan claramente cómo entendían muchos líderes socialistas sus relaciones con la CNT. La burocracia ugetista más de una vez facilitó esquiroles para desbaratar huelgas de la CNT (y reemplazar a los sindicatos en huelga por sus propios sindicatos), acusando después a los anarcosindicalistas de pistolerismo, en claros casos de defensa propia.[34] Largo Caballero, implacable en el ejercicio de sus poderes, utilizó el inmenso dispositivo del Ministerio del Trabajo para minar cuanto pudo la influencia de la CNT en la masa obrera. Sería difícil, en realidad, comprender la legislación laboral en los comienzos de la República sin tener presente este objetivo socialista. El nuevo gobierno aprobó una ley por la que se creaba un sistema de “jurados mixtos” para la mediación en los conflictos laborales. La ley prohibía toda huelga que no presentase previamente sus reivindicaciones ante un “jurado” compuesto en partes iguales por representantes obreros y patronales, y un delegado del gobierno con voto de calidad para romper los posibles empates. Aunque las decisiones que tomaba este organismo no eran preceptivas, es evidente la fuerte influencia que ejercían como autoridad moral. No es necesario señalar que este sistema permitía a Largo Caballero designar como representantes del gobierno a intermediarios socialistas, que facilitaban mayorías para la UGT. Otros decretos especificaban las condiciones que debían cumplir los contratos de trabajo, y también establecían la obligación de respetar un período de ocho días “de reflexión” antes de que los trabajadores pudieran ir a la huelga.

Para la CNT este conjunto de leyes laborales era como una flecha apuntando contra sus más preciados principios anarcosindicalistas. Como observa Brenan,

> aparte del hecho de que estas leyes iban contra los principios anarcosindicalistas de negociación directa con los patronos e impedían la práctica de las huelgas relámpago, era claro que significaban un incremento apreciable del poder del Estado en los asuntos obreros. Un ejército completo de funcionarios del gobierno, formado en su mayoría por socialistas, hizo su aparición para imponer la obediencia a las nuevas leyes y ampliar la influencia de la UGT a expensas de la CNT. Esta había sido, evidentemente, la intención de los legisladores. De hecho, la UGT se convertiría rápidamente en un órgano del Estado, y usaría sus nuevos poderes para reducir a su rival. Los anarcosindicalistas no podían hacerse demasiadas ilusiones sobre lo que sucedería si un gobierno exclusivamente socialista llegase al poder.

Es innegable que la UGT obtuvo enormes ventajas de la colaboración socialista con el gobierno, tanto en el pasado como en la época a que nos estamos refiriendo, hecho que puede demostrarse con la precisión de las estadísticas. La central obrera socialista gracias a su actitud "cooperativa" con la dictadura, conservó intacto su aparato a lo largo de la década de 1920, e incluso aumentó ligeramente el número de sus afiliados. En diciembre de 1929, poco antes de la caída de Primo de Rivera, contaba con 1.511 secciones locales y alrededor de 230.000 afiliados. Con el establecimiento de la República, la UGT experimentó un gran crecimiento. Ocho meses después de la proclamación, en diciembre de 1931, la Unión General de Trabajadores se jactaba de contar con 4.041 secciones locales y casi 960.000 afiliados, lo que equivale a decir que en un lapso de dos años se había triplicado, y en julio de 1932 ya contaban con 5.107 secciones y 1.050.000 afiliados.

Las zonas rurales fueron las que experimentaron el mayor crecimiento ugetista. En los turbulentos años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, la UGT, sacudida por la Revolución Rusa y las insurrecciones anarquistas de Andalucía, comenzó a olvidar algunos de sus rasgos marxistas y aplicó sus energías en atraer al campesinado pobre. Bajo la dirección de Lucio Martínez Gil, un socialista seguidor de Julián Besteiro, los ugetistas intentaron utilizar los comités paritarios de Primo de Rivera para extenderse por el sur, donde su desarrollo era hasta entonces algo limitado. En abril de 1930, la UGT fundó la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra). En sus comienzos esta organización creada para captar a los campesinos contaba con 27.000 afiliados, que en junio de 1933 ya habían ascendido a 451.000, lo que equivalía al 40 por ciento de afiliados de la UGT.

La CNT asistía con alarma a este crecimiento. Para los anarcosindicalistas, el aumento de las federaciones controladas por socialistas significaba nada menos que la corrupción burocrática de las masas obreras españolas. Pensaban seriamente que un obrero o un campesino ugetista era un trabajador perdido para la revolución. Pero lo más asombroso fueron las incursiones de la UGT —apoyadas por el ministro del Trabajo y los jurados mixtos— dentro de las áreas tradicionalmente anarquistas. No sólo en Extremadura y La Mancha, sino que también en Málaga, Sevilla y Valencia existían ahora sindicatos bastante importantes de la FNTT.

Sin embargo, irónicamente, estas organizaciones no supieron prever el impacto radical que la afluencia en masa de los campesinos pobres tendría sobre el socialismo español. El campo era el centro de la agitación revolucionaria. Las leyes agrarias de la nueva República abrieron las compuertas del descontento popular y agudizaron la insatisfacción del campesinado desposeído. Miles de arrendatarios acudieron a las Cortes y a los sindicatos para reivindicar la reparación de las injusticias que provocaban la aplicación de las nuevas leyes. Una ola de huelgas y manifestaciones se extendía por los distintos distritos rurales enfrentando a la nueva FNTT con las autoridades civiles. Las presiones ejercidas sobre la burocracia ugetista por el impetuoso campesinado español y el proletariado

rural pronto abrieron importantes grietas en el antes sólido andamiaje del reformismo socialista. Aunque la FNTT era mucho menos agresiva que la CNT, es significativo que Martínez Gil y Julián Besteiro se opusieran firmemente al ingreso de los socialistas en el gobierno republicano. El ala izquierda socialista, que había quedado completamente aislada después de la Revolución Rusa, comenzó a incrementar su influencia y en pocos años se convirtió en la tendencia más importante dentro del Partido Socialista Español.

Aunque la UGT continuó siendo el principal rival de la CNT, el reducido Partido Comunista español empezó su propia lucha con las dos grandes centrales obreras. En el primer período de la República, el Partido Comunista era poco más que un intruso dentro del movimiento obrero español. En 1931 contaba con algo menos de un millar de afiliados. Durante la dictadura de Primo de Rivera pasó bastante inadvertido, hasta el punto de que el régimen no se sintió preocupado por *Mundo Obrero,* que continuó su andadura como periódico del partido. La ruptura entre los comunistas sindicalistas como Nin y Maurín y los leninistas tradicionales, había dejado al partido en manos de gente dócil y mediocre cuya principal cualidad parecía ser su servilismo a la Komintern estalinista. En ese período, los comunistas catalanes seguidores de la tendencia que representaba Joaquín Maurín, fundaron el BOC (Bloc Obrer i Camperol), una organización revolucionaria que insistía en la necesidad de cooperación entre la clase obrera y los grupos izquierdistas de la clase media. Otros, en su mayoría intelectuales, se reunieron junto a Andreu Nin y fundaron la Izquierda Comunista, enraizada originalmente en Cataluña y que se consideraba trotskista. El BOC y la Izquierda Comunista suplantaron en la práctica al Partido Comunista de Cataluña y es probable que durante varios años lo superaran en número de adeptos en España. En 1936 las dos organizaciones se fusionaron y crearon el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), una importante organización que en los años de la Guerra Civil fue uno de los principales blancos de la hostilidad y la represión del comunismo estalinista.

La influencia del Partido Comunista sobre la clase obrera española no era, por lo general, muy destacada. Salvo algunos núcleos aislados en

Asturias y en Madrid, el partido sólo había logrado un avance importante: la obtención en 1927 del control de un significativo número de sindicatos clandestinos de la CNT en Sevilla —principalmente en la zona portuaria— que utilizó para desafiar a las federaciones rivales anarcosindicalistas y socialistas de la zona. A principios de la década de 1930, la capital andaluza se convirtió en escenario de un conflicto a tres bandas entre la CNT, la UGT y el "Comité de Reconstrucción", organización manipulada por el estalinismo, que debe su nombre a la Conferencia de Reconstrucción Sindicalista que el partido había convocado en la primavera de 1930. Según Gabriel Jackson, que estudió el conflicto en los escenarios donde había tenido lugar,

> la mayoría de los trabajadores urbanos pertenecía a los sindicatos de la CNT. Los comunistas eran más fuertes entre los trabajadores portuarios. *La Federación* de Trabajadores de la Tierra de la UGT había ido desarrollándose en los pueblos, y amenazaba ahora el control de los comunistas sobre los estibadores. Cada uno de estos grupos, así como la organización patronal Federación Económica de Andalucía, contrataban pistoleros cuando la ocasión lo requería. Durante el año 1933 se registraron alrededor de una docena de enfrentamientos con muertos y heridos graves. Los pistoleros eran alquilados por una tarifa de diez pesetas diarias, en una época en que el salario medio diario de un obrero de fábrica era de doce pesetas. Cada organización reducía los riesgos de sus guardaespaldas manteniendo escondites, proporcionándoles documentación falsa y formando comités de ayuda a los presos, para aquellos que tenían la desgracia de ser atrapados. La violencia ocasional estaba localizada en la zona del puerto, y si los casos eran llevados a los tribunales generalmente acababan en una absolución, ya que los testigos citados no se acordaban de nada.

Estos conflictos eran cada vez más frecuentes a medida que España se aproximaba a la Guerra Civil. Los anarquistas no fueron los únicos

violentos; los patronos, los socialistas y los comunistas disponían de pistoleros, actuando unos contra otros, y sólo se unían para acusar a los anarquistas de sus propios crímenes. Por supuesto que al contar con el apoyo de la FAI, la CNT no tenía necesidad de pistoleros profesionales. Si bien es cierto que en aquel período los faístas estaban dispuestos a utilizar las armas con más facilidad que los socialistas y comunistas, no es verdad que fueran ruines asesinos alquilados a sueldo, que amenazaban con corromper las organizaciones que les contrataban. Los periódicos reaccionarios, como el monárquico *ABC*, recogían los altercados más insignificantes ocurridos en Sevilla y los magnificaban para provocar el terror de la clase media. Jackson observa que "si un obrero de la CNT daba un puñetazo a un comunista en un bar de la zona portuaria, la edición sevillana del *ABC* informaba que había habido un motín". Y añade que "si uno de los sindicatos convocaba una huelga general, y algunos tenderos prudentes bajaban las puertas metálicas de sus tiendas para que no pudiesen arrojar piedras a sus escaparates, el *ABC* decía que la ciudad estaba paralizada. En realidad, la vida se desarrollaba normalmente fuera de la zona portuaria, y lo cierto era que, en la década de los 1930, en todas las ciudades portuarias del mundo existían esporádicas escenas de rivalidad sindical y de violencia".

El período de mayor violencia, sin embargo, no llegaría hasta más tarde; en 1931, la CNT se ocupaba más bien de los problemas de su organización interna y de la estrategia a desarrollar en sus relaciones con la República. A mediados de junio se iba celebrar un Congreso Nacional extraordinario para la discusión de estos problemas, que sería el primero desde 1919 y que fue también el último que la federación obrera convocó hasta la misma víspera de la Guerra Civil.[35] El Congreso se celebró el 11 de junio en el Conservatorio de Madrid, con la asistencia de 418 delegados que representaban a medio millón de afiliados organizados en 511 sindicatos. Algunos estudiosos han sugerido que estas cifras parecían algo infladas, pero por otra parte cabe destacar que muchos sindicatos, particularmente los del sur, eran demasiado pobres como para permitirse enviar delegaciones. De acuerdo con las estadísticas del congreso la Confederación Regional Catalana tenía en ese momento unos 240.000 afiliados, la mayoría en

Barcelona, lo que significaba una disminución de casi el 40 por ciento desde 1919.

El orden del día del Congreso había sido preparado por el Comité Nacional y aprobado en un pleno de delegados regionales, lo que permitía a los sindicatos debatir y decidir de antemano sus posturas ante los asuntos que se tratarían el 11 de junio. Este procedimiento, que garantizaba una amplia participación de todos los miembros de la organización, era una norma de la CNT, aunque en ocasiones pasadas hubiese sido abandonado debido a la represión o por falta de tiempo. En el Congreso, la discusión se centró especialmente en cuatro puntos: el análisis de la actuación del Comité Nacional durante la dictadura; el importante problema de la situación del país en aquel momento; la necesidad de cambios estructurales dentro de la organización; y sobre todo, el conflicto entre la FAI y los moderados. Este Congreso fue crucial para la CNT, pues preparó el terreno para la derrota de los moderados en favor de las tendencias radicales del interior de la organización. Para comprender el desarrollo posterior del movimiento, hay que tener en cuenta el aumento de la influencia de la FAI sobre los sindicatos, que afectaría no sólo al futuro de la CNT, sino también al de la Segunda República.

El Comité Nacional, formado por 14 afiliados catalanes, fue atacado desde el comienzo del congreso. Sus miembros se defendieron enérgicamente. Hubo un debate violento con réplicas y contrarréplicas entre los miembros del Comité Nacional y los delegados, lo que supuso una novedad respecto a los métodos empleados en anteriores congresos de la CNT. Por lo común, el Comité Nacional solía mantenerse al margen de la discusión, puesto que sus opiniones se expresaban en los informes que presentaba al Congreso, para así otorgar más libertad y tiempo a los debates de los delegados. Para los cenetistas cada líder obrero (incluso los que no recibían salarios de la organización y afirmaban profesar los principios anarquistas) era un burócrata en potencia que requería constante vigilancia. Por ejemplo, para apartar a Pestaña de la dirección de *Solidaridad Obrera*, Buenacasa hizo notar que el portavoz moderado hacía cinco años que no desempeñaba su oficio de relojero, señal evidente de que se había acomodado dentro el aparato de la CNT. Aunque para ser justos, hay que

recordar aquí las objeciones de Pestaña a Mola acerca de los sueldos de los delegados obreros en los comités paritarios.

El reglamento del congreso causó un gran disgusto entre los delegados. Los radicales se quejaron de que las reglas perjudicaban a la FAI; a su vez los delegados más moderados estaban molestos porque los representantes de la FAI (una organización ajena) hubieran sido admitidos en el congreso. Finalmente, cuando el representante de esta organización se puso en pie para explicar sus puntos de vista sobre un asunto concreto, se produjo un enorme desorden. Lo cierto es que la FAI podría haber elegido miembros más adecuados para expresar sus opiniones (por ejemplo, García Oliver, que era delegado de la CNT por Reus); sin embargo, su participación en el congreso como una organización reconocida oficialmente por el sindicato era una cuestión de prestigio. La mayoría de los delegados no hubieran puesto demasiados obstáculos para aceptar esas condiciones. Pero el representante de la FAI se negó a intervenir, responsabilizando al Comité Nacional y a los moderados de su marginación.

Esta pugna constituyó el telón de fondo para las graves discusiones sobre la evolución de la "política" de la Confederación y sobre su futuro. Tal vez uno de los momentos más emocionantes del congreso fue cuando apareció Juan Peiró para ofrecer un informe sobre la participación del Comité Nacional en las conspiraciones antidictatoriales de los años veinte, informe que revelaba datos desconocidos hasta entonces. Cuando se hizo público el contenido de las negociaciones que se habían mantenido con los liberales (los mismos que ahora eran sus más enconados enemigos) se produjo una gran conmoción. El informe de Peiró, por otra parte, no entonaba ningún *mea culpa*; Peiró había apoyado esas negociaciones y en ese momento respaldaba los intentos de Pestaña para instalar a la CNT dentro del régimen. Varios oradores censuraron al Comité Nacional, y los delegados aprobaron una resolución en la que rechazaban toda responsabilidad por estas actuaciones del pasado.

Una de las decisiones que adoptó el Congreso fue encomendar a la sección de Madrid la elección del nuevo Comité Nacional, acabando así con el prolongado dominio que los catalanes habían ejercido sobre la

organización. Quedaba claro que los nuevos vientos soplaban en contra de los moderados.

La tendencia centrista, probablemente mayoritaria entre los delegados, se estaba acercando a la izquierda. Pero esto no significaba un fortalecimiento de la FAI en el seno del Congreso. En realidad, la FAI venía haciendo incursiones en la Federación Regional Catalana, a quien debía la invitación para asistir a estas sesiones. En Barcelona, la FAI se había introducido en el sindicato de la construcción, y posiblemente también en el de barberos. Cuando los moderados presentaron un programa de mínimos para la CNT muy similar al programa reformista adoptado por un congreso anterior, el sindicato de productos químicos de Badalona y los sindicatos de los sectores eléctrico, químico y ferroviario de Barcelona se unieron a las protestas de los delegados de la construcción y del sindicato de barberos. No obstante, el programa de mínimos fue aceptado por el Congreso. Además, y a pesar de la fuerte oposición de la FAI, se adoptó el plan de reorganización de los moderados, que recuperaba las federaciones nacionales de industria tal y como habían existido en la vieja Internacional. El informe del comité que propuso el plan explicaba que una mayor concentración de capital requería una mayor concentración estructural de la CNT, bajo la forma de federaciones nacionales. Aunque el informe, diseñado principalmente por Juan Peiró, no recomendaba ninguna disminución de la autoridad de las federaciones geográficas locales, imponía claramente una estructura casi centralista para la CNT. Los sucesivos acontecimientos retrasarían la creación de las federaciones nacionales de industria hasta bien entrada la Guerra Civil, pero en su momento la presentación de este plan provocó un gran revuelo en el Congreso.

El significado de este informe y el debate que ocasionó merecen una mayor atención. El plan no era más que una revisión de la doctrina sindicalista; la FAI y los moderados repitieron la histórica lucha que había dividido a sindicalistas y anarquistas a finales del siglo pasado. García Oliver, representando a la FAI, señaló que el plan daría por resultado la centralización de la CNT, y lo censuró como una “invención alemana que apestaba a cerveza”, aludiendo no sólo al carácter “marxista” de la

propuesta, sino también al apoyo que había recibido de los sindicalistas alemanes. Otro delegado se levantó para advertir que el plan convertiría en asalariados a los representantes de la CNT. Una generación antes, Errico Malatesta había hecho objeciones muy similares, aunque empleando términos más sofisticados y elegantes. Con el paso de los años estas objeciones no habían perdido fuerza.

A pesar de que no se llegaría a poner en práctica hasta la Guerra Civil, el plan sin duda fortaleció las tendencias centralistas y burocráticas que habían existido en la CNT, al identificar al comunismo libertario con una economía potencialmente centralizada. Una barrera muy frágil separaba la estructura económica defendida por el plan de las reivindicaciones socialistas. Sin un control total por parte de las asambleas de los trabajadores de las fábricas sobre el proceso de la toma de decisiones, las dos "perspectivas" serían difícilmente distinguibles entre sí. Desgraciadamente, la CNT no advirtió las consecuencias de este dilema fundamental. Al contrario, la postura de los moderados, según la cual la CNT debía adaptarse a la economía centralista creada por el capitalismo moderno, pareció la más acertada. Esto repercutiría cinco años más tarde en los trabajos sobre reestructuración económica de Diego Abad de Santillán, un influyente teórico faísta que proporcionó a la CNT una base racional para aceptar una economía centralizada y fuertemente burocrática durante la Guerra Civil.

Cabe preguntarse por qué el Congreso, después de aceptar el programa de mínimos y el plan de reestructuración presentado por los moderados, eligió Madrid como siguiente centro de la CNT. La aprobación de las otras propuestas de los moderados no implicaba que éstos dominaran la organización, porque, de hecho, el fervor revolucionario había estallado en las filas de la CNT. La caída repentina de la dictadura y de la monarquía, la honda crisis económica y la impaciencia del pueblo español después de un largo período de letargo convencieron a los anarquistas de que la revolución libertaria estaba próxima. Aparentemente, muchos de los delegados que asistieron al congreso no veían ninguna contradicción práctica entre prepararse para una revolución y votar por un programa mínimo que aceptaba la necesidad de los derechos democráticos, la enseñanza laica y el

derecho a la huelga. El plan de reorganización de los moderados debió parecerles una alternativa concreta, práctica y constructiva al capitalismo, que el anarcosindicalismo podría hacer progresar en caso de una revolución.

La FAI se mantuvo fiel a sus principios y no apoyó los planes y programas de los moderados. La FAI aspiraba a una revolución inmediata; los moderados negaban la posibilidad de una inminente revolución, y mientras tanto ofrecían una alternativa concreta al capitalismo. Villaverde, un centrista que se pasó al campo de los moderados, advertía que "la Confederación no está en condiciones de sublevarse en los históricos momentos que vivimos". Como todos los moderados, recordó a los delegados que la influencia de la CNT se ejercía sólo sobre una pequeña minoría de la clase trabajadora. Curiosamente, sin embargo, los delegados creían servirse de las propuestas de los moderados para llevar a cabo los objetivos de los faístas. Aunque las propuestas específicas de la FAI fueron rechazadas por el Congreso, su espíritu revolucionario se contagió a la mayoría de los congresistas.

Muy pronto el gobierno de España sentiría el impacto de este creciente impulso revolucionario. Pocas semanas después de finalizar el Congreso y de que los delegados hubieran regresado a sus localidades respectivas, la CNT lanzó el reto. El 4 de julio miles de trabajadores cenetistas de la Compañía Telefónica Nacional abandonaron sus trabajos y se enfrentaron al gobierno en lo que Peirats llama "un test" de las intenciones de la República. La huelga alcanzó un gran éxito en Barcelona y Sevilla, donde el servicio de teléfonos quedó totalmente interrumpido, pero también afectó a Madrid, Valencia y otros importantes centros de comunicación del país. Aunque los líderes del sindicato de teléfonos pretendían una huelga pacífica, graves enfrentamientos tuvieron lugar cuando obreros armados —probablemente liderados por faístas— intentaron atacar los edificios de la Telefónica. La huelga, en palabras de Peirats, "degeneró muy pronto en guerra de guerrillas" entre las fuerzas del gobierno y los comandos de saboteadores de la CNT. Antes de que el conflicto acabara, unos dos mil huelguistas habían sido detenidos.

El conflicto de la Telefónica no fue una huelga común. Peirats, con la precisión que le caracteriza, lo describe como una "huelga de La

Canadiense en miniatura". Aquí se impone un breve paréntesis para comprender la huelga y sus implicaciones en el contexto de la época. La Compañía Telefónica Nacional de España no era una simple red de comunicaciones, sino un enorme monopolio en manos de capital norteamericano. Bajo la dictadura, la Compañía Telefónica, empresa subsidiaria de la ITTC (International Telephone and Telegraph Corporation), obtuvo el monopolio sobre todas las comunicaciones telefónicas de España para veinte años gracias al contrato firmado por el gobierno de Primo de Rivera. Después de ese período, las instalaciones propiedad de la Compañía podrían revertir al gobierno, siempre que la ITTC fuese indemnizada con la totalidad del capital invertido más el 15 por ciento de interés. Esta asombrosa compensación debía pagarse en oro. Para muchos españoles la Compañía Telefónica era un monstruoso símbolo del imperialismo extranjero. En 1930 Indalecio Prieto, socialista moderado, denunció públicamente el contrato entre la compañía y el gobierno, calificándolo de robo sistemático y prometiendo que la futura república anularía el acuerdo. Si la CNT buscaba avergonzar a la República y particularmente a los socialistas, había escogido el blanco y el momento adecuados: Prieto fue por entonces nombrado ministro de Hacienda y los socialistas dominaban el Ministerio de Trabajo.

Era obvio que el gobierno no ahorraría esfuerzos para impedir la huelga. España acababa de pasar por las urnas para elegir las Cortes Constituyentes, y Azaña estaba ansioso por demostrar que la República era una democracia ordenada y madura. Prieto, que "estaba haciendo todo lo posible para tranquilizar a los acreedores extranjeros, cortar la fuga de capitales y detener la bajada de la peseta" (Gabriel Jackson), estaba más que dispuesto a olvidar sus combativas promesas del año anterior. Por todo ello, la huelga constituía un problema espinoso para el gobierno. La UGT, además, tenía sus propios motivos de queja contra la CNT. El sindicato de Teléfonos, creado por la CNT en 1918, era una constante amenaza para la supremacía socialista en el movimiento obrero de Madrid. Al igual que el sindicato de los obreros de la construcción, el sindicato de Teléfonos era un enclave anarquista en la capital de la hegemonía ugetista. Todo parece indicar que el gobierno y el Partido Socialista no tuvieron dificultades para formar un frente común y

establecer medidas destinadas a quebrar la huelga y a debilitar la influencia de la CNT.

El Ministerio de Trabajo declaró la huelga como ilegal y el Ministerio de la Gobernación ordenó la intervención de la Guardia Civil con el objetivo de intimidar a los huelguistas, entre los que se encontraba un importante número de mujeres que trabajaban como operadoras. Aplicando su peculiar concepto de solidaridad obrera, la UGT proporcionó esquiroles a la Compañía Telefónica; entre tanto el periódico *El Socialista*, órgano del partido, acusó públicamente a la CNT de estar manejada por pistoleros. Estas tácticas surtieron efecto en Madrid, donde los frustrados huelguistas fueron obligados a inscribirse en la UGT para poder conservar sus trabajos. Aunque las peticiones de ayuda de la CNT fueron desoídas por los socialistas, el resto de los trabajadores del país respondieron enviando fondos y convocando huelgas solidarias, aunque inútiles.

En Sevilla, sin embargo, la huelga comenzó a tomar dimensiones serias. A finales de junio, antes incluso de que los trabajadores de la Telefónica se pusieran en huelga, el gobierno tuvo noticias de un posible complot revolucionario organizado por anarquistas y por un sector descontento de las fuerzas aéreas. El propósito de la insurrección, según el informe del gobierno, era impedir las próximas elecciones de las Cortes Constituyentes. Esta increíble conspiración incluía, al parecer, al voluble hermano del futuro Caudillo, el comandante Ramón Franco, que se había acercado a la izquierda durante el período de las conspiraciones antimonárquicas. El general Sanjurjo y los “aviadores leales” fueron enviados a Sevilla para frustrar la insurrección. Franco fue detenido y el jefe del aeródromo relevado de su cargo. El gobierno denunció que en los pueblos próximos a Sevilla se había encontrado armas distribuidas por los anarquistas entre los campesinos.

Apenas se habían apagado los ecos de esta conspiración, cuando en Sevilla, el 20 de junio, se declaró una huelga general, con fuertes enfrentamientos en las calles. Esta huelga, que contaba también con el apoyo de los comunistas, era consecuencia de la anterior, secundada por los trabajadores de la Telefónica. Resulta difícil decir si la CNT, la FAI o los comunistas (que en 1931 seguían una política revolucionaria) esperaban

convertir la huelga en una insurrección. Las fuentes anarquistas ofrecen una información bastante escasa sobre la huelga de Sevilla. Una vez más, después de estos hechos el gobierno manifestó que se había encontrado "evidencias" de que habían sido distribuidas armas entre los campesinos; lo cierto es que en los distritos rurales de los alrededores de la ciudad se produjeron verdaderas batallas campales entre la Guardia Civil y los trabajadores agrícolas. El ministro de la Gobernación, Maura, decidió aplastar la "insurrección" sin piedad. Se declaró la ley marcial, y la sede central de la CNT fue convertida en un matadero por el fuego de la artillería. Después de nueve días, durante los cuales destacamentos de policía fuertemente armados patrullaron las calles, la huelga general de Sevilla llegó a su fin. Los choques en la capital andaluza arrojaron un saldo de 40 muertos y 200 heridos.

Estos acontecimientos produjeron una división sin precedentes en la CNT. Para los moderados, los sucesos de las semanas anteriores habían producido una ruptura innecesaria entre la CNT y la República, un sistema político que desde su punto de vista había abierto nuevas posibilidades para la propaganda anarcosindicalista y el desarrollo de la Confederación. Para la FAI, y tal vez para la mayoría de los militantes de la CNT, la crueldad con que el gobierno trató a los huelguistas de la Telefónica y a los trabajadores de Sevilla era la prueba de que la República usaba los mismos métodos que la monarquía o que la dictadura. La FAI hizo un llamamiento para declarar una guerra social total contra el gobierno.

Los esfuerzos de los moderados para alejar a la CNT de la influencia de la FAI eran cada vez más desesperados. Las tensiones internas de la organización alcanzaron su punto crítico cuando, en agosto de 1931, treinta moderados firmaron un manifiesto denunciando la política conspiradora y ultrarrevolucionaria de la FAI. Aunque en el "Manifiesto de los Treinta", denominación por la que se conocerá el documento, no se mencionaba el nombre de la FAI, se acusaba a la organización anarquista de tener un concepto "simplista" de la revolución, que conduciría a "un fascismo republicano". La República, decían los *treintistas*, poseía formidables defensas y una considerable autoridad moral sobre el pueblo, y hasta que

esa autoridad moral no fuera destruida por las propias prácticas corrompidas y represivas del gobierno, toda tentativa de revolución, si triunfara, degeneraría en una dictadura de ideólogos. El manifiesto decía:

> Somos revolucionarios, sí; pero no esclavos del mito de la revolución. Queremos que el capitalismo y el Estado, sea rojo, blanco o negro, desaparezca; pero no para suplantarlo por otro (…). Queremos una revolución nacida de un hondo sentir del pueblo, y no una revolución impuesta por nosotros (…). La Confederación es una organización revolucionaria, no una organización que cultive la algarada, el motín, o que practique el culto de la violencia por la violencia, de la revolución por la revolución.

Los *treintistas* no lograron imponer sus puntos de vista en la CNT; el manifiesto suscitó en muchos una indignación que los faístas más radicales utilizaron hábilmente para aislar al ala moderada. De hecho, este documento fue el factor más decisivo en la caída de Pestaña, Peiró y sus seguidores. Las reservas de los moderados ante las reivindicaciones de una revolución inmediata habían permanecido durante algunos años, atenuadas por sus manifestaciones de adhesión a los ideales anarquistas, lo que había provocado la confusión de los miembros de la CNT, que no acababan de entender las discrepancias entre el ala moderada de la Confederación y la FAI. El manifiesto aclaró en gran medida la situación: los *treintistas* estaban claramente en contra de las tácticas revolucionarias de la FAI. La camaradería entre los miembros de base había estado condicionada hasta entonces por las visibles divergencias "políticas" entre moderados y extremistas. Un simple afiliado de la CNT ya no podía estar más desconcertado ante las profundas discrepancias dentro de la organización; y como Buenacasa indicaba en 1930, era la adhesión de la FAI a la idea de una revolución inmediata lo que explicaba su popularidad entre muchos trabajadores anarcosindicalistas.

La ruptura dentro de la CNT era sólo cuestión de tiempo. En septiembre de 1931, aprovechando una ola de entusiasmo revolucionario de las masas,

la FAI ganó el control de los sindicatos clave de Barcelona; un mes después, los faístas y los anarcosindicalistas de la línea dura sustituyeron a los moderados en el consejo editor de *Solidaridad Obrera*. Las dos facciones terminaron dedicándose todo tipo de insultos; los moderados denunciando "la dictadura de la FAI", y los faístas, calificando a los moderados de "traidores" y "renegados". Al año siguiente, Pestaña sería expulsado de su propio sindicato por haber condenado la insurrección cenetista en el Alto Llobregat. Los *treintistas* se solidarizaron con él, al igual que varios sindicatos, entre ellos un sindicato minero de Asturias, prácticamente todos los de Terrassa y Sabadell, y casi la mitad de los sindicatos de Valencia. Todos estos sindicatos (los Sindicatos de Oposición) se agruparon formando una organización propia de signo reformista, cuyos afiliados probablemente no pasaban de 60.000. En abril de 1932, Pestaña abandonaría a sus compañeros moderados y formaría el Partido Sindicalista, que en las elecciones de 1936 obtendría dos diputados a Cortes.[36]

Muchos autores que estudian el movimiento obrero español parecen estar de acuerdo en adjudicar a la FAI el dominio de la CNT después de que los moderados se separaran de la organización. En un trabajo especialmente revelador acerca del anarquismo español, César M. Lorenzo se refiere a la FAI como los "amos" de la CNT. Pero ¿es correcta esta apreciación? La FAI, como hemos visto, se encontraba peor organizada de lo que muchos de sus admiradores y de sus detractores parecen dispuestos a admitir. En primer lugar, no tenía aparato burocrático ni cuotas de afiliación y carecía de sedes centrales con funcionarios a sueldo, secretarios u oficinistas. Según Brenan, muchas de las insurrecciones fueron maduradas en el Café Tranquilidad, situado en el Paralelo barcelonés. Sin embargo, lo más probable es que los faístas utilizasen preferentemente sus propios domicilios para las conspiraciones más importantes. Esa manera de moverse con entera libertad, sin locales de funcionamiento estables, es significativa como reflejo del carácter de los faístas: por mucho que actuasen como una élite dentro de la CNT, tenían una genuina aprensión hacia la burocracia, y estaban decididos a preservar celosamente la independencia de sus grupos de afinidad; carácter que, por otra parte, les impediría convertirse en una vanguardia organizada y estrechamente unida.

Por otra parte, la FAI no era un organismo políticamente homogéneo que siguiese una "línea" fijada, como los comunistas o como muchos socialistas. No existía un programa que guiase las acciones de sus miembros. Sus puntos de vista se expresaban habitualmente a través de las declaraciones del Comité Peninsular. Salvo alguna disquisición sobre los principios e ideales anarquistas, normalmente consistían en llamamientos a la acción revolucionaria. La FAI no estaba orientada hacia la teoría; en realidad, dio pocos teóricos de talento. Dentro de la FAI, la clase obrera y los jóvenes eran los más relevantes; la organización poseía las deficiencias y las admirables cualidades de cualquier proletariado. Situaba la acción por encima de las ideas, el coraje por encima de la prudencia y el impulso por encima de la razón y la experiencia. Gastón Leval describió a la FAI como "la pasión de la CNT", y Peirats, en términos más materialistas, como "los testículos". Pero nadie la ha llamado "el cerebro" de la Confederación. Y al comienzo de los años 1930, cuando España se dirigía hacia la Guerra Civil, lo que precisamente necesitaba la FAI de un modo desesperado, era el discernimiento político y teórico que le permitiera comprender la situación en que se hallaba inmersa.

En último término, frente a una situación revolucionaria, en la FAI no existía un consenso general acerca de cómo debía procederse en cada caso. En este asunto existían tendencias opuestas que nunca acababan de conciliarse. Federica Montseny, insigne militante de la FAI en tiempos de la República e hija de "Federico Urales" (Juan Montseny), señala tres corrientes principales dentro del anarcosindicalismo español: "la conocida como *treintista*, que formó el ala derecha; la anarquista, que constituía el ala izquierda, y por último la 'anarco-bolchevique', que englobaba al grupo de García Oliver y a los traviesos partisanos de uno para todos influidos parcialmente por las teorías de los revolucionarios rusos". Su informe, en realidad, es algo limitado. Los "partisanos" de uno para todos eran los Solidarios de los años veinte, rebautizados como Nosotros en 1930, e incluían no sólo a García Oliver, sino a Durruti, los hermanos Ascaso y Ricardo Sanz. Si aceptamos los puntos de vista de Peirats, la influencia bolchevique fue más que "parcial". Fue García Oliver quien se declaró

partidario de la toma del poder *(prise de pouvoir)* en una conferencia pública que ofreció en el sindicato de ebanistas de Barcelona en enero o febrero de 1936. También lo había afirmado previamente, durante una restringida reunión de notables en el consejo directivo de *Solidaridad Obrera*.[37]

Esta tendencia fue duramente contestada. Algunas de los teóricos más talentosos y más respetadas de la FAI se opusieron enérgicamente a la perspectiva de García Oliver. El grupo de afinidad "A", que incluía a destacados faístas como Jacinto Toryho, Alberto Iglesias o Ricardo Mestre, propuso la expulsión del grupo Nosotros. El grupo *Nervio*, dirigido por Pedro Herrera y el teórico anarquista Diego Abad de Santillán, apoyó la propuesta. Un grupo de afinidad bastante importante por su considerable influencia en las juventudes libertarias de Cataluña, el grupo "Z", se uniría a los anteriores.

Aun cuando la teoría de García Oliver sobre la "toma del poder" no fuese aceptable para la FAI en su conjunto, no parece existir ninguna duda de que el *putschismo* implícito en estas declaraciones prevaleció en la práctica desde comienzos de la década de 1930 en adelante. No sería descabellado afirmar que el "período de insurrecciones" en el que varios grupos de la FAI en un principio, y finalmente la FAI en su conjunto, se embarcaron desde enero de 1932 hasta comienzos de 1933 fue el factor determinante que condujo a la caída de la coalición de Azaña.

La primera de estas insurrecciones se inició el 18 de enero de 1932 en la zona minera del Alto Llobregat. En Fígols, Manresa, Berga, Sallent y otros pueblos, los mineros y los demás trabajadores se apoderaron de los Ayuntamientos, izaron la bandera roja y negra de la CNT y proclamaron el comunismo libertario. Las tropas aplastaron el movimiento después de cinco días de lucha. Según Peirats, Azaña, en un arranque de determinación, se dirigió al capitán general de la región ordenándole: "no le doy más que quince minutos entre la llegada de las tropas y el fin de la rebelión". Afortunadamente para los trabajadores, las fuerzas gubernamentales del Alto Llobregat estaban comandadas por un tal Humberto Gil Cabrera, que no compartía la sanguinaria aversión de Azaña hacia la CNT. Por lo menos en esta región, la represión del ejército no se destacó por su severidad. Sin

embargo, en Barcelona, las autoridades tomaron como pretexto una huelga de solidaridad para detener a cientos de militantes. La represión se extendió a Levante, Aragón y Andalucía. En las ciudades costeras miles de trabajadores fueron encarcelados en barcos-prisión. Un mes más tarde, más de cien militantes, incluyendo a Durruti y Francisco Ascaso, fueron deportados a África Occidental y a las Islas Canarias. Durruti no saldría de la prisión hasta el otoño siguiente. Las huelgas de protesta por las deportaciones continuaron hasta bien entrada la primavera. En Terrassa, al igual que en las sublevaciones del Alto Llobregat, los obreros se apoderaron del Ayuntamiento e izaron la bandera cenetista. Las calles de la ciudad fueron escenario de la agitación callejera y de la inevitable represión. Conviene precisar que la insurrección del Alto Llobregat no fue enteramente la acción revolucionaria monumental que cabría imaginar según la descripción de Federica Montseny. Fue en realidad un esfuerzo aislado de la FAI, mal planeado y muy localizado, para confirmar su reputación revolucionaria ante los trabajadores españoles en general, pero particularmente ante los cenetistas. Leyendo a Peirats no nos queda duda de que éste fue el motivo, y no sólo en el caso de las insurrecciones del Alto Llobregat, sino también en el de las que le siguieron. “Los extremistas [léase los faístas —M. B.] que expulsaron a los moderados sentían como un deber el ser revolucionarios”, señala Peirats. Y añade:

> En la polémica que precedió a la salida de los moderados se dio un fenómeno de exclusividad revolucionaria: la revolución se acercaba o alejaba según se militaba en uno u otro campo. El pesimismo de unos engendraba el optimismo de otros, del mismo modo que la cobardía del que huye acrecienta el valor del que persigue. Para probar la validez de sus acusaciones de impotencia, derrotismo o traición, los extremistas estaban obligados a demostrar sus intenciones. En los grandes mítines, donde se concentraban hasta cien mil personas, se declaraba que el comunismo libertario estaba al alcance de todos. No confiar en su inminente llegada despertaba sospechas.

Tras los acontecimientos de enero, la negativa de Ángel Pestaña a apoyar las tácticas de la FAI, o más bien su inequívoca oposición a las mismas, fue calificada nada menos que de traición. Como consecuencia de este conflicto, Pestaña fue apartado de la secretaría del Comité Nacional y sustituido por Manuel Rivas, y finalmente fue expulsado de su propio sindicato. En el pleno regional catalán de Sabadell, en abril de 1932, la huelga de los sindicatos de tendencia treintista inició una serie de sublevaciones que se extendieron desde Cataluña a Levante, Andalucía y Asturias (tal y como antes se ha señalado, los sindicatos de influencia treintista crearon su propia federación, los Sindicatos de Oposición, con centros en Sabadell, Valencia y Asturias). Pese a su oposición a la FAI, los Sindicatos de Oposición no siguieron la trayectoria de Pestaña dentro del "sindicalismo" político. En los años siguientes funcionaron sobre todo como una fuerza de oposición en la periferia de la CNT.

La ofensiva faísta no decreció; al contrario, su fiebre insurreccional parecía ir en aumento tras desaparecer la tendencia conciliadora de los moderados después de la escisión de Sabadell. En enero de 1933, casi un año después de las jornadas del Alto Llobregat, la FAI arrastró a la CNT a otra aventura revolucionaria. En ese caso, la insurrección comenzaría con una huelga de ferroviarios de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria (FNIF), perteneciente a la CNT. Pero la FNIF, demostrando una gran inseguridad y falta de coordinación, postergó la decisión sobre la fecha de la huelga. La impaciencia de la FAI iba en aumento, y la dirección de la CNT, entre tanto, se dejaba llevar por los acontecimientos. Prácticamente todas las iniciativas revolucionarias estaban en manos de los Comités de Defensa controlados por la FAI; bajo esta eufemística denominación se escondía una elaborada estructura a nivel local, comarcal y nacional, que algunos grupos de acción anarquista habían creado a la sombra de la CNT y de la FAI para dirigir las operaciones de combate. En realidad, después de la escisión de la Confederación, la CNT y la FAI se habían unido tan estrechamente que Manuel Rivas, el secretario del Comité Nacional de la CNT, era también secretario del Comité de Defensa, controlado en su totalidad por elementos faístas.

La preparación de la insurrección fue poco meticulosa, hasta el punto de que la policía tenía un informe completo de los planes de la FAI y preparó el contraataque minuciosamente. La insurrección se inició el 8 de enero de 1933, con el asalto de los grupos de acción anarquista a los cuarteles militares de Barcelona. Los anarquistas esperaban contar con el apoyo de algunos sectores de las tropas del ejército, pero las autoridades habían preparado un dispositivo de defensa, y el asalto fue rechazado en medio de un gran derramamiento de sangre y de innumerables detenciones. En los barrios obreros y en las zonas periféricas de Barcelona se produjeron algunas escaramuzas, pero la contienda estaba destinada al fracaso. La insurrección se extendió a Terrassa, Sardanyola, Ripollet, Lérida y a varios pueblos de las provincias de Valencia y Andalucía. También allí fueron aplastadas fácilmente. En Cataluña, fueron detenidos prácticamente todos los líderes faístas, incluyendo a García Oliver y a muchos miembros del Comité Peninsular de la FAI. El resultado fue catastrófico. La CNT negó toda participación en los hechos, culpando de manera implícita a la FAI del desastre. Incluso el viejo anarquista Buenacasa distinguía claramente al anarquismo de las tácticas de la FAI cuando declaró que “el faísmo, y no el anarquismo, fue el que provocó los sucesos del pasado 8 de enero en Barcelona”. En cualquier caso, la FAI no hizo ningún intento por negar su responsabilidad en estos sucesos.

A pesar de la derrota, la influencia faísta se había infiltrado lentamente en algunos de los pueblos más remotos de Andalucía, donde aún subsistía entre algunos campesinos un aire milenarista que se remontaba a una época pasada de la historia del anarquismo español. Aquí, inopinadamente, otra insurrección influyó profundamente en el destino de la coalición de Azaña. En Casas Viejas, un pueblo pequeño y pobre cercano a Jerez de la Frontera, todavía existía una “dinastía” anarquista dirigida por un venerable anciano de setenta años, conocido por el apodo de “Seisdedos”, que inspirado por las insurrecciones que se venían sucediendo en España, decidió que finalmente había llegado el momento de proclamar el comunismo libertario. El anciano, sus amigos y sus parientes —en total unas treinta personas— se armaron con porras y escopetas y se apoderaron del pueblo. A partir de este punto, los relatos difieren entre sí. Según Brenan, “Seisdedos” y su grupo

marcharon cándidamente hacia el cuartel de la Guardia Civil para proclamar la buena nueva. La Guardia Civil, más alarmada que exaltada, comenzó el tiroteo, después de lo cual “Seisdedos” asedió el cuartel. “Seisdedos” y su grupo pasaron de asediantes a asediados cuando tropas del ejército e incluso aviones atacaron el pueblo de una forma brutal, destruyéndolo en gran parte.

El relato de Peirats es bien distinto. Después de que “Seisdedos” y su grupo proclamaran el comunismo, todo “estaba en paz y en orden hasta que llegó la policía”, continua Peirats,

> que irrumpe en el pueblo disparando. Varios muertos quedan tendidos en la calle. Seguidamente entran en las casas y ponen en fila a los presos. En su recorrido llegan a una choza con techado de paja y ramas secas. Irrumpen brutalmente en ella. Suena un tiro y uno de los guardias hace una pirueta. Otro tiro y otro guardia cae herido cuando trataba de filtrarse por la corraliza. Los demás han retrocedido. ¿Quién está en la choza? El viejo “Seisdedos”, un anciano de setenta años, con una caterva de hijos y nietos, que se niegan a entregarse. Los guardias toman posiciones y reciben refuerzos. Hacen disparar las ametralladoras y arrojan bombas de mano. “Seisdedos” no se rinde. Dispara poco y a bulto seguro. Caen dos guardias más. La lucha se prolonga toda la noche. Dos de los pequeñuelos consiguen escapar cubiertos en su retirada por alguien que cae acribillado. Va a amanecer y se quiere terminar de una vez. Las bombas de mano resbalan o sus explosiones son amortiguadas por el techado de paja. Las balas se estrellan contra las piedras. Alguien ha dado con la clave. Se cogen trapos, puñados de algodón, y forman con ellos pelotas empapadas de gasolina. Unas bolas rojas rasgan la oscuridad de la noche como aerolitos. La techumbre crepita y se convierte en antorcha. Muy pronto las llamas envuelven la choza. Las ametralladoras olfatean la caza. Sale alguien: es una niña envuelta en llamas. Las máquinas tabletean y dejan en el suelo pequeñas hogueras que desprenden el inconfundible y macabro olor a carne quemada. La choza, como una enorme pira, no tarda en

> desplomarse con estrépito. Un siniestro griterío, mezcla de dolor, de rabia y de locura. Sucede después el reposado silencio de los rescoldos. Todo ha terminado.

La tragedia de Casas Viejas conmovió hondamente al país.[38] La imagen de la Guardia Civil fuertemente armada y de los contingentes de la recién creada Guardia de Asalto —modelo de la legalidad republicana— dando muerte a simples y miserables campesinos en un enfrentamiento claramente desigual, levantó una tremenda indignación en todos los sectores de la sociedad española. Al principio el gobierno intentó manipular la información de los sucesos, convirtiéndolo en un episodio más de la constante lucha contra los ilegales anarquistas, pero se corrió la voz de que la guardia no dio cuartel a los prisioneros que había capturado. Alrededor de catorce de los prisioneros fueron asesinados a sangre fría por un pelotón de Guardias de Asalto, bajo el mando de un tal capitán Rojas. La derecha se apresuró a unirse la izquierda para condenar el suceso de Casas Viejas y el gobierno, en situación desesperada, se vio obligado a investigar el caso. El capitán Rojas fue procesado y sus declaraciones implicaron al director general de Seguridad y al mismo Azaña. Las órdenes “de arriba” (cuya procedencia exacta nunca fue aclarada) que se impusieron a Rojas habían sido: “Ni heridos ni prisioneros: tirad a la barriga”.

El asunto Casas Viejas no resquebrajó por sí sólo la coalición Azaña, pero catalizó todas las frustraciones y los resentimientos cuya explosión provocó la dimisión del gobierno nueve meses después. La República liberal, que se había proclamado en medio del entusiasmo general poco tiempo atrás, no satisfizo a nadie en concreto precisamente porque, como observa Brenan sagazmente, quiso satisfacer a todos. El dilema del gobierno, casi desde el comienzo de su mandato, era el siguiente: dependiendo de la clase media y de la clase trabajadora para mantener la fachada de las virtudes republicanas, sólo podía lograr el apoyo de una a expensas de la otra. Con el tiempo, la República perdió el apoyo de ambas, al no decidirse resueltamente por ninguna.

Las clases medias, insatisfechas durante el mandato de Azaña, se acercaron cada vez más hacia la derecha, con la esperanza de que la

violencia anarquista y los desórdenes obreros fuesen reprimidos definitivamente. La situación económica era difícil, y la burguesía y la pequeña burguesía españolas, afectadas por la depresión mundial de 1929, veían su único alivio en la existencia de un proletariado dócil, de buenos modales y bien disciplinado, cuyas necesidades económicas fuesen modestas para que no perjudicaran sus beneficios. Azaña intentó demostrar a la burguesía que podía lograrse la colaboración de la clase obrera por medio de pequeñas reformas políticas, religiosas y económicas, pero el New Deal azañista fracasó miserablemente, y las clases medias se inclinaron por los partidos que prometían un gobierno firme, con la capacidad necesaria para salvaguardar la propiedad y proteger las condiciones de vida de las clases privilegiadas.

En los últimos tiempos de su mandato, es posible que el propio Azaña hubiera pensado en adoptar ese tipo de medidas. Como observa Gabriel Jackson: “Azaña escribió en su Diario que diputados de tres partidos diferentes le habían propuesto una dictadura como única solución a los continuos levantamientos anarquistas, y que tanto los amigos como los enemigos de la República pensaban que las cosas no podían seguir así indefinidamente”. Se puede imaginar incluso que los burócratas socialistas a los que Azaña consideraba como los pilares más firmes de la República liberal, aprenderían a adaptarse a una dictadura de este tipo, pues ya habían demostrado su docilidad en la época de Primo de Rivera. Pero las mismas fuerzas políticas y económicas que empujaban a la clase media hacia la derecha llevaban a las masas socialistas hacia la izquierda. Presionados por los anarquistas, por las masas rurales recientemente reclutadas y por la inestabilidad de la economía, hasta conocidos reformistas como Largo Caballero extremaron sus posiciones, aunque sólo fuese para no perder su influencia sobre sus propios partidos. Para estos electores radicales, cada vez más numerosos, la coalición Azaña constituía un patético anacronismo, algo así como el fin de una época romántica en la que la armonía social era un desiderátum más atractivo que la lucha de clases.

Finalmente, la debilidad más inexcusable de la coalición Azaña radicaba en su incapacidad para resolver los históricos problemas agrarios. Lastrado por la legalidad y la prudencia, el reparto había avanzado a paso

de tortuga. Casas Viejas sintetizaba lo que todo republicano sentía con dolorosa intensidad: la Península estaba al borde de una guerra campesina. La desesperación de los campesinos conmovió tan agudamente al país como la brutalidad de la Guardia Civil. Para la gente fue especialmente impresionante conocer cómo la miseria de los campesinos les arrastraba a sacrificar sus vidas en enfrentamientos desiguales con la policía. Las fotografías que mostraban los cuerpos de las víctimas esparcidos por el suelo recorrieron todo el país. En el episodio de Casas Viejas la coalición Azaña demostró no sólo su incapacidad para mantener el orden, aun valiéndose de la violencia y de métodos brutales, sino también la imposibilidad de emplear esos métodos sin poner en peligro la existencia misma de la República. La coalición se derrumbaba mientras en el país crecía la agitación revolucionaria.

Los anarquistas españoles, por su parte, no sólo sacaron a relucir los puntos vulnerables de la coalición Azaña en los sucesos de Casas Viejas, sino que continuaron presionando a la República con métodos más convencionales. Aunque la CNT había sido declarada ilegal después de los sucesos de enero de 1932, en la primavera de 1933 reconquistó la suficiente pujanza como para acometer, a través de sucesivas huelgas, una de las más importantes luchas de su historia. En un pleno de las confederaciones regionales que tuvo lugar en Madrid a finales de enero y principios de febrero, se decidió ir a la huelga general como medida de presión para obtener la amnistía de los presos, la reaparición de las publicaciones prohibidas, la legalidad de los sindicatos y la desaparición del arbitraje obligatorio en los conflictos laborales. Hay que señalar que lo que se ha calificado de “aventurerismo” de la FAI y de la CNT era, en realidad, una lucha por la supervivencia provocada por las medidas de favoritismo que recibían los socialistas.

La UGT, apoyada abiertamente por los ministros socialistas, por los funcionarios y por los tribunales de arbitraje, había invadido áreas tradicionalmente anarquistas. A la CNT no le quedó otra alternativa que denunciar el reformismo de los socialistas, tarea que fue desempeñada fundamentalmente por la FAI. La popularidad de la FAI entre numerosos militantes cenetistas en la década de 1930 no era sólo producto de la

inestabilidad económica y social de España, sino que era debida fundamentalmente a la determinación con que esta organización emprendía arriesgadas y poco agradecidas acciones; determinación que los prudentes líderes de la CNT no se decidían a adoptar aunque les fuera en ello la supervivencia de sus propios sindicatos. Es cierto que la FAI tuvo desaciertos y errores tácticos, pero seguramente el trato que recibió por parte de los líderes de la CNT (y por los historiadores del anarquismo español) no hace justicia a los servicios prestados por el "aventurerismo" faísta.

Las huelgas de la CNT se extendían entonces por toda Cataluña. A mediados de abril los trabajadores de las minas del potasio, en Córdoba, se declararon en huelga; fueron seguidos unos días después por los obreros de la construcción de Barcelona. Luego se solidarizaron los obreros portuarios, y antes de terminar la primavera, las ciudades y prácticamente todo el campo estaban inmersos en una huelga general de casi todos los sindicatos de la CNT. Simultáneamente la Confederación lanzó una campaña masiva por la liberación de los militantes presos de la CNT y de la FAI, unos 9.000 por aquel entonces, produciéndose inmensas manifestaciones públicas de denuncia y de lucha. La movilización alcanzó su punto álgido en septiembre, con una gigantesca concentración de 60.000 cenetistas en la plaza de toros de Barcelona. La palabra "amnistía" se veía escrita en pancartas, en los titulares de los periódicos de las organizaciones y en las banderas que llevaban los manifestantes. Aun así, la amnistía no fue decretada hasta los últimos días del gobierno Azaña. Dada la casi segura victoria de las derechas en las próximas elecciones, parece como si Azaña hubiese decidido liberar a este inmenso número de prisioneros anarcosindicalistas para vengarse de sus oponentes reaccionarios.

Los efectos de la campaña "No Votar" que la Confederación emprendió en el mes de noviembre, ya próximas las elecciones, fueron mucho más eficaces que las huelgas. Los obreros gráficos desde las imprentas, los centros obreros y los sindicatos de oficio, unidos por la CNT y asistidos por la FAI, llevaron adelante una campaña antielectoral sin precedentes en la historia de ambas organizaciones. El 5 de noviembre, en un grandioso mitin

antielectoral que reunió a 75.000 trabajadores en la plaza de toros de Barcelona, Durruti, dirigiéndose a los asistentes, dijo: “Trabajadores, la última vez votasteis por la República. ¿La hubierais votado de saber que esa República iba a encarcelar a 9.000 obreros?”. La muchedumbre estalló en un rotundo “¡No!”.

Este mitin era la culminación de una sucesión de otros más reducidos que durante meses la CNT había celebrado en casi todas las ciudades, aldeas y pueblos bajo su influencia, y que habían estado presididos por las consignas “Amnistía” y “No Votar”, difundidas eficazmente por la prensa y por la propaganda. Los socialistas, que en ese momento se revolvían contra Azaña, decidieron lanzar su propia campaña electoral independiente para lograr los votos de los anarcosindicalistas, pero no tuvieron éxito. Las advertencias de que una victoria de la derecha podría desembocar en un régimen fascista se encontraban invariablemente con la siguiente réplica: el fascismo obligaría al proletariado a encarar la revolución, mientras que el triunfo de los reformistas lo único que aportaría sería una represión más débil y por lo tanto una reacción más débil. Así, las posibilidades de victoria de la derecha estaban respaldadas, además de por la impopularidad de Azaña, por la agitada campaña antielectoral sindicalista. En el mes de octubre se realizó un pleno de la FAI donde los delegados presionaron para preparar un levantamiento después de las elecciones. El Comité Peninsular observó que “si la campaña [antielectoral] emprendida da resultados prácticos, la FAI debe lanzarse a la lucha”. Los delegados resolvieron que “una victoria reaccionaria debe ser seguida de la movilización de todos nuestros efectivos con el objetivo de la revolución social”. Casi en la misma fecha, el pleno nacional de las Confederaciones Regionales de la CNT, convocado también en Madrid, adoptó una resolución similar: “Si triunfan las tendencias fascistas [en las elecciones], y por ésta u otras razones el pueblo se rebela, la CNT tiene el deber de impulsar este movimiento popular con el objetivo de forjar la consecución del comunismo libertario”.

# 10: El camino de la Revolución

## El bienio negro

Las elecciones parlamentarias del 19 de noviembre de 1933 dieron una mayoría abrumadora a la derecha, victoria que condujo a lo que el movimiento obrero español denominó el bienio negro. Este período estuvo, por lo general, muy lejos de los pronósticos fatalistas del movimiento obrero. Los grupos fascistas que se habían constituido hacía poco tiempo, como las JONS y la Falange (esta última dirigida por José Antonio Primo de Rivera, hijo del carismático dictador), apoyaron a la derecha, fomentando fanáticas luchas callejeras que hacían temer que España siguiese los pasos de Alemania, donde los nazis acababan de tomar el poder. Pero la Falange, incluso después de haber absorbido a las fascistas JONS (Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista), apenas alcanzaba los 3.000 miembros. La influencia de Primo de Rivera sobre los grandes sectores de la población era insignificante, a pesar del entusiasmo que provocó entre los universitarios reaccionarios y los jóvenes aristócratas del país.

Las verdaderas vencedoras de noviembre fueron las coaliciones de centro y de derechas, especialmente los oportunistas radicales de Alejandro Lerroux y la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) de José María Gil Robles. La CEDA era una coalición de grupos católicos y monárquicos, que defendían una serie de lugares comunes reaccionarios como “Religión”, “Familia”, “Patria”, “Trabajo”, “Orden” y “Propiedad”, y estaban en contra del laicismo, la clase obrera, los “desórdenes” y la “anarquía”. La CEDA, con 110 escaños, llegó a ser el partido con más

representación en las Cortes, seguido por los radicales, con 100 escaños. La coalición de Gil Robles consiguió apoyos principalmente entre los industriales, los terratenientes, el campesinado carlista, el clero y los católicos más fervientes, muchos de los cuales eran mujeres que se decidían a votar por primera vez, empujadas desde las parroquias. El Partido Radical reunió la mayoría de sus votos entre la clase media urbana antisocialista. El problema más grave al que se enfrentaban la CEDA y el Partido Radical en el Parlamento era la necesidad de calmar los temores que despertaban las conexiones castrenses y reaccionarias de Gil Robles entre los inquietos liberales que se unían a la derecha; y por otra parte, la necesidad de conciliar el catolicismo devoto de la CEDA con el tradicional anticlericalismo de los radicales.

El nuevo régimen comenzó tratando de mantener a Gil Robles en un plano secundario, y nombrando a Lerroux Primer Ministro. Lerroux, aventurero nato, se preocupó de cambiar su imagen, dejando atrás al Alejandro Lerroux, azote de las monjas, y convirtiéndose ahora en el guardián de la Iglesia. Una de las primeras actuaciones del gobierno de Lerroux consistió en restablecer la mayor parte de los sueldos eclesiásticos que las Cortes Constituyentes de Azaña habían abolido; también devolvió a la Iglesia una buena parte de los bienes que se le habían confiscado y sus escuelas volvieron a ponerse en marcha; toda la legislación considerada anticlerical fue derogada, o sencillamente ignorada.

Después de restituir las buenas relaciones con la Iglesia, el nuevo gobierno comenzó una desmedida ofensiva contra la ya exigua legislación social que había sido promulgada por las Cortes Constituyentes. La reforma agraria, ya de por sí limitada, quedó paralizada. Los políticos partidarios de la patronal sustituyeron, en los altos cargos del gobierno, a los partidarios de los sindicatos (particularmente de los socialistas) designados por Largo Caballero. Los incrementos en los salarios agrícolas logrados durante la gestión Azaña, volvieron a reducirse entre un 40 y un 50% y, como una advertencia dirigida a obreros y campesinos sobre la inutilidad de cualquier tentativa de resistencia, el número de guardias civiles se incrementó en varios miles. El gabinete intentó también restablecer la pena de muerte, pero las Cortes frustraron esta iniciativa.

A pesar de su dureza, el programa de Lerroux fracasó estrepitosamente. Igual que había ocurrido con la coalición Azaña, el nuevo gabinete no satisfacía plenamente a la derecha, y sólo sirvió para incrementar la militancia de izquierda. Lerroux, en su intento por garantizar la amnistía de los militares conspiradores que se habían levantado en Sevilla liderados por Sanjurjo, se enzarzó en agrias disputas que le llevarían a ser reemplazado por otro radical, Ricardo Samper, quien a su vez se vio acorralado por los problemas del nacionalismo vasco y catalán, por el contrabando de armas que entraban en el país y caían en manos de la izquierda y la derecha (incluso el viejo socialista conservador, Indalecio Prieto, estaba implicado en el contrabando de armas en Asturias), por la lucha armada entre falangistas, socialistas y anarquistas, y, por último, por la amenaza de la CEDA de no dar su voto de confianza al gobierno radical si no se le concedían puestos en el gabinete.

En la subida al poder de este gobierno había influido de forma decisiva la campaña antielectoral llevada a cabo por los anarcosindicalistas. La propaganda abstencionista de la CNT y de la FAI tenía como eslogan: “Contra las urnas, por la revolución social”. Al proponer la revolución como alternativa a la reforma parlamentaria, los anarcosindicalistas tenían ahora que cumplir lo prometido. ¿Pero podían hacerlo? Las insurrecciones de enero de 1932 y 1933 habían arrojado un saldo de miles de militantes presos y habían sembrado el desánimo en las filas anarcosindicalistas. En un pleno de las confederaciones regionales celebrado en octubre, aunque era muy posible que la mayoría de los delegados se opusieran a una sublevación, no lo hicieron “abiertamente”, como informa A. M. Lehning. Sólo algunas delegaciones, en especial la aragonesa, presionaron a favor de un levantamiento. Las demás prometieron prestar toda la ayuda que estuviese a su alcance. La falta de entusiasmo era evidente, y la insurrección fracasó antes de nacer; a falta de todo sentido táctico sobre el momento oportuno para el levantamiento y de los medios adecuados para llevarlo a cabo, la retórica sustituyó a cualquier consideración. Cabe destacar que García Oliver, quien había apoyado anteriores insurrecciones faístas, por primera vez rompió públicamente con Durruti, y rechazó una insurrección que consideraba absurda.

La insurrección fue planeada para el 8 de diciembre de 1933, día de la apertura de las nuevas Cortes. En Barcelona, se llevó a cabo una espectacular fuga, a través de un túnel excavado desde la prisión, de varios militantes que habían sido encarcelados por sucesos de Terrassa. El gobierno, al corriente de los planes anarcosindicalistas, evitó las huelgas declarando el estado de emergencia y arrestando a los líderes cenetistas y faístas, al tiempo que instauraba la censura y clausuraba las sedes de los sindicatos. En Madrid y en otras ciudades susceptibles de apoyar la insurrección se adoptaron medidas similares. En Valencia, donde los Sindicatos de Oposición ejercían una gran influencia, la convocatoria de huelga del Comité Nacional de la CNT fue totalmente ignorada.

Sólo Aragón, y en particular Zaragoza, fueron escenarios de levantamientos significativos. Aquí, destacados faístas como Durruti, Isaac Puente y Cipriano Mera intervinieron directamente en la preparación del levantamiento. Nuevamente el gobierno actuó de forma contundente para impedir la insurrección. En la noche del día 8, cerca de cien militantes (incluyendo a Durruti, Puente y Mera) fueron detenidos. Los trabajadores, a pesar de que ya no disponían de sus elementos más capaces, levantaron barricadas, atacaron los edificios públicos y se enzarzaron en una dura lucha callejera. Sin embargo, el levantamiento estuvo bien planeado y fue dominado rápidamente. Siguiendo la costumbre de anteriores insurrecciones, muchos pueblos proclamaron el comunismo libertario. Tal vez los mayores enfrentamientos se produjeron entre los trabajadores de las viñas de La Rioja y las autoridades. En cuatro días el movimiento fue aplastado totalmente. Quizá la más notable excepción a este fracaso generalizado de la insurrección (que fue una sucesión de conflictos esporádicos y de victorias efímeras fácilmente sofocados por el ejército) se dio en Villanueva de la Serena, donde un grupo de soldados bajo el mando del sargento Sopena se unió a la insurrección. Por lo demás, miles de anarcosindicalistas fueron detenidos, sus publicaciones prohibidas y sus sindicatos clausurados.

Según Brenan, “lo que es digno de mención en esta insurrección, es que, por primera vez en España, se dieron instrucciones claras y precisas para una revolución social. Las fábricas fueron ocupadas por los trabajadores y

se nombraron comités de empresa. Otros comités de alimentación y transporte, fueron organizados de acuerdo con las pautas establecidas por Kropotkin. Este levantamiento fue considerado, si no como el principio de la revolución, sí como un ensayo general de la misma". Tal vez sea así, pero en la insurrección de diciembre no he encontrado nada excepcional que la distinga de sus predecesoras. En las insurrecciones anteriores, siempre que se presentó la oportunidad, también se tomaron fábricas y tierras, se establecieron comités constituidos por obreros y campesinos, sistemas libertarios de logística y distribución y, en suma, una sociedad en miniatura "organizada conforme a lo establecido por Kropotkin". Quizás lo más sorprendente de la revolución de diciembre fue la visible falta de entusiasmo (con la excepción de Aragón) y la oposición que encontró en militantes como García Oliver.

De todos modos, con la sublevación de diciembre, el "ciclo de insurrecciones" llegaba a su fin. El mismo Azaña admitió que esas insurrecciones habían contribuido a su caída. La campaña de abstencionismo contribuyó al triunfo de los radicales y de la CEDA. Para bien o para mal, el anarcosindicalismo había demostrado ser una fuerza capaz por sí misma, de exacerbar las divisiones, crear inquietud laboral y desequilibrio social en España. Condenar a los anarquistas por generar la "anarquía" es una necedad; para los anarquistas más idealistas, no tomar decisiones que promuevan la agitación, las insurrecciones revolucionarias y, en último término, la revolución social misma, es algo carente de sentido. Las tácticas, la ingenuidad o incluso la imprudencia de los anarquistas pueden parecer algo cómico, pero no debe olvidarse que su fuerza, más que la de ningún otro movimiento de España, hizo pedazos la fachada del liberalismo, y preparó el terreno para una histórica confrontación entre las clases sociales de la Península.

En cuanto a la rebelión de diciembre, lejos de ser "el ensayo para la futura revolución", constituyó un ejercicio más destructivo, por su ineficacia, que cualquier otra acción emprendida por la CNT o la FAI. De hecho, desgastó considerablemente la capacidad de lucha de las dos organizaciones. Es posible que el ejemplo dado con la insurrección

fomentara la militancia dentro de las facciones de izquierda del Partido Socialista, pero dejó al movimiento gravemente debilitado.

En lo sucesivo, los anarquistas españoles se dedicarían especialmente a recobrar fuerzas y a tratar de reunir a sus seguidores. La iniciativa en la acción revolucionaria en España sería recogida en esos momentos por la izquierda socialista, en especial por los mineros asturianos y los campesinos del sur que recientemente habían engrosado sus filas. La gran insurrección de octubre en los distritos mineros de Asturias estaba próxima, y con ella el verdadero "ensayo para la próxima revolución". Pero en este "ensayo", ni la UGT ni la CNT desempeñaron un papel significativo; más bien la iniciativa revolucionaria surgió de los trabajadores, independientemente de su afiliación. En este sentido, los obreros mostraron una actitud claramente anarquista, a pesar de que la mayoría de ellos estaban comprometidos con el socialismo.

La CNT y la FAI, a pesar de las detenciones, las pérdidas sufridas y la desorganización que siguió a la lucha de los dos años anteriores, permanecían prácticamente intactas. Incluso Zaragoza, que había sufrido más que ninguna otra región los daños causados por el levantamiento de diciembre, mantenía su admirable fervor revolucionario. En el mes de abril, esta ciudad aragonesa quedó paralizada por una de las huelgas generales más extraordinarias de la turbulenta historia del movimiento obrero español. Una huelga de cinco semanas de duración, que puso de relieve el espíritu de abnegación, la solidaridad y la tenacidad de los militantes, alcanzando dimensiones heroicas. La huelga se inició como protesta por las brutales acciones policiales que siguieron a la explosión de una bomba en un cuartelillo de la policía. La huelga de cuarenta y ocho horas, en protesta por los malos tratos policiales recibidos por los trabajadores detenidos, se transformó en una huelga general que duró treinta y seis días; el detonante se produjo cuando varios trabajadores del transporte fueron privados de sus permisos de conducir por negarse a volver al trabajo durante las primeras horas de la huelga. Antes de finalizar la semana, todo el transporte de Zaragoza, así como las fábricas y diversos servicios, detuvieron completamente sus actividades.

Como era habitual, el gobierno afrontó la crisis declarando ilegal la huelga y solicitando la intervención del ejército. Los trabajadores se negaron a volver al trabajo, a pesar del tremendo sacrificio material que esto significaba para ellos. Toda la CNT, y en particular la Confederación Regional Catalana, se solidarizó con sus compañeros de Zaragoza. Para aliviar las penurias de estos trabajadores, el proletariado de Barcelona, dirigido por Durruti, organizó una espectacular caravana con el fin de trasladar a los hijos de los huelguistas a Cataluña. A este efecto se movilizó un gran número de taxis, que trasladaron a 13.000 niños de Zaragoza a los domicilios de las familias obreras cenetistas que se hicieron cargo de ellos. En esta acción, como observa Brenan, los cenetistas revelaron dónde residía su verdadera fuerza: "no en las rebeliones armadas, sino en su capacidad de resistencia sindical […] Si recordamos que la CNT carecía de fondos para la huelga, apreciaremos mejor el valor y la resistencia que requería este conflicto. Si bien es verdad que los anarcosindicalistas no habían podido llevar a cabo su revolución, no es menos cierto que sabían cómo mantener viva su posición revolucionaria".

Inmediatamente después de estos hechos, un nuevo problema vino a ocupar el primer plano. Los socialistas, impulsados por las afinidades anarquistas de los cientos de miles de campesinos militantes, recién reclutados y a menudo enfervorizados, estaban desencantados tras su alianza con los liberales, y temían cualquier posible inclinación del gobierno hacia el fascismo; por ello alzaron su voz para reivindicar la formación de una Alianza Obrera, un "frente unido" que reuniera a todas las organizaciones de trabajadores del país. Este tipo de Alianza, propuesta por Largo Caballero, es la que posteriormente sería frecuente entre los grupos políticos de la izquierda europea y americana a mediados de la década de 1930, sobre todo después del conflicto en que la izquierda alemana capituló ante Hitler. La consigna utilizada era muy similar a aquella de octubre de 1933, cuando Pestaña, apoyando a los *Treintistas*, había proclamado la necesidad de una "alianza" entre la UGT y la CNT para detener el fascismo en España.

Peiró destacó que la alianza obrera no fue concebida como un pacto electoral, sino que constituyó una organización contra el fascismo y en

defensa de una “República Socialista Federal”. El pacto entre las distintas facciones de la izquierda catalana entró en vigencia poco después de la sublevación anarquista de diciembre, pero no incluyó a la CNT y a la FAI, que se mostraron cautelosas ante los nuevos “aliados”. Experiencias anteriores habían provocado entre los anarquistas una profunda desconfianza hacia la UGT, los Sindicatos de Oposición, los militantes socialistas de Barcelona, el grupo obrero-campesino de Maurín, la izquierda comunista de Nin y los Rabassaires que estaban controlados por la Esquerra, el partido liberal nacionalista de Lluís Companys. Los anarquistas consideraban perjudicial cualquier alianza formada por estos grupos tan dispares y autoritarios, y rechazaron cualquier posibilidad de incorporación al pacto.

Sin embargo, la facción moderada de la CNT de Asturias prestaba un considerable apoyo a la Alianza. Tras el apoyo de Largo Caballero a la izquierda en las elecciones de 1933, el pacto con la UGT resultaba más atractivo que nunca. Si bien el conjunto de la CNT era aún más hostil hacia la Alianza, el pleno de junio de las Confederaciones Regionales alteró esta situación al permitir acuerdos de ámbito local con la UGT. Esta resolución no hacía más que ratificar la alianza de la CNT asturiana con la UGT local cuatro meses atrás, para preparar la insurrección de octubre de los mineros asturianos. Sin embargo, de modo oficial la CNT mantuvo su distanciamiento de la Alianza. Así, a comienzos del otoño respondió con un limitadísimo apoyo y hasta con indiferencia a las huelgas propuestas por la Alianza. La Alianza Obrera tenía mucha menos repercusión de la que se le ha atribuido en muchas discusiones sobre el movimiento obrero español. Ni siquiera Maurín, del Bloc Obrer i Camperol, “recordaba haber sentido nunca el entusiasmo que se le atribuía en un pasaje de la obra de Brenan” —observa Gabriel Jackson, en un apunte sobre la entrevista mantenida con Maurín—. “Se refirió a la Alianza como si desde el comienzo hubiese quedado invalidada por la falta de entendimiento entre Largo Caballero y los catalanes. Tampoco *El Socialista* [el órgano oficial del Partido Socialista Español —M. B.], durante la primavera y el verano de 1934, le daba gran importancia al nuevo movimiento”, añade Jackson.

La situación de la Alianza Obrera, sin embargo, iba a sufrir un significativo cambio en octubre de 1934. Conforme se acercaba el otoño, comenzó a percibirse una mayor actividad en la derecha. La presión ejercida por Gil Robles para lograr cargos ministeriales para la CEDA era cada vez mayor, a pesar de la resistencia que oponía el gabinete de Ricardo Samper. Esta presión provocó, el primero de octubre, la caída del gobierno radical. El presidente Alcalá Zamora, a pesar de la profunda hostilidad que sentía hacia Gil Robles, no tuvo otra alternativa que acceder a las exigencias de la CEDA. Inmediatamente después de la crisis ministerial, el presidente llamó a Lerroux a formar un segundo gabinete, que concedería a la CEDA tres ministerios.

Hoy en día es difícil comprender el impacto que esta concesión causó en la izquierda española. La CEDA, un partido católico sostenido en gran parte con capitales de contribuyentes fanáticos y reaccionarios, se asemejaba a los Austríacos Católicos que habían llevado a Dollfuss al poder a comienzos de la década de 1930. Poco antes de que la CEDA lograse una participación en el gobierno, Dollfuss se había autoproclamado dictador de Austria, y su ascenso al poder coincidió con una dura represión, en respuesta al levantamiento socialista que acababa de emerger en Viena. Tras una semana de violentos enfrentamientos callejeros, la artillería cayó brutalmente sobre los edificios de la Cooperativa de Viviendas Para Obreros Karl Marx. En las filas socialistas apareció con fuerza una nueva proclama: “Mejor Viena que Berlín”, resaltando, sin duda, la desesperada pero valiente resistencia del proletariado austríaco ante el fascismo, en contraste con el indolente conformismo de la izquierda alemana ante Hitler.

La crisis que desencadenó la entrada de la CEDA en el gabinete no se redujo al campo socialista, sino que también se dejó sentir entre los autonomistas catalanes. A pesar de la importante presencia de la Lliga en las Cortes, como consecuencia del triunfo de los empresarios conservadores catalanes en las elecciones de 1933, la Generalitat de Cataluña estaba en manos de la Esquerra de Lluís Companys, un movimiento autonomista de la clase media, cuya perspectivas estaban más cerca del ideario republicano de Azaña que de las tendencias separatistas del nacionalismo catalán. La Esquerra, a pesar del fracaso de 1933, subió al poder en las elecciones

locales después de que muchos cenetistas, tras recapacitar acerca de su anterior campaña antielectoral, votaran, al menos localmente, a los grupos liberales. Bajo la influencia de Companys, la Esquerra comenzó a abandonar los principios separatistas de su fundador, el coronel Macià, fallecido en diciembre de 1933, y orientó sus demandas hacia una autonomía catalana dentro de la República española. Companys había conseguido cierto prestigio como extremista. Por otra parte, había puesto su reconocido talento jurídico al servicio de los presos políticos, defendiendo a varios militantes cenetistas en los procesos de la década de 1920, a pesar del considerable riesgo personal que implicaba esta actividad. Probablemente, Companys, más que cualquier otro político republicano, fue el dirigente que mantuvo mejores relaciones con los líderes de la CNT, donde su figura gozó de una gran credibilidad, algo inmerecida, mientras los liberales de su generación quedaban totalmente desacreditados frente a la clase obrera española.

No obstante, en Cataluña, Companys era el principal rival de la CNT. Se enfrentó a los anarcosindicalistas cuando organizó a los agricultores arrendatarios de viñedos en la Unió de Rabassaires, un sindicato controlado por la Esquerra. Ésta, pretendiendo mantener su influencia en las zonas rurales de la provincia, había promovido la ley de cultivos, ley que facultaba a los arrendatarios de viñedos cuyos arriendos estuviesen a punto de expirar a adquirir el derecho sobre las tierras que hubiesen cultivado durante más de quince años. La ley, que tenía un alcance estrictamente regional, se limitó exclusivamente a Cataluña. Sin embargo, siendo tan contraria a las conservadoras políticas agrarias de Madrid, fue muy pronto rechazada por el Tribunal de Garantías Constitucionales. De este modo, el tribunal respaldó a los propietarios frente los arrendatarios, y simultáneamente reconoció las potestades de Madrid para frenar la legislación regionalista. En las Cortes, hasta los católicos y conservadores diputados vascos se manifestaron en contra de la decisión; más aún cuando, después de su apoyo a Lerroux y a la CEDA, sus propuestas de un estatuto de autonomía para el País Vasco habían sido tratadas con indiferencia.

Fue entonces cuando los vascos decidieron dar su apoyo a la izquierda catalana y a la ley de contratos de cultivo. Esta actitud anunciaba la futura

alianza del Frente Popular de 1936, que reuniría a los conservadores vascos, la izquierda catalana, los republicanos de Azaña, los socialistas y los comunistas, en un incómodo grupo electoral cuyo objetivo común era hacer frente a la reacción y al fascismo. Las demandas ministeriales de la CEDA habían dividido incluso a los radicales. Samper, el primer ministro radical saliente, advirtió amenazante que: "Frente a un período de opresión y de vergüenza como éste, no queda otra salida que el estallido de una revolución. Si las fuerzas de la derecha de Gil Robles no se comportan con responsabilidad, el camino de la legalidad será suprimido".

Esta declaración no debía tomarse muy en serio. Según demostrarían los acontecimientos, para la mayoría de los radicales, y desde luego para Lluís Companys, se trataba de simple retórica. Después del rechazo a la ley de cultivos en las Cortes, Companys fue obligado por sus propios partidarios a seguir una orientación radical, y a la larga, más que las Cortes fue la Esquerra quien sufrió la crisis. Las distintas secciones dentro de la Esquerra habían evolucionado hasta formar grupos activistas propios. Los escamots, un grupo paramilitar cercano al fascismo, constituido por jóvenes de la Esquerra, ejercía una presión cada vez mayor sobre Companys y los moderados, pretendiendo acceder al poder y declarar una república catalana independiente. Bajo el liderazgo de Josep Dencàs, un delegado de Orden Público totalmente contrario a la CNT y a la FAI, los escamots procedieron a la ocupación de algunas zonas de Barcelona, desafiando abiertamente al vacilante Companys. Junto con otros grupos separatistas, exigían la definitiva independencia de Cataluña.

Entretanto, Companys telefoneaba frenéticamente al presidente de la República en Madrid, Alcalá Zamora (que no contestó personalmente). Companys advirtió al secretario de Alcalá Zamora que era incapaz de controlar la situación, y que ya no podía contener ni a los izquierdistas Rabassaires, ni tampoco a la derecha representada por los *escamots*. Una gran multitud se congregó frente al edificio de la Generalitat exigiendo una decisión; Barcelona estaba cubierta de carteles que reivindicaban la independencia de Cataluña. Companys, entre la espada y la pared, declaró un "Estado catalán dentro de la República Federal Española" (muy lejos de la total independencia que exigía el pueblo), y a continuación se parapetó en

el interior del edificio de la Generalitat, a la espera de ser rescatado por el ejército del gobierno central. De madrugada se convino una "rendición digna" y a Companys se le trasladó a una celda segura en la prisión, bajo el cargo de "rebelión". Dencàs, ya sea porque preveía el fracaso del motín, como anota Jackson, o porque era un agente provocador de la CEDA, como sostiene Brenan, huyó de inmediato hacia la frontera y encontró asilo político en la Italia de Mussolini.

Todos estos sucesos son importantes por la influencia que ejercieron en los anarquistas durante la insurrección de octubre de los mineros asturianos. Como si de un guión de los futuros acontecimientos se tratara, estos hechos anticiparon las reacciones de los liberales, tanto catalanes como madrileños, frente a la más grave rebelión militar de julio de 1936. La indecisión, un pánico paralizante y, sobre todo, un temor mucho mayor hacia la clase obrera que hacia cualquier amenaza reaccionaria, fueron los rasgos implícitos en el comportamiento de los liberales en esos momentos. En cuanto a los autonomistas y separatistas catalanes, confiaron en alcanzar sus objetivos apoyándose en una huelga general iniciada por los socialistas. Esta huelga, que había sido convocada oficialmente por la Alianza Obrera, fue la respuesta estratégica de la UGT al segundo gabinete Lerroux y a la incorporación de los tres miembros de la CEDA allí integrados.

En Cataluña era absurdo pensar que una huelga de esas características pudiese triunfar sin el apoyo de la CNT, que después de haber sido abandonada en la sublevación de diciembre contra el primer gabinete Lerroux, no tenía, como es obvio, la disposición de ánimo necesaria para responder a los ambiguos llamamientos de los socialistas. Para los anarquistas, la Alianza no constituía, ni de lejos, una fuerza revolucionaria seria. En cuanto a la Esquerra, la CNT tenía motivos para manifestar una gran hostilidad: la noche antes del inicio de la huelga de la Alianza, la policía de la Generalitat había detenido a una veintena de militantes anarquistas, incluyendo a Durruti, y había clausurado *Solidaridad Obrera*. Los intentos de los cenetistas por proceder a la reapertura de las sedes sindicales que habían sido clausuradas en diciembre se encontraron con la resistencia armada de los escamots, que no dudaron en disparar contra los trabajadores. Dencàs, en esa ocasión, tomó la radio y acusó a los faístas de

ser “provocadores anarquistas pagados por la reacción”, al tiempo que exhortaba a sus escamots y a la policía a ejercer medidas de fuerza contra ellos. La Generalitat, más temerosa de los trabajadores que de los ministros de la CEDA, se había distanciado incluso de la Alianza Obrera. Aunque Companys era partidario de declarar un “Estado Catalán” en connivencia con la Alianza, invitándola a participar en el “nuevo” gobierno, la Generalitat, controlada por la Esquerra, se negó categóricamente a proporcionar armas a los trabajadores. La amargura y la decepción invadieron entonces el movimiento obrero catalán. La CNT, que participó sin entusiasmo en la huelga de la Alianza, decidió la reincorporación al trabajo de sus afiliados, desmarcándose totalmente de esta acción. Con la rendición de la Generalitat, el movimiento autonomista se vino abajo en toda Cataluña.

Por otra parte, la huelga general convocada por la Alianza Obrera tuvo consecuencias significativas de dramática e histórica importancia en algunas zonas. Sorprendentemente, en la socialista ciudad de Madrid la huelga se desarrolló de la misma forma que en Barcelona. Aunque los socialistas, presumiblemente, habían venido planeando la huelga en la capital española desde el verano este planteamiento fue ineficaz. La policía no sólo estaba al tanto de las intenciones socialistas, sino que procedió inmediatamente a arrestar a los integrantes del Gobierno Revolucionario antes de que se éste pudiera ser instaurado. Entre los arrestados también estaba Largo Caballero, cabecilla de la huelga y del levantamiento. Una curiosa falta de interés pareció afectar a los líderes madrileños. La Alianza había encomendado la redacción de su programa al líder de la derecha socialista, Indalecio Prieto, quien incluyó una serie de demandas que apenas diferían de las preparadas por los liberales republicanos. La coordinación entre los distintos grupos huelguistas pertenecientes a la Alianza se reveló muy endeble y defectuosa. Una gran huelga en Madrid, apoyada por toda la izquierda, fracasó por la falta de armas y de espíritu revolucionario.

Los socialistas de nuevo fueron aliados dignos de poca confianza. La UGT le negó al comité revolucionario de la CNT y la FAI las armas que con tanta urgencia se necesitaban. En este caso las armas habían sido interceptadas por las tropas gubernamentales, pero aun cuando los

socialistas hubiesen dispuesto de ellas, probablemente no las habrían compartido con los anarquistas. En realidad, las relaciones entre los dos sectores más importantes del movimiento obrero estaban ya muy deterioradas por la actitud de las Juventudes Socialistas y la UGT, que no se preocupaban de mantener a la CNT adecuadamente informada de sus planes, ni de consultar sus decisiones con los delegados anarcosindicalistas. A pesar de la dureza de las luchas en Madrid, la CNT y la FAI se vieron obligadas a funcionar prácticamente por cuenta propia. Cuando finalmente un delegado de la UGT informó al comité revolucionario de que Largo Caballero no estaba interesado en llevar a cabo una acción común con la CNT, el comité se disolvió. Más tarde, Diego Abad de Santillán explicaría que el intento socialista de culpar a la abstención anarquista del fracaso de la insurrección de octubre no se sostenía:

> ¿Pueden censurar la abstención de la CNT los que van a la huelga sin ni siquiera informar a nuestra organización, los que rechazan reunirse con los delegados del Comité Nacional [de la CNT], los que consienten que el gobierno de Lerroux Gil Robles se apodere de los depósitos de armas y que éstas se inutilicen antes de entregarlas a la Confederación y a la FAI?

Álvarez del Vayo, uno de los colegas de más confianza de Largo Caballero, relata con admirable franqueza algunos aspectos de la línea de actividad socialista durante las jornadas previas a la insurrección. Casi todas las circunstancias adversas que rodearon a la insurrección "podían, en cierto modo, haber sido compensadas si no se hubiese dilatado demasiado la orden de comenzar", observa Álvarez del Vayo.

> Las veinticuatro horas durante las cuales se formó el gobierno [de Lerroux y Alcalá Zamora] fueron del todo decisivas. Hasta el último momento, Largo Caballero mantuvo la esperanza de que el presidente Alcalá Zamora no admitiera en el gabinete a reconocidos enemigos de la República. Cuando se supo que el gobierno había

> sido constituido, Largo Caballero estaba con Prieto y otros líderes del movimiento. Su comentario revelaba su obstinada confianza en Alcalá Zamora: “Hasta que no lo lea en el Boletín Oficial no me lo creeré”. Los compañeros más allegados, entre los que me incluyo, insistimos seriamente en que el levantamiento debía iniciarse esa misma noche del 4 de octubre. Al final él cedió, pero para entonces ya era demasiado tarde. Hubo que postergarlo para la noche siguiente. En esas veinticuatro horas se declaró la ley marcial, lo que significó la caída del plan de cooperación militar. Todos los oficiales, tanto republicanos como antirrepublicanos, fueron acuartelados. Por lo tanto, cuando finalmente la insurrección se puso en marcha, las posibilidades habían disminuido sustancialmente. Nos encontramos con que carecíamos del apoyo militar con que el que habíamos contado; las milicias socialistas habían salido a las calles, pero eran incapaces de llevar a cabo por sí solas la crucial misión que se les había asignado.

Lo que no dice el relato de Álvarez del Vayo es que, con apoyo militar o sin él, las considerables fuerzas anarquistas de la capital fueron totalmente ignoradas.

En Madrid, como en el resto de España, no se tenía apenas conocimiento del levantamiento que estaba teniendo lugar en los distritos mineros de Asturias; un levantamiento que pasaría a la historia como un símbolo de tragedia y grandeza.[39] Los mineros, independientemente de su afiliación política, se tomaron el llamamiento a la huelga general muy en serio. Según observa S. J. Brademas, para los mineros asturianos de todos los sindicatos la Alianza Obrera resultaba “algo más que simple jerga revolucionaria”. En la noche del 4 de octubre, con el sonido de las sirenas de los pueblos del valle entre los ríos Aller y Nalón, los mineros iniciaron la huelga con un ataque a la Guardia Civil y a los cuarteles de la Guardia de Asalto. La gran mayoría de los mineros asturianos pertenecían a la UGT, aunque la CNT ejercía sobre ellos una considerable influencia. En los años anteriores, los comunistas habían asumido el control de varios sindicatos locales, y es muy probable que en Mieres, controlado por éstos, se

registraran las iniciativas más dramáticas de la contienda.[40] Allí, alrededor de doscientos militantes sitiaron el ayuntamiento y los cuarteles de la policía, armados únicamente con treinta rifles, con los que disparaban desde distintas posiciones para aparentar disponer de más efectivos de los que realmente poseían. Después de la rendición de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, los obreros procedieron a la ocupación de los pueblos situados a lo largo de la carretera en dirección a Oviedo, hasta que finalmente, el 6 de octubre, emprendieron el ataque a la ciudad. Un enorme grupo de 8.000 mineros, (fuerza evidentemente muy superior a la que los comunistas por sí mismos podrían haber reunido), ocupó todo Oviedo a excepción de los cuarteles de Pelayo y Santa Clara, donde un considerable número de tropas gubernamentales ofrecía resistencia. Por primera vez entraron en acción los famosos dinamiteros asturianos, que compensaron la falta de armas y de artillería con el audaz uso de los cartuchos de dinamita. Evidentemente los asturianos habían aprendido a hacer algo más que carbón; se ganaron una merecida reputación en octubre de 1934, y posteriormente en la Guerra Civil, por su destreza en el manejo de explosivos y por su insuperable valor.

En cuestión de días los mineros habían ocupado la mayoría de los pueblos de la cuenca del Aller y el Nalón, casi todo Oviedo y la ciudad industrial de La Felguera. Al mismo tiempo intentaron tomar los puertos estratégicos de Gijón y Avilés; fue en estos lugares donde la insurrección tropezó con los obstáculos políticos más serios. Los trabajadores de Avilés y de Gijón estaban bajo la influencia anarquista. El 7 de octubre, cuando los delegados anarquistas llegaron desde los puertos a la ciudad de Oviedo pidiendo armas para resistir el inminente desembarco de tropas gubernamentales, su demanda fue ignorada por socialistas y comunistas, quienes, como observa Jackson, “no confiaban en absoluto en ellos”. El comité de Oviedo pagaría un alto precio por esta negativa. Al día siguiente, cuando la resistencia anarquista, limitada por el lastimoso suministro de armas, fue incapaz de impedir el desembarco de las tropas gubernamentales, la ruta hacia Asturias quedó abierta. Los dos puertos de mar se convirtieron en las bases militares principales para emprender la salvaje represión que se inició contra la insurrección asturiana, que duraría todo el mes de octubre, causando miles de muertos.

La insurrección asturiana se prolongó aproximadamente durante dos semanas, del 5 al 18 de octubre. Durante este breve período de tiempo los mineros actuaron con una especial dignidad y una ejemplar rectitud moral. “Para los sublevados —observa Jackson— el régimen revolucionario debía ser una demostración de la moralidad proletaria. Los burgueses recibían idénticas raciones de comida que los obreros. En los hospitales se dieron instrucciones a los médicos para tratar equitativamente a los heridos del gobierno y a los revolucionarios. La milicia revolucionaria protegió a la clase media y a los profesionales apolíticos, incluso arriesgando sus propias vidas”. Los anarquistas, lejos de “atacar a ciegas” (como a menudo vaticinaban sus opositores, tanto de izquierda como de derecha), fueron tal vez más ejemplares en su acción que los rigurosos comunistas, y que muchos socialistas cuyas tendencias autoritarias provocaban un clima represivo en las zonas que controlaban. De hecho, Peirats consideró excesivamente cándidos a los anarquistas asturianos por su deseo de reconciliación y por su afable comportamiento frente a sus antiguos enemigos. Sea como fuere, cuando la represión militar gubernamental sustituyó a la dignidad proletaria “más de un soldado y un cura supervivientes testificaron a favor de los dirigentes del Comité [Revolucionario], alabando los esfuerzos que realizaron para evitar los asesinatos de sacerdotes y prisioneros, intervención que había salvado docenas de vidas”.

A pesar de la posterior propaganda de la época, tanto comunista como gubernamental, la insurrección asturiana no intentó en ningún momento establecer una “república soviética”. La insurrección fue dirigida por cientos de pequeños comités revolucionarios cuyos delegados provenían de sindicatos y partidos, así como de la FAI, e incluso de grupos comunistas antiestalinistas. Rara vez hubo —suponiendo que alguna vez los haya habido— grandes consejos (o “soviets”) formados por delegados de las fábricas. Además, la idea de “consejo” de acuerdo con el modelo ruso de 1905 y 1917 era ajena al movimiento obrero español. Los socialistas funcionaban generalmente a través de comités vinculados estrechamente entre sí y con una fuerte tendencia a la centralización burocrática. En Asturias, la UGT intentó instaurar este modelo siempre que le fue posible,

admitiendo, a lo sumo, a los comunistas y a los cenetistas moderados en sus "comités revolucionarios". Pero el terreno montañoso de Asturias dificultaba la coordinación de tales comités, de modo que cada uno de ellos se convirtió en un comité central —a pequeña escala y aislado— que conservaba a menudo su tradicional carácter autoritario. Los anarquistas, por su parte, preferían estructuras más libres, como consejos integrados por trabajadores de fábricas y asambleas formadas por campesinos. El funcionamiento de estas estructuras descentralizadas y el espíritu libertario promovían un clima casi festivo en las zonas controladas por los anarquistas.

Las diferencias funcionales entre los grupos se revelan nítidamente en el relato de Avelino González Mellada, que compara a La Felguera, controlada por los anarquistas, con Sama, controlada por los marxistas. Los dos pueblos eran de dimensiones similares, y estaban separados por el río Nalón y comunicados por dos puentes.

> La insurrección de octubre triunfó inmediatamente en el pueblo metalúrgico y en el minero.[…] Sama se organizó militarmente; dictadura del proletariado, ejército rojo, Comité Central, disciplina, autoridad.[…] La Felguera optó por el comunismo libertario; el pueblo en armas, libertad de movimiento, respeto a los técnicos de la plantas metalúrgica Duro-Felguera, discusión pública de todos los asuntos, anulación del dinero, distribución racional de los alimentos y vestidos. Entusiasmo y alegría en La Felguera; hosquedad cuartelera en Sama. La entrada de los puentes [de Sama] estaba tomada por cuerpos de guardia con oficiales. No se podía entrar ni salir [de Sama] sin un salvoconducto, ni andar por las calles sin conocer el santo y seña. Todo esto era ridículamente inútil, porque las tropas del gobierno estaban lejos y la burguesía de Sama neutralizada y desarmada.[…] Los trabajadores de Sama que no pertenecían a la religión marxista prefirieron pasar a La Felguera, donde al menos el ambiente era respirable. Allí estaban cara a cara los dos distintos conceptos del socialismo: el autoritario y el libertario; a cada orilla del Nalón las dos poblaciones hermanas

iniciaban una vida nueva: la dictadura en Sama; la libertad en La Felguera…

En contraste con el comité de Sama, tan exclusivo, los obreros de La Felguera se reunían en asambleas democráticas. La economía de la ciudad fue socializada. La población se dividió en varios distritos, cada uno de los cuales elegía por votación a sus delegados para los comités de abastecimiento y distribución. Los comités determinaban las necesidades de consumo de cada uno de los distritos, organizaban el transporte y asumían la gestión de los problemas médicos y sanitarios de la población. La comuna de La Felguera, raramente mencionada en las historias del movimiento obrero español, demostró ser tan satisfactoria y admirable que las poblaciones de los alrededores invitaron a los anarquistas de esta localidad para que los aconsejaran acerca de la reorganización de sus propios asuntos sociales. Raras veces crearon los socialistas instituciones comparables a éstas, y cuando así ocurrió, fue debido a la insistencia de los militantes de base. En Mieres, por el contrario, los comunistas establecieron un torpe y autoritario comité de guerra, que incluso se apropió de los derechos del comité revolucionario de la ciudad. Tan preocupados estaban los socialistas y los comunistas por asegurar su control sectario sobre los pueblos asturianos, que las milicias marxistas, que debían combatir en la sitiada ciudad de Oviedo, se mantuvieron en sus puestos por motivos estrictamente políticos.

Todas estas situaciones se repetirían en la Guerra Civil, dos años más tarde, a mayor escala y en circunstancias más dramáticas. A las milicias anarquistas, enfrentadas a menudo a desesperadas situaciones militares, se les negaría armas y apoyo, en tanto que el mejor armamento se reservaba para los destacamentos de vigilancia comunistas y republicanos de la retaguardia. Estos destacamentos funcionaron más como fuerzas de contención de la revolución social que como detectores de los elementos franquistas. La CNT y la FAI sufrieron todo tipo de traiciones de los grupos del Frente Popular, desde los socialistas “de izquierda” de Largo Caballero, hasta los abiertamente contrarrevolucionarios comunistas. Los anarquistas, prácticamente en solitario, crearon instituciones revolucionarias viables,

estructuradas a partir del control de las industrias por los trabajadores y del control de la tierra por los campesinos. Que estas instituciones se repitieran más tarde entre los trabajadores y campesinos socialistas, fue debido en mayor medida al ejemplo anarquista que a la iniciativa socialista. Y esto se dio hasta el punto de que los mineros asturianos y los obreros de la industria de varias poblaciones establecieron el control directo sobre la economía local y organizaron sus comités de acuerdo con los métodos libertarios; sin duda alguna, estos logros se debieron a los precedentes anarquistas y a los largos años de propaganda y educación.

La insurrección asturiana puso de manifiesto no sólo las profundas divisiones que afectaban a la izquierda, sino la salvaje capacidad represiva que caracterizaría a la derecha en los años posteriores. Lerroux, receloso del ejército español peninsular, envió a la Legión Extranjera (Tercio) y a las tropas mercenarias moras (Regulares) a Avilés y Gijón, donde aplastaron despiadadamente a los insurrectos asturianos. El general Francisco Franco, que se había labrado una gran reputación por haber hecho del Tercio la fuerza de combate más efectiva del ejército, fue designado para dirigir la campaña. Por primera vez en la historia de España se hacía uso de las tropas Regulares y del Tercio. La ironía que significó la intervención de la Legión Extranjera y de los musulmanes Regulares en el sagrado y cristiano suelo asturiano, es reflejada expresivamente por Gerald Brenan:

> En 1931, poco antes de la caída de la monarquía, había llegado desde África un regimiento del Tercio por deseo del rey, con el fin de sofocar el esperado alzamiento republicano. Los soldados del Tercio cometieron sus habituales atropellos, lo que motivó la protesta del comandante Ramón Franco, el aviador famoso por su travesía del Atlántico, que estaba indignado por la presencia de esas tropas en suelo español; fue precisamente su hermano, el general Francisco Franco, quien había ordenado su traslado a España […] Pero, si la presencia de la Legión Extranjera chocó e indigno a la opinión pública, ¿qué se podría decir de los moros? Durante ochocientos años, el acontecimiento más importante de la historia española había sido la cruzada contra los moros. Continuaban

> siendo enemigos históricos, los únicos enemigos contra los cuales habían luchado siempre los ejércitos españoles. Su salvajismo en la guerra era bien conocido. Sólo doce años antes, los mismos rifeños habían derrotado al ejército español, asesinando a todos los soldados excepto a los oficiales, por los que esperaban obtener un rescate. A pesar de aquello, se les había traído a Asturias, ese rincón sagrado de España donde jamás se había enarbolado "la Media Luna", para luchar contra los españoles. Este hecho singular demostraba que la derecha española no pretendía salvaguardar ni la tradición ni la religión, las dos cosas por las cuales decía luchar. Ante el terror que les produjo la insurrección de 40.000 mineros, no sintieron ningún reparo por sacrificar sus principios.

La represión contra los mineros estuvo marcada por la matanza desenfrenada durante el combate, y más tarde por las torturas y las terribles mutilaciones a las que fueron sometidos los mineros que cayeron prisioneros. Muchos de éstos fueron fusilados en tandas, sin juicio previo alguno. Algunas estimaciones elevan a varios miles el número de víctimas de las ejecuciones. Finalizadas éstas, actuaron los escuadrones de tortura, de una brutalidad comparable a la de los torturadores nazis en los campos de concentración alemanes. Aparte de los miles de muertos, se calcula que entre 30.000 y 40.000 obreros llenaron las cárceles españolas. Pese a las tentativas de la derecha de retratar a los mineros asturianos como asesinos de clérigos, monjas y burgueses, los cargos eran absolutamente disparatados; las declaraciones de las supuestas víctimas manifestaban que los mineros se habían comportado con gran corrección y sentido moral, lo que negaba la versión de la derecha. Las investigaciones desmintieron una tras otra esas acusaciones, y revelaron que la mayoría de los cargos del gobierno eran falsos. Se demostró asimismo que el Tercio, los Regulares y la policía eran responsables de inconfesables actos de barbarie, y a medida que los sucesos se iban conociendo, crecía la conmoción en todo el país: la derecha pagaría muy caro su salvajismo.

Las crisis que habían sacudido a España desde hacía años llegaron a su punto crítico cuando la derecha pretendió no sólo socavar a la izquierda y a

los republicanos, sino además destruir a sus aliados centristas. Cegado por la venganza, Gil Robles solicitó la pena de muerte de varios dirigentes socialistas asturianos, entre ellos un moderado que se había opuesto a la insurrección. Aunque Alcalá Zamora y Lerroux habían aceptado las ejecuciones de obreros asturianos condenados en un juicio legal, se oponían a aplicar la pena de muerte a seres inocentes o inofensivos que no merecían semejante castigo, de modo que las sentencias fueron conmutadas. En respuesta al gobierno, la CEDA dejó de colaborar a finales de marzo, provocando otra crisis ministerial. Pero era imposible formar gobierno sin contar con ellos. Ante la presión de Gil Robles, se formó un nuevo gabinete en el cual la mayoría de los escaños fueron ocupados por la CEDA y por el Partido Agrario, una organización de importantes terratenientes controlada por la CEDA. Exaltado por la afluencia de reaccionarios a de su partido, Gil Robles comenzó a cumplir las más siniestras predicciones de la izquierda. No se requería una gran sagacidad política para comprender que se veía a sí mismo como un Dollfuss español. Abandonando prácticamente toda perspectiva de reformas económicas y sociales, Gil Robles orientó todos sus esfuerzos hacia un cambio constitucional, que en última instancia sustituiría las instituciones republicanas por otras corporativas cercanas al fascismo. En su ejercicio al frente del ministerio de la guerra, inició la reorganización del ejército, degradando a los oficiales sospechosos de simpatizar con la izquierda o con la causa republicana. A pesar del odio que despertó el asunto del Tercio, Gil Robles designó a Franco como jefe del Estado Mayor del Ejército.

La coalición de centro-derecha, ya debilitada en 1935, comenzó a perder el apoyo de la clase media española. El gobierno había rechazado la reforma agraria, había restituido las propiedades a los jesuitas y eliminado la educación laica. Los impuestos y contribuciones favorecían abiertamente a la clase adinerada, y la escasa confianza popular de que gozaba el ejército como protector de la República, se vio gravemente deteriorada tras la promoción de los oficiales de tendencia fascista a posiciones claves en casi todos los escalafones. Por último, la CEDA abandonó la alianza con los radicales cuando Lerroux y sus compañeros se vieron implicados en varios escándalos relacionados con concesiones de licencias para casas de juego y

contratos para suministros de armas. En el mes de diciembre Lerroux fue obligado a abandonar; el Partido Radical se había convertido en algo inútil, desacreditado y anacrónico. Brenan dice que era “el único partido de la España republicana que no tenía ideales políticos”. Y añade: “todo lo que pretendían [los radicales] era que el país se mantuviese en calma”. Pero la división de España se hacía cada día más aguda. Ni la izquierda ni la derecha estaban dispuestas a dar cuartel, y menos a un arcaico partido cuyos líderes parecían estar enriqueciéndose de forma fraudulenta. Irónicamente, lo que decidió el fin de la carrera ministerial de Lerroux no fue la multitud de escándalos por corrupción que provocó, sino las gestiones que realizó para aumentar las contribuciones a los terratenientes al incrementar los impuestos de sucesiones del 1% al 3,5%. Consecuentes con su intransigencia, la CEDA se retiró del gabinete a causa de esta cuestión, finalizando los dos años de predominio del centro-derecha.

Gil Robles estaba convencido de que, frente al descrédito de los radicales, había llegado el momento de que la CEDA asumiera el control total del gobierno. El camino parecía estar ahora despejado para la llegada de un régimen autoritario. No obstante, el líder derechista había juzgado a la ligera la integridad del presidente. Alcalá Zamora pretendía la restauración del centro y no tenía intención de dejar a España en manos de una derecha casi fascista. A pesar de sus convicciones conservadoras, Alcalá Zamora era un defensor a ultranza del gobierno parlamentario. El 14 de diciembre, para total asombro de la derecha, cedió el gobierno a Manuel Portela Valladares, ex ministro de Gobernación de Lerroux y totalmente contrario a las tentativas de Gil Robles de transferir el mando de la Guardia Civil al Ministerio de la Guerra. En el transcurso de tres semanas, Portela levantó la censura, que había estado en vigor desde los sucesos de Asturias y que había suprimido, durante más de un año, prácticamente todo debate en España. Al mismo tiempo disolvió las Cortes y anunció elecciones nacionales para el 16 de febrero de 1936. *El bienio negro*, los dos oscuros años del régimen reaccionario, había llegado a su fin.

## De febrero a julio

Es posible que ignoremos los motivos de la furia que se había apoderado de Gil Robles en el curso de los acontecimientos. Su plan de utilizar las propias instituciones republicanas para desmontar la República, había llegado a un callejón sin salida que no podía ser superado. A lo largo de 1935 también la izquierda y los republicanos habían sufrido sus propias crisis. Al intentar implicar a Azaña en el desastre de la Esquerra del mes de octubre, la derecha provocó el alejamiento de los republicanos y sin proponérselo propició su aproximación a la izquierda. Azaña, que había marchado a Barcelona únicamente para intentar detener la sublevación de la Esquerra contra Madrid, fue acusado por la derecha de intervenir activamente en la rebelión de octubre. Los cargos eran demasiado absurdos como para ser tomados en serio y sólo sirvieron para desacreditar a la derecha. Para los republicanos españoles, cualquiera que fuese su tendencia, el carácter vengativo de la CEDA hacía pensar que todas sus promesas verbales en cuanto al mantenimiento de un orden republicano estable carecían de sentido. Esta situación propició la formación de una nueva coalición que agrupó a los liberales en torno a la figura de Manuel Azaña, la Izquierda Republicana, nomenclatura política que habría sido difícil de imaginar tres años antes. El agrupamiento de los liberales y los partidos de izquierda muy pronto tomaría la forma histórica del "Frente Popular".

También los socialistas respondieron al rencor de la CEDA adoptando una posición más cercana a la izquierda. Los socialistas del ala derecha como Besteiro, que se había opuesto al levantamiento de octubre, o como Prieto, que huyó a Francia tras el fracaso del mismo, habían perdido prácticamente todo el prestigio dentro del partido, excepto entre la burocracia más rígida. Largo Caballero, sin embargo, conservó su prestigio intacto, e incluso lo aumentó. Por el simple hecho de permanecer en la cárcel (donde leyó por primera vez a Marx), Largo Caballero se había convertido en el ídolo de las Juventudes Socialistas y de la creciente corriente izquierdista del partido. Poco importaba que cuando comenzaron los sucesos de octubre se hubiese escondido astutamente en su apartamento para evitar persecuciones legales; el "Lenin español", como muy pronto se le llamaría, se embriagó con la visión mesiánica de su histórica misión. Él era el elegido por la Historia para conducir la Revolución en España o,

como los hechos demostraron, para destruirla. Pero en ese momento —como señala Jackson— estaba encarcelado "en compañía de ardientes y jóvenes intelectuales que lamentaban su propio origen burgués y que lo idealizaron, viendo en él al auténtico proletario y al heredero espiritual de 'el abuelo', el igualmente proletario, austero y honrado Pablo Iglesias". Al salir de la cárcel, Largo Caballero se convirtió en el líder indiscutible de la izquierda socialista, y en uno de los arquitectos del "Frente Popular", coalición que iba a tomar el poder en febrero de 1936.

Los anarquistas, a pesar de su relativa inactividad durante los sucesos de octubre, no sufrieron menos que los socialistas. Injustamente acusados de abstencionismo por los socialistas y los comunistas, la CNT perdía prestigio revolucionario mientras varios miles de sus militantes eran encarcelados. Los anarcosindicalistas perdieron, proporcionalmente a sus fuerzas, la misma cantidad de gente que los socialistas, si bien su sacrificio no les reportó el reconocimiento que merecían. Pero lo que resultaba más irritante era que la traición de comunistas y socialistas pasó prácticamente inadvertida y no tuvo repercusión en las elecciones de febrero. En 1934 los socialistas mostraron la misma actitud indigna que en 1932 llevó a Largo Caballero a intentar aplastar a los sindicatos cenetistas. ¿Podían esperar los anarquistas que los liberales de Azaña, que en 1932 habían respaldado a la UGT poniéndose en su contra, que habían censurado su prensa y encarcelado a miles de militantes, pudiesen ahora estar dispuestos a colaborar con ellos? Con estos siniestros antecedentes, la CNT no tenía ningún motivo para alegrarse por una victoria de los liberales o de los socialistas en las elecciones. Pero, en cualquier caso, tenían más razones para alarmarse ante un posible triunfo derechista. Ante esta situación, la CNT procuró un reagrupamiento de sus fuerzas, llegando a un nuevo entendimiento con todos los grupos libertarios a pesar de los diferentes puntos de vista en lo referente a la táctica y la estrategia. La época de las insurrecciones faístas se había terminado para siempre. Las pésimas perspectivas que se vislumbraban ante una posible victoria derechista en las elecciones de febrero dificultaban el uso de los tradicionales métodos de acción anarcosindicalista; la victoria de la derecha habría conducido probablemente a una reacción semejante a la de Dollfuss, seguida por la

supresión brutal de la izquierda. No es de extrañar, por tanto, que la CNT comenzara a crear su propia versión de *realpolitik*.

Como primera medida para el reagrupamiento de sus fuerzas, la CNT estableció relaciones cordiales con los Sindicatos de Oposición, los antes detestados *Treintistas*, dirigidos por Pestaña, Peiró, Juan López, y los denominados "sindicalistas puros" que defendían un gremialismo pragmático. No se trataba de una mera maniobra para reforzar a la Confederación, sino de una acción política significativa que conduciría hacia la colaboración primero con la UGT, después con los socialistas y finalmente con el Frente Popular. Los principios para la unidad entre la CNT y los Sindicatos de Oposición habían sido aclarados en gran parte cuando Pestaña decidió dedicarse a la actividad política y rompió con sus partidarios, creando el Partido Sindicalista. Este nuevo partido pronto se unió al Frente Popular y obtuvo posteriormente, en las elecciones de febrero, dos escaños en las Cortes.

A pesar de la oposición catalana, el movimiento a favor de la unidad de la CNT con los Sindicatos de Oposición, arraigó firmemente. Ya a comienzos de mayo de 1935, el pleno nacional de las Confederaciones Regionales invitó a los Sindicatos de Oposición a participar en el congreso nacional de la CNT, aunque sin derecho a voto. Los contactos entre anarquistas y sindicalistas fueron muy cordiales durante los meses que siguieron. Las dos tendencias libertarias habían sufrido el tremendo peso de la represión durante el bienio negro, y en los períodos más críticos se mostraron solidaridad mutua. El problema de la unidad confederal alcanzó su punto culminante cuando el Comité Nacional de la CNT, en marzo de 1936, invitó a los antiguos *Treintistas* a asistir al congreso que tendría lugar en Zaragoza el primero de mayo. Fue en esta ocasión cuando los Sindicatos de Oposición fueron readmitidos oficialmente en el seno de la CNT. En todas las localidades donde existían sindicatos dobles se realizaron mítines que proclamaban la unión, y las dos organizaciones se integraron completamente. Alrededor de 70.000 oposicionistas se reincorporaron a la organización madre. Con la unificación, Peiró, López y otros sindicalistas del ala derecha ocuparon de nuevo posiciones dentro del poder confederal,

situación que fortaleció la creciente orientación de los dirigentes de la CNT hacia la acción política. Después de los comicios de febrero, la organización adquirió un carácter más sindicalista que anarquista, aunque las tendencias anarquistas perduraron. Como muchos líderes anarquistas lamentarían más tarde, no fue la FAI la que transformó a la CNT, sino más bien la CNT la que cambió a la FAI.

Pero muchos de estos cambios no llegarían hasta más tarde. Entre diciembre de 1935 y febrero de 1936, las líneas "políticas" anarcosindicalistas parecían proponer objetivos poco coherentes entre sí. La CNT se mostraba bastante severa frente al "político" Partido Socialista, sin embargo acogía con satisfacción la acción común con la UGT, aun estando la dirección ésta formada por socialistas. Pese a haber creado el concepto de Alianza Obrera, los socialistas y la UGT parecían aceptar únicamente las alianzas locales, rechazando la idea de la Alianza como un movimiento nacional. El eslogan "UHP" tenía aún que propagarse más allá de las fronteras asturianas. En diciembre el Partido Socialista había propuesto un bloque electoral con los republicanos de Azaña, ignorando los esfuerzos de la CNT por promover una colaboración sindical.

A mediados de enero de 1936, se estableció finalmente un pacto para fundar el Frente Popular, en el que intervinieron el Partido Socialista, la UGT, Izquierda Republicana y sus aliados de la Unión Republicana, las Juventudes Socialistas, el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña, el Partido Comunista y, sorprendentemente, el recién fundado POUM (integrado en su mayor parte por la izquierda comunista de Andreu Nin, resultado de la unión de una organización trotskista y el Bloc Obrer i Camperol de Maurín). El pacto estaba limitado casi exclusivamente a una colaboración de todos los grupos implicados de cara a las elecciones. El programa no arremetía contra los intereses de la clase media, con el fin —según palabras de Portela— de no asustar a los electores moderados. No amenazaba con nacionalizar la propiedad, ni con el control obrero sobre la industria, y ni siquiera con el seguro de paro. Para la izquierda sólo suponía la promesa de amnistía para miles de trabajadores presos y de la defensa parlamentaria liberal contra la reacción autoritaria. El pacto del Frente Popular fortaleció

las demandas de la CNT, presionando a la UGT para llegar a un programa revolucionario común; sin embargo esas demandas, fuesen o no sinceras, no tenían en esencia mayor sentido. El "Lenin español", Largo Caballero, había encomendado a la UGT establecer lazos de colaboración política con los republicanos; la CNT consideró esa propuesta como un apoyo "de clase". De esta manera, cualquier posible unidad estable o perdurable entre las dos mayores organizaciones de trabajadores de España quedaba prácticamente excluida.

Pero la CNT no era totalmente hostil al Frente Popular. Conforme se acercaban las elecciones, la organización comenzó a abandonar su anterior posición antipolítica. El 25 de enero de 1936, durante una conferencia del Comité Regional Catalán, algunos delegados achacaron con acritud al Comité su actitud contemporizadora frente al problema electoral. En contraste con su vigorosa campaña abstencionista de 1933, en esta ocasión la CNT rehusó fomentar la abstención entre sus afiliados. Al mismo tiempo que reiteraba su tradicional oposición a las políticas electorales, la organización mantenía un discreto silencio ante las peticiones de algunos sectores de boicotear las elecciones. Así, el destacado anarquista Federico Urales, decía que "consideraría un gran error por parte de los anarquistas permitir con su actitud durante al período electoral que los derechistas vencieran a los izquierdistas".

Esta declaración del más venerado entre los anarquistas de la época (emparentado con la conocida cenetista Federica Montseny) afectó sin lugar a dudas la estrategia de la CNT y de la FAI respecto a las elecciones del mes de febrero. En un pleno peninsular de la FAI, realizado en Barcelona el 30 de enero y el 1 de febrero, se ratificó la posición electoral de la Conferencia Regional Catalana. "Para salvar las apariencias", la FAI reafirmó su "total abstención de toda intervención directa o indirecta en la política del Estado", pero esta verborrea estaba lejos de ser, en espíritu e importancia, una verdadera actitud abstencionista. Brademas hace una descripción devastadora de la actitud de la CNT-FAI frente a las elecciones:

> Durante los últimos días de enero y las dos primeras semanas de febrero de 1936, la CNT volvió a actuar organizando mítines por todo el país contra el fascismo, contra la pena de muerte (que había sido restaurada en 1934), en defensa de la unión revolucionaria entre la CNT y la UGT, y naturalmente a favor de la amnistía para los presos políticos. Pero no se hacía ni la más mínima campaña antielectoral. Las consignas de "¡No votar!" o "¡Abstención!", no aparecían en ninguno de los manifiestos. Durruti, quien como decía Santillán, era tan poco dado a sutilezas, aconsejó abiertamente a los militantes la concurrencia a las urnas.

La actitud de la CNT y de la FAI hacia el Frente Popular no era una simple cuestión de abstención o de participación en las elecciones (como algunos anarquistas decían), ni tampoco era el Frente Popular producto de la situación política española. La estrategia, diseñada por la Internacional Comunista después de la firma del pacto de no agresión franco-soviético de 1934, fue una nueva y velada respuesta diplomática ante la amenaza de Hitler a la Rusia estalinista. Desde una posición de insensata retórica insurreccional, en la que la totalidad del movimiento socialdemócrata había sido designado como "socialfascista", los partidos comunistas del mundo comenzaron su evolución hacia políticas de colaboración interclasista. El clamor por la "revolución social" estaba de tal modo subordinado a la defensa de la democracia burguesa contra el fascismo, que incluso la oposición de los grupos conservadores más moderados sirvió de justificación para que los partidos comunistas fomentaran uniones con los más corruptos y desacreditados partidos liberales de Europa. En 1936, la izquierda socialista española podía mofarse con toda razón de los comunistas con la proclama: "¡Para salvar a España del marxismo, vota comunista!".

El Frente Popular no era, en realidad, un intento de colaboración entre la izquierda en auge y el declinante centro para obstaculizar a la CEDA y a sus aliados. Era el reflejo de un trascendental cambio político que la Rusia estalinista había impuesto a los partidos comunistas del mundo para convenir con las democracias occidentales pactos de no agresión o de

defensa contra el nazismo alemán. Esta política tenía su origen, estrictamente, en la defensa de los intereses nacionales rusos y, quizás más significativamente, en la identificación de estos intereses, no con el movimiento obrero mundial y la causa socialista, sino con la burguesía liberal y la perpetuación del capitalismo. La Rusia estalinista había abandonado toda pretensión de que la palabra "socialismo" llegara a significar algo en el ámbito de la política internacional o en la práctica de la política interna. Incluso la memoria de la Revolución de Octubre iba a ser borrada con la sangre de los viejos bolcheviques, casi todos ellos purgados secretamente o en juicios simulados precisamente durante los años en que tenía lugar la coalición del Frente Popular.

Los partidos comunistas tratarían de imponer, por medio de las más descaradas y engañosas maniobras, un acercamiento a la izquierda en el seno del Frente Popular, con el fin de consolidar su control sobre la clase obrera internacional. Al igual que sucedía con la política diplomática rusa, a medida que se lograba ese control los partidos comunistas se preocupaban de prevenir la revolución social, no de hacerla avanzar. Sin duda, el Frente Popular fue concebido para demostrar, para satisfacción de la burguesía liberal, que a los partidos comunistas, así como a la Rusia estalinista, se les podía confiar la tarea de promover la colaboración clasista, neutralizar las tendencias revolucionarias dentro del movimiento obrero e incluso, llegado el caso, eliminar a los portavoces revolucionarios y suprimir los movimientos inquietantes de las masas. A sabiendas o no, la CNT y la FAI estaban jugando con fuego. En febrero mantenían la "no abstención", en septiembre apoyaban la participación, y en los últimos años de la Guerra Civil colaboraron directamente con sus oponentes más peligrosos. Dentro de estos grupos de oposición, el sector más antagónico era el comunista, un pequeño grupo cuyo desarrollo dependería directamente de la repercusión que la Rusia estalinista iba a tener sobre los acontecimientos españoles. Aparte de la mitología sobre la revolución bolchevique que parecía legitimar al Partido Comunista Español como organización "revolucionaria", la ayuda militar que Rusia suministró a España durante la Guerra Civil otorgó al Partido Comunista un importante control sobre el curso de los acontecimientos.

Las elecciones de febrero de 1936 dieron el poder al Frente Popular por un margen de unos 700.000 votos. De 271 escaños obtenidos por la coalición, cifra que representaba la mayoría absoluta en las Cortes, a los republicanos (incluyendo la Unión Republicana de Martínez Barrio y la Izquierda Republicana de Azaña) se le asignaron 117 escaños; a los socialistas 90 y a los comunistas 16.[41]

"En la primera vuelta —observa Stanley G. Payne, refiriéndose al 16 de febrero— la izquierda [es decir, la coalición de la izquierda liberal del Frente Popular. —M. B.] obtuvo escasamente 200 escaños sobre el total de 473 que integraban las Cortes. Con el complicado sistema de listas electorales, el factor decisivo fue la concentración de papeletas y su recuento provincia por provincia. La segunda vuelta, que sería la decisiva, se llevó a cabo a fin de mes, bajo la supervisión izquierdista y la considerable presión del movimiento callejero. En los cómputos finales el Frente Popular aumentó su mayoría relativa en la mayor parte de las mesas electorales, aunque la legalidad constitucional de la administración de las mismas no era muy fiable".

Payne olvidó decir que el mismo "complicado sistema de listas de votación" había asegurado el arrollador triunfo de la derecha en 1933. Lo que había favorecido a la derecha tres años atrás, beneficiaba ahora a la izquierda. Tampoco presta Payne suficiente atención al "movimiento callejero" derechista, especialmente a los pistoleros a sueldo de la Falange que originaron tantos sangrientos desórdenes durante los primeros cinco meses del régimen del Frente Popular, a los estudiantes reaccionarios y señoritos que reventaban los mítines de izquierda, o a los derechistas fanáticos que disparaban sus armas sobre la gente de los barrios obreros desde coches en marcha. Tampoco dice nada Payne de la policía de Granada que impedía a los trabajadores, obreros y campesinos el acceso a los colegios electorales; ni de los caciques que amenazaban con castigar a pueblos enteros porque se habían negado a votar a los candidatos de la derecha; ni de los agentes de los terratenientes, que amenazaban con el desalojo a los agricultores y pequeños arrendatarios que no habían votado a los reaccionarios. Aparte de estas salvedades, las conclusiones de Payne son correctas. Lo que realmente fue decisivo para conseguir este margen de

700.000 votos de ventaja del Frente Popular, no fue tanto que la última vuelta estuviese “controlada por los izquierdistas”, o que “el populacho izquierdista” desempeñara un papel más importante como elemento de presión en las votaciones que los fanáticos reaccionarios y los señoritos, sino el apoyo electoral anarcosindicalista, sin el cual el Frente Popular no habría alcanzado el poder.

Lejos de ocultar esta notoria desviación de la línea anarquista, el dirigente faísta Diego Abad de Santillán manifestó que “la participación en las elecciones era lo más aconsejable”. Y añadió: “Dimos el poder a los izquierdistas, convencidos de que en las circunstancias presentes constituían el mal menor”. Esto podría interpretarse como una razonable y honesta declaración, si el “mal menor” hubiese sido entendido como lo que era, una desviación de los principios, un trago amargo que debía soportarse frente al peligro de una enfermedad. En circunstancias verdaderamente críticas, los bolcheviques habían boicoteado elecciones sin convertirse por ello en anarquistas; del mismo modo, podríamos imaginar una situación en la que los anarquistas concurrieran a las urnas sin convertirse por ello en bolcheviques. En retrospectiva, el comentario de Vernon Richards de que una victoria conservadora en las elecciones de febrero habría supuesto una contrariedad menor para el movimiento obrero español que las matanzas que siguieron al alzamiento no deja de ser una idea tentadora, que podría además haber preservado el purismo anarquista. Sin embargo Gil Robles parecía definitivamente determinado a convertirse en el Dollfuss español (sus discursos públicos habían alcanzado un fanatismo sin precedentes) y los carteles electorales de la CEDA tenían un inconfundible sabor fascista.

En una situación tan inquietante como ésta, quién ejerce el control del Estado, de sus armas y del monopolio de la violencia es un asunto de vital importancia. Aprisionados, aislados por los Pirineos, careciendo (como los acontecimientos se encargaron de demostrar) del mínimo apoyo del proletariado internacional, los anarquistas españoles del año 1936 no contaron con las ventajosas condiciones que disfrutaron los bolcheviques rusos en 1917, cuya revolución había venido propiciada por la división de sus enemigos en el exterior, a causa de la Guerra Mundial, y la desunión de sus oponentes en el interior; por otro lado, los bolcheviques disponían de

vastas extensiones donde refugiarse, contaban con la solidaridad activa del proletariado internacional y, por encima de todo, con el apoyo del ejército ruso, que no sólo no se opuso a la toma del poder por los bolcheviques, sino que les proporcionó una enorme cantidad de armas y una reserva de fuerzas de combate muy bien entrenadas. Dollfuss aplastó el movimiento obrero mucho antes de que el ejército alemán cruzara la frontera. El hecho de que Gil Robles no tuviera la oportunidad de hacer lo mismo en España se debe a que no era la CEDA, sino los liberales, los que controlaban el poder en el Estado español en 1936. Esto constituyó un factor nada despreciable en la vasta revolución libertaria de julio de 1936; aunque los anarquistas prefieren negar su importancia. El valor que este aspecto adquirió fue lo suficientemente importante como para que un anarcosindicalista moderado como Juan Peiró escribiera en septiembre de 1935: “Ya he dicho, y lo repito aquí, que si surgiera un frente electoral contra los fascistas que ahora nos gobiernan, yo, por primera vez en mi vida, votaría”.

Pero debe destacarse que era del todo absurdo confiar en que los responsables del “mal menor” se comportaran con total dignidad. Habiendo participado en las elecciones burguesas, era necesario admitir las limitaciones que eso suponía, y reconocer que la actuación política podía ser un antecedente peligroso. De hecho, algunos de los obstáculos más importantes que encontraría la revolución social en España serían determinadas fuerzas dentro del mismo Frente Popular, especialmente el cada vez más poderoso Partido Comunista, que se sirvió de la ambigüedad y más tarde de la violencia para suprimir cualquier brote revolucionario. En cualquier caso, lo máximo que podían esperar la CNT y la FAI del gobierno recién elegido era la neutralidad. Por tanto, esperar una respuesta del gobierno a cambio de su apoyo fue una insensatez, y de hecho supuso el inicio del proceso de “politización” del movimiento anarquista español, proceso que culminó con su conversión en un partido político. Por otra parte, muchos de los dirigentes anarquistas no contemplaban esta posibilidad; tanto es así que cuando la recientemente elegida Generalitat, de características similares a la Esquerra, fracasó de forma rotunda en la resolución de dos conflictos huelguísticos de la CNT en Barcelona, Durruti destacó, disgustado: “No hemos venido aquí a celebrar la llegada de unos

señores. Venimos aquí a decir a los hombres de izquierda que fuimos nosotros los que decidimos su triunfo, y que somos nosotros los que estamos soportando dos conflictos (las huelgas en cuestión —M. B.) que deben ser solucionados inmediatamente. Fue nuestra generosidad la que permitió la victoria del 16 de febrero".

Tales declaraciones eran muestra palpable del cariz que iban tomando los hechos; los anarquistas, incluidos los radicales como Durruti, se estaban convirtiendo lentamente en aquello que tanto despreciaban: el poder del Estado. Los dos años de dura represión y, por otro lado, el evidente poder del que gozaron por haber contribuido de forma decisiva al triunfo del Frente Popular, no sirvieron para que sus opiniones fueran más cautelosas, sutiles y flexibles, sino todo lo contrario: se volvieron más ingenuas, duras y rígidas. Después de haber asumido la participación electoral, comenzaron a asumir también la participación política. Esta tendencia a la acción política, contraria a los principios de la FAI, se vio fortalecida por la creciente burocratización de la CNT. Según Vernon Richards:

> no cabe duda de que mientras aparentemente se seguía apoyando la abstención en las elecciones de febrero, la dirección de la CNT negociaba en la sombra con los políticos de las fuerzas de izquierda el posible apoyo de la Confederación, a cambio, quizás, de la liberación de todos los presos políticos en caso de un triunfo del Frente Popular. Estas especulaciones distan mucho de ser descabelladas. En cualquier caso, lo que es indudable es que en la CNT ha habido siempre hombres de fuerte personalidad que se declaran prácticos y realistas, como es el caso de aquéllos que manipulan arbitrariamente los principios anarquistas.

La posterior unión con los Sindicatos de Oposición puso de manifiesto el incremento de esas "fuertes personalidades" en el liderazgo del movimiento anarcosindicalista. El movimiento libertario español no meditó adecuadamente sus actitudes respecto a este tipo de elementos; un grave error por el que todos pagarían un alto precio.

Pero el mes de febrero de 1936 y la primavera siguiente no parecían los momentos oportunos para profundas reflexiones ni análisis autocríticos, sino para la exaltación, la esperanza y la acción directa. Durante la semana siguiente a la formación del primer gabinete del Frente Popular, una multitud de trabajadores abrió las prisiones y liberó a sus compañeros; en el caso de Burgos, fueron los mismos presos los que tomaron la cárcel. La UGT y la CNT declararon huelgas generales exigiendo la amnistía general. Azaña debía satisfacer las demandas de los huelguistas si pretendía preservar algo del sistema penal. Durante los cinco meses siguientes España se vio convulsionada por huelgas, manifestaciones masivas, luchas callejeras, contiendas entre grupos rivales, reiterados tiroteos entre pistoleros, ocupaciones de tierras, maniobras entre distintas facciones dentro y fuera del Frente Popular, acusaciones y conspiraciones y, por último, asesinatos y movimientos cercanos a las rebeliones que sobrepasaron aquellas "situaciones críticas" de la gestión de Azaña a principios de la década de 1930. La enorme brecha que separaba a la extrema izquierda de la extrema derecha llevó a la Península a una crisis prerrevolucionaria que sólo podía resolverse mediante una confrontación armada entre los dos bandos.

En pocos meses parecían concentrarse las inquietudes sociales de años; desenredar esta complicada madeja de sucesos merecería un estudio aparte. Sólo las tendencias más generalizadas y los sucesos más significativos pueden ser mencionados aquí. El primer acontecimiento que requiere nuestra atención es la incesante ola de huelgas que estalló en toda España poco después del triunfo del Frente Popular. Tanto la UGT como la CNT promovieron las llamadas huelgas "relámpago" durante toda la primavera; sin embargo, la opinión generalizada es que fue la CNT quien impulsó la acción y permaneció casi permanentemente en el primer plano del movimiento. Rara era la semana en que los sindicatos de una u otra federación no convocaran alguna huelga, a veces de carácter general, que paralizaba las ciudades. A finales de marzo, los trabajadores siderúrgicos de la UGT y la CNT abandonaron las fundiciones; a mediados de abril, la CNT inició una huelga general en Madrid que logró el apoyo de los obreros ugetistas; a principios de junio, los trabajadores de la construcción y los ascensoristas se declararon en huelga. Las huelgas se extendían a lo largo y

ancho del país, involucrando prácticamente a todos los sectores de la clase obrera española. De acuerdo con los datos de Gil Robles, confirmados por Peirats, hubo aproximadamente ciento trece huelgas que implicaron a sectores completos de la industria, y cerca de doscientas treinta huelgas parciales. El movimiento, principalmente de tendencia cenetista, alcanzó tanta intensidad que el nuevo periódico de la izquierda socialista de Largo Caballero, *Claridad*, se unió a *El Socialista* en una campaña a favor de la moderación. Pero la CNT, o por lo menos su base, continuaría ejerciendo presión huelguística hasta la rebelión militar de julio.

En el campo, el movimiento popular fue tal vez menos espectacular aunque no menos significativo. Las zonas rurales pobres del oeste y del sur de España estaban organizadas principalmente a través de la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT), controlada por los socialistas; sin embargo, la dirección de la Federación, desde sus comienzos en 1931, mantenía una postura política muy cercana a la izquierda y orientada fundamentalmente a la acción directa, lo que la hacía muy similar a la CNT, que aún conservaba sus tradicionales reductos en el sur y en Levante. Después del triunfo del Frente Popular, las dos organizaciones comenzaron a promover la ocupación directa de tierras. En el mes de marzo alrededor de 250.000 hectáreas fueron ocupadas; en abril, cerca de 150.000, y más de 90.000 entre mayo y junio del mismo año. Este descenso en el número de hectáreas ocupadas se debió, seguramente, a las medidas adoptadas por el gobierno para acelerar la aprobación del proyecto de ley de reforma agraria, y por otro lado a los límites impuestos por los socialistas de Madrid. Pese a todo, el campo estaba en plena ebullición a causa de las sublevaciones. Miles de familias campesinas habían partido en busca de trabajo; otras, bajo la influencia anarquista, ocuparon tierras que reivindicaron como suyas, prescindiendo de toda legislación. En la mayoría de los casos, cuando la Guardia Civil recuperaba las tierras que habían sido tomadas, los agricultores las abandonaban temporalmente, pero regresaban tan pronto como los guardias se habían marchado. Los propietarios estaban aterrados. Ante el recuerdo de las sublevaciones y los incendios del pasado, optaban por huir con sus familias en busca de la seguridad de las ciudades, dejando las plantaciones abandonadas. Las ocupaciones campesinas ya no eran

aquellas esporádicas llamaradas de otro tiempo; las rebeliones se propagaban de pueblo en pueblo y ya no podían reprimirse simplemente enviando un par de divisiones armadas. España era el escenario de una revolución campesina a gran escala, comparable a las grandes rebeliones agrarias de México y de Rusia.

Ante su incapacidad para acabar con la ola de huelgas de inspiración cenetista, el gobierno emprendió severas medidas represivas, al tiempo que intentaba apaciguar la cólera provocada por las acciones terroristas de la derecha arrestando a los líderes de la Falange, incluido José Antonio Primo de Rivera. *Solidaridad Obrera* fue censurada de un modo tan sistemático y estricto que muchos anarcosindicalistas llegaron a decir, no sin razón, que sus periódicos habían gozado de mayor libertad durante el bienio negro que con el Frente Popular. El gobierno clausuró las sedes de los sindicatos y detuvo a un gran número de militantes anarquistas; entre los militantes arrestados se encontraban los miembros del Comité Nacional de la CNT en Zaragoza. Sin embargo, la ineficacia de este tipo de medidas se hizo muy pronto evidente. La pérdida del control sobre los acontecimientos por parte de Madrid era obvia; los sindicatos, con un notorio desprecio hacia la autoridad oficial, reabrieron sus locales casi tan rápidamente como habían sido cerrados. La lucha se desplazaba desde las Cortes y oficinas burocráticas del Estado a las calles, donde las manifestaciones, los enfrentamientos entre los distintos grupos y los tiroteos daban muestra visible de la quiebra de la autoridad tradicional.

Todo el mundo presentía una inminente explosión. Las Juventudes Socialistas y la Falange habían creado sus propias fuerzas paramilitares, que se entrenaban en Madrid a la vista de todos. El terrorismo falangista alcanzó proporciones alarmantes. Inmediatamente después de la victoria del Frente Popular, un grupo de estudiantes falangistas intentó asesinar al diputado socialista Jiménez de Asúa.[42] El “populacho izquierdista callejero” respondió con la quema parcial de dos iglesias y de las instalaciones de uno de los periódicos más reaccionarios, *La Nación*. Apenas cuatro días más tarde la casa de Largo Caballero fue tiroteada. Comenzó entonces una grave escalada de violencia entre los dos bandos. Una semana más tarde del atentado a la casa de Largo Caballero, fue asesinado en Oviedo el diputado

derechista Alfredo Martínez; en el mes de abril, se halló una bomba en la casa del diputado liberal Ortega y Gasset; estos hechos fueron seguidos por numerosos intentos de asesinato a gobernadores civiles republicanos, alcaldes de diversas tendencias políticas y periodistas. El magistrado Manuel Pedregal, quien había condenado a un fanático falangista por la muerte de un muchacho que vendía periódicos y publicaciones de izquierda, fue asesinado poco después. Los enfrentamientos armados entre falangistas e izquierdistas se hicieron frecuentes, y lo mismo sucedió con los enfrentamientos entre la policía y los campesinos. Incluso los trabajadores de la CNT y de la UGT resolvían pistola en mano sus rivalidades sindicales y sus diferencias en los conflictos huelguísticos.

Las discusiones entre los grupos de izquierda corrían parejas con las rivalidades de la derecha. En esos días, los falangistas acusaban a los dirigentes y partidarios de la CEDA de contemporizar y adoptar posturas demasiado moderadas. Las cifras de Gil Robles —que podemos considerar fiables— de víctimas de la violencia callejera durante los meses que siguieron a la victoria del Frente Popular son las siguientes: 270 muertos y más de 1200 heridos. En muchos de estos casos, es probable que la iniciativa procediera en un principio de la derecha, pero invariablemente provocaba la reacción violenta de los grupos de izquierda. “Desde el punto de vista ideológico —observa Jackson— la violencia era más propia del espíritu fascista que de las izquierdas; pero las Juventudes Socialistas, tras reflexionar acerca de la suerte que corrieron los socialistas alemanes en 1933 y los austríacos en 1934, decidieron responder al fuego con el fuego”. Probablemente los anarquistas también eran conscientes de lo sucedido a estos movimientos, pero durante esa primavera emplearon la violencia en menor grado que los demás grupos, tanto de izquierda como de derecha.

En realidad, los socialistas sufrían entonces los cambios más profundos desde los días posteriores a la Revolución Rusa. La posición de Largo Caballero, favorable a la revolución, había generado una crisis dentro del partido. El triunfo del Frente Popular obligaba a preguntarse: ¿debían los socialistas formar una nueva coalición con los republicanos? Cuatro años atrás este interrogante no habría provocado controversias importantes dentro de las distintas facciones del partido; de hecho, Largo Caballero

había ocupado el cargo de Ministro del Trabajo, sin privarse de ejercer una fuerte presión sobre la CNT. Este antiguo reformista, que colaboró gustosamente con la dictadura de Primo de Rivera, se había convertido en el "Lenin español". Poseía un influyente periódico, *Claridad* y era el admirado Aquiles de las Juventudes Socialistas, así como el portavoz de las cada vez más numerosas tendencias izquierdistas en el seno de su partido y de la UGT. El "Lenin español" se opuso a la entrada de los socialistas en el gabinete del Frente Popular. Indalecio Prieto, en cambio, se convirtió en el portavoz del moderado sector burocrático y auspició la colaboración ministerial con los republicanos. Aunque Prieto controlaba nominalmente el partido, su influencia sobre los militantes de base parecía reducirse velozmente. La lucha entre caballeristas y prietistas alcanzó su punto crítico a mediados de la primavera, cuando ambas facciones no vacilaron en emplear la violencia física en los mítines del partido para resolver sus diferencias.

Pero la influencia de Largo Caballero resultó ser más aparente que real. En las elecciones internas del 30 de junio, Prieto fue apoyado por la mayoría del partido. Lo cierto es que los incondicionales del Partido Socialista eran, después de todo, simples moderados. Cuando Largo Caballero enarboló la bandera de la revolución social, los afiliados respondieron abandonando poco a poco el partido. Fue aún más significativo el rechazo de influyentes militantes a su iniciativa de permitir la fusión de las Juventudes Socialistas con las Juventudes Comunistas. Esta decisión se tomó bajo la influencia de Julio Álvarez del Vayo, amigo íntimo de Largo Caballero y que acababa de quedar deslumbrado por su reciente viaje a la Rusia estalinista. Álvarez del Vayo le convenció de que la fusión de los 200.000 jóvenes socialistas con los casi 50.000 jóvenes comunistas facilitaría la absorción de estos últimos por el socialismo, lo que fortalecería su posición en la pugna con Prieto y sus partidarios. También socialistas y comunistas catalanes, en una maniobra similar, se fusionaron bajo la dirección de Joan Comorera, fundando el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). Pero esta estrategia tuvo el efecto contrario del que se esperaba. En 1936 era un grave síntoma de ceguera política no darse cuenta de que los comunistas eran maestros en la técnica de absorción de

organizaciones independientes mediante el subterfugio de la “unidad”. Para el Partido Comunista de España, como para los partidos comunistas de otras partes del mundo, “unidad” era la palabra mágica que servía para someter a toda la izquierda bajo la férula de la política exterior rusa en general, y de los movimientos estalinistas locales en particular. Fueron los comunistas quienes asumieron el control de las Juventudes Socialistas y de los socialistas catalanes, despojando a Largo Caballero de sus más importantes apoyos. Ni la línea “revolucionaria” de éste ni la colaboracionista de Prieto tuvieron éxito. El Partido Socialista, falto de una política capaz de ilusionar a sus afiliados, fueran éstos revolucionarios o moderados, pasó desapercibido durante la primavera de 1936.

La trayectoria de la CNT y de la FAI, sin embargo, parecía seguir un curso diametralmente opuesto. Mientras que el Partido Socialista estaba desgarrado por las divisiones, la CNT se había unido con los Sindicatos de Oposición. Teóricamente la CNT estaba dispuesta a unificarse con la UGT, pero sus condiciones eran tan extremas que la colaboración a escala nacional era prácticamente imposible. Por otra parte, Largo Caballero aspiraba a conseguir no sólo el apoyo de su propio partido, sino también el de los anarcosindicalistas. Estos últimos, sin embargo, no olvidaban sus antiguas traiciones, e ignoraron los llamamientos a la unidad UGT-CNT. Su asistencia en el mes de mayo al Congreso Nacional de la CNT realizado en Zaragoza tampoco mejoró su posición. Pero la prueba definitiva llegaría con el conflicto laboral de junio de 1936 en Madrid, cuando 40.000 obreros de la construcción y 30.000 electricistas y ascensoristas, de afiliación cenetista y ugetista, se declararon en huelga. La huelga inquietó a los socialistas. Incluso muchos partidarios de Largo Caballero se mostraron reticentes a aplicar sus teorías revolucionarias. Los socialistas querían acabar la huelga cuanto antes, a ser posible a través de los métodos de negociación convencionales. La CNT, en cambio, exhortó a los trabajadores a conducir el conflicto a la manera revolucionaria. Así, cuando los recursos se acabaron, los huelguistas cenetistas aplicaron los principios prácticos del comunismo libertario: comían en restaurantes o cogían comestibles de las tiendas sin pagar. El empleo de este tipo de tácticas importunó a los dirigentes ugetistas, que se retiraron de la huelga. La CNT, por su parte,

continúo la protesta. Se produjeron numerosos enfrentamientos entre partidarios de ambas organizaciones, que se saldaron con varias muertes.

Estos sucesos desacreditaron definitivamente a Largo Caballero. Su política de colaboración entre UGT y CNT había fracasado. La coherencia anarquista ahuyentó a muchos de sus partidarios del ala izquierda; y la CNT vio confirmadas sus peores sospechas acerca de la sinceridad de las posiciones revolucionarias de Largo Caballero. Por otro lado, el carácter revolucionario de la huelga alarmó considerablemente a la clase media española, que incorporó al "Lenin español" a la lista de sus más odiados enemigos.

Es posible que la alarma fuera aún mayor dentro del mismo gobierno del Frente Popular. Mientras que la política de Prieto fortalecía una coalición entre republicanos y socialistas, la de Largo Caballero la debilitaba al negarse a aceptar cualquier ayuda del gobierno. En realidad, sus partidarios esperaban el descrédito de Azaña, que crearía las condiciones necesarias para que la izquierda socialista se apoderara totalmente del gobierno. Un "Lenin español" necesitaba de un "Kerenski español", papel que Largo Caballero adjudicaba a Azaña, muy en contra de la voluntad de éste. En el año 1936 estos dos políticos se detestaban mutuamente, pero Azaña se encontraba en una posición más favorable para frustrar las pretensiones de la izquierda socialista. En el mes de mayo decidió cambiar su cargo de Primer Ministro del gabinete del Frente Popular por el de Presidente de la República, liberándose así de las exigencias de la incómoda alianza ministerial y de las mociones de confianza parlamentarias. Azaña tenía ahora la posibilidad de escoger al primer ministro más adecuado para la coalición, y eligió como su sustituto a uno de sus más íntimos amigos y colaboradores, Casares Quiroga, un enfermo de tuberculosis que, en palabras de Gerald Brenan, "reaccionó ante el difícil encargo con un optimismo que podía ser considerado como irresponsable, si no fuera un síntoma de su enfermedad". Azaña mismo se volvió más apático, casi indiferente; su sueño de una República estable se había convertido en una pesadilla de la que parecía imposible despertar. Pero si de algo estaba seguro era de que si él estaba condenado a ser "Kerenski", se aseguraría personalmente de que Largo Caballero no fuera

su “Lenin”. Así, en vísperas del pronunciamiento militar más funesto de la historia de España, la política republicana sólo era coherente en un aspecto: no se permitiría al Partido Socialista, por lo menos a la facción de Largo Caballero, que llegara al gobierno. Dicho en otros términos, el gabinete del Frente Popular estaba empeñado en impedir que la clase obrera se hiciera con el poder. Las clases que más habían contribuido al triunfo del Frente Popular eran consideradas por los líderes de este gobierno como sus más importantes y peligrosos enemigos.

Mientras España se dirigía irremisiblemente hacia la guerra civil, los anarcosindicalistas celebraban el famoso Congreso Nacional de la CNT de mayo de 1936, en la ciudad de Zaragoza, que se inauguró el Primero de Mayo en el parque Iris y duró diez días. Ha sido considerado como una de las reuniones más memorables de la historia de la CNT. Asistieron aproximadamente 650 delegados que representaban a 982 sindicatos y 550.000 trabajadores. El Congreso acabó con la división interna de la organización, al reincorporar en su seno a los Sindicatos de Oposición. Pero, sobre todo, afrontó uno de los más importantes debates en la historia de las organizaciones obreras acerca de la naturaleza de una sociedad comunista libertaria.

Prácticamente todos los oradores del Congreso eran conscientes de que España estaba entrando en una situación revolucionaria. Los debates aparentemente utópicos en torno a las formas de organización de la sociedad que emergería de una revolución, adquirieron en esta ocasión un cariz práctico e inmediato. Entre agitadas disputas sobre asuntos menores (normas y procedimientos del Congreso o el destino de los Sindicatos de Oposición dentro de la organización) el Congreso encontró tiempo para tratar asuntos tan variados como los problemas de organización comunal o los derechos sexuales, pero tal vez el más apasionante fue el de “La Concepción Confederal del Comunismo Libertario”. Aunque las resoluciones que se tomaron al respecto no merecieron la atención de la prensa tradicional (que prefería excitar al público con sus informaciones sobre los debates acerca del “amor libre”), este debate constituiría una de las más relevantes manifestaciones de los principios libertarios de la CNT.

La resolución fue bien cuidadosa al negar que tratara de “predecir la sociedad del porvenir (…) ya que la mayoría de las veces entre la teoría y la práctica existe un verdadero abismo”. La revolución que conduciría a esa sociedad nueva no debía ser un súbito acto de violencia, sino una acción revolucionaria que actuara “como fenómeno psicológico en contra de un estado de cosas que oprime las aspiraciones y necesidades individuales”. La violencia no era el fin de la revolución, sino sólo el paso inicial para la abolición de “la propiedad privada, el Estado, el principio de autoridad y, por consiguiente, las clases que dividen a los hombres en explotadores y explotados, oprimidos y opresores”. La resolución, con su énfasis en la revolución como fenómeno psicológico y en la aversión a la autoridad, tenía un carácter claramente anarquista. Esta orientación, sin duda, habría resultado inadmisible según la “científica” y “objetiva” retórica del aparato marxista.

La resolución final describía con detalle las futuras organizaciones comunales. La planificación económica “estará basada en el productor, en el individuo como célula, como piedra angular de todas las creaciones sociales, económicas y morales”, y su organización localizada en el lugar de trabajo, el sindicato y la comuna geográfica. No tienen por qué existir contradicciones entre el individuo y las entidades comunales libres. “De acuerdo con el principio fundamental del comunismo libertario, todos los hombres se aprestarán a cumplir sus deberes voluntarios —que se convertirán en derechos verdaderos cuando el hombre trabaje en libertad— con la colectividad, de acuerdo con sus fuerzas y sus capacidades; por su parte, la comuna cumplirá la obligación de cubrir sus necesidades”. El famoso eslogan comunista “cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades” sería el principio que guiaría a la comuna para la distribución de los recursos y del trabajo humano.

La resolución reconocía que “los primeros tiempos de la revolución” no serían fáciles. Una vez superadas las primeras dificultades mediante el “esfuerzo y sacrificio individual y colectivo”, la nueva sociedad se estructuraría en una Conferencia Nacional de Comunas, que abarcaría toda clase de colectivos. Naturistas, nudistas o los mismos anarcosindicalistas tradicionales serían libres para crear sus propias formas de organización

comunal. Esto debió resultarles divertido a los periodistas burgueses de hace sesenta años, pero en la actualidad, cuando nuestro alejamiento de la naturaleza nos ha conducido a la crisis ecológica moderna, el espíritu de estas líneas resulta casi profético. Con el tiempo “la nueva sociedad conseguirá dotar a cada comuna de todos los elementos agrícolas e industriales precisos para su autonomía, de acuerdo con el principio biológico que afirma que es más libre el hombre —en este caso la comuna — que menos necesita de los demás”.

La resolución confiaba generosamente en la capacidad del pueblo para dirigir la sociedad de una forma libre y directa. “Estas funciones no tendrán carácter ejecutivo ni burocrático. Todos, salvo aquéllos que desempeñen funciones técnicas o meramente estadísticas, cumplirán simplemente su cometido como productores, reuniéndose al final de la jornada de trabajo para discutir las pequeñas cuestiones que no necesiten del refrendo de las asambleas comunales”. Nada de sistemas jerárquicos, ni de representantes investidos de poder para tomar decisiones políticas; nada de división de trabajo como línea organizativa dentro de un sistema autoritario. Según las conclusiones del Congreso, incluso los enemigos de hoy serán convencidos, a la larga, por los ideales anarquistas de amor, libertad y educación. “El comunismo libertario es incompatible con todo régimen punitivo, hecho que implica la desaparición del actual sistema de justicia correccional y de todos sus instrumentos de castigo, empezando por las cárceles”. Puesto que “el hombre no es malo por naturaleza, y la delincuencia es el resultado lógico del estado de injusticia social en que vivimos”, es evidente que “cuando sus necesidades estén cubiertas, y se le proporcione una educación racional y humana, [las causas de la injusticia social] desaparecerán”.

La revolución no pretende la destrucción de la familia, que, bien entendida, fomenta la solidaridad en la sociedad. El comunismo libertario “proclama el amor libre, sin más regulación que la voluntad del hombre y de la mujer, garantizando a los hijos la salvaguardia de la colectividad”.

Los delegados al Congreso aprobaron por unanimidad esta resolución. La moción fue redactada, discutida y adoptada no en las “ilustradas” décadas de 1960 y 1970, sino en 1936, en una España severamente patriarcal y católica. En la actualidad resulta difícil, para una generación

urbana y moderna, comprender hasta qué punto estos obreros y obreras anarcosindicalistas se estaban anticipando a su época. La tragedia del movimiento que ellos representaban fue ver sus sueños ahogados en sangre y postergados al más remoto olvido de la historia. Otras gentes, en otras épocas, se verían obligadas a redescubrirlos, sin saber que antes habían constituido los anhelos y las esperanzas de innumerables obreros y campesinos.

Cuando finalmente los delegados dieron por finalizado el Congreso —muchos de ellos morirían pocos meses después en la Guerra Civil— la perspectiva de esta sociedad parecía pasar por alto muchos problemas prácticos. Si había algo de "utópico" en el congreso de Zaragoza, no eran sus resoluciones acerca de una sociedad comunista libertaria sino, como señala Vernon Richards, "que se omitiera toda discusión sobre los problemas que se le plantearían a la Organización durante el período revolucionario". Más específicamente,

> cuál sería la actitud de la Organización (el día de mañana,) cuando se encontrara al frente del movimiento revolucionario. Para los militantes de base quizá la respuesta era sencilla: la revolución social. Pero a la luz de lo que habría de acontecer, para los dirigentes cenetistas el asunto no resultaba tan sencillo. Sin embargo, estos problemas y estas dudas no se plantearon siquiera en el congreso, y debido a esta grave omisión, o tal vez a la falta de democracia revolucionaria dentro de la organización, los trabajadores revolucionarios habrían de pagar poco después un precio exorbitante y doloroso.

Ya en marzo, apenas unas semanas después de que el Frente Popular llegara al poder, los generales y políticos que protagonizarían el levantamiento del 17 de julio se reunieron secretamente en Madrid para discutir sus planes. El general José Sanjurjo, responsable del pronunciamiento de 1932, parecía ser el líder natural para la rebelión. Sanjurjo vivía en Portugal, pero desde el otro lado de la frontera se mantenía bien informado de todo lo que sucedía en España. Difícilmente

podría sostenerse una conspiración militar aislada. Era necesario conseguir apoyo político. Sanjurjo, lo mismo que varios oficiales implicados en la conspiración, era monárquico. Nadie parecía más indicado para exponer la causa entre los monárquicos civiles que José Calvo Sotelo —ex ministro de Hacienda del gobierno de Primo de Rivera—, que era considerado como un formidable orador y un hábil político. Calvo Sotelo había realizado varios viajes por Europa, donde descubriría su profunda afinidad con las corrientes ideológicas fascistas. En las Cortes era un reconocido portavoz de los monárquicos, quizás de toda la derecha militante. En el mes de junio sus discursos habían conseguido desestabilizar los debates parlamentarios: admitía las ideologías fascistas, atacaba la política "antimilitarista" del gobierno, e increpaba personalmente y sin ningún recato a los funcionarios republicanos. La izquierda lo veía como un provocador, considerándolo la auténtica encarnación del fascismo en España.

En estas primeras reuniones conspiradoras, la presencia de José Antonio Primo de Rivera parecía tener un carácter más simbólico que real. Durante su estancia en la cárcel, el hijo del antiguo dictador se había convertido en un héroe para la extrema derecha. De entre todos los grupos carlistas, conservadores y clericales, la Falange iba a surgir como la columna vertebral de lo que más adelante se denominaría la causa "nacional", y José Antonio, después de su ejecución en tiempos de la Guerra Civil, se iba convertir en el mártir de ese movimiento político. Detrás de políticos y militares, estaba atrincherada la riqueza y el poder de la oligarquía española: los grandes terratenientes, industriales y aristócratas, el clero y algunos sectores de la pequeña burguesía.

Pero la verdadera responsabilidad de la rebelión recayó sobre los generales, y el éxito de la misma requería de una cuidadosa planificación. El coronel Valentín Galarza era el representante de Sanjurjo, y se unió al general Mola, considerado como liberal; al coronel Yagüe, de la Legión Extranjera; al general Gonzalo Queipo de Llano, republicano moderado que abandonó su endeble lealtad a la República cuando triunfó el Frente Popular; a los generales Villegas y a Fanjul, a quienes correspondió, para su mala suerte, la guarnición de Madrid; al general Goded y, sólo posteriormente, al general Francisco Franco. El gobierno tenía presente la

posibilidad de un pronunciamiento militar, y había trasladado discretamente a los oficiales reaccionarios a los destinos más remotos. Franco, por ejemplo, había sido destinado a las Islas Canarias, y Goded a las Baleares. El ministro de la Guerra aprobó una modificación del reglamento que iba en detrimento del tradicional ascenso por antigüedad, designando para los puestos claves a oficiales de reconocida simpatía hacia la República. Desgraciadamente, Mola, que era uno de los máximos responsables de la conspiración, fue destinado a la región militar de Pamplona, en el corazón de Navarra, donde pudo contar con el apoyo del carlismo.

El levantamiento fue planeado para el mes de julio, entre los días 10 y 20, y se haría coincidir con la fecha en que Sanjurjo iba a regresar a España en avión para tomar posesión del mando de las fuerzas rebeldes. Mola tomaría el mando de las guarniciones de Pamplona y Burgos; Villegas de las de Madrid; a Cabanellas le corresponderían las fuerzas de la tradicionalmente anarquista Zaragoza; a Goded las de Barcelona, y a Queipo de Llano las de Sevilla. Otros oficiales más jóvenes estarían al mando en otras ciudades. Franco volaría al Marruecos español, donde tomaría el mando del ejército de África. Había un acuerdo general para la formación de un Directorio integrado por los jefes militares de la conspiración, que tendría el poder de dictar leyes que luego serían ratificadas por una asamblea constituyente, elegida por votación restringida. Hasta entonces el pronunciamiento parecía inspirado más bien en el ejemplo de Primo de Rivera que en la influencia hitleriana, aunque gradualmente iba a ir adquiriendo rasgos fascistas. La sangrienta Guerra Civil, la Falange, y quizás el carácter vengativo de Franco, que reemplazaría a Sanjurjo después de que éste falleciera en un accidente de aviación, conferirían al movimiento un carácter más maligno que el de cualquier guerra civil moderna de la Europa occidental.

El levantamiento de los generales había sido previsto por los portavoces de la izquierda varios meses antes de que ocurriese. Ya el 14 de febrero, la CNT había publicado un manifiesto profético advirtiendo que día a día “aumenta la sospecha de que elementos de la derecha se preparan para asestar un golpe militar. Marruecos parece ser el punto central de la conspiración. La insurrección depende del resultado de las elecciones. El

plan se pondrá en marcha si la izquierda triunfa. Nosotros no apoyamos a la República, pero contribuiremos con todas nuestras fuerzas a la lucha contra el fascismo, con el fin de derrotar a los tradicionales opresores del proletariado". Pero esto, por descontado, eran simples conjeturas que nos explican algo más sobre la orientación que la CNT seguiría en el curso de la Guerra Civil y de su incapacidad para formular una política acerca de las consecuencias de su apoyo electoral al Frente Popular. Los oficiales republicanos ofrecieron al gobierno datos más concretos, subrayando, ya en el mes de abril, que se venía tramando una conspiración militar. El primero de mayo, Prieto (con un extraño sentido de la premonición) no sólo había llamado la atención sobre las posibilidades de una rebelión militar, sino que había señalado rotundamente a Franco como el más probable candidato a dictador de España. El gobierno estaba bien enterado de las operaciones de Fanjul en Madrid. Incluso algunos diputados conservadores a quienes Calvo Sotelo había intentado reclutar para la conspiración, informaron sobre este asunto al gabinete.

A medida que aumentaban las evidencias, también aumentaba el inmovilismo del gobierno ante la inminente crisis. En efecto, poco antes de la rebelión, Azaña aseguró públicamente a periodistas y colegas que la inquietud general era pasajera y que pronto se viviría un clima de mayor tranquilidad. Sin embargo, la tensión continuó aumentando. El 11 de julio, un grupo de falangistas se apoderó de una estación de radio en Valencia y transmitió el siguiente mensaje: "Radio Valencia. La Falange española se ha apoderado de la emisora por la fuerza de las armas. Mañana sucederá lo mismo en todas las emisoras de radio de España". Este hecho fue seguido, sólo unas horas más tarde, por un aviso confidencial a Casares Quiroga sobre la inminencia de un levantamiento militar, al que el Primer Ministro respondió, impertinentemente: "¿Así que los oficiales se van a levantar? Muy bien, señores, que se levanten. Yo, por el contrario, me voy a acostar". Al día siguiente, 12 de julio, un teniente socialista que pertenecía a la Guardia de Asalto fue asesinado a balazos por los pistoleros falangistas. Pocas horas después, los enfurecidos compañeros de la víctima protagonizaron una dramática venganza. Se presentaron en un coche oficial en la casa de Calvo Sotelo, "detuvieron" al líder parlamentario de la

derecha y se lo llevaron, matándole y depositando su cuerpo en un cementerio de Madrid. Los generales ya tenían su mártir. La fecha de la insurrección se adelantó un día, aprovechando la conmoción creada por los asesinatos; el 17 de julio los comandantes fueron puestos en estado de alerta.

En Madrid los partidos izquierdistas, dirigidos por Largo Caballero, solicitaron armas al gobierno, pero éste rechazó firmemente su demanda. Hasta el preciso momento de la rebelión, cuando las emisoras ocupadas por el ejército en Marruecos transmitían ya la noticia del pronunciamiento, el gobierno de los republicanos liberales todavía se dirigió al país "nuevamente para confirmar la absoluta tranquilidad que reinaba en la Península" y para informar a las organizaciones obreras que debían "garantizar la normalidad de la vida cotidiana, dando un ejemplo de serenidad y de confianza a las fuerzas militares del gobierno" (una "fuerza militar" que el Frente Popular ya no poseía). En tanto que el gobierno exigía pasividad y "serenidad" a los partidos obreros, los comités nacionales del Partido Socialista y del Partido Comunista de Madrid publicaban por su cuenta una declaración conjunta juzgando que se trataba de un momento difícil, pero de ninguna manera desesperado. La declaración concluía con un conmovedor requerimiento: "El gobierno ordena y el Frente Popular obedece". A los trabajadores de Madrid se les manifestó que "el gobierno está seguro de contar con suficientes recursos para vencer el criminal atentado". En respuesta al asesinato de Calvo Sotelo, el gobierno había clausurado, no sólo las sedes de los grupos monárquicos y carlistas de la capital (presumiblemente para evitar desórdenes), sino también los centros anarquistas. Este intento de neutralizar a los elementos más activos del movimiento obrero casi aseguraba que Madrid permanecería "tranquila". Pero en la capital la situación se volvió confusa: la CNT, "en pie de guerra desde la huelga de la construcción", observan Pierre Broué y Émil Témime en su perspicaz relato de *La Revolución y la Guerra de España*, "decidieron utilizar la fuerza para reabrir los locales cerrados por la policía y comenzaron a requisar vehículos y a reunir armas. El secretario del Comité Nacional, David Antona, fue liberado de la prisión en la mañana del 19 de julio; Antona se dirigió al

Ministerio de la Gobernación y amenazó con el envío de hombres para liberar a los militantes que aún permanecían en la cárcel". Los socialistas de izquierda desenterraron y distribuyeron las armas que tenían ocultas desde los sucesos de octubre de 1934. Los obreros comenzaron a patrullar las calles. Aun así, la situación en Madrid era extrañamente tranquila. No se efectuaron asaltos a los cuarteles, y un regimiento rebelde pudo avanzar para reunirse en el norte con las fuerzas de Mola, sin aparente oposición. Los obreros de la construcción de la UGT acataron dócilmente las decisiones del Ministerio del Trabajo y volvieron a ocupar sus puestos. La CNT proseguía las huelgas. En realidad las dos organizaciones habían dado órdenes de decretar una huelga general. No se registraron enfrentamientos importantes en Madrid hasta dos días después del pronunciamiento, cuando a través de altavoces colocados en las calles se anunció que el proletariado de Barcelona había salido victorioso de una lucha abierta con las tropas de Goded.

Fue en la anarcosindicalista Barcelona —y prácticamente sólo en esa ciudad— donde se organizaron acciones serias, y donde se llevaron a cabo los más denodados esfuerzos para enfrentarse a la rebelión militar. En lugar de emitir declaraciones tranquilizadoras como las de los partidos socialista y comunista de Madrid, la CNT y la FAI movilizaron a toda la clase obrera de la ciudad, poniéndola en guardia. Los trabajadores cenetistas llenaban las sedes sindicales solicitando armas. La CNT y la FAI habían formado un comité de enlace con la Generalitat para enfrentarse conjuntamente a los insurrectos, pero Companys declaró que no disponía de armas para los trabajadores. Un grupo anarcosindicalista de trabajadores del puerto, dirigido por Juan Yagüe, robó las armas de los barcos fondeados en el puerto y las depositó en la sede del sindicato. La sede fue rodeada de inmediato por la policía. Pero después de complicadas negociaciones algunas armas fueron devueltas para evitar un conflicto con la policía. Muchos de los miembros del cuerpo policial simpatizaban con la causa de los trabajadores, y colaboraron posteriormente en la lucha contra las tropas rebeldes. En la tarde del 18 de julio los cenetistas expropiaron las armas que encontraron en todas las armerías que pudieron localizar; también se llevaron la dinamita de los astilleros. Algunos Guardias de Asalto

simpatizantes distribuyeron armas que sacaron de sus cuarteles. Desde el local del sindicato de la construcción, que se había convertido en una especie de cuartel general de la CNT, se diseñaban los distintos planes para la resistencia. Por las calles circulaban automóviles particulares con la inscripción "CNT-FAI", como una advertencia de que los anarcosindicalistas estaban preparados para la lucha ante un levantamiento. Los trabajadores, a menudo actuando por iniciativa propia, comenzaron a detener a conocidos falangistas y partidarios de la derecha, y alertaban sobre cualquier transeúnte sospechoso que merodeara por los edificios gubernamentales y los cuarteles. Los trabajadores de la CNT hacían guardias en sus sedes las veinticuatro horas del día, mientras por toda la ciudad sus compañeros, con armas improvisadas, permanecían alerta a toda acción sospechosa del ejército.

El 18 de julio, los generales declararon su pronunciamiento y en las primeras horas de la mañana siguiente los soldados de la guarnición de Barcelona, quizás la más numerosa de España, comenzaron a abandonar los cuarteles para ocupar puntos estratégicos de la ciudad. Había trabajadores apelotonados detrás de las barricadas, francotiradores apostados en las azoteas, y una inmensa cantidad de gente dirigiéndose a los soldados, mientras les mostraban las escasas armas que poseían, y pidiéndoles que no dispararan sobre sus hermanos y hermanas proletarios. Donde estas súplicas fueron desoídas, la tropa se encontró con la furiosa resistencia armada de los trabajadores, o para su absoluta estupefacción, con una abrumadora multitud que, haciendo caso omiso a la superioridad de su armamento, se precipitó sobre ella. El levantamiento de los generales había comenzado, pero también lo había hecho la revolución social libertaria.

# 11: Conclusiones finales

Los logros de esta revolución social libertaria fueron impresionantes; los intentos por abortarla, por el contrario, terminarían resultando trágicos. La muerte de Sanjurjo en el avión en el que regresaba a España, que dejó a Franco al mando de todo el levantamiento militar, la transformación de la guerra en la península en un conflicto directamente vinculado a la situación política europea, o los tres años de terrible lucha interna que tuvo que soportar España son acontecimientos recogidos en todas las historias tradicionales de la Guerra Civil española. Sin querer entrar ahora en una discusión sobre el colectivismo anarquista y sobre las experiencias del control de la industria por parte de los trabajadores que se desarrollaron en el último semestre de 1936, sí debemos tratar de evaluar los acontecimientos que han sido recogidos en este volumen. ¿Qué lugar ocupa el movimiento anarquista español en la historia del socialismo proletario? ¿Cuáles fueron sus potencialidades y sus limitaciones? ¿Qué relevancia pueden tener para los movimientos radicales de nuestro tiempo las formas de organización de la CNT y la FAI?

Todavía hoy, mucho tiempo después de que el movimiento anarquista español fuera aniquilado por el franquismo, todas estas cuestiones continúan abiertas. Lo cierto es que todo lo que sucedió durante aquellos años aún nos fascina, no sólo como un viejo sueño o un trágico recuerdo, sino como un apasionante experimento de teoría y práctica libertaria. Aunque durante sus “años heroicos” el anarquismo español era prácticamente desconocido por el movimiento radical europeo, no hay duda de que constituyó uno de sus momentos de máximo esplendor, que puso punto y final al primer siglo de historia del socialismo proletario.

El despertar de la clase obrera, en especial la aparición del proletariado parisiense como fuerza revolucionaria en las barricadas de junio de 1848, cambió por completo el panorama de la vieja teoría radical. Hasta aquel momento las perspectivas críticas sobre la sociedad, en líneas generales, describían un gran conflicto popular entre una fuerte minoría opresora y una masa de oprimidos. Por lo general, las ideas radicales de entonces concebían los distintos sectores de la sociedad de manera muy imprecisas. Bajo el término "pueblo" *(le peuple)* se encerraba un amplio grupo de diversos estratos sociales históricamente antagónicos: artesanos, obreros de fábrica, campesinos, profesionales, pequeños comerciantes, pequeños industriales… unidos por la permanente opresión a la que les sometían monarcas, aristócratas, ricos comerciantes, financieros y patronos. Por consiguiente, "el pueblo" estaba más unido por la realidad social a la que se oponía, que por auténticos valores comunitarios donde los intereses particulares coincidieran con los generales.

A comienzos de la Revolución Francesa de 1789, "el pueblo" era una coalición más que una clase social. A medida que el proceso revolucionario se fue desarrollando, esa coalición comenzó a desintegrarse. Los elevados ideales de libertad e igualdad fueron incapaces de ocultar los antagonismos que enfrentaban a artesanos y comerciantes, o a los trabajadores de las fábricas y a sus patronos. Asimismo, estos ideales resultaron insuficientes para mitigar el estrecho localismo del campesinado o las egoístas aspiraciones de la clase profesional. La "nación", el "patriotismo" y las virtudes republicanas, entre las que estaba el concepto de "ciudadanía", apenas conseguían disimular las profundas divergencias que existían entre los distintos intereses que formaban el "Tercer Estado".

El levantamiento del proletariado de Paris en junio de 1848 reemplazó la lucha popular por la lucha de clases, acabando con mitos como "el pueblo", "la nación" o "el ciudadano". Se hizo evidente entonces que los enfrentamientos entre las coaliciones populares y las élites preindustriales formaban parte de la lucha de clases. Un socialismo "científico", desprovisto de contenidos éticos o morales, comenzaba a sustituir al socialismo utópico y populista, profundamente ético, que había nacido con la Revolución Francesa. El concepto de "plusvalía" constituye un

descubrimiento único; la burguesía se apropia del superávit producido por los trabajadores y de los mismos trabajadores, no mediante la fuerza, como sucedía antaño, sino a través del intercambio de fuerzas de trabajo por salarios que se inscribe dentro del libremercado. Los trabajadores ya no eran ni vasallos ni esclavos; jurídicamente eran "libres", y por consiguiente formaban un nuevo tipo de clase oprimida sin precedentes históricos. Sin acceso a los medios de producción, que estaban en poder de la burguesía, los trabajadores gozaban de "libertad" para trabajar o, por supuesto, para morirse de hambre. Aunque la "libertad" se convirtió en una realidad política, en lo que concierne al aspecto económico seguía siendo una quimera. La mera posesión de los medios industriales de producción, inaccesibles ahora para los artesanos tradicionales, propició la aparición de la burguesía; el simple mecanismo del libremercado permitía someter al proletariado mediante la expropiación y la explotación. En esta sociedad, todos los individuos eran "libres" e "iguales", pero esa misma "libertad" reconocía la propiedad privada sin restricciones, y la "igualdad" implicaba el justo intercambio de fuerza de trabajo por salarios, intercambio que encubría, en realidad, la servidumbre de la clase obrera en el capitalismo. [43]

El libremercado, inevitablemente, provocó también la radicalización del proletariado. El progresivo avance de la competencia, que hacía que cada uno de los "empresarios libres" tratara de obtener mayores beneficios que los demás, implicaba una despiadada guerra de precios y una acumulación de capital que, paralelamente, conducía a la reducción general de los salarios de los obreros. El empobrecimiento de la clase obrera terminaría, en teoría, por arrastrarla a la revolución social. Marx nunca creyó que la acción revolucionaria del proletariado pudiera originarse por el compromiso con elevados ideales morales. "Cuando los ensayistas socialistas atribuyen al proletariado esta histórica función revolucionaria", dice Marx,

> no es […] porque consideren a los proletarios como dioses. Más bien al contrario. Dado que la abstracción de la naturaleza humana —incluso de la imagen de la naturaleza humana— es casi total en el proletariado plenamente desarrollado (el énfasis es mío), puesto que

> las condiciones de vida del proletariado reflejan las condiciones de vida de toda la sociedad actual en toda su intensa deshumanización; el individuo se ha perdido a sí mismo en el proletariado, y no sólo ha cobrado consciencia de esa pérdida, sino que se siente impulsado a rebelarse contra esa misma deshumanización […] No en vano asiste a la dura pero instructiva escuela del trabajo diario. La cuestión no es lo que éste o aquél proletario, o el proletariado en general, considere como su objetivo. El problema está en comprender qué es el proletariado, y de acuerdo a esto, qué es aquello que le impulsará a actuar.[44]

Marx atribuía esta función revolucionaria al "proletariado plenamente desarrollado", no al campesinado que ha sido arrancado de su medio rural o a los empobrecidos artesanos, sino al estrato social con el que la clase capitalista iba a hacer funcionar las fábricas y los talleres de la sociedad industrial. A menos que los acontecimientos le forzaran a reconocer las cualidades radicales y la potencia insurreccional de aquellos elementos desclasados, por lo general Marx los consideraba como la *alte Scheisse* (la vieja mierda) que había sobrevivido al desarrollo inicial del capitalismo industrial. Las esperanzas del "socialismo proletario" se fundaron principalmente en el "proletariado desarrollado" de la industria moderna, "una clase disciplinada y en crecimiento, unida y organizada por el mismo mecanismo del proceso de producción capitalista". El socialismo proletario, en realidad, pretendía desmitificar la idea de "pueblo" como masa homogénea y revolucionaria, y demostrar que creencias tales como "libertad" e "igualdad" no podían separarse de las condiciones materiales de la vida social.

Ese mismo proceso de desmitificación generaría varios mitos engañosos que demostrarían los límites del socialismo proletario. Las barricadas de junio de 1848 no habían sido levantadas por un proletariado industrial "disciplinado, unido y organizado por el mismo mecanismo de producción capitalista", sino por artesanos, autónomos y un inclasificable grupo de trabajadores de todo tipo: desempleados urbanos y rurales, taberneros, camareros y prostitutas; en definitiva, ese tipo de marginados y población

“flotante” a la que la clase dominante de la sociedad francesa llamaba “la canaille”. Elementos semejantes a éstos levantarían las barricadas de la Comuna de París un cuarto de siglo más tarde. Y fue precisamente la industrialización que sufrió Francia después de la Comuna, y el nacimiento simultáneo del proletariado desarrollado, hereditario, “disciplinado, unido y organizado por el mismo mecanismo de producción capitalista”, lo que silenció el “canto del Gallo Rojo” francés que en el siglo XIX había propagado la Revolución por toda Europa. Lo mismo podría decirse del proletariado ruso de 1917, reclutado en el campo, y que era cualquier cosa excepto una clase obrera “desarrollada”.

Las grandes insurrecciones proletarias, en las que se fundaba el rígido concepto marxista de socialismo proletario, se abastecieron principalmente del estrato social que no pertenecía ni a la sociedad industrial ni a la sociedad rural, sino que estaba situado entre ambas. Durante casi un siglo, el socialismo proletario ha sido una fuerza revolucionaria no porque un proletariado bien organizado, consolidado y hereditario hubiese aparecido de la mano del desarrollo industrial, sino como consecuencia del mismo proceso de formación del proletariado. Los campesinos desterrados y los artesanos fueron arrancados de un sistema preindustrial en desintegración y arrojados a un medio industrial urbano estandarizado, deshumanizado y mecanizado. Desmoralizados hasta la desesperación, desarraigados espiritual y físicamente, fueron estos hombres los que integrarían la Comuna de París, los Soviets de Petrogrado y la CNT de Barcelona.

La misma condición “subdesarrollada” del proletariado, formado por antiguos campesinos y artesanos o por los hijos de éstos, implicaba un carácter indómito y audaz que el sistema industrial y la jerarquía de las fábricas se encargarían de atenuar en sus descendientes: el proletariado de las décadas de 1940 y 1950, una clase que no conocía más mundo que el industrial. Para esta clase no existían tensiones entre el medio urbano y el rural, entre el anonimato de la ciudad y el sentido de responsabilidad compartida de la pequeña comunidad, entre el ritmo mecanizado de las fábricas y los ritmos naturales de la tierra. Las premisas del proletariado en esta etapa posterior se fundaron en torno a la validez de la fábrica como escenario de la actividad productiva, la jerarquía industrial como sistema de

autoridad técnica y la burocracia del sindicato como estructura de la autoridad de clase. La era del socialismo proletario llegó a su fin después de un proceso gradual, durante el cual el proletariado "subdesarrollado" y supuestamente "primitivo" se convirtió en "desarrollado" y "maduro".

En realidad, el proletariado se convirtió, psicológica y espiritualmente, en un elemento más del mismo sistema que, según el marxismo, estaba destinado a derrocar. El socialismo proletario se transformó, como era de esperar, en un movimiento institucionalizado y sus demandas se limitaron al terreno económico. Se organizó en partidos de trabajadores que preconizaban un liberalismo pragmático, que incluso contaminaba la sensibilidad intelectual de la clase trabajadora hacia los ideales revolucionarios. Por último, de forma más desastrosa aún, el proletariado siguió la tendencia, inherente al capitalismo tradicional, de la planificación económica, la política centralizada y el control industrial, así como de la regulación jerárquica y la nacionalización de la economía. Los ideales socialistas de libertad, despojados por el socialismo científico de su contenido ético, y arrinconados por el pragmatismo de la planificación centralizada y la nacionalización de la economía, se transformaron en un mero dispositivo ideológico para movilizar el apoyo popular.

El anarquismo español no compartió el destino histórico del socialismo proletario. Desde luego, podría muy bien haber constituido el último peldaño en el desarrollo del socialismo proletario revolucionario, antes de que éste se convirtiera en una simple variante de la ideología del Estado capitalista. En cualquier caso, la revolución libertaria de julio de 1936 parecía haber concentrado muchas de las nobles cualidades que se habían visto sólo parcialmente en las anteriores rebeliones del movimiento obrero. En julio de 1936, la CNT y la FAI eran lo suficientemente independientes, especialmente si los comparamos con los socialistas y el POUM, como para convertir Barcelona en el centro revolucionario más importante de España. Ninguna otra área urbana tan extensa lograría los objetivos sociales del sindicalismo revolucionario, la colectivización de la industria y la adopción de formas comunales de administración de la tierra, de la forma en que lo hizo Barcelona y sus alrededores. La descripción de Orwell de la ciudad de aquellos días produce aún una especie de embriaguez: las plazas y las

avenidas engalanadas con banderas rojas y negras, el pueblo en armas, las consignas, las conmovedoras canciones revolucionarias, el entusiasmo febril por la creación de un mundo nuevo, el fulgor de la esperanza y del heroísmo.

Con todo, las limitaciones de aquel proceso se hacen dolorosamente patentes al hacernos la siguiente pregunta: ¿se habría logrado una sociedad anarcosindicalista en 1936 si el movimiento de los generales hubiese sido aplastado? En principio, muy pocos teóricos anarquistas serios lo creen así. Es posible que se hubiese logrado, eso sí, una economía mixta, aunque resulta difícil calcular el tiempo que podría haber resistido el entusiasmo de los más ascéticos anarquistas a las tentaciones y demandas de la vecina economía de mercado. Saber si una revolución comunista podría darse en un país industrialmente subdesarrollado —o determinar, incluso, si podría tener un éxito temporal bajo unas condiciones de vida precarias— no ha constituido nunca un tema de discusión entre Marx y los anarquistas.[45] Determinar si esa revolución sería capaz de establecer una sociedad comunista permanente, es, sin embargo, un problema bien distinto. En el libro *El organismo económico de la revolución*, escrito por el prestigioso teórico anarquista Diego Abad de Santillán poco antes de la sublevación militar, y ampliamente discutido en el ambiente anarquista español, se destaca la importancia de esta cuestión:

> Somos conscientes del hecho indudable de que el grado de desarrollo económico y las condiciones materiales de vida influyen poderosamente sobre la psicología humana. Si enfrentado a la inanición, el hombre se vuelve egoísta e insolidario, en la abundancia puede tornarse generoso y adoptar una posición amistosa y solidaria. Todos los períodos de miseria son períodos de embrutecimiento de costumbres, de regresión moral y de lucha feroz de todos contra todos por el alimento diario. En ese sentido, puede decirse que la economía influye seriamente en la vida espiritual del individuo y en la convivencia social. Y es por eso precisamente que tenemos como objetivo establecer las mejores condiciones económicas posibles, aquéllas que constituirán una garantía para la

> colaboración y la igualdad entre los hombres. No dejaremos de ser anarquistas al sentir el estómago vacío; pero tampoco es que nos guste andar con el estómago vacío.

El problema de la escasez material no se reduce a aquello de “El hombre es un lobo para el hombre”, y jamás podrá convertirse en un verdadero hermano para el hombre si no es en condiciones de seguridad material; quizás sea más significativo que los seres humanos pueden descubrir, en la abundancia, qué es lo que no necesitan. No me refiero sólo a las necesidades materiales sino también a las espirituales; como por ejemplo, la competencia, el dinero e incluso los contratos y las instituciones sociales que suscriben sistemas igualitarios basados en la reciprocidad. Cuando el individuo se libere del miedo a la inseguridad material y a la pura necesidad, podrá avanzar desde el reino de la “justicia” y la “igualdad” al de la más alta moral, que es el reino de la libertad, donde el pueblo trabajará de acuerdo con sus posibilidades y recibirá lo que necesite. Finalmente, cuando la abundancia económica satisfaga las necesidades individuales con el mínimo esfuerzo, el individuo podrá disponer de tiempo libre que le permita cultivarse y participar plenamente en la administración de la vida social.

El anarquismo español puso de manifiesto hasta qué punto el socialismo proletario podía contribuir al alcance de un ideal de libertad fundamentalmente moral. A partir de una coyuntura favorable, un movimiento revolucionario de obreros y campesinos había sido capaz de hacer una revolución libertaria, colectivizando la industria y dejando la dirección de las fábricas y la administración de las tierras en manos de quienes trabajaban en ellas. La acción revolucionaria que aplastó la rebelión militar en las ciudades más importantes de España, y que asumió el control directo de la economía, aunque bajo circunstancias muy condicionadas por hechos externos, había actuado a su vez como un poderoso acicate espiritual, alterando de modo apreciable las actitudes y opiniones de los sectores menos comprometidos de la clase oprimida. De este modo, el socialismo proletario había impulsado a la sociedad española más allá de sus limitaciones materiales, introduciéndola en un experimento utópico de

colosales proporciones, que Burnett Bolloten, con acierto, describe como "una revolución social de gran alcance […] más profunda en muchos aspectos que la revolución bolchevique en sus primeras etapas". No sólo se logró que los trabajadores se hicieran con el control de las industrias, y que los campesinos formaran colectividades libres, sino que en muchos casos se abolió el uso del dinero, y los principios comunistas más radicales sustituyeron a los conceptos burgueses de trabajo, distribución y administración.

Pero, ¿qué sucedería cuando la vida cotidiana comenzara a sufrir las carencias económicas y los problemas materiales impuestos no sólo por la Guerra Civil, sino derivados también del escaso desarrollo de la técnica? "El comunismo será el fruto natural de la abundancia", había advertido el Abad de Santillán en la Primavera de 1936, "y mientras ésta no sea posible, o allí donde no sea realizable, sólo será un ideal". ¿Podría el ardor revolucionario de la CNT y de la FAI superar los obstáculos que le imponían la escasez, la carestía, obstáculos que habían limitado el empuje de las revoluciones anteriores? ¿Resistirían la ayuda mutua y las iniciativas del proletariado al egoísmo y la burocratización? Las respuestas a estas preguntas precisarían de una amplia discusión que no tiene ya cabida en las páginas de este libro.

Pero la paradoja que encierra la doctrina clásica del socialismo proletario debe analizarse seriamente, si es que el recuerdo de la Revolución Española tiene algún significado en nuestros días. El socialismo proletario, como doctrina y como movimiento histórico, se encuentra limitado por sus mismas premisas. Para que los trabajadores devengan revolucionarios en *tanto que trabajadores* —como una clase de asalariados desposeídos, comprometidos en una lucha irreconciliable con la clase capitalista poseedora de la propiedad— se presupone una necesidad material que, inevitablemente, impide al proletariado hacerse con el control de la sociedad. La necesidad material —producto no sólo de la explotación sino también de un desarrollo tecnológico limitado— niega a los trabajadores la seguridad material y el tiempo libre necesarios para transformar las condiciones económicas, políticas y espirituales.

Las décadas de relativa abundancia posteriores a la Revolución Española —que fueron producto no sólo de la racionalización económica, sino de los extraordinarios progresos tecnológicos— mostraron que el proletariado podía ser absorbido por la sociedad burguesa y dejar de ser una clase revolucionaria para convertirse en una clase acomodada. El proletariado, adiestrado en la organización y disciplina de la fábrica, podía llegar a ser, en realidad, una extensión de la fábrica en la sociedad, una víctima de las funciones estrictamente económicas de la fábrica y de sus sistemas de uniformidad y jerarquía. No pretendo afirmar aquí que ninguna revolución social de nuestro tiempo pueda lograrse sin el apoyo activo del proletariado, sino más bien que ninguna revolución puede hoy en día construirse únicamente con la "hegemonía proletaria". Una revolución social, al menos en los avanzados países capitalistas, presupone una situación de descontento con todos los aspectos de la sociedad capitalista: el anonimato y la alienación fomentados por la megalópolis moderna, el descontento frente a la calidad de la vida cotidiana, la conciencia del sinsentido de una vida dedicada a trabajar duro para sobrevivir, y la influencia de la jerarquía y la dominación en todas sus formas. En el caso de la jerarquía y de la dominación, una sociedad liberada sentiría la necesidad de abolir no sólo la dominación de clase y la explotación económica, sino también el dominio del hombre sobre la mujer, del viejo sobre el joven y de un grupo étnico sobre otro. Se podría seguir enumerando muchas más de las nuevas cuestiones que han sustituido, incluso dentro de la misma clase obrera, a las tradicionales preocupaciones económicas que habían surgido de la lucha entre trabajo asalariado y capital. Las clásicas discusiones sobre salarios, horas y condiciones de trabajo aún siguen vigentes y también las luchas continúan, pero han perdido su empuje revolucionario. La historia misma las ha convertido en rutinarios problemas de negociación social, de los que se encargan mecanismos e instituciones que forman parte del sistema. El constante desgaste del movimiento sindical y de los partidos de los trabajadores, en beneficio de instituciones con una perspectiva de "oposición leal" desde dentro de las fábricas, las oficinas y el propio Estado, constituye acaso la más notoria evidencia de esta degeneración.

Las reivindicaciones de verdaderas cuestiones como la abolición de las jerarquías y la dominación, la consecución de una vida cotidiana plena, la sustitución del trabajo irreflexivo por el trabajo creador, la conquista del tiempo libre imprescindible para la autogestión de una verdadera comunidad humana solidaria, no han surgido desde una preocupación por la supervivencia en una economía de escasos medios, sino más bien desde una situación social completamente opuesta. Estas demandas son consecuencia de una tensión palpitante relacionada con el desarrollo de los nuevos avances tecnológicos: el sufrimiento de una escasez innecesaria, por un lado, y el tiempo libre necesario para la satisfacción de las necesidades básicas humanas por el otro. Esta tensión no es percibida únicamente por el proletariado industrial, sino por los estudiantes, los profesionales, los pequeños propietarios, los empleados de servicios y funcionarios del Estado, los elementos marginados, e incluso por algunos sectores de la burguesía; en resumen, sectores de la sociedad que nunca fueron considerados seriamente como posibles fuerzas revolucionarias dentro de la estructura del socialismo proletario. Esta tensión se manifiesta tanto en problemas de índole económica como en problemas de índole espiritual, y genera, por otra parte, un fuerte compromiso no tanto con el “socialismo”, con sus instituciones estatales centralizadas y su infraestructura burocrática, sino con la perspectiva de una sociedad libertaria no autoritaria (frecuentemente designada de un modo simplista como “socialismo”) en la que la gente, reunida en comunidades libres, administre la sociedad sobre las bases de la democracia directa y ejerza un verdadero control sobre la vida cotidiana.

El genio del anarquismo español radica en su talento para conjugar las inquietudes del socialismo proletario tradicional con las más amplias y modernas aspiraciones. En unas páginas muy críticas con uno de los más destacados logros del movimiento español, como es la creación de los grupos de afinidad, Diego Abad de Santillán pone de manifiesto, involuntariamente, su singularidad, destacando además el conflicto entre tradición y utopía que existía en el movimiento anarquista en la década de 1930. “Creemos percibir cierta confusión en algunos círculos libertarios en lo que se refiere a la convivencia social, la agrupación por afinidad y la

función económica", advierte Santillán. "Las visiones de Arcadias felices y de comunas libres, ya fueron imaginadas por los poetas en el pasado; en el porvenir, las condiciones serán completamente distintas. En la fábrica no buscamos la afinidad del compañerismo, sino la afinidad del trabajo. La convivencia en la fábrica no se establece sobre la base de la afinidad de caracteres, sino sobre las cualidades y las capacidades del trabajo profesional".

Estas son palabras muy austeras, fruto del lenguaje de la escasez, de la ética del trabajo, de los afanes y de las costumbres puritanas de la Península Ibérica. Los líderes del Partido Socialista Obrero Español las habrían considerado serias y responsables. Reflejan las duras realidades del socialismo proletario en la década de 1930, pero no las posibilidades del "futuro".

El hecho de que en la primavera de 1936 Santillán recomendara a sus compañeros el rechazo a la "convivencia social" en el proceso del trabajo, y la eliminación del "grupo de afinidad" en la actividad productiva, (manifestaciones ambas, según él, del concepto anacrónico de una Arcadia feliz) refleja el modo en que tales grupos eran en realidad percibidos por muchos anarquistas españoles. Si nosotros, en la actualidad, entendiésemos la necesidad del trabajo como una festividad lúdica, si prestáramos atención a las nuevas posibilidades inherentes al proceso laboral, tendríamos que reconocer que esta posibilidad —este privilegio— nos viene dada gracias a las oportunidades tecnológicas creadas por nuestra propia época. El socialismo proletario, en la década de 1930, había transformado la fábrica no sólo en un lugar de cambio social, sino en el principio mismo de realidad del espíritu socialista. En un mundo de escasez material y de trabajo agotador, este principio de realidad implicaba una "convivencia social" mínima. Santillán se equivoca, en primer lugar, en un aspecto: no habla del futuro sino del presente; de un presente cuyos valores sufrirían enormes transformaciones en las futuras décadas. Las limitaciones del planteamiento de este consagrado anarquista son en cualquier caso comprensibles, puesto que su análisis pertenece a una época en que era difícil admitir la posibilidad de una sociedad de "felices arcadias", en la que los medios de

vida fueran libremente asequibles a todos y el trabajo fuera desempeñado de acuerdo a la voluntad y a las aptitudes del individuo.

¿Cómo era posible entonces que los anarquistas españoles de la década de 1930 concibieran tales visiones de "convivencia social", de "grupos de afinidad" y de "felices arcadias"? A este respecto, las opiniones y objeciones de Santillán se ajustaban a las condiciones locales y temporales del movimiento. Los anarquistas españoles que imaginaban ese paraíso futuro eran, en efecto, poetas del pasado. La materia de sus sueños era la "convivencia social" de sus pueblos, la cultura preindustrial a la que pertenecían y su herencia espiritual. Usando nuestros propios términos, podríamos decir que con sus ilusiones los anarquistas españoles perseguían la continuidad del "comunismo primitivo" del pasado —de un pasado que sin duda idealizaban— dentro del contexto de las condiciones españolas. Además, ese comunismo, a pesar de su "primitivismo", poseía más elementos del sofisticado comunismo del futuro que del socialismo industrial del movimiento obrero de su época. No debemos olvidar que las "felices arcadias" y las "comunas libres" que los anarquistas tomaron del pasado eran con frecuencia tan austeras como la imagen de Santillán de la fábrica. Ellos también concebían sus comunales y libres "arcadias" en términos austeros y puritanos. Creían en el "amor libre" porque creían en la libertad para emparejarse sin necesidad de consentimientos políticos o religiosos, pero se apartaban de la libre sexualidad y de la promiscuidad. En sus puestos de trabajo, hacían de la jovialidad una práctica cotidiana, pero admiraban el trabajo duro y casi elogiaban sus virtudes purificadoras. En sus sociedades ideales no podría haber "derechos sin obligaciones, ni obligaciones sin derechos". Aun cuando todas estas cualidades añadían al socialismo proletario industrial una dimensión espiritual y ética, este socialismo estaba tan acompañado de escasez, contradicciones y preocupaciones como el socialismo de Santillán. Éste simplemente procuró recordarles las contradicciones que escondían sus perspectivas: que no pueden existir auténticas "arcadias" a menos que de la tierra broten la leche y la miel.

Los anarquistas españoles dejaron tras de sí logros tangibles que tienen una considerable relevancia para el radicalismo social de nuestros días. Los

“años heroicos” del movimiento, desde 1868 a 1936, fueron un proceso fascinante de experimentación de formas organizativas, de técnicas de toma de decisión, de valores personales, de aspiraciones educacionales y de métodos de lucha. Desde los días de la Internacional y de la Alianza de la Democracia Socialista a los tiempos de la CNT y de la FAI, todas las formas —colectivista, sindicalista y comunista— del anarquismo español habían desarrollado una sorprendente subcultura muy bien organizada, que promovió dentro de la sociedad española la libertad de acción a través de los sindicatos locales y los grupos de afinidad. Mientras las esferas políticas españolas habían negado al campesino y al obrero la participación en la dirección de los asuntos sociales, el movimiento anarquista, en cambio, alentó su colaboración. Mucho más importante que las episódicas sublevaciones revolucionarias, los atentados o las audaces acciones de pequeños núcleos de compañeros como *Los Solidarios*, fue el talento de los anarquistas españoles para unir a los diversos grupos independientes por medio de la “convivencia social”, formando organizaciones coherentes que, sobre todo en momentos de crisis, constituían efectivas y espontáneas fuerzas sociales que hacían compatibles la disciplina de grupo y la iniciativa personal. De este proceso surgió una comunidad orgánica y un sentido de ayuda mutua sin parangón en ningún otro de los movimientos obreros de la época. De hecho, tan importantes como materia de estudio fueron los comités de trabajadores y las colectividades agrarias que seguirían a la Revolución de julio, como el movimiento que creó las bases para las estructuras sociales libertarias, el propio movimiento anarquista español.

# Ensayo Bibliográfico

## 1. Obras Generales

Es sorprendente la escasez de estudios, en cualquier lengua, acerca de la historia general del anarquismo español. Las pocas obras disponibles, con un par de excepciones, son demasiado superficiales para poder informarnos cabalmente del desarrollo de este movimiento. *La Historia del Anarcosindicalismo* de Juan Gómez Casas (Madrid, 1968) es, simplemente, un bosquejo de los acontecimientos más importantes de la historia del anarquismo español, y no colma las expectativas que su grandilocuente título despierta. *Anarchistes d'Espagne* (París, 1970), de Jéan Bécarud y Gilles Lapouge, es un estudio muy limitado que apenas deja entrever el tema que nos ocupa. Los dos volúmenes de Eduardo Comín Colomer que forman la *Historia del anarquismo español 1836-1948* (Barcelona, 1956), una típica historia secreta franquista, escrita a partir del conocimiento directo de los archivos policiales franquistas, presenta un considerable material anecdótico, pero a lo largo de la obra es a menudo imposible determinar dónde termina el historiador y dónde empieza el funcionario franquista.

Aparte de las pequeñas inexactitudes que algunos estudiosos han señalado, *The Spanish Labyrinth* de Gerald Brenan (Londres, 1943) sigue siendo el mejor y más conmovedor de los relatos publicados en inglés sobre el anarquismo español. Brenan no fue nunca un anarquista, y aunque el tema no llegue a ocupar ni la mitad del espacio de su libro, el inglés, al igual que tantos extranjeros, llegó a admirar este movimiento casi con

fervor. Probablemente, el aspecto más débil del libro podría situarse en su perspectiva "andaluza": la opinión del autor sobre el movimiento se formó más bien a raíz de sus experiencias en el medio rural, sin prestar demasiada atención al anarquismo urbano, y tiende a dar excesiva importancia al casi religioso "milenarismo" agrario. Aunque hay que admitir que esta perspectiva añade mucho colorido a la narración, la obra no proporciona una explicación satisfactoria de la evolución de la CNT y de la FAI en los centros industriales de España. *The Spanish Cockpit* (Londres, 1937) de Franz Borkenau también describe el anarquismo como un movimiento casi religioso que, pese a las convicciones socialistas de Borkneau, es retratado con justicia. Para compensar el tratamiento semimítico que Brenan y Borkneau dan al anarquismo español, el lector puede consultar la serie de Diego Abad de Santillán, Contribución a la *Historia del Movimiento Obrero Español*, cuyo primer volumen se publicó en 1968 en Madrid. El lector encontrará en esta obra un agradable relato sobre los movimientos obreros, aunque sin los matices y el dramatismo que podríamos esperar después de leer a Brenan.

Varios de los libros que mencionamos a continuación presentan estudios introductorios a la historia de los inicios del anarquismo español; útiles principalmente para orientar al lector hacia el período específico que más le interese estudiar, no constituyen, sin embargo, sustitutos válidos de una historia del movimiento. Los primeros capítulos de *Les Anarchistes Espagnols et le Pouvoir* (París, 1969) de César M. Lorenzo; *Los anarquistas en la crisis política española* (Buenos Aires, 1964) de José Peirats, y *El movimiento obrero español* (París, 1966) de Manuel Buenacasa son los mejores que he encontrado. En cuanto a los ensayos sobre el anarquismo español incluidos en historias generales del movimiento internacional anarquista o en historias de España (por lo menos en las de reciente publicación), algunos se limitan a plagiar a Brenan y otros adoptan un tono paternalista, cuando no amargamente corrosivo.

## 2 La historia de los primeros años (Capítulos 1, 2, 3)

El período previo a la llegada de Fanelli a España ha sido admirablemente tratado por Fernando Garrido Tortosa en su libro *Historia de las Asociaciones Obreras en Europa* (Madrid, 1870). La obra se compone de dos volúmenes y es probablemente la fuente disponible más valiosa sobre la primera época de los movimientos obreros españoles. Garrido era amigo de Reclus, con quien viajó por toda España; sus observaciones se basan no sólo en las investigaciones dentro del movimiento, sino también en su participación. En inglés apareció un espléndido estudio de Bruce Levine: *Economic and Social Mobilization: Spain, 1830-1923* (Ann Arbor) que constituye un importante ensayo sobre las actividades de los movimientos obreros y campesinos y el desarrollo industrial y la reforma agraria española. Existe también una gran cantidad de material acerca de la época en que llega a España la Primera Internacional. En el lapso de un año han aparecido dos excelentes estudios: *Anarquismo y sindicalismo en España: La Primera Internacional (1864-1881)* (Barcelona, 1972), de Josep Termes, y *Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX* (Madrid, 1972), de Clara E. Lida. Al año siguiente, Lida publicó un suplemento de textos y documentos bajo el título de *Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español* (Madrid, 1973).

Sobre la formación y evolución del anarquismo español, el lector puede consultar las obras de Anselmo Lorenzo, *El proletariado militante* (Barcelona, Vol. I, 1901; Vol. II, 1903); Juan Díaz del Moral, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas* (Madrid, 1929); Max Nettlau, *Miguel Bakunin, la Internacional y la Alianza* (Buenos Aires en 1925); Casimiro Martí, *Orígenes del anarquismo en Barcelona* (Barcelona, 1959). Los trabajos de Lorenzo y Díaz del Moral son ya clásicos para el estudio del desarrollo del primer anarquismo español y proporcionan las fuentes principales para los posteriores estudios más económicos. El proletariado militante son las memorias de uno de los fundadores y más destacados propagandistas del movimiento anarquista español. Díaz del Moral no sólo era historiador, sino también testigo de muchos de los acontecimientos que narra. Nettlau y Casimiro Martí han publicado dos breves pero excelentes investigaciones.

Muchos otros trabajos nos han provisto de una documentación sumamente valiosa para la mejor comprensión del tema, en especial el libro de Nettlau, *Documentos inéditos sobre la Internacional y la Alianza en España* (Buenos Aires, 1930) y sus artículos informativos en *La Revista Blanca* (1 de septiembre de 1928-1 de mayo de 1929) publicados bajo el título "Impresiones históricas sobre el desarrollo del socialismo en España"; el libro de Juan José Morató, *Historia de la Sección Española de la Internacional, 1868-1874* (Madrid, 1930); los cuatro excelentes volúmenes de James Guillaume, *L'Internationale, Documents et Souvenirs* (París, 1905-1910), en mi opinión una de las mejores entre las muchas historias que se han publicado sobre la Primera Internacional; los tres volúmenes de Maximiano García Venero, *Historia de las Internacionales en España* (Madrid, 1956-1958), y del mismo autor, *Historia de los movimientos sindicalistas españoles (1840-1933)* (Madrid, 1961).

Dentro de las historias sociales de España, *The Spanish Labyrinth*, de Brenan, es sin duda una de las contribuciones más importantes. Para un conocimiento más exhaustivo del tema, el lector puede consultar la serie de cinco volúmenes de *Historia Social y Económica de España y América*, dirigida por Jaume Vicens Vives (Barcelona, 1957-1959) y también Vicens Vives, *An Economic History of Spain* (Princeton, 1969). Una de las mejores fuentes sobre el colectivismo popular en España es el libro de Joaquín Costa, *Colectivismo agrario en España* (Madrid, 1898). El destacable *Spain, 1808-1939*, de Raymond Carr (Oxford, 1966), es un importante trabajo sobre los sucesos políticos más importantes de esos años. Con excepción del libro de Brenan ya citado, no conozco ningún otro que esté más en sintonía —o que mejor transmita— el espíritu libertario del pueblo español que el trabajo de Eléne de la Souchère, *An Explanation of Spain* (Nueva York, 1964). Pero tal vez el análisis más agudo de la sociedad española es el de Karl Marx en su "Revolutionary Spain", una serie de artículos publicados en el *New York Daily Tribune* entre el 9 de septiembre y el 4 de diciembre de 1854. Estos artículos están recopilados en *Revolution in Spain* (Nueva York, 1939) de Marx y Engels, un libro malogrado no sólo por su edición estalinista, sino por la interpretación vulgar que hace Engels

de los comienzos del sindicalismo en la diatriba propagandística “The Bakuninist at Work”.

Tal vez el mejor trabajo que puedo recomendar sobre el federalismo español sea *The Federal Republic in Spain* (Oxford, 1962) de C. A. M. Hennessy, quien también reunió una extensa bibliografía sobre el tema. *La Revolución Internacionalista Alcoyana de 1873* (Alicante, 1959) de R. Coloma, obra ampliamente citada, y que parece haber adquirido prestigio como el relato más autorizado de la sublevación de Alcoi, manifiesta, en mi opinión, una evidente tendencia en contra de los internacionalistas y de sus partidarios. De acuerdo con esto, mi versión se ha basado en una selección de los trabajos literarios y artículos de prensa disponibles. Clara Lida, en su Anarquismo y Revolución en la España del siglo XIX, examina cuidadosamente la documentación sobre la sublevación (ver páginas 216-222) en un extenso y equilibrado informe.

Aún más problemática resulta la figura de Bakunin, tanto como hombre como por sus opiniones sociales. Hoy en día todavía no existe ninguna biografía aceptable de Bakunin en lengua inglesa. E. H. Carr, en su *Michael Bakunin* (Londres, 1937), malgastó toda su erudición movido por unas intenciones triviales y amarillas, haciendo incluso referencia a las carencias económicas y a la vida sexual de Bakunin. De entre todas las publicaciones disponibles para el lector, el libro de H. E. Kaminski, *La Vie d’un Revolutionnaire* (París, 1938) es la mejor biografía de Bakunin, pero aún no existe una versión inglesa. Las citas de Bakunin que contiene el texto fueron extraídas del poco convincente mosaico de escritos de Bakunin que Gregory Maximoff publicó bajo el título *The Political Philosophy of Bakunin* (Glencoe, 1953), un libro que al cabo de poco tiempo fue invalidado por selecciones más representativas, en especial por *Bakunin on Anarchy*, editado por Sam Dolgoff (Nueva York, 1972), y *Michael Bakunin’s Selected Writings*, editado por Arthur Lehning (Londres, 1973). El libro de Dolgoff contiene además una extensa bibliografía que incluye una reseña de las biografías de Bakunin de Steklov y Nettlau.

## 3. De la Internacional a la CNT (Capítulos 4, 5, 6 y 7)

Prácticamente en todos los trabajos sobre el anarquismo campesino en España está presente la influencia de Díaz del Moral, quien también se distingue por haber fomentado la orientación "milenarista" que caracteriza a tantos libros ingleses que tratan sobre este asunto. El libro de Joaquín Costa, *Oligarquía y Caciquismo como Forma Actual de Gobierno en España* (Madrid, 1902) ofrece una indispensable documentación sobre el sistema caciquista, mientras que la *Historia Social y Económica* de Vicens Vives es una valiosa fuente de conocimientos y de información sobre los problemas agrarios españoles. En *Politics, Economics and Men of Modern Spain 1808-1946*, (Londres, 1946) la relación entre los problemas agrarios y los intereses políticos son vigorosamente analizados por A. Ramos Oliveira, un autor que no esconde sus fuertes prejuicios políticos y su animosidad hacia los anarquistas.

Uno de los estudios más definitivos sobre la agitación en el medio rural y agrícola se encuentra en el libro de Albert Edward Malefakis, *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain* (New Haven, 1970). El libro contiene además una excelente bibliografía. Aun cuando Malefakis no simpatiza con los anarquistas, el libro describe claramente las alternativas y los dilemas de éstos. En los capítulos finales presenta un relato muy valioso de las rivalidades entre anarquistas y socialistas durante la década de 1930. En la *Geographical Review of the American Geographical Society* de abril de 1936, con el título de "Agrarian Problems in Spain" de E. H. G. Dobby, nos encontramos con interesantes apreciaciones sobre la pobreza sufrida por los braceros. Para tener una visión de la vida del pueblo —su localismo y su solidaridad— el lector puede consultar el libro de Michael Kenny, *A Spanish Tapestry* (Nueva York, 1961) y J. S. Pitt-Rivers, *The People of Sierra* (Chicago, 1961). El ensayo de E. J. Hobsbawn sobre el "milenarismo" anarquista que figura en su libro *Primitive Rebels* (Manchester, 1959) está impregnado de prejuicios marxistas sobre la naturaleza "arcaica" del anarquismo. Aparte de las útiles informaciones sobre la sublevación de Casas Viejas, añade muy poco a lo escrito por el citado Díaz del Moral.

Se ha escrito muy poco acerca de la trayectoria del anarquismo español desde el declive de la Internacional hasta la aparición, a finales de siglo, de

la *Solidaridad Obrera*. Para establecer una continuidad razonable en la sucesión de los hechos ha sido necesario recurrir a las biografías y a las publicaciones de la prensa sobre los acontecimientos de la época. "Impresiones históricas sobre el desarrollo del socialismo en España", de Max Nettlau, aparecido en *La Revista Blanca* (número 140, de 1929), es un texto muy revelador, como también lo es la biografía de Fermín Salvochea, escrita por Pedro Vallina, *Crónica de un revolucionario* (París, 1958). También pueden consultarse los primeros capítulos de *El movimiento obrero español*, de Buenacasa. El libro de Clara E. Lida contiene valiosa documentación, declaraciones, informes y comentarios del período que termina a finales de la década de 1880. Para conocer la vida de Salvochea se puede recurrir, además de a la biografía de Vallina, a la de Rudolf Rocker, Fermín Salvochea, que aparece en el número uno de la serie *Precursores de la Libertad del año 1945*, y a alguna de las pocas páginas que Buenacasa dedica a Salvochea en su libro, *El movimiento obrero español*.

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto la necesidad de volver a analizar el período de la Mano Negra. El hallazgo de Iris Zabala de un documento redactado casi cinco años antes de los juicios de 1883, encontrado en el Archivo del Palacio en Madrid, y que parecen ser los "reglamentos" de la Mano Negra, no disipa completamente mis dudas en torno a la existencia real de esta organización. Una copia no es un original y, dadas las circunstancias de la época, incluso de un documento "original" no se podría, en mi opinión, garantizar su autenticidad, puesto que pudo haber sido manipulado por la policía. Clara E. Lida acepta este documento como válido y trata su contexto social en "Agrarian Anarchism in Andalusia", que apareció en *International Review of Social History* (XIV 3, 1969). Su análisis de la época, dejando aparte polémicas alrededor de la autenticidad del documento, permite que sus artículos se lean con agrado. En cuanto a los procesos, las ediciones "CNT" volvieron a editar *El Proceso de la "Mano Negra"* (Toulouse, 1958) y una vieja colección de extractos de las declaraciones de los acusados, así como comentarios críticos acerca de los cargos y los procedimientos. También puede consultarse el artículo de

Glen Waggoner, “The Black Island Mystery” publicado en *Modern European Social History*, edición de Robert Becucha (Londres, 1972).

Los artículos de Lida incluyen muchas observaciones relevantes acerca de las luchas entre los anarco-colectivistas tradicionales y la aparición de los anarco-comunistas. *The Spanish Labyrinth*, de Brenan, y “The Anarchist Tradition”, de Max Nomad (*The Revolutionary Internationals*, ed. de M. M. Drachkovitch [Stanford, 1966]) proveen de una valiosa documentación sobre el tema. Para un conocimiento sucinto de los principios del anarco-comunismo debe consultarse directamente el ensayo de Kropotkin “Anarchist Communism: Its Basis and Principles”, incluido dentro de *Revolutionary Pampleths* (Nueva York, 1928), y también su libro *The Conquest of Bread* (Londres, 1906).

En cuanto al movimiento terrorista de finales del siglo pasado, mi información está tomada de tantas fuentes, incluyendo artículos de la prensa contemporánea, que la mención de algún libro en particular se hace muy difícil. Los ya citados de Brenan, Peirats, Buenacasa y Abad de Santillán proporcionan, en conjunto, un significativo panorama de los incidentes, del contexto social y de las motivaciones de los terroristas. En el libro de Barbara W. Tuchman, *The Proud Tower* (Nueva York, 1966), encontramos un dramático y hasta espeluznante —aunque no inexacto— relato sobre el terrorismo anarquista. *Les Inquisiteurs d’Espagne*, de F. Tárrida del Mármol (París, 1897), un trabajo que arrojó a la opinión pública europea contra los bárbaros métodos de la policía de Barcelona, sigue siendo el mejor relato de la represión antianarquista de esa época.

El nuevo despertar del movimiento obrero español en la década anterior a la formación de la CNT está muy bien documentado en *The Spanish Revolution*, de Stanley G. Payne (Nueva York, 1970) y contiene una excelente bibliografía de trabajos contemporáneos sobre el tema, muchos de los cuales escapan al ámbito de este volumen. La historia de Abad de Santillán describe con detalle todo este período, y los capítulos de Brenan “Catalan Question, 1898-1909” aportan una buena descripción del trasfondo político. El relato más admirable acerca del movimiento obrero de Barcelona durante esa década lo encontramos en *The Tragic Week* (Cambridge, 1968), de Joan Connelly Ullman, una espléndida

investigación. Algo más convencional es el análisis de Augusto Riera en su libro *La Semana Trágica* (Barcelona, 1909), que el autor completa con fotografías y un inventario de los ataques a iglesias, monasterios y seminarios. Díaz del Moral ofrece un detallado informe sobre el movimiento agrario en Córdoba entre los años 1900 y 1909, y Malefakis dedica varias páginas al resurgimiento de la agitación anarquista rural en Andalucía, especialmente a la insurrección de 1903-1904.

Existe una amplia bibliografía sobre la vida y la muerte de Francisco Ferrer i Guardia, incluyendo la amplia documentación del libro de Joan Connelly Ullman. *La Escuela Moderna* de Ferrer ha sido traducida al inglés por Joseph McCabe con el título *The Origin and Ideas of the Modern School* (Londres, 1913). Este pequeño libro presenta de una forma sencilla los ideales pedagógicos de Ferrer y su lectura continúa siendo imprescindible. El libro *Francisco Ferrer: Apóstol de la Razón*, de A. Orts y C. Ramos (Barcelona, 1932), es una biografía muy relevante acerca de los rasgos personales e intelectuales de Ferrer. Los anarquistas españoles publicaron una cantidad considerable de material informativo sobre Ferrer, parte del cual se puede encontrar en la obra de Hem Day, *F. Ferrer, sa vie, son oeuvre* (Bruselas, s. f.). También encontramos libros sobre Ferrer en lengua inglesa como *Francisco Ferrer: His Life, Work, and Martyrdom*, editado por Leonard D. Abbott para la *Association Francisco Ferrer* (Nueva York) y McCabe, *The Martyrdom of Ferrer* (Londres, 1909), ambos editados poco después de la ejecución de Ferrer, reflejan el impacto que produjo en todo el mundo el pedagogo español. Para lograr una comprensión de la vida cultural que los anarquistas intelectuales promovieron durante las últimas décadas del siglo pasado, debemos recurrir a publicaciones como *La Revista Blanca* (las antiguas ediciones) y a otras anteriores como *La Revista Social*. El trabajo de José Peirats “Para una monografía de Escritores Anarquistas Españoles” publicado en *Ruta* (volumen III, núm. 7, 1972) es un buen estudio sobre los escritos anarquistas españoles, sus artículos, sus libros y los periódicos donde colaboraban. La actualidad de los temas que trataban estos intelectuales se puede juzgar examinando *Ideario* (Gijón, 1926) y *Ensayos y Conferencias*

(Gijón, 1934), obras que integran, respectivamente, los volúmenes primero y segundo de las *Obras Completas* de Ricardo Mella.

La aparición del anarcosindicalismo está hábilmente narrada por Brenan en su capítulo sobre el tema. El impacto de George Sorel con su libro *Reflexions sur la Violence* (París, 1908) ha sido quizás algo exagerado, pero el libro puede leerse como una respuesta característica de muchos intelectuales radicales franceses ante el nuevo movimiento obrero. Aunque muy breve, el libro de Daniel Guerin *Anarchism* (Nueva York, 1970) es, en mi opinión, uno de los estudios más fidedignos y agudos de las ideas y de la historia del anarcosindicalismo. La antología de documentos anarquistas llevada a cabo por Guerin *Ni Dieu, ni Maître* (París, s. f.), reproduce las primeras previsiones de la organización sindicalista, tales como *Idées sur l'Organisation Sociale*, de James Guillaume (1876), y el sindicalismo de fin de siglo reflejado por Fernand Pelloutier en *L'Anarchisme et les Syndicats Ouvriers* y en *Le Syndicat*, de Émile Pouget. *L'Actualité de la Charte d'Amiens* (París, 1959) de Roger Hagnauer contiene un breve relato del surgimiento de la CGT francesa y su aproximación hacia el sindicalismo controlado por el marxismo. En "Compte Rendu Analytique", ensayo incluido en *Congress Anarchiste Tenu à Amsterdam, Aôut 24-31, 1907* (París, 1908), encontramos la crítica de Errico Malatesta al sindicalismo. Vernon Richards escribió la más completa biografía de Malatesta y preparó una excelente selección de sus escritos, traducidos al inglés, con el título *Malatesta: His Life and Ideas* (Londres 1965).

## 4. De los comienzos de la CNT a la Segunda República (Capítulos 8 y 9)

En los trabajos históricos de Brenan, Buenacasa, de Santillán y García Venero, se discute detalladamente la historia de los inicios de la CNT y su estructura. *"What is the CNT?"* (Londres, 1972), es la traducción inglesa de un artículo de José Peirats aparecido en *Ruta*, que describe la estructura de la organización y sus objetivos, y presenta además un amplio material

informativo sobre sus antecedentes. Un breve pero útil relato sobre los hechos que motivaron la creación de la CNT aparece en *Los Anarquistas en la Crisis Política Española*, también de José Peirats. La mayor parte de este libro está dedicada a las actividades de la Confederación durante la dictadura de Primo de Rivera, la formación de la FAI y los conflictos dentro del anarcosindicalismo durante la Segunda República. César M. Lorenzo presenta también un estudio de las actividades anarcosindicalistas durante el mismo período, aunque el libro analiza principalmente la Guerra Civil.

El informe más completo en lengua inglesa sobre las actividades anarquistas comprendidas entre la Primera Guerra Mundial y la dictadura de Primo de Rivera es *The Revolutionary Left in Spain, 1914-1923* (Stanford, 1974), de Gerald H. Meaker, un trabajo que compara las tendencias socialistas de esta época con las comunistas que emergieron de la Revolución Soviética. Meaker no simpatiza con los anarquistas, pero su trabajo no deja por ello de ser meticuloso y bien documentado. Los libros de Díaz del Moral y Malefakis son indispensables para conocer el movimiento rural. *Las ediciones CNT* (Toulouse, 1959) publicaron un informe detallado sobre el Congreso de Bellas Artes de la CNT, "Congreso de Constitución de la Confederación Nacional del Trabajo" (CNT), y sobre el Congreso de 1918 de Barcelona, "Memoria del Congreso celebrado en Barcelona los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio de 1918" (Toulouse, 1957).

También se puede encontrar un cuidadoso relato del movimiento huelguístico durante ese período en los libros siguientes: *El Sindicalismo en Barcelona (1916-1923)*, de Albert Balcells (Barcelona, 1965); *Huelga General de 1917* (Madrid 1966); *Historia de los Movimientos Sindicalistas Españoles (1840-1933)*, de García Venero; *Lo que aprendí en la vida* (Madrid, 1933), de Ángel Pestaña, y *Mis Recuerdos* (México, 1954), de Francisco Largo Caballero. Muchos de los más completos relatos sobre el extremismo español, tales como los de Brenan y Abad de Santillán, incluyen a su vez valiosos testimonios.

Balcells presenta también un amplio estudio sobre el pistolerismo, tendencia que se extendió como una plaga durante los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial. El trabajo de Buenacasa es un ejemplo de la

reacción de un destacado militante anarquista ante el daño ocasionado a la CNT por el pistolerismo. El lector interesado en este aspecto del anarquismo español puede consultar *Los Atentados Sociales en España* (Madrid, 1922), de María Farré Morego, y *La Esclavitud Moderna* (Barcelona, 1921), de Miguel Sastre y Sama.

Los trabajos de Brenan, Raymond Carr, Buenacasa, Abad de Santillán y de Peirats nos proveen de una inmensa información del período, incluyendo la dictadura de Primo de Rivera. Una encomiable recopilación de documentación sobre Salvador Seguí, preparada por diversos escritores anarquistas, fue publicada por Ediciones *Solidaridad Obrera* bajo el título *Salvador Seguí: su vida, su obra* (París, 1960). También Meaker trata bastante detalladamente la trayectoria política de Seguí. George Breitman hace un excelente informe del conflicto entre las distintas tendencias en el seno de la CNT durante ese período en *Spanish Anarcho-Sindicalism, 1918-1931: Moderates vs. Extremists* (Universidad de Michigan, 1969). Ricardo Sanz hace una aproximación personal a la historia de los grupos de afinidad "Los Solidarios" y "Nosotros" en *El sindicalismo y la política* (Toulouse, 1966); Abel Paz escribió un relato acompañado de entrevistas personales con militantes anarquistas, bajo el título *Durruti; el pueblo en armas* (París, 1972). La biografía de Paz, uno de los relatos más importantes sobre la vida de Durruti, fue traducida al inglés por Nancy MacDonald.

El libro de Meaker y el de Peirats, *Los anarquistas en la crisis política española*, nos informa, a través de testimonios muy valiosos, de la suerte del anarquismo español cuando la CNT pasó a la ilegalidad durante la dictadura de Primo de Rivera. El informe de Ángel Pestaña sobre su visita a Rusia ha sido publicado recientemente bajo la forma de dos folletos por la Editorial ZYX bajo el título *Informe de mi estancia en la URSS* (Madrid, 1968) y *Consideraciones y juicios acerca de la Tercera Internacional* (Madrid, 1968). Uno de los más detallados informes sobre estos conflictos aparece en el libro de John Brademas, *Anarcosindicalismo y revolución en España (1930-1937)*, (Barcelona, 1974), una versión corregida de la tesis doctoral del autor, *Revolution and Social Revolution: A. Contribution to the History of the Anarcho-Syndicalist Movement in Spain, 1930-1937* (Oxford, 1956). El informe del Congreso extraordinario de la CNT en 1931, Memorias

del Congreso Extraordinario de la CNT celebrado en Madrid entre los días 11 y 16 de junio (Barcelona, 1931), presenta un notable testimonio de las vicisitudes de la Confederación durante los últimos años de la dictadura.

Peirats, en *Los anarquistas en la crisis política española* relata de forma muy entretenida el mitin de Valencia con motivo de la fundación de la FAI; pero la narración más detallada está en el libro de Brademas, a modo de un extenso memorándum escrito para el autor por Miguel Jiménez, que presidió la conferencia. Gastón Leval y José Peirats me han dado, en persona, informes detallados de la preparación y el proceso del mitin, pero las limitaciones de espacio hacen imposible su inclusión en este volumen. La mejor presentación sobre la estructura de la FAI, en mi opinión, se encuentra en el libro de Ildefonso González, *Il Movimiento Libertario Spagnolo* (Nápoles), escritos que generosamente tradujo para mí, del italiano al inglés, Sam Dolgoff.

## 5. El camino de la Revolución

El trabajo de Brenan sobre el período de 1931 a 1936 es uno de los relatos más interesantes sobre la Segunda República. El libro de Gabriel Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War 1931-1939* (Princeton, 1965), es muy útil y presenta muchos detalles que no son utilizados comúnmente en las historias generales, aunque comparto las críticas que anota Noam Chomsky en su libro *The Cold War and the New Mandarins. The Spanish Civil War* (New York, 1961), de Hugh Thomas, es un libro que no se sabe por qué curiosa razón, puesto que es pretencioso, superficial y poco fiable, adquirió el prestigio de ser una suerte de historia “definitiva” del conflicto. En el trabajo de Vernon Richards, *“July 19, 1936: Republic or Revolution?”*, que figuró en el número 5 de *Anarchy* (julio, 1961) y en la introducción que el mismo autor escribió para la obra de Gastón Leval, *Collectives in the Spanish Revolution* (Londres, 1975), encontramos una crítica demoledora de la *oeuvre* de Thomas.

El mejor trabajo sobre el anarquismo español durante los años que van de 1931 a 1936 es la ya citada tesis de Brademas. Los primeros capítulos (I al IX) del libro de Peirats, *La CNT. en la Revolución Española*, Vol. I (Toulouse, 1955), son imprescindibles para conocer las actividades anarquistas de ese período. El volumen incluye una importante documentación que ayuda a apreciar con mayor claridad las vicisitudes de la "política" anarquista. Se puede obtener también una buena perspectiva de los sucesos que precedieron a la Guerra Civil, así como una excelente imagen de los primeros días del conflicto, en el libro de Pierre Broué y Émile Témime, *The Revolution and the Civil War in Spain* (Cambridge, 1970), una traducción del francés que nos ofrece uno de los mejores relatos de la Guerra Civil; desde luego, este libro merece ser leído antes que el de Thomas. El estudio de Malefakis sobre los conflictos agrarios al principio de la década de 1930 es muy útil, aunque el autor no se caracteriza por sus simpatías por el anarquismo, y sus conclusiones son de carácter liberal. En el libro de Stanley Payne, *The Spanish Revolution* (Nueva York, 1970) encontramos una tendencia más marcada hacia la derecha, y sin embargo el libro se lee con agrado y está bien documentado. *Spain* (Nueva York, 1968), de Salvador de Madariaga, ofrece una interpretación liberal de la época y de los conflictos entre la UGT y la CNT.

Buenacasa nos ofrece en su libro *La CNT, los Treinta y la FAI* (Barcelona, 1933) una visión de la FAI y sus divergencias con los moderados de la CNT, es decir, la versión de un dirigente que no es portavoz del ala más extrema. En las memorias de Pestaña, *Lo que aprendí en mi vida*, podemos encontrar las opiniones de uno de los más capacitados dirigentes de la CNT. El trabajo histórico de Peirats ofrece muy buenos informes del ciclo de las insurrecciones, y Manuel Villar con su *El Anarquismo y la insurrección de Asturias* (Buenos Aires, 1936), presenta la versión anarquista de la famosa sublevación asturiana. Aunque la mayor parte del libro de Gastón Leval *Collectives in the Spanish Revolution* trata del período de la Guerra Civil, la primera parte del libro desarrolla un excelente análisis libertario de la situación agraria previa a la revolución.

El informe del Congreso de Zaragoza de mayo de 1936 ha sido reeditado por Ediciones CNT como parte de la serie "Prolegómenos de la

Revolución de julio en España" bajo el título *El Congreso Confederal de Zaragoza* (Toulouse, 1955). También puede consultarse el folleto de Isaac Puente, *El Comunismo Libertario* (reeditado en Toulouse, 1947), que sirvió de documento teórico de base para la discusión del congreso sobre la sociedad del futuro. El libro de Diego Abad de Santillán, *El Organismo Económico de la Revolución* (Barcelona, 1936), cuya versión inglesa tiene el título de *After the Revolution* (Nueva York, 1937), me ha sido muy útil para el tratamiento metódico del tema. A pesar de la influencia que ha ejercido el folleto de Puente, en realidad es poco más que una breve reseña; el libro de Santillán, en cambio, es una obra teórica reflexiva, al tiempo que una guía de la reconstrucción social.

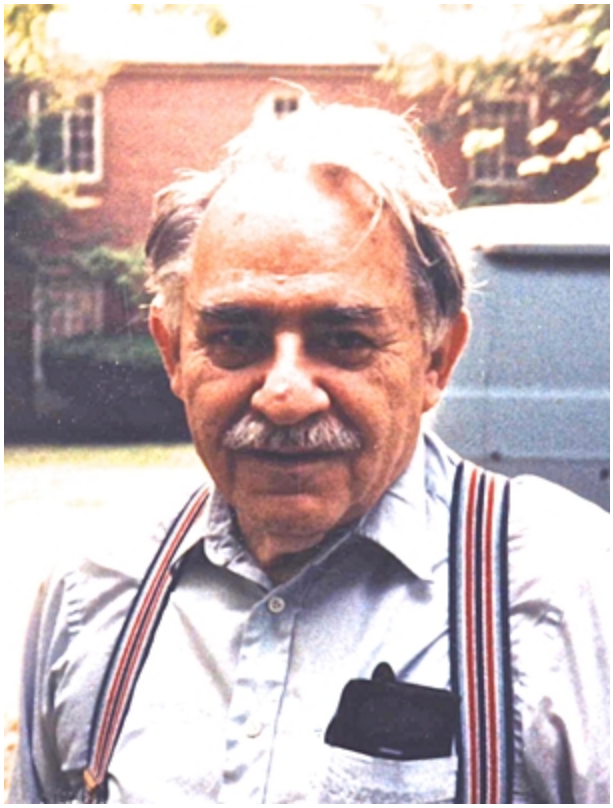
Los informes sobre los primeros días de la revolución son numerosísimos. Ya he señalado el estudio de Broué y Témime de la sublevación en las principales ciudades de España. Podemos encontrar uno de los relatos más detallados del conflicto en Madrid y Barcelona en el trabajo de Abel Paz, *Paradigma de una revolución*, cuya parte final ha sido editada por Ediciones AIT, incluyendo las conclusiones y llamamientos publicados en *Solidaridad Obrera* del 19 al 23 de julio de 1936. Una parte del trabajo de S. Cánovas Cervantes, *Durruti y Ascaso: la CNT y la Revolución de julio*, publicado por Ediciones Páginas Libres (Toulouse) relata la sublevación de Barcelona. Una evaluación de los sucesos que llevaron a la revolución y al estallido de la Guerra Civil la debemos a uno de los más influyentes anarquistas "estadistas" de la época, Diego Abad de Santillán, por su libro *Por qué perdimos la guerra* (Buenos Aires, 1940); los primeros capítulos proporcionan un relato del desarrollo del movimiento anarquista español desde la Primera a la Segunda República y del estallido de la sublevación de julio. El libro de Vernon Richards, *The Lessons of the Spanish Revolution*, (Londres, 1953), nos permite conocer la aguda crítica de un anarquista inglés a la actuación de la FAI y de la CNT en vísperas de la revolución, y durante la Guerra Civil.

# Nota sobre Fuentes de Información

Terminé de escribir la mayor parte de este libro en 1970, con lo que no pude consultar aquellos de los libros citados que se publicaron después de 1969. Por tanto me fue imposible utilizar las últimas obras de Abad de Santillán, *Contribución a la historia del movimiento obrero español*; Josep Termes, *Anarquismo y Sindicalismo*; Clara E. Lida, *Anarquismo y revolución en España*; las recopilaciones y los escritos de Bakunin a cargo de Dolgoff y de Lehning; *Agrarian Reform and Peasant Revolution in Spain*, de Edward Malefakis; *The Revolutionary left in Spain*, de Gerald Meaker; *Durruti: Le peuple en Armes*, de Abel Paz, y la versión española de la tesis de John Brademas, excepto el material documental que utilicé para el capítulo final "El camino de la revolución". Sin embargo, dentro de lo posible, estos libros fueron consultados para corregir errores y, dentro de ciertos límites, ampliar mi información sobre algunos hechos de los que no disponía de suficientes antecedentes.

Casi todos los libros restantes citados en este "ensayo bibliográfico", fueron considerados para la preparación de obra. La exposición de la historia de los primeros tiempos, la Internacional en España se ajusta, en buena parte, a las memorias de Anselmo Lorenzo, a los informes de Nettlau sobre los primeros anarquistas españoles, y a los trabajos de Martí, García Venero y Díaz del Moral. Buenacasa, Joan Connelly Ullman, Peirats, Balcells, así como diversas biografías, memorias y documentos citados en el ensayo bibliográfico, han sido las fuentes principales de información para los sucesos posteriores. He consultado también numerosos periódicos de la época, incluyendo los contemporáneos de España, Inglaterra y Francia, que contribuyeron a aclarar, a su modo, algunos períodos oscuros de la historia del movimiento anarquista español. También me han sido de gran utilidad

las ediciones de *La Revista Blanca*, *Solidaridad Obrera* y *Tierra y Libertad*, encontradas en las bibliotecas americanas y en colecciones particulares.



MURRAY BOOKCHIN (Nueva York, EE. UU., 14-1-1921 - Burlington, EE. UU., 30-7-2006) es fundador del instituto de Ecología Social del Goddard College y profesor de Teoría Social en el Ramapo College (Estados Unidos). La guerra civil española de 1936-1939 afectó profundamente al joven profesor, y durante años fue recopilando gran cantidad de información y entrevistando a numerosos supervivientes anarquistas. El libro que hoy presentamos es por lo tanto un importante documento a la vez personal e histórico. Bookchin es además autor de muchos otros libros, entre los que cabe citar *El anarquismo en la sociedad de la abundancia* y *Los límites de la ciudad*.

# Notas

[1] Posiblemente, el defecto más importante de Bakunin fuera su incongruencia al llevar a la práctica sus principios organizativos. <<

[2] Lo que no significa que el pueblo no albergara tiranías menores derivadas de la rigidez de costumbres, el localismo o la superstición, y otras más ostensibles derivadas del caciquismo, el clero y la nobleza. Como veremos, el anarquismo español trató de separar los rasgos más positivos del pueblo de sus características sociales más reaccionarias, para así erigir su concepto del futuro sobre los principios del mutualismo de la vida campesina. <<

[3] En años posteriores, los anarquistas adoptarían la bandera negra como símbolo de la miseria de los trabajadores y como expresión de su rabia y de su amargura. La presencia de las banderas negras junto a las rojas se convirtió en un rasgo distintivo de las manifestaciones anarquistas en Europa y América. Al fundarse la CNT, se adoptó el uso de una bandera única en la que los colores rojo y negro se unen en diagonal. <<

[4] La primera y la última palabra de este fragmento —compañeros y salud — se convertirían en las formas de cortesía características de los anarquistas, tanto en el trato personal como en las reuniones públicas. La palabra compañero tiene un sentido más familiar y afectuoso que camarada, apelativo más formal que fue utilizado por los socialistas y comunistas españoles. Compañero tiene una connotación de hermandad, de amistad personal. Salud se adoptó para sustituir a la forma tradicional adiós, una referencia a la divinidad que los anarquistas consideraban como una invasión supersticiosa en la conversación cotidiana. Años más tarde, a las reuniones de los anarquistas españoles se las denominaría “asambleas de tribus”, una expresión que anticipaba el sentido de comunidad que ambiciona la joven cultura de nuestro tiempo. Los anarquistas españoles utilizaron expresiones más personales, emotivas y vinculantes que las empleadas por sus imperturbables oponentes marxistas. <<

[5] Debemos hacer hincapié en este asunto. Muchos de los estudios realizados señalan el marcado carácter moral del anarquismo español como una forma de ascetismo religioso. Tal vez sería posible considerarlo de ese modo en el contexto rural; sin embargo, mi opinión (después de discutir el asunto con exiliados anarquistas que habían vivido en ciudades industriales) es que todo este énfasis en las cuestiones relacionadas con la moral es equiparable a los esfuerzos que los negros radicales de los Estados Unidos realizaron para apartar a su propia gente de la influencia de una cultura degradante y servil. <<

[6] Sólo después de ser apartado del poder, trataría Pi i Margall de establecer una relación de trabajo con los intransigentes; pero ya era demasiado tarde. Con el derrumbamiento de la República federal y la restauración de los borbones, Pi i Margall fue ignorado por sus antiguos seguidores y se convirtió, en esencia, en un ideólogo y teórico proudhiano. <<

[7] Fue Pi i Margall quien dio la orden a Velarde de marchar hacia Alcoi tras la sublevación internacionalista. Por otra parte, si él no hubiese sido en esos momentos el presidente de la República, no cabe duda de que la represión habría sido mucho más severa. En años posteriores, cuando el terrorismo puso a la opinión pública en contra del movimiento, Pi i Margall lo defendió valientemente. Según apunta Hennessy, la razón fundamental por la que los anarquistas admiraron a Pi i Margall fue su honestidad moral. Pi i Margall murió en 1901. *La Revista Blanca*, en una reseña biográfica, destacaba que "la integridad dentro de una sociedad corrompida adquiere un valor que sólo pueden apreciar aquellos que han querido y han conseguido conservar una vida pública y privada intachable". Esta conclusión era sin duda muy acertada para un movimiento que insistía en alcanzar la completa unidad entre ambas. <<

[8] Estas ideas y formas de vida libertarias, como veremos, se oponían abiertamente a las relaciones capitalistas que estaban extendiéndose en los distritos rurales, en especial después de que las tierras comunales fueran expropiadas y puestas a la venta. La amenaza que suponía el capitalismo para los valores del pueblo constituye quizás la causa más significativa de las rebeliones agrarias en la España posterior a 1850. <<

[9] El congreso de Sevilla fue también escenario de un debate abierto entre anarco-colectivistas bakuninistas y los seguidores del anarco-comunismo de Kropotkin. La posición del anarco-comunismo fue defendida por Miguel Rubio, de Sevilla, y la de los colectivistas por José Llunas, de Barcelona. <<

[10] De hecho, el partido había sido fundado secretamente en mayo de 1879 con el nombre de Partido Democrático Socialista Obrero Español; en 1881 se vuelve a fundar con el nombre de Partido Socialista Obrero Español (nombre que conservará hasta nuestros días), y cuenta con novecientos afiliados. He seguido la costumbre de llamarlo simplemente "Partido Socialista". En la década de 1880, casi todos sus partidarios eran impresores y tipógrafos de Madrid. Pablo Iglesias fue nombrado secretario general, cargo que desempeñaría durante décadas. El partido creció muy lentamente, y sólo cinco años después de la fundación vería la luz su primer semanario, El Socialista. <<

[11] La cifra que se da generalmente es de 4.000 (cifra que a menudo se confunde con el número de personas que entró en la ciudad), pero es poco probable que el grupo alcanzara tales dimensiones. Posiblemente, muchos de ellos, habiendo decidido no participar en la marcha, regresasen a sus casas. <<

[12] “El madrileño” desapareció después de la marcha de los trabajadores a Jerez. Pedro Vallina, destacado anarquista español que mantenía buenas relaciones con algunos de los participantes en la sublevación de Jerez, sostenía que el joven era un provocador. También comenta Vallina el caso de Fernando Poulet, un francés que se introdujo en los ambientes frecuentados por los exiliados anarquistas en París. Según Vallina, Poulet era un espía pagado por la Embajada española. <<

[13] Como alcalde, Salvochea abolió los “consumos” (los abusivos impuestos que gravaban los artículos de primera de necesidad) y para compensar el dinero que se dejaba de ingresar, impuso una tasa a los propietarios de las tiendas. Esta medida disgustó profundamente a un amplio sector de la baja clase media, que le retiró su apoyo, con lo que no obtuvo una mayoría suficiente para ejercer una segunda legislatura. Esta derrota provocó que el intento de comprometer a Cádiz en el movimiento insurreccional cantonalista fracasara aún antes de la llegada a la ciudad de las tropas del general Pavía. <<

[14] Unos años antes Ferrer i Guardia se había separado de su esposa, Teresa Sanmartí, mujer de opiniones bastante ortodoxas, y que había intentado matarle en un ataque de cólera. Ferrer comenzó entonces a mantener relaciones con Leopoldine Bonald, una joven que compartía sus ideas radicales. Posteriormente, Bonald y Ferrer se separaron amistosamente, y éste se unió a Soledad Villafranca, maestra de la escuela de Ferrer y de ideas anarquistas. La Iglesia y los políticos de la época criticaron la forma abierta y libre en que se relacionaba con las mujeres. La sociedad española aceptaba perfectamente que los hombres frecuentaran los burdeles, tuvieran "queridas" o mantuviesen relaciones con mujeres casadas, siempre que las responsabilidades públicas del matrimonio fueran respetadas y los amoríos mantenidos en secreto. <<

[15] Hacia el fin de su vida Engels mordería el cebo de las oportunidades políticas y parlamentarias que se ofrecían a los partidos marxistas a finales del siglo XIX. En 1891, poco antes de su muerte, el viejo combatiente de las barricadas de la década de 1840 escribiría: “Es concebible que el paso de la vieja sociedad a la nueva pueda realizarse de una forma pacífica en los países donde la representación popular es un poder en sí misma; donde, siempre que se cuente con el apoyo de la mayoría del pueblo, se puedan tomar cualquier tipo de medidas dentro de la constitución; en repúblicas democráticas como Francia y Estados Unidos y en monarquías como Inglaterra”. La socialdemocracia alemana utilizaría con gran éxito este tipo de afirmaciones para arrinconar a los socialistas partidarios de la huelga general en la Segunda Internacional. <<

[16] Aunque Malatesta cambiaría de opinión acerca del sindicalismo, aceptó el movimiento con muchas reservas y nunca dejó de destacar que “los sindicatos son reformistas por naturaleza y nunca revolucionarios”, y que “el espíritu revolucionario debe ser fomentado, desarrollado y mantenido por las acciones constantes de los revolucionarios dentro y fuera de sus filas, pero no puede reducirse nunca a una mera función sindical”. <<

[17] En lo sucesivo utilizaré la palabra “anarquista” cuando me refiera a los anarcosindicalistas y anarco-comunistas, salvo cuando la diferencia entre las dos escuelas teóricas pese de manera decisiva para la discusión. Esto es necesario porque las dos escuelas pronto se compenetrarían y por un tiempo serían prácticamente indistinguibles. <<

[18] He narrado esta historia detalladamente porque es un ejemplo de las inexactitudes que aparecen en muchos relatos sobre los anarquistas españoles y sobre la Guerra Civil. En su breve exposición sobre la “Semana Trágica”, Brenan cuenta que “hubo muertes de frailes, profanación de tumbas y extrañas y macabras escenas en las calles, donde algunos individuos bailaron con las momias de las monjas desenterradas”. La morbosidad que impregna este relato puede achacarse a que fue escrito tan sólo cuatro décadas más tarde desde Londres, cuando Brenan carecía de toda la información necesaria. Menor justificación tiene la narración de Hugh Thomas, que en un libro sobre la Guerra Civil escrito en 1961 repite casi textualmente el relato de Brenan, añadiendo algunos adjetivos de su propia cosecha. Uno se entera ahora de que “trabajadores borrachos bailaban enloquecidos por las calles con los cuerpos descompuestos de las monjas desenterradas”. <<

[19] Debemos alertar al lector de que el movimiento obrero español era muy oficioso, recurriendo a menudo a grandes títulos para denominar a sus funcionarios y a sus “comisiones”. Los trabajadores españoles se tomaban muy en serio el prestigio de sus organizaciones y el manejo de sus asuntos. Y para subrayarlo, he aquí que no pudieron pensar en nada mejor que imitar a las clases dominantes. <<

[20] Albert Balcells describe brevemente el modo en que estaban estructurados los sindicatos: “Cada oficio formaba una Sección del sindicato, cada Sección nombraba una Junta de Sección, de dos o tres miembros, y una comisión permanente de siete afiliados, a renovar cada seis meses, que además de dirigir la Sección nombraba a sus representantes en la Junta del Sindicato; todas las secciones estaban representadas por igual. Sólo el presidente del sindicato era elegido en la Asamblea General. A su vez, los sindicatos estaban representados en las Federaciones Locales, y éstas en las Confederaciones Regionales”. <<

[21] Fue entonces cuando el Comité Nacional de la CNT expulsó al venerable anarquista andaluz Sánchez Rosa, embarcado en una enconada lucha con el Comité Regional de la Confederación andaluza. La expulsión originó tales diferencias entre anarquistas y sindicalistas, que la organización obrera en su totalidad estuvo a punto de resquebrajarse. Los anarquistas hostigaron a los sindicatos únicos y al sindicalismo en general, exigiendo la vuelta a las viejas Secciones del sindicato y a un tipo de organización más libertaria. Aunque las dos facciones llegaron a un acuerdo, las heridas no llegaron a cicatrizar del todo y más tarde volverían a abrirse. <<

[22] No creo que esta huelga —que ha sido considerada un grave error— pudiera haberse evitado. Los trabajadores no podían saber en aquel momento que iban a echar a perder su victoria. Milans del Bosch estaba decidido a provocarlos y no es probable que una mayor prudencia por parte de la CNT hubiera evitado un posterior enfrentamiento en condiciones igualmente desfavorables para los trabajadores. <<

[23] Hasta qué punto se utilizó la coacción para establecer la Comisión Mixta es algo difícil de saber. De todos modos, Amado ofreció una amnistía a los sindicalistas de la CNT a cambio de que renunciaran provisionalmente a la acción directa y a la participación en la Comisión. <<

[24] A pesar de los continuos esfuerzos de los militantes moderados de la CNT por llegar a un acuerdo con los industriales, las provocaciones del sindicato alcanzaban proporciones escandalosas. Los patronos estaban tan ansiosos por poner en marcha el *lock-out* que habían planeado, que lo adelantaron al 3 de noviembre. Obligados luego a permitir el regreso de los obreros a sus puestos, rehusaron, sin embargo, admitir a ningún activista. Esta nueva provocación forzó a la CNT a apartarse definitivamente de las Comisiones. <<

[25] Los socialistas estaban furiosos. Ese mismo día se declaró una huelga de diarios en la capital, amenazando la cobertura del Congreso de la CNT. Los cenetistas, sin embargo, persuadieron al director del popular diario republicano de Madrid, España Nueva, para que atendiese las reivindicaciones de los tipógrafos, y el diario reapareció pocos días antes de la apertura del Congreso. El acuerdo quebró la unidad de los editores, quienes apresuraron el fin del conflicto de un modo favorable para los obreros. <<

[26] La delegación incluía a Gastón Leval, que representaba a la recién creada Federación de Grupos Anarquistas Catalanes. <<

[27] En el área de Barcelona se produjeron en el año 1914 nueve atentados contra patronos; en 1916, solamente ocho; al año siguiente, cinco; después otra vez nueve, y en 1919, ocho. <<

[28] Se ha exagerado mucho la existencia de pistoleros profesionales contratados por la CNT. Como resultado de las numerosas entrevistas que he mantenido con antiguos anarquistas españoles, y muy especialmente con Gastón Leval, estoy prácticamente convencido de que los recursos de la CNT en aquel momento eran muy limitados, y la gran mayoría de los pistoleros eran, generalmente, trabajadores que actuaban en defensa propia. Aunque los pistoleros "contratados" quizás no fueran del todo un mito, los historiadores de la época exageraron de una forma absurda su importancia y los "ingresos" que habrían recibido de la organización en pago a sus acciones. <<

[29] Por “actividad” que no está “en contradicción con la pureza de las ideas”, Sanz entiende, simplemente, una integridad moral compatible con el anarquismo, no una ciega obediencia a una “línea” política. La integridad moral, como se ha señalado, era una cuestión muy importante para los anarquistas españoles, quienes por otra parte, siempre aceptaron la total independencia de comportamiento e ideas. <<

[30] Antonio Martín, uno de los más audaces militantes del grupo de “Los Solidarios”, dirigía el tráfico de armas por Puigcerdà. En 1937 fue asesinado por unos pistoleros del Partido Comunista Español. <<

[31] Hecho aún más destacable debido a que durante ese período Los Solidarios y los demás grupos de acción anarquista realizaron una serie de espectaculares asaltos a bancos de Terrassa y Manresa, a la “Fonda de Francia”, situada frente al edificio del Gobierno Civil en Barcelona, y nada menos que al Banco de España en Gijón. También es preciso dejar constancia del relato de Arthur Landis, el cronista de la Brigada Abraham Lincoln: “en 1923 la CNT, bajo la dirección anarquista, se disolvió a sí misma, mientras que la socialista UGT no lo hizo; permaneció activa y preparó el terreno para el derrumbamiento de la Dictadura y la caída de Alfonso XIII”. Tales distorsiones son bastante frecuentes entre historiadores de diversas tendencias políticas. <<

[32] El término “condicional” se utiliza aquí para señalar el hecho de que los estatutos de la CNT tenían que ser aprobados por el gobernador provincial. En 1930 la legalidad de la organización era todavía bastante precaria. El hecho de que el gobierno, a pesar de las duras posiciones de Pestaña en las negociaciones con Mola, se viera obligado a legalizar la organización, pone de manifiesto la gran influencia que la CNT tenía sobre el proletariado de Barcelona. <<

[33] Madariaga exagera acerca de la afinidad ideológica entre anarcosindicalistas y liberales. Como hemos visto, la animosidad entre los socialistas y los anarcosindicalistas fue tan intensa en los últimos años de la Dictadura que movió a los trabajadores de la CNT a votar a los liberales. <<

[34] Durante todo ese año de 1931, en la zona portuaria de Barcelona se sucedieron casi sin interrupción todo tipo de incidentes violentos. <<

[35] Los largos espacios de tiempo entre los Congresos Nacionales de la Confederación no deben interpretarse como una evidencia de ausencia de democracia interna. Todo lo contrario, tras cada Congreso Nacional las directrices y las iniciativas para la acción pasaban a la federación regional, a la de distrito e incluso a la local. La necesidad de coordinar o de establecer normas a escala nacional era atendida de ordinario en los plenos de delegados de las federaciones regionales, pero las regiones y los distritos, por lo general, seguían su propio camino, incluso llegando a provocar insurrecciones inmediatas sin el consentimiento de los organismos nacionales. <<

[36] Este partido perseguía un socialismo basado en la autogestión económica y en el federalismo, la colectivización de la tierra en comunas rurales libres y la coordinación por los sindicatos de las actividades comerciales e industriales. Las Cortes, según Pestaña, podrían ser sustituidas por un “Gabinete Nacional del Trabajo” en el que estarían representados en su totalidad las comunas rurales y los sindicatos. Aunque Pestaña defendía una estrategia flexible que incluía tanto la política electoral como la acción directa, no renunció a sus convicciones anarquistas. Consideraba al anarquismo como una suerte de filosofía moral que desempeñaba un papel decisivo para la educación y la cultura del pueblo, hasta que pudiese establecerse una sociedad totalmente libertaria. <<

[37] Para hacer justicia a los otros miembros de Nosotros, no he encontrado firmes evidencias de que Durruti o los hermanos Ascaso hubieran apoyado los puntos de vista autoritarios de García Oliver. Si lo hicieron debió ser más por un sentimiento de lealtad personal (un factor muy importante en el seno de los grupos de afinidad de la FAI) que por convicción política o acuerdo programático. Los Tres Mosqueteros, como se llamaba a Durruti, García Oliver y Francisco Ascaso, no tenían en modo alguno la misma personalidad. Brenan, en una excelente exposición del tema, traza diferencias considerables entre Durruti y Francisco Ascaso, por un lado, y García Oliver por otro, opinión que he confirmado a través de entrevistas con anarquistas españoles que los conocieron personalmente: Durruti era un hombre fuerte, de inocentes ojos marrones, y Ascaso un hombre moreno, pequeño, de apariencia insignificante. Eran amigos inseparables y juntos habían robado bancos, asesinado enemigos de la causa y encabezado innumerables huelgas y actos de violencia. Pasaron la mayor parte de sus vidas en prisión. Tan pronto como salían de la cárcel regresaban a sus modestos trabajos en la fábrica, puesto que el dinero que obtenían en sus eficaces expropiaciones (en una ocasión llegaron a abrir y vaciar la caja de seguridad del Banco de España) lo dedicaban íntegramente a la causa. García Oliver, por otra parte, pertenecía más bien al tipo del revolucionario irlandés del año 1919. Aunque de origen obrero y escasa cultura, tenía muy desarrollados sus instintos políticos. Se le atribuía una suerte de “olfato” especial para los sentimientos revolucionarios de las masas y para reconocer el momento justo de entrar en acción. Por eso se convirtió en el guía táctico de ese período y en el organizador de varias huelgas revolucionarias e insurrecciones. Además, anarquista convencido como era, no permanecía en la retaguardia como un general al uso, sino que dirigía a sus hombres desde la primera línea, bombas y revólver en mano. La simplicidad de Durruti y Ascaso contrasta con los “instintos políticos” y la “eficacia” de García Oliver. Estos diferentes rasgos orientarían a Durruti y a García Oliver en direcciones bien distintas. Mientras que Durruti encabezó

una columna de milicias populares y cayó muerto en Madrid, García Oliver se convirtió en ministro de Justicia del gobierno del Frente Popular. <<

[38] El relato de Brenan, aunque breve, proporciona una buena descripción de la primera parte de los acontecimientos. La narración de Peirats es más precisa en la parte final. Ni Peirats ni Brenan mencionan algunos de los detalles más grotescos: al parecer los restos medio quemados de los anarquistas fueron esparcidos por el suelo y exhibidos a modo de advertencia ante el resto de los campesinos. Según la prensa de la época, los guardias detuvieron a aldeanos inocentes de Casas Viejas y los arrojaron al fuego donde ardían “Seisdedos” y su banda. <<

[39] En gran medida, los sucesos de octubre en Asturias son aún poco conocidos para nosotros. Gabriel Jackson observa con mucha razón que además del cariz político de los propios sucesos, la prensa española estuvo censurada hasta principios de 1936 y la campaña electoral de febrero de ese mismo año manipuló los hechos para favorecer los intereses del partido. “Desde la Guerra Civil sólo las versiones del bando vencedor se han documentado en España. No es necesario señalar que los miles de estudiosos izquierdistas que abandonaron España al finalizar la Guerra Civil no se llevaron los documentos en sus equipajes”. Después de estudiar cuidadosamente los distintos relatos sobre la rebelión asturiana, he seleccionado tres: el breve pero excelente resumen de Brademas; el estudio de Jackson (relato que carece de un examen adecuado del papel de los anarcosindicalistas, en particular en Gijón y La Felguera), y el espléndido relato de Peirats. Gracias a mi relación personal con Peirats, he podido apreciar su encantadora sencillez e independencia para juzgar los hechos, que me ha impresionado y que, ante mis ojos, acrecientan enormemente su credibilidad; he utilizado para mi trabajo mucha documentación procedente de su libro Los Anarquistas en la Crisis Política Española. <<

[40] El lector deberá tomar con ciertas reservas estas informaciones. Sin desaprobar el papel de los mineros de Mieres, hay que poner de relieve que los comunistas reivindicaron como propias casi todas las iniciativas de la insurrección de Asturias, aun cuando los sindicatos locales que de hecho controlaban es probable que no tuvieran más de tres mil miembros. Aparte de esto, y basándome en mis propias investigaciones de ese período, puedo decir que los comunistas de América (EE.UU.), como los de España, describieron los sucesos de Asturias como una insurrección dirigida enteramente por los comunistas, y que perseguía objetivos como el intento de instaurar una "república de soviets". Como el lector comprenderá, ninguna de estas reivindicaciones corresponde ni remotamente a los hechos. <<

[41] Digo “asignaron” porque esos escaños no reflejan el voto popular obtenido por los partidos, sino el número de escaños que les fueron asignados gracias al acuerdo del Frente Popular. Comparto la opinión de Brenan de que la coalición asignó más escaños a los republicanos y a los comunistas que los que habrían obtenido si cada partido hubiese actuado independientemente. También acepto su opinión de que los comunistas bien pudieron haber recibido cuatro veces más escaños que los que podrían haber obtenido por su cuenta. Además de los dieciséis mencionados, recibieron cinco de los socialistas catalanes (PSUC), quienes se encontraban entonces bajo la influencia comunista debido en buena medida a las tácticas estalinistas de infiltración y manipulación llevadas a cabo por Juan Camorera, una de las figuras más siniestras de la izquierda de la época. Durante la Guerra Civil, Camorera sería uno de los responsables la contrarrevolución estalinista en Cataluña; finalmente, terminaría por acomodarse en la España franquista. <<

[42] Es interesante resaltar que Payne no hace ninguna mención a este intento de asesinato cuando acusa al gobierno del Frente Popular de dar muestras de parcialidad en su empeño de suprimir la Falange poco tiempo después. Según el relato de Payne podríamos pensar que el gobierno estaba haciendo “concesiones simbólicas” a la izquierda, cuando en realidad la Falange cometía múltiples actos terroristas. Brenan señala con justicia que es posible que en 1936 la Falange superara a los difamados anarquistas en el número de atentados. <<

[43] Es necesario señalar, de todos modos, que la “fuerza de trabajo” de los obreros estaba caracterizada no sólo por su capacidad para hacer frente a sus necesidades de supervivencia, sino para producir un excedente de trabajo por encima de lo que se necesitaba para el mantenimiento y reproducción de la clase obrera. Por consiguiente la “fuerza de trabajo” era también una mercancía única: se podía desarrollar no sólo para sostener al trabajador y a su familia (de ahí que el salario fuese considerado como un “justo intercambio” dentro del mercado del trabajo) sino también para incrementar las ganancias del capitalista a través de la “plusvalía” o “beneficio”. Un “justo intercambio”, sin embargo, presuponía que la “fuerza de trabajo” podía ser concebida como una mercancía —un artículo, por decirlo de otro modo, que podía ser negociado como un objeto, es decir, una mercancía tangible— y no como la molesta sumisión de un esclavo o siervo a cuenta de un amo coercitivo. Marx consideraba este concepto de “fuerza de trabajo” como una de sus contribuciones más importantes a la economía política y, se podría añadir, como el fundamento del “socialismo científico”. <<

[44] Las dos últimas líneas de este pasaje fueron transcendentales. Estas frases, lo mismo que otras de los escritos de Marx, proporcionaban una afirmación racional útil para imponer la autoridad de los partidos marxistas y de su aparato armado por encima —e incluso en contra— del proletariado. Reclamando una comprensión más profunda de la situación "que la que incluso en algún momento pudiera tener la totalidad del proletariado", los partidos marxistas procedieron a disolver las organizaciones del proletariado revolucionario —como los comités de fábricas— y terminaron encajonándolo en las líneas establecidas por la dirección del partido. <<

[45] De hecho, hacia el final de su vida, Marx contemplaba la posibilidad de que la revolución socialista europea pudiera iniciarse en Rusia, país atrasado industrialmente, antes que en Francia o Alemania. En su correspondencia del año 1881 con Vera Zasulitch, sugiere que una revolución en el momento oportuno en Rusia permitiría a la colectivista aldea campesina mantenerse al margen del desarrollo capitalista de Occidente, "desprenderse gradualmente de sus características primitivas y convertirse en el soporte para la producción colectiva a escala nacional". Para una interesante discusión sobre esta correspondencia, ver el libro de Martin Buber, *Caminos de utopía* (Boston, Beacon Press). <<